

UNIVERSIDAD DE MADRID
FACULTAD DE DERECHO



TESIS DOCTORAL

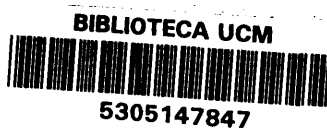
**Organismos administrativos de la Real Hacienda Indiana
(1493-1605) : (contribución al estudio del derecho indiano)**

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR
PRESENTADA POR

Ismael Sánchez Bella

Madrid, 2015

Rdd. 102.610



TE
839

**ORGANISMOS ADMINISTRATIVOS
DE LA REAL HACIENDA INDIANA**

(1495 - 1605)

(Contribución al estudio del Derecho Indiano)



BIBLIOTECA
DE DERECHO

**Memoria que presenta para aspira-
rar al Grado de Doctor en Derecho
IGNACIO SANCHEZ MILLA.**

I N D I C E G E N E R A L

INTRODUCCION.....	I a IX
--------------------------	---------------

CAPITULO PRIMERO

DESARROLLO HISTORICO DE LA ADMINISTRACION DE LA HACIENDA INDIANA

1/ Primeros organismos	1
2. La legislación de Hacienda	12
3. Los Consejos de Hacienda de España y el Perú	20
4. La acción de los Virreyes en materia de Hacienda	45
5. La Hacienda indiana en el último tercio del XVI y principios del XVII	55

CAPITULO SEGUNDO

CUADRO GENERAL ADMINISTRATIVO

1. Caracteres generales	106
2. La Administración Central	121
3. Organización territorial	130
4. Los funcionarios de Hacienda	137
5. Participación de los órganos de gobier- no y de justicia en la administra- ción de la Hacienda indiana	146
6.	

I N D I C E G E N E R A L

INTRODUCCION.....	I a IX
--------------------------	---------------

CAPITULO PRIMERO

DESARROLLO HISTORICO DE LA ADMINISTRACION DE LA HACIENDA INDIANA

1/ Primeros organismos	1
2. La legislación de Hacienda	12
3. Los Consejos de Hacienda de España y el Perú	20
4. La acción de los Virreyes en materia de Hacienda	45
5. La Hacienda indiana en el último tercio del XVI y principios del XVII	56

CAPITULO SEGUNDO

CUADRO GENERAL ADMINISTRATIVO

1. Caracteres generales	106
2. La Administración Central	121
3. Organización territorial	130
4. Los funcionarios de Hacienda	137
5. Participación de los órganos de gobier- no y de justicia en la administra- ción de la Hacienda indiana	146
6.	

CAPITULO TERCERO

REGIMEN JURIDICO DE LOS OFICIALES REALES Y SUS TENIENTES

1. Nombramiento.....	191
2. Principios que rigen la actuación de los Oficiales Reales	196
3. Obligaciones	199
4. Derechos	213
5. Jurisdicción fiscal	220
6. suspensión y pérdida del oficio	226
7. Régimen jurídico de Oficiales provisionales y Tenientes	228

CAPITULO CUARTO

OPERACIONES DE LA HACIENDA INDIANA

1. Juntas de Hacienda	260
2. Recaudación de ingresos	263
3. Fundiciones	275
4. Avaluaciones	279
5. Almonedas	285
6. Gastos de la Hacienda	286

CAPITULO QUINTO

DESVIACIONES DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO EN LA APLICACION DEL DERECHO

1. El conocimiento del Derecho	314
2. Negligencias	319

3. Fraudes y excesos cometidos por los Oficiales Reales	323
4. Intrusiones de los órganos de jus- ticia y de gobierno	328
5. Participación de los Oficiales Reales en el Gobierno de las Indias ...	332
CONCLUSIONES	335

A P E N D I C E S

I R.C. de 18 mayo 1572 concediendo jurisdic- ción autónoma a los Oficiales Reales de Panamá.....	344
II R.C. de 28 marzo 1549 a los Oficiales Rea- les de Cartagena unificándolos Oficios de Factor y Veedor.....	345
III R.C. de 4 enero 1565 a los Oficiales Rea- les de Cartagena suprimiendo los oficios de Factor y Veedor	348
IV Ordenanzas del Marqués de Cañete, fecha 1.º agosto 1556, creando el Consejo de Hacienda del Perú	352
V R.C. de 15 marzo 1539 suprimiendo el Con- sejo de Hacienda del Perú y tes- timonio del Virrey de 20 marzo 1531 de haberse cumplido	359
VI R.C. de 26 julio 1559 concediendo a la Con- taduría Mayor de Castilla la su- prema dirección de la Hacienda Indiana	364
VII Título de un Contador Especial de Cuentas a favor de Fernando de Serralta, 17 diciembre 1577	367
VIII Revocación de las facultades de gobierno a los Oficiales Reales de Castilla del Oro (R.C. 19 junio 1519) ...	377
BIBLIOGRAFIA	378

CAPITULO PRIMERO

DESARROLLO HISTORICO DE LA ADMINISTRACION DE LA HACIENDA INDIANA

La política de Fernando V es objeto en nuestros días de numerosas controversias. Frente a una corriente muy extendida que prodiga las alabanzas y agota los adjetivos encomiásticos, ha surgido otra, especialmente del campo americanista, que fustiga duramente tanto los móviles como los medios empleados por aquel Rey (1). Sin tomar parte en la polémica, nos interesa hacer constar aquí el vivo interés por obtener de las Indias la mayor ganancia posible que se refleja en la legislación indiana dada en los primeros tiempos de la colonización. Este interés económico explica quizá la viva preocupación del Rey Fernando en todo lo que atañe a la organización del Fisco en los nuevos territorios y que desde el primer momento quede perfectamente establecida en Indias una organización administrativa de la Hacienda.

PRIMEROS ORGANISMOS

Cuando a principios de 1493 los Reyes Católicos

deciden la preparación de una flota que ha de dirigirse a las Indias, recientemente descubiertas, se encarga ayuden a Colón. Fonseca y Juan de Soria, éste secretario del Infante D. Juan y Contador de la Comisión.

La organización financiera de Castilla estaba por aquel entonces centralizada en la Contaduría Mayor (2) y es natural que sea ésta la que intervenga en esta nueva empresa real. Juan de Soria, en su nombre, toma parte activa en el apresto de las naves, excediéndose en sus atribuciones hasta el punto de que los Reyes, desde Barcelona, tienen que ordenarle que no ponga dificultades al Almirante, antes bien que le preste toda su ayuda, puesto que es él quien ha de capitanear la flota y sabe mejor que nadie lo que hace falta (3).

Según HARING (4), los Reyes Católicos proyectaban un monopolio real del comercio con las Indias Occidentales y este comercio, más que la colonización, era su preocupación principal. Así parece deducirse del examen de la instrucción a Colón para este segundo viaje, en que se le ordena que al llegar haga "Casa de Aduana", donde se depositen las mercaderías de España y de las islas (5). Este interés comercial es el relevante en la organización de la Hacienda en los primeros años, aunque no el único. En esa misma instrucción, por ejemplo, se regulan los rescates y la distribución del oro que se obtuviere: aquellos han de realizarse ante el Almirante, el Tesorero Real (o apoderado en su ausen-

cia) y un Teniente (o apoderado) de los Contadores Mayores de Castilla; el oro ha de repartirse con el Almirante (6). En la Instrucción se concede a los dos Oficiales Reales citados, -Tesorero y Teniente de Contadores Mayores-, facultad para confiscar las mercaderías no registradas y se les ordena que lleven dos libros, donde queden asentados los rescates o las mercaderías que entren en su poder. En la Instrucción que se da el 7 de Junio a Bernal Díaz de Pisa, contino de la Casa Real, para desempeñar el cargo de Contador (7), se aclaran algunos puntos de esta organización embionaria: ha de mantener estrecho contacto con el Contador Juan de Soria, que queda en Cádiz, enviándole relación de las mercancías que le remita, debiendo incautarse de los navíos que lleguen a la Española, que no vayan registrados por aquél; su misión principal ha de ser la de llevar la cuenta de las mercaderías y del oro que obtenga, y la fiscalización del Tesorero, de modo que nada haga éste sin que aquél tenga razón de ello; finalmente, queda encargado del reparto de mantenimientos que ordene el Almirante y del control de la gente que reside en la colonia y de lo que marcha en los navíos (enviando relación a Soria), debiendo para ello presenciar un "alarde" cada mes. Las relaciones que engie han de ir firmadas por el Almirante. A Bernal de Pisa le acompañaba Diego Marque para desempeñar el oficio de veedor(8). Como puede apreciarse, en estas dos Instrucciones se esbozaba algunos aspectos básicos de la futura

4,

Administración (registro de las naves, Oficiales Reales, comercio con la Metrópoli, Libros de Hacienda, colaboración estrecha con la autoridad gubernativa). Se advierte también cómo, desde el primer momento, los funcionarios de Hacienda desempeñan funciones que rebasan la esfera propia de su cargo, tomando parte activa en casi todos los aspectos de la vida de la colonia.

Nada sabemos de la actuación de estos Oficiales Reales bajo el gobierno de Colón en La Española. Es probable, incluso, que debido a la pobreza de la colonia, regresaran a España (9). El 3 de Septiembre de 1501 recibe Nicolás de Ovando un nombramiento de Gobernador y a partir de este momento, la administración de la Hacienda Real se lleva ya a cabo la forma sistemática. El Rey designa personalmente nuevos funcionarios del Tesoro, esta vez en número de cuatro: Tesorero, Contador, Factor y Veedor (10), señalando ya una especialización de funciones que, bien independientemente o bien acumuladas en dos o tres personas, perdurará en la organización de la Hacienda durante cerca de tres siglos. Es interesante señalar aquí cómo el Contador aparece ya sin ninguna razón de dependencia de la Contaduría Mayor, en cuanto al nombramiento. Sin embargo, seguirá este organismo central tomando parte activa en todo lo referente a la Hacienda indiana hasta la creación del Consejo de Indias (11).

El hecho de que las funciones puramente comerciales queden desglosadas del Contador y pasen a constituir

la tarea específica del Factor, nuevamente creado, indica por sí sólo que sigue interesando vivamente a la Corona la creación de un activo comercio con los nuevos territorios. Precisamente por esta fecha (1502), se presenta a los Reyes un proyecto de Casa de Contratación a establecer en Sevilla, del cual debió ser autor probablemente Francisco Pinelo, Jurado y Fiel Ejecutor de Sevilla, que había intervenido como tesorero en los preparativos del segundo viaje colombine. Este proyecto, descubierto y publicado por el Dr. SCHAEFER (12), establece una organización administrativa a cargo de un Factor, un Tesorero, y dos Contadores, proponiendo el establecimiento en La Española de una administración comercial correspondiente.

La idea es acogida sin reservas y en 20 de Enero de 1503 se dan las primeras Ordenanzas para la Casa de Contratación, que reproduce el proyecto, salvo en lo de los Contadores, que se reducen a uno, y se nombra a Pinelo, Factor de la misma (13). Poco después se ordena al Gobernador de La Española la creación de una Casa de Contratación, análoga a la de Sevilla (14).

Estas disposiciones y la semejanza externa entre esta organización y la existente en la Española, hace decir a FARRÉ que "con facultades análogas y con los mismos nombres se crearon y se establecieron en Sevilla otros Oficiales" (15). Aunque del examen de las Ordenanzas e Instrucciones se desprenden numerosas identidades en cuanto al régimen de una y otra (16), y hasta es posible una copia en parte de la organización

de Ultramar, sus funciones son desde el primer momento totalmente distintas, como distintos son los fines que a una y a otra se les señalan. La Casa de Contratación es un órgano comercial encargado del monopolio indiano y como tal tiene facultades que no poseen los Oficiales Reales de la Española, como poner multas pecuniarias, decretar prisiones en nombre del Rey y, desde 1511, jurisdicción administrativa y judicial en primera instancia, (la segunda, el Consejo de Castilla), en las cuestiones referentes al comercio y navegación con las Indias.

En La Española, junto a las funciones comerciales, casi exclusivamente a cargo del Factor, tienen los Oficiales Reales la del cobro de impuestos, la inspección de la explotación de las minas reales; en una palabra, el cuidado de la Hacienda Real. Sin embargo, en esta primera época, las funciones comerciales son las de mayor importancia, usándose en los documentos la denominación de "Casa de Contratación de La Española", para referirse a los organismos fiscales de la Isla. Varias razones influyen para este predominio del aspecto comercial: la poca importancia de otros ingresos en el erario y la puesta en marcha de la vida de la colonia que obliga a un activo comercio de bastimentos o instrumental de trabajo; la Corona, por medio de la Casa de Contratación de Sevilla, envía los géneros al Factor de la Española, verdadero gerente real de negocios, el cual los suministra a los colonos, casi siempre al fiado (17).

La Casa de Contratación de Sevilla se erige, desde

el primer momento, en supremo órgano ejecutivo de las cosas de Indias, (la dirección sigue en manos del Rey y sus secretarios y consejeros: Fonseca y Gracía hasta 1508; Fonseca y Conchillos hasta 1519). Las Ordenanzas que se le dan en Monzón establecen que todos los despachos de Indias se han de enviar directamente a la Casa y los Oficiales de la misma han de despachar por sí los asuntos que puedan, informando al Rey. El Factor Ochoa de Isasaga solicita en un Memorial dirigido a la Corona, que no se decida nada respecto a Indias sin previa información de los Oficiales de Sevilla, por su conocimiento de las cosas de allá; y el Rey lo aprueba. Es interesante para nuestro tema que en este Memorial se piden facultades para llamar la atención a los Oficiales de las Indias, que se extralimitaran o cometieran faltas, y ello sin intervención de las facultades que también le son concedidas (18). Poco antes, las Ordenanzas de Monzón de 1510, disponían que todas las cuentas de las Indias deberían ser enviadas a Sevilla, donde quedarían asentados en un libro especial.

Entretanto, los numerosos asuntos que plantea la administración de los nuevos territorios exige una especialización dentro del Consejo de Castilla. Hacia 1519 se habla ya de un "Consejo de Indias", compuesto de consejeros del de Castilla y que funcione aún como una sección especial de aquél; en 1.^a de Agosto de 1524, se erige ya en órgano independiente (19). A pesar de que parecía lógico que fuera el Consejo de Ha-

cienda de Castilla el que entendiera en las cuestiones de la Hacienda colonial, se creyó preferible para lograr una unidad de dirección el dejarlo a cargo del Consejo de Indias, que se ve revestido de los más amplios poderes administrativos, judiciales y financieros para el desempeño de su misión. Ya veremos cómo el Consejo de Hacienda volvió por lo que entendía propio de su jurisdicción, lográndolo, -aunque fuera transitoriamente-, con Felipe II.

Siguiendo las instrucciones reales, el Consejo se hace cargo del control de los funcionarios de Hacienda de las Indias, interviniendo activamente en lo referente al nombramiento de los mismos, revisión de cuentas, visita y residencias, etc., como tendremos ocasión de ver en el capítulo próximo. La única nota digna de señalar aquí en lo que se refiere a la administración central de la Hacienda indiana en el resto del siglo XVI, -aparte, claro está, del corto período 1557-62, en que la dirección pasa a manos del Consejo de Hacienda- es la creación de un funcionario especial en Cádiz, encargado del registro de las naves (20).

En las Indias, mientras tanto, habíase efectuado una rápida expansión de la colonia, primero hacia las islas vecinas y más tarde hacia el Continente. Junto a los conquistadores, el Oficial Real de la Hacienda va haciendo su aparición en los nuevos territorios. En 1511 hay ya en la isla de S. Juan de Puerto Rico Oficiales Reales totalmente independientes de los de la Española, aun cuando en los nombramientos de los Oficiales de esta última isla, se siga señalando como

territorio de su demarcación "la Española y demás islas, Indias y Tierra Firme del Mar Oceano" (21). Dos años más tarde se nombran los de la isla Fernandina o Cuba (22). Por esta época estaba preparándose en España una importante expedición que, bajo el mando de Pedrarias Dávila, había de dirigirse a las tierras del istmo, bautizadas con el nombre de Castilla del Oro. El Rey Fernando, que atiende minuciosamente esta empresa en la que tantas esperanzas tiene puestas, designa los Oficiales Reales que han de acompañar a Pedrarias, todos ellos muy allegados a la Corte y hombres de su completa confianza (23). Establecidos de momento en Santa María de la Antigua del Darién, se establecen más tarde en Panamá, que se transforma en centro de las expediciones por el Mar del Sur.

Más al Norte, los españoles llegaban a la península del Yucatán y el Rey nombraba inmediatamente Tesorero Real de los nuevos territorios (24). Como puede suponerse, la demarcación señalada a los primeros Oficiales Reales en sus títulos, resultaba muchas veces excesiva, según iba extendiéndose el radio de acción de la conquista. Ya hemos señalado más arriba como ocurrió esto con los de la Española; también en el Continente hubo que ir restringiendo estas demarcaciones, cuyos límites indecisos fueron ocasión en los primeros momentos de algunas controversias entre los propios Oficiales Reales (25). Los primeros Oficiales de Hacienda de Nueva España, cuya actuación iba a tener tanta resonancia

cia pocos años después por sus intromisiones en las funciones de Gobierno, reciben sus títulos en 1528 (26) y diez años más tarde se nombran los de Nueva Galicia (27). Así van apareciendo paulatinamente en Honduras, Nicaragua, Guatemala, Nuevo Reino de Granada, Venezuela, Perú y Río de la Plata (28).

Estos Oficiales "propietarios" iban precedidos generalmente de otros funcionarios de Hacienda, especialmente nombrados para acompañar a los propios caudillos, que a veces eran los que hacían la designación; aunque su misión estaba limitada a velar por el erario real únicamente durante la expedición, no era rara la ocasión en que el Rey les confirmaba en su oficio, dándoles el título de propietarios (29). Una vez llegados al territorio de su jurisdicción, los Oficiales propietarios tomaban asimismo parte activa en las expediciones al interior, realizadas con el fin de aumentar las conquistas, o simplemente con el de obtener rescates (30), al mismo tiempo que atendían a la creación de nuevas Cajas Reales, allí donde podía preverse una fuente de ingresos para la Real Hacienda (minas, puertos, etc.) (31). Causa admiración ver cómo inmediatamente que se pone el pie en un territorio, surge con los Oficiales Reales una organización administrativa, que se desenvuelve y funciona activamente, aun en medio de las circunstancias más difíciles (32).

Al mismo tiempo que crece en extensión la organización de la Real Hacienda, los ingresos de ésta aumentan en notable proporción, (de 35.000 ducados en 1516 a

un millón, promedio del decenio 1550-60), según cifras de HAMILTON (33), lo que se debió en parte a la creación de nuevos impuestos. Ya dijimos que al principio los ingresos derivados de esta fuente eran de escasa importancia; procedían en su mayor parte del diezmo eclesiástico de las iglesias de Indias - cuya concesión había otorgado el Papa Alejandro VI a los Reyes de España (32)-, "quinto" de los metales preciosos y de los esclavos que se hacen (35) y almojarifazgo de las mercancías que se llevaban de España (36). A esto vino a sumarse, más tarde, el tributo del indio, cuya implantación se intentó tímidamente en la Española, pero que se afirmó en Nueva España (37) y la Bula de Cruzada (38); al mismo tiempo, el descubrimiento de ricas minas en el Continente (Potosí, Zacatecas) hace aumentar considerablemente los ingresos procedentes de los primitivos impuestos (39).

Este aumento de ingresos fiscales tiene su reflejo en la organización administrativa. En la primera mitad del siglo XVI la actividad comercial de los Oficiales Reales ha sido, como dijimos, la predominante. En el período 1521-7 existe una viva preocupación por el tráfico de la especiería, que se confía realizar a través de la Casa de Contratación de Panamá, una vez descubierta la ruta de las Molucas (40). La desviación de este objetivo y la aparición de nuevas fuentes de riqueza, hace que a partir de este momento, la atención de los Oficiales Reales se centre cada vez más en la recaudación de los impuestos, en especial, del "quinto" del oro procedente de las minas. Las diferencias con la

Casa de Contratación de Sevilla se acentúan; es cada vez más rara la denominación "Casa de Contratación" en las instrucciones a los Oficiales Reales de Indias, y el Factor, encargado allí de este monopolio comercial, va perdiendo importancia hasta el punto de que, como veremos más adelante, llega a ser suprimido como funcionario independiente, en diversas regiones, a partir del año de 1563.

LA LEGISLACION DE HACIENDA

Tanto este desarrollo de la organización financiera como su regimentación interior, requería una intensa actividad legislativa. El número de títulos, cédulas reales, instrucciones, ordenanzas, etc., se multiplica de modo asombroso (41). La iniciativa partía fundamentalmente de la Corona, aunque también se encuentran numerosas instrucciones referentes a la Hacienda, debidas a órganos de la Administración indiana (Gobernadores, Audiencias, incluso algún Obispo en funciones de Gobierno) (42). Con la implantación de Virreyes en Nueva España y Perú y la concesión de amplios poderes a los mismos, buena parte de la legislación de Hacienda emanará de éstos, como veremos más adelante.

El Rey contaba para el ejercicio de su función legislativa con la experiencia de los Oficiales de la Casa de Contratación sevillana, primero, y más tarde,

con la del Consejo de Indias. Respecto a aquella, ya dijimos que era práctica obligada la de consultar a los Oficiales de la Casa en todos los asuntos administrativos de Indias. Se estableció además la costumbre, -que perduró pocos años-, de señalar en las instrucciones que todo nuevo Oficial Real recibía en compañía de su título, la obligación de pasar por la Casa sevillana, para recibir de ésta "avisos" para el mejor desempeño de su cargo (43). Más tarde, se limitan a entregarle una copia de la Instrucción, que se dió a los Oficiales Reales de la Española o se indica que, en el viaje de ida, desembarquen en aquella isla, donde recibirán el traslado directamente (44). Cuando desaparece la práctica de pasar por la Casa de Contratación de Sevilla o desembarcar en la Española, (debido a que gran parte de los nombramientos de Oficiales Reales de un territorio recaen en personas ya establecidas en él), la Instrucción para el desempeño de sus oficios la reciben directamente del Rey si son los primeros nombrados para aquella región (copiándose entonces de instrucciones anteriores, usadas como formularios), o bien se le remite a las que se dieron a sus antecesores en el oficio.

Algo semejante ocurre con las Ordenanzas Generales para Oficiales Reales: se reproducen en líneas generales los mismos textos, hasta el punto de caer en anacronismos y sin que se recojan disposiciones particulares que modifican las Ordenanzas anteriores en algún punto concreto (45). El resultado de todo ello es

que se llegue rápidamente a una completa uniformidad en la organización administrativa de la Hacienda en los territorios indianos, señalándose únicamente pequeñas variantes, en algunas regiones, como ocurre en las pesquerías de perlas de Cubagua (46).

Respecto al contenido de esta legislación, dejaremos su estudio sistemático para los próximos capítulos y haremos únicamente aquí alguna referencia histórica a los aspectos más interesantes.

El primero de ellos lo constituye, sin duda, la concesión de jurisdicción propia a los Oficiales Reales. A principios de 1513, los oficiales de la Española solicitaron del Rey facultades semejantes a las que poseían los de la Casa de Contratación sevillana y el Rey les contestó dando largas al asunto (47); poco después volvían a insistir, esta vez limitando su demanda a las cuestiones derivadas del cobro en las fundiciones y del registro de navíos. El Rey les ordena no entrometerse en cosas de justicia, en las que sólo podrán dar su parecer, al mismo tiempo que ordena al Almirante y Alcalde Mayor de la isla que resuelvan con diligencia estas cuestiones (48). La razón de la negativa estaba en lo delicado del asunto: por una parte, como había dicho el Rey en 1505 a los Oficiales de Sevilla "el dar el poder a vosotros para conocer dello y lo executar, siendo partes, sonaría mal" y por otra el temor de posibles fricciones con los órganos de justicia, como ya había ocurrido en Sevilla con la Audiencia de Grados; allí, sólo por la necesidad imperio-

15
sa de que los Oficiales de la Casa de Contratación contaran con facultades enérgicas para entender en la preparación de flotas y la abundancia de asuntos judiciales en estas materias, había obligado a la Corona a la creación de una jurisdicción independiente,

Durante mucho tiempo las cuestiones fiscales quedaban en manos de las Audiencias, a pesar de que se siga insistiendo por parte de los Oficiales Reales, incluso alegando despreocupación de los órganos de justicia o abusos y cohechos de los mismos (49). Al crearse la Audiencia de Santo Domingo, ordenóse que el Fiscal entendiese en los pleitos que le remitieran los Oficiales Reales de La Española y Cuba e idéntica disposición se dió más tarde para las causas de Nueva España al Fiscal de la Audiencia respectiva (50). Los Oficiales Reales promovían el pleito mediante solicitud a la Audiencia y tenían además facultades en materia de probanzas (51); tanto una cosa como la otra, -iniciar el pleito y efectuar las pruebas-, solían correr a cargo del Factor, dándose como razón en los documentos "el estar más desocupado de su oficio" (51). La Audiencia estaba obligada a dedicar por lo menos un día a la semana a los pleitos fiscales, los cuales tenían la categoría de preferentes en las vistas (53), y ninguno de los miembros de aquella -Letrados, Escribanos, etc.-, podían cobrar derechos por ello (54). En 1555, en las Ordenanzas de Audiencias que se promulgan ese año, se establece la obligación de llevar un libro de pleitos fiscales y se ordena que

se reúnan un Oidor, el Fiscal y los Oficiales Reales para entender en su resolución (55). Estos últimos estaban obligados en todo momento a ejecutar las sentencias dadas por la Audiencia (56).

Finalmente, la complejidad y aumento de este género de causas, originado por el desarrollo de la Real Hacienda, llevó, como había sucedido en Sevilla, a la tan deseada jurisdicción propia. En diciembre de 1560 una Real Cédula dispone que los Oficiales de la Real Hacienda de México, a pesar de las disposiciones prohibitivas anteriores "tengan poder y facultad para cobrar los tributos, rentas y otras haciendas y deudas debidas a Su Majestad, y sobre ello puedan hacer las ejecuciones, prisiones, ventas y rescates y otras diligencias que convengan hasta cobrarlo y ponerlo en el arca de las tres llaves" (57). Poco después, y por distintas Cédulas Reales se hacía extensivo a otros Oficiales Reales, hasta que en 1567 Felipe II le daba carácter general, insertándose más tarde en las Ordenanzas de 1579 (58), y pasando finalmente a la Recopilación de 1680 (58). Sin embargo, parece ser que en la realidad tardó bastante tiempo en concederse a algunos Oficiales; como sucedió, por ejemplo, a los de Panamá, Nombre de Dios y Río de la Plata (59).

Preocupó también a la Corona desde el primer momento el control de los funcionarios de Hacienda. En la primavera de 1509 llegaba a la Española un funcionario especial, Gil González Dávila, con objeto de tomar

cuentas a los Oficiales Reales de la isla, al mismo tiempo que iniciaba una investigación especial sobre los "repartimientos" (60). Este mismo personaje, nombrado posteriormente contador de La Española, recibía en 1519 orden de trasladarse a Castilla del Oro, para recibir las cuentas de los Oficiales de aquella región (61). Aunque en las Ordenanzas de la Casa de Contratación sevillana se ordenaba, como dijimos, que estas cuentas fueran remitidas a Sevilla, era necesario el control directo de las Indias, para lo cual se recurrió a distintos medios: envío de comisiones especiales para la toma de cuentas, la realización de visitas y, sobre todo, la concesión a las Audiencias de facultades en materias fiscales. De todos modos, puede decirse que en la más importante de las garantías, -la toma de cuentas-, no existió un criterio fijo hasta la famosa Ordenanza de Mayo de 1554 para el buen recaudo de la Hacienda (62), que la encomendaba a los miembros de las Audiencias allí donde existieran éstas y al Gobernador y Regidores en los restantes territorios. Aun con esta regulación uniforme, puede decirse que fue este aspecto de la administración de la Hacienda el más imperfecto de todos durante el siglo XVI, obligando a la Corona a establecer en Indias, a principios del siguiente, unos Tribunales especiales de Cuentas, a los que nos referiremos más adelante.

Otra cuestión que interesó vivamente al poder cen-

tral en la regulación administrativa de la Hacienda, fué el combinar el principio de independencia económica de los Oficiales Reales -lo que garantizaba la moralidad en el ejercicio de su cargo- y el pequeño rendimiento económico de las Indias, que incluso llegaba en ocasiones a ser insuficiente para el pago de los crecidos salarios que habían de garantizar aquella independencia (63). Al principio, se recurre a rebajar los salarios un tercio y conceder a los Oficiales Reales encomiendas de indios, lo cual da pie a que se cometan numerosos abusos; más tarde se ordena el aumento de salarios y la supresión de encomiendas en aquellos territorios, influyendo también en esto la política de protección al indígena, que tiene su punto culminante en las famosas Leyes Nuevas de 1542-3 (64).

A pesar de todo ello, el problema sigue planteado en otras regiones más pobres, y para resolverlo se acude a otra solución: la reducción del número de Oficiales Reales. Primeramente se dispone que los Oficios de Factor y Veedor los sirva una sola persona, con un solo salario de momento; y dado que estos oficios se concedieron "en propiedad", es decir, por toda la vida del funcionario, cuando muera uno de ellos, el que le sobreviviera acumulará a su cargo el del otro Oficial. La medida, que inicialmente se ordena en 1543 para Tierra Firme, se hizo general poco después para todas las Indias, incluso para La Nueva España y el Perú (65). Sin embargo, no parece que la cuestión quedara definitivamente resuelta. Viente años después,

una Real Cédula disponía que se consumieran los ofi-
cios de Veedor y Factor de Guatemala, Nicaragua, Hondu-
ras, Cartagena, Cuba, Cubagua, Isla Margarita, San
Juan de Puerto Rico y Venezuela, porque "a causa de
ser las dichas provincias e islas pobres, es poca la
renta y aprovechamiento que en ellas tenemos y los
dichos Oficiales tienen poco trabajo y ocupación en
sus oficios"; la medida ha de llevarse a la práctica
"de manera que todos quatro oficios de tesorero, con-
tador y factor y veedor, que hasta aquí los servían
tres personas, los sirvan de ahora en adelante sola-
mente dos, que son el tesorero y contador y no más"
y, como es lógico dado el fin perseguido, cobrando
un solo salario. También aquí como en el caso ante-
rior, se dan disposiciones transitorias; si el que
muere primero es el Contador o el Tesorero, el Fac-
tor-Veedor ocupa el puesto vacante, consumiéndose su
cargo (66). La orden se hizo extensiva aún a la pro-
vincia de Quito y al Río de la Plata (67) y, según
demuestran los documentos, se llevó a efecto en todas
las regiones indicadas.

Por último, entre la abundante legislación sobre
Hacienda, citaremos aquí por su importancia respecto
a la organización administrativa, la de 5 de Marzo de
1565, estableciendo el orden que debe guardarse en
las almonedas (68); las instrucciones particulares
que reciben los Oficiales Reales, junto con el nom-

namiento, y de las cuales hay muchas publicadas (69); las de los Contadores especiales enviados desde España (70); las Ordenanzas para el buen recaudo de la Hacienda (71) y, finalmente, las instrucciones generales para los Oficiales de un territorio, emanadas de la Corona o de los Virreyes respectivos (72).

LOS CONSEJOS DE HACIENDA DE ESPAÑA Y EL PERU.

A mediados del siglo XVI se produjo en la organización de la Hacienda indiana una profunda alteración, la cual, aunque no tenga repercusión en el cuadro general de la organización administrativa durante el siglo XVI debido a su escasa duración, conviene la examinemos aquí con algún detenimiento, dada su gran importancia. Nos referimos a la sustitución del Consejo de Indias por el Consejo de Hacienda como órgano supremo de la administración del Fisco y la aparición consecutiva en el Virreinato del Perú de dos Consejos de Hacienda, ambos por iniciativa de gobernantes indios y sin contar para nada con la conformidad real.

A la muerte de Don Antonio de Mendoza, ocurrida "víspera de la Magdalena" del año 1552, el Rey designa como sucesor en el Virreinato del Perú a D. Andrés Hurtado de Mendoza, Marqués de Cañete. Recibido el nombramiento de fecha 5 de Noviembre de 1554 y

previsto de amplias facultades (73), el nuevo Virrey, ya anciano, parte para las Indias, a principios del año 1556 y el 29 de Junio del mismo año hace su entrada en la capital del Virreinato. La primera carta dirigida al Rey desde Lima que conocemos, es de 15 de Septiembre (74) y en ella da cuenta de la situación del Virreinato y de los remedios a que ha tenido que acudir. Para él, los tres Oidores, que quedaron en la Audiencia no hacían justicia y ni siquiera se hablaban entre sí; la gente anda alborotada y muchos oficios han quedado vacantes. Para él la solución es tener mano dura con la gente (75), retirar a los tres Oidores del Tribunal de la Audiencia, crear una crecida guarda del Virrey, compuesta de cincuenta hidalgos, cincuenta alabarderos y cien de librea, aparte de un cuerpo móvil de cincuenta caballeros, siempre dispuestos a ir con sus mulas a donde fuera menester; deben dársele facultades para proveer la gobernación de Tierra Firme. Con todo ello "se podría curar en diez o doce años a quedar todo en nuestra Real Corona; podrá entonces el Viserrey del Perú hacer justicia y quitar costumbre de reino que quierén que no haya nadie que teme a Dios ni a V.M., sino sólo la justicia a ellos y esto nació de haber muerto un Viserrey (Núñez de Vela) y haber hecho a los que lo mataron mucha merced y a los que se hallaron con él estar mansos y pobres y que menester dalles por amor de Dios y esto remediardé yo, porque es justicia y conciencia."

En estas palabras del Marqués de Cañete se apunta ya claramente su concepción del cargo de Virrey, "el Rey vivo en carnes" como le dijo al Factor de Lima, Bernardino de Romani, cuando éste intentó objetarle su falta de poder para hacer las libranzas (76); nadie puede, según él, irle a la mano en lo que quisiere y si el Rey de España le encomendó el Reino fue para que le gobernase "a humo muerto", gastando de la Real Hacienda a su voluntad (77). Estas ideas absolutistas crecen con la admiración que en él despierta la vista de tan ricas tierras, cuya alabanza es constante en todas sus cartas (78). En muy poco tiempo y consecuente con estas ideas, hace y deshace a su antojo la organización del Virreinato: modifica la composición de la Audiencia de Lima, alejando al Licenciado Santillán, que envía a la Gobernación de Chile, y al Licenciado Altamirano, valiéndose del doctor Cuenca, que trajo desde Panamá y de un Alcalde de Corte que lleva consigo llamado Chirinos y a los cuales maneja a su capricho y domina por el miedo (79); escribe que no hace falta que haya Audiencia en Charcas y que si vienen Oidores para alguna parte los re- tendrá en Lima hasta que el Rey sea informado y provea (80); prende a los capitanes que según él protestaban porque no hacía repartimientos; crea una crecida guarda de su persona, rodeándose del fausto que, según él, corresponde a la persona del Virrey (81); hace un contrato para tener cuatro ga-

leras en el Mar del Sur; crea regimientos perpetuos,
 provee escribanías y sustituye o crea Oficiales Rea-
 les allí donde le parece (82), perdona liberalmente
 las deudas de las personas que estuvieron al lado
 del Virrey Núñez de Vela, reduce las Justicias de
 23 a 10, hace hidalgos y les da armas, da facultad
 a los Cabildos para que conozcan de las apelaciones
 hasta 150 pesos y a los Corregidores para proveer
 los alguacilazgos, crea imposiciones como la de la
 avería en Tierra Firme y el Perú y finalmente llega
 a entrometerse y componer matrimonios a su capricho.
 Las provisiones que llegan de España las guarda úni-
 camente, según el Factor Romaní, en aquello que le
 parece y en su lugar "despacha provisiones y títulos
 con su firma en medio de la plana con el título "Don
 Felipe", haciéndolas refrendar por su secretario y
 sellándolas con el sello real sin ir firmadas ni se-
 lladas de ninguno de los Oidores" (83). En carta al
 Rey de 3 de Noviembre de 1566, escribe satisfecho de
 su actuación: "Para cuatro meses que ha que vine, creo
 que se ha hecho lo que hiciera otro pesquisador que
 viniera" (84) y pocos días después en carta, cuyo
 destinatario desconocemos, se muestra ufano de ha-
 ber pacificado el reino con vara de justicia y no
 con batallas como los anteriores gobernantes, expre-
 sando su esperanza de que "entenderá S.M. que en
 seis meses que he sido Rey lo he hecho mejor con él
 y le he dado más que él a mí en cincuenta años de
 Emperador" (85).

Entre las numerosas medidas que toma, hay una que

tiene buen cuidado de callar en las cartas que escribe, y que quizá por esa razón han pasado desapercibidas en general para los investigadores. Era muy lógico que, dadas sus ideas, pensara bien pronto el Marqués de Cañete en tener en sus manos las riendas de la Hacienda; para ello no bastaba, como pronto hizo, poner de Oficiales Reales a gente de su confianza, aunque los propietarios lo fueran por título real, sino que a imitación de Castilla se hacía necesario crear un organismo central de la Hacienda del Virreinato, que tuviera su sede en Lima. No había transcurrido más de un mes, desde su llegada a la capital, cuando por medio de ocho Ordenanzas, de fecha 12 de Agosto de 1556, daba vida al "Consejo de Hacienda del Perú" (86), alegando como razones su deseo de que hubiera buen recaudo, conservación y aumento de la Hacienda, y la larga distancia a la Metrópoli.

En conjunto, la reforma no ofrece apenas originalidad desde el punto de vista orgánico, pues, como dice el conocido historiador de la Contaduría Mayor de Castilla, es, en líneas generales, una imitación del patrón castellano, a cuya reglamentación se alude en el preámbulo de las Ordenanzas. Según éstas, el Consejo se compondrá de los tres Oficiales Reales, el Fiscal, y el Escribano de Cámara, que actuará de Secretario; su misión se extiende de una parte al conocimiento de todos los asuntos relacionados con la Hacienda, sobre lo cual podría adoptar las determinaciones convenientes y expedir las provisiones o

mandamientos necesarios, firmados por el Virrey; y, de otra, a la revisión de las cuentas que los Oficiales Reales estarán obligados a enviar a Lima, siempre que el Consejo lo disponga y a las que se les dará "finiquito", en lugar de hacerlo como antes en el Consejo de Indias. Se regula minuciosamente en las Ordenanzas la distribución del tiempo en las reuniones, que se celebrarían dos días por semana en presencia del Marqués de Cañete; en el primero de dichos días, el Fiscal y el Procurador de la Hacienda traerían al Consejo el libro de pleitos fiscales y se resolvería sobre ellos. El Virrey se reserva la facultad de aumentar o remover los vocales y el derecho a penar en cada caso particular. Se ordena finalmente mandar traslado a todos los Oficiales Reales del Virreinato y se pide obediencia "hasta que S.M. o él no dispusieran otra cosa". El Consejo queda compuesto por disposición del Virrey, del Oidor de la Audiencia, doctor Cuenca, a quien socorrió en Panamá y que por tal causa debía serle incondicional (87); del escribano de Nueva Toledo, Pedro de Avendaño, con cuya hija casa su sobrino (88); del Fiscal de la Audiencia; de los Oficiales Reales de Lima, puestos por él, (un cirujano que le prestó en Castilla 3.000 pesos, un criado de su hermano y su secretario) (89); y, por último, del Contador especial, Pedro Rodríguez Portocarrero (90).

La medida tenía lógicamente que ser recibida con hostilidad por los Oficiales Reales, que no pueden ver con buenos ojos estas intromisiones del

Virrey y las arbitrariedades por él cometidas (91). Entre ellos, el más activo es el Factor de Lima, Bernardino de Romani (92), a quien injustamente había encarcelado algún tiempo y al que constantemente vejaba porque se negaba a admitir sus libranzas (93); muy pronto se le une el Contador Rodríguez Portocarrero y el Arzobispo de Lima, y secretamente envían a la Corte relación de los desmanes cometidos por el Marqués (94). Estas noticias producen alarma en la Península y se decide sustituir al Marqués de Cañete en el cargo de Virrey. En diciembre de 1557, el Marqués de queja de no haber recibido contestación a ninguna de las once cartas que lleva escritas al Rey y dice que por cartas de particulares sabe que no están muy contentos de su gobierno y que se ha acordado enviar otros caballeros para arreglarlo; se justifica de su conducta alegando que el respeto debido a la representación de la Real persona le había hecho conducirse así y que no cree que nadie le sirva con más amor y fidelidad (95). A pesar de tales protestas, prosiguen en la Corte gestiones para buscar sucesor; las gestiones son sin embargo, muy lentas y están además complicadas con el nombramiento de los Comisarios que han de acompañar al Virrey para entender en la cuestión de perpetuidad de los indios (96); sólo en octubre de 1559, parece que se ha concretado definitivamente, pero entonces una enfermedad del Conde de Nieva y deficiencias en los preparativos de la flota que

ha de llevarlos, vuelve a retrasar el viaje, con gran disgusto del Rey, que urge la partida (97). Por último, después de un penoso viaje de sesenta días y nuevas recaídas en su enfermedad, escribe el Conde desde Panamá el 22 de Septiembre de 1560 que se embarca hacia el Perú (98). Lleva orden tanjante de revocar todo lo proveído "sin tener licencia, poder ni facultad para ello" por el Marqués de Cañete, citándose expresamente entre otras cosas el "Consejo de Estado y de Cámara y de Hacienda" (99) y al mismo se le da facultades para hacer la "visita" al Marqués y para residenciar a los Jueces y Oficiales que hubiera aquél proveído (100). El Marqués debía regresar inmediatamente a España (101).

Entretanto, en el Perú seguían las cosas de mal en peor. Al poco tiempo de creado el Consejo de Hacienda, y viendo el Marqués la gran cantidad de libranzas y peticiones de mercedes que constantemente llegan a aquél, deshace la organización primitiva, suprimiendo la parte de mercedes y despacha únicamente las cosas de Hacienda con el Secretario Avendaño "de quien se informa de todo lo del Reino y Dios sabe si es a costa de los negociantes, "firmando los despachos el doctor Cuenca que sabe bien poco de las cosas del Reino, a la manera que se hace en Castilla con uno del Consejo de ~~Estado~~ Cámara" (102); una vez hecho esto, no hay ya tope alguno a sus liberalidades a costa de la Hacienda Real. Por otra

parte, el descontento alcanza a todas las esferas a causa del trato despectivo del Marqués (103); en Lima, al hacerse público que el Rey no le escribe hace tiempo y posteriormente que va a ser sustituido, se le obedece a regañadientes (104); a los Oficiales Reales viene a unirse ahora en la conjura los Oidores que quedaban en Lima, entre los cuales está el mismo Doctor Cuenca (105). El Virrey se da cuenta que conviene cambiar de actitud y que hay que contentar a los más destacados enemigos suyos: da un repartimiento de 5.000 pesos a un hijo del Oidor Bravo Sarabia, otro de 4.000 a un hermano del Oidor Mercado de Peñacosa, al mismo tiempo que ordena la suspensión de la deuda de 20.000 pesos que debían pagar los herederos del Veedor García de Salcedo, entre los que se encontraba el citado Mercado; ordena la vuelta a Lima de los Oidores Santillán y Altamirano; procura no zaherirlos, ordenando de momento que el Fiscal sustituto que nombró no tenga preeminencia en los Acuerdos "por no dar descontento a los Oidores que lo sienten mucho" y finalmente procura congratularse con la Corona, enviando durante el año 1559 320.000 pesos. A pesar de todo, aunque de momento "parece que vuelven a sosegar y a decir que su gobierno es bueno" según escribe el Marqués, pronto rife con el Dr. Sarabia, mientras sigue la guerra sorda con los funcionarios de Hacienda, los que constantemente siguen quejándose (106). Estando así las cosas, y cuan-

de Nieva y los comisarios estaban acercándose a la Capital, sobreviene la muerte del Marqués. El nuevo Virrey llega a Lima en abril de 1560 y en virtud de las órdenes recibidas, revoca todas las innovaciones de su antecesor (107). Las cartas posteriores alaban la actuación del Factor Román y muestran que tanto el Doctor Cuenca como Pedro de Avendaño supieron congratarse y continuaron desempeñando sus oficios de Oidor y Escribano respectivamente (108).

Como es sabido, los tres comisarios que acompañan a Nieva, -Briviesca de Muñatones, Diego de Vargas y Ortega de Melgosa, amén del secretario Domingo de Gumana- lleva por principal misión informarse con todo detalle de la cuestión de la perpetuidad de los indios, sobre cuya conveniencia han de emitir su parecer. La actuación de los Comisarios en este aspecto es más o menos conocida (109), pero en cambio, a pesar de que no faltaban testimonios en obras antiguas (110), ha pasado casi completamente desapercibida a los modernos historiadores, otra importante misión, puramente fiscal, asignada al Contador Melgorosa. Convendrá que examinemos la cuestión, para lo cual será preciso que nos remontemos un poco a tiempos anteriores.

Cuando en 1556 Huíle II sube al Trono, el estado de la Hacienda no es nada halagüeño. Las numerosas empresas del Emperador han absorbido las rentas de la Corona y aún se ha tenido que acudir a numero-

ses recursos extraordinarios para compensar el déficit. El nuevo Rey debió pensar que mediante la unificación de toda la organización fiscal en un solo organismo competente (el Consejo de Hacienda), podría quizá lograrse un mayor rendimiento de los impuestos. SCHAEFER apunta también la posibilidad de que influyera en aquella decisión el deseo de tener más libre las manos para disponer de los caudales llegados a Sevilla (111), y tampoco debió ser ajeno al plan unificador el hecho de que el primer Consejero del joven Rey fuera un ministro del Consejo de Hacienda. Lo cierto es que el 16 de Diciembre de 1556, la Princesa Gobernadora comunica a la Casa de Contratación de Sevilla, que el Rey "por algunas causas y fines cumplideros a su servicio" había nombrado a Hernán López del Campo, Factor General de los Reinos de España, con poder de hacer toda clase de contratos financieros y cobrar las cantidades que se adeudasen al Monarca, y les da orden de entregarle todos los fondos de la Hacienda indiana que estén en su poder, una vez descontadas las libranzas y consignaciones concedidas hasta la fecha del nombramiento (112). Poco después, el 2 de febrero de 1557, el número de Contadores de la Contaduría Mayor de Castilla es aumentado de dos a tres, y en el título que se despacha al nuevo Contador, Bernardino de Mendoza, del Consejo de Estado, hermano del Presidente del Consejo de Indias, Marqués de Mon-

dejar, se explica la medida "por haberse de tratar y aplicar a este cargo y oficio de aquí adelante lo que toda a la administración de nuestra hacienda ordinaria y extraordinaria de las Indias" (113). Sin que conociéramos ninguna cédula concediendo facultades al Consejo de Hacienda en este punto hasta Julio de 1557, en los primeros meses de dicho año se suspende al Tesorero y Factor de la Casa de Contratación de Sevilla por supuestos delitos cometidos en el uso de sus oficios (SCHAEFER cree que la destitución no fué muy justificada) y se nombran otros nuevos funcionarios con instrucción del Consejo de Hacienda, (antes la recibían del de Indias), en la que se les ordena que todas las cuestiones fiscales deberán comunicarse con el citado Consejo de Hacienda, al cual deberán proponer las reformas que estimen oportunas en su organización, en cuanto se relacione con el buen recaudo de la Hacienda, señalando de competencia del Consejo de Indias todo lo demás referente a justicia, administración y gobierno de la Casa, despacho de flotas, servicio de armadas, gastos y cuentas de averías, etc. (114).

El Consejo de Indias no podía aceptar tranquilamente esta intromisión en funciones que le habían sido privativas desde su creación y menos aún el anuncio de que se estaba preparando el separar de su jurisdicción la dirección de la Hacienda indiana. El 15 de Julio del citado año eleva una Consulta al Monarca, en la que se exponen los inconvenientes de

llevar a cabo tan inusitada reforma; se le contesta agradeciendo su buen celo, pero indicando que en lo referente a la Hacienda lo quiere llevar y ordenar por un camino, por convenir así a su servicio y al buen recaudo de la Hacienda (115). En efecto, pocos días después, el 26 de Julio de 1557, el Rey expide desde Gante una Real Cédula para todas las Indias, en la cual, después de alegar que el haber carecido hasta entonces la Contaduría Mayor de Castilla de facultades para administrar la Hacienda indiana "había contribuido al desorden existente, consecuencia de la falta de uniformidad en la organización de uno y otro Tesoro, gobernados por Ministros diferentes", se hace saber a los Virreyes, Gobernadores y Oficiales Reales que tanto la Hacienda ordinaria como la extraordinaria de Indias sería administrada en adelante por los Contadores de aquel organismo, (los cuales constituirán recurso sobre el Consejo de Indias como parte aquellas rentas de la Corona castellana), ordenándoles que acudeen en todo lo conveniente a la Hacienda a la Contaduría Mayor. Este organismo tendrá, según la citada disposición, la facultad, -antes privativa del Consejo de Indias-, de despachar las cédulas y previsiones concernientes al Fisco en Indias y para lograr una más eficiente administración, despachará comisionados a Nueva España y el Perú, con la misión especial de inspeccionar el funcionamiento de la organización administrativa allí

implantada y proponer en cada caso las reformas que estimen convenientes adoptar. El orden establecido será respetado, excepción hecha de la parte que los representantes de la Contaduría entiendan ser necesarios modificar inmediatamente, para lo cual estarán plenamente facultados (116).

De acuerdo con estos planes, y al parecer, después de una Junta de los Consejeros de Hacienda (117), se acuerda designar como enviado especial para el Perú, al Contador de la Casa de Contratación de Sevilla, Ortega de Melgosa, que irá además de Comisario de la perpetuidad con Briviesca de Muñatones y Diego de Carvajal, recientemente nombrados (118). Parece ser -así lo hacen constar Solórsano y el Príncipe de Esquilache- que fué designado para acompañarle en esta misión Hernando de Ochoa, de la Contaduría de Hacienda, pero sabemos por qué causa no pasó a Indias (119). Dos años después de la cédula de Cante, el 9 de Octubre de 1559, el Consejo de Hacienda da a Melgosa una Instrucción por la que se le conceden los amplios poderes de un Contador Mayor de Castilla (120) para el ejercicio de sus tareas; de las cartas posteriores de Melgosa se deduce que llevaba la misión de observar los órganos y el funcionamiento de la Hacienda y ver la posibilidad de establecer o introducir nuevos arbitrios en aquel territorio, entre ellos la famosa alcabala sobre el comercio (121). En Consejo de Indias vol-

vía a quejarse en Consulta de 12 de Marzo de 1558, de las intrusiones del Consejo de Hacienda, por estimar que esto merma su autoridad y causa grandes retrasos; pero la contestación es tajante: "en lo que toca a la Hacienda, se guarde lo ordenado, porque así conviene, y en lo de justicia y gobierno hagan los del Consejo de Indias lo que les toca". (122).

Una vez que conocemos ya la función específica señalada a Ortega de Melgosa, podemos entrar a examinar la actuación del mismo en los territorios in dianos, pero no sin insistir antes en que es puramente personal la representación otorgada por el Consejo de Hacienda, según se hace constar en todo momento en la correspondencia de Nieva y los Comisarios (123), y que, además, salvo en cosas que requieran urgente reforma, los poderes que Melgosa recibe de aquel Consejo se limitan a la toma de cuen tas de los funcionarios de Hacienda y a la observación del sistema administrativo fiscal allí vigente, sobre el cual y sobre las convenientes modificaciones ha de emitir informe a los Contadores Mayores de Castilla, para que éstos dispongan las reformas necesarias (124).

Ortega de Melgosa despliega desde los primeros momentos gran actividad; aprovecha la corta estancia de las naves en Santa Marta y Cartagena, para cambiar impresiones con los Oficiales Reales de aquellos distritos, no atreviéndose a tomarles cuentas, porque Nieva y Briviesca de Mufiadores estimaron que

no se especificaba en la instrucción recibida por aquél, las Cajas de aquella provincia; una vez llegado a Nombre de Dios, revisa los libros de los Oficiales Reales; aprovecha su estancia para inspeccionar el cobre del abajarifango de las mercancías llegadas en la flota, e informa desde allí mismo al Monarca, sobre la forma en que aquél se realiza y las innovaciones que es preciso acometer (125), así como también del estado de la explotación de las minas de Veragua y de las noticias que van llegando de Lima, referentes al Marqués de Cañete. Como quiera que las cuentas requerían mucho tiempo, dado que no habían sido vistas desde hacía ocho años, se limita a hacer un tanteo provisional. La misma fiscalización va haciendo en Panamá y en los puertos del Mar del Sur que encuentra en su camino hacia Lima, en la cual le encontramos ya en el mes de abril de 1561 (126).

La situación de la Hacienda en el Virreinato no podía ser más complicada de lo que quedó a la muerte del Marqués de Cañete; el primer problema que se les plantea a los nuevos gobernantes en esta materia es el de sanear la multitud de "situaciones" que la agobian, "situaciones" concedidas muchas veces por el anterior Virrey a los menos merecedores de ellas. El problema es grave porque "quitar las situaciones a los que las tienen es dificultoso y peligroso y también lo es que no se dé y gratifique a muchos que lo merecen que no se les ha da

do nada y se dar a la ira mala en ver que los que no lo han servido y ellos mueren de hambre" (127). De momento, Nieva y los Comisarios solicitan del Rey que la Audiencia no pueda conocer de estos asuntos; los que se agraviaren tengan recurso al Rey y aun les parece se ha de ir a la mano con los del Consejo Real "porque si estas cosas se han de tratar por delgadezas del juicio y orden judicial, parece sería gran estorbo y embarazo para hacer en estos negocios de hacienda" (128); Melgosa, por su parte, al escribir, al poco tiempo de su llegada al Perú sus impresiones respecto al sistema administrativo en sí (129), estima que su jurisdicción en materia de hacienda ha de estar revestida de toda autoridad, de manera que las provisiones que se despachen allá han de ir encabezadas en el nombre del Monarca y selladas con su sello real, porque de esta forma los negocios se harán mejor y con más expedito (129 bis).

En tanto que en España se decide sobre estas cuestiones de jurisdicción, el Virrey y los Comisarios ponen manos a la obra desde el primer momento: después de revocar todo lo hecho por el Marqués de Cañete tienen una serie de reuniones (130), fruto de las cuales es el Informe de 4 de mayo de 1562; dejando a un lado lo referente a la perpetuidad, en la que no se deciden por una solución intermedia (131), proponen se imponga en el Perú una plus-valía ob el almejarifazgo pagado por las mercancías, ya

que los mercaderes suelen ganar desde Nombre de Dios a Lima casi una tercera parte del valor de su venta; se muestran favorables a la introducción de la alcabala, con tal de que sean eximidos de su pago los artículos de primera necesidad y la tasa fijada sea poco elevada; y también a la predicación de la Bula de Cruzada; comunican que han puesto en la Real Corona oficios que antes solían darse con carácter particular y que suelen admitir renunciación de oficios a cambio del abono de la quinta parte de su valor; finalmente, dan cuenta de otras materias, como las gestiones para la tasa de tributos de los indios y sus caciques, contribución de los encomenderos, quinto de la plata labrada y joyas, etc. (132).

Parece sin embargo, que no hubo mucha unanimidad en los gobernantes, en la puesta en práctica de las medidas, que habían de solucionar el desorden existente en materia de Hacienda. El Conde de Nieva, de losé de su poder, que veía mermado por las facultades concedidas a Ortega de Melgosa (133), pretende disponer libremente del Tesoro, como solía ocurrirles a todos los gobernantes que le habían precedido; pronto le vemos seguir el camino de su antecesor y aun llegar más lejos que aquél en la disposición de los fondos reales (134). Por su parte, los Comisarios (reducidos a Ortega de Melgosa Y Briviesca de Muñatones, por la muerte de Diego de Vargas), constituyeron un «Consejo de Cámara y Estado para el a-

siento y quietud de las provincias del Perú y beneficio de la Real Hacienda" (135) y allí dictaban una serie de medidas que rebasaban las facultades que se les había concedido, especialmente en la cuestión de libramientos (136). De hecho, la situación era la misma que en el período del Marqués de Cañete. Las quejas no debieron tardar mucho en llegar a la Corte; la información debía proceder, como anteriormente, de los Oficiales Reales y de la Audiencia (137). Se produce un largo paréntesis de silencio; Mígosa, que ha estado disponiendo un poco a su antojo (138), se muestra perplejo en la carta que escribe a Francisco de Eraso, dado que no ha recibido noticias ni del Consejo de Indias ni del de Hacienda, desde que salió de Panamá; insiste en que se le diga a cuál de aquéllos ha de escribir, y en tanto se le informa, remite sus cartas a Eraso por duplicado, para que éste las entregue en ambos organismos (139). Por fin hacia agosto de 1562 llegan cédulas reales, fechadas en enero y febrero de aquel mismo año, en las cuales inesperadamente se ordena la vuelta inmediata a España de los Camisarios y del Secretario Domingo de Gamarra, alegándose que por las noticias de ellos recibidas debe haberse ya llegado a un acuerdo en la cuestión de la perpetuidad y que el Virrey por sí sólo podrá concluir los restantes negocios pendientes; al mismo tiempo se ordena les tome residencia el Licenciado Pedro Ramírez de Quíñones, Regente de la ciudad de La Plata (140). La orden

es cumplida inmediatamente, dado el tono de la misma --y en esto no habrá más dilación--: el 26 de Diciembre el Virrey comunica la partida de los Comisarios, dando las gracias, porque se le encarga personalmente la gestión de los asuntos encomendados a aquéllos; alaba mucho al Licenciado Muflores por su buen juicio y experiencia en los negocios y al Secretario Domingo de Gamarra, para el cual solicita una merced; en cambio, no dice nada de Ortega de Malgosa, prueba sin duda, de que aún continuaba el resquemor que las atribuciones de aquél le habían producido (141). A través de las cartas posteriores puede verse que no por eso mejoró la situación de la Hacienda, ahora completamente en manos del Virrey; pronto se le enfrentan los Sidores y los Oficiales Reales, y mientras los primeros se dedican a revocar lo ordenado por Nieva y los Comisarios a la menor queja presentada en la Audiencia, el Fiscal y el Factor Romaní hacen secretamente, por encargo del Rey, relación de los ingresos y gastos, de la cual se deduce que es superior el número de éstos al de aquéllos (142). El resultado final del periodo de gobierno del Marqués de Cañete y del Conde de Nieva y Comisarios, que abarcan los años 1556-1564, queda bien reflejado en las cartas del Licenciado Castro: las situaciones hechas por uno y otro consumían además de todas las rentas de la Real Hacienda unos 150.000 pesos anuales; todo el mundo pretendía ser

pagado a pesar de que les hacía constar que los que habían gobernado no tenían poder para situar sobre la hacienda; después de su gestión entre la que figura la anulación de 450.000 pesos de renta dada por aquellos a personas particulares, calcula que el Rey podrá percibir de la Hacienda 140.000 pesos más de los que rentaba hasta entonces. Concluye: "Si el Marqués de Cañete o el Conde de Nieva y Comisarios, pidieren mercedes, están bien pagados" (143). Se ordenó fueran revocadas muchas de las medidas hechas hasta entonces y sabemos que Ortega de Melgosa estuvo suspendido de su cargo de Contador de la Casa de Contratación durante casi tres años (144). Los resultados obtenidos en los Consejos creados por el Marqués de Cañete y los Comisarios, respectivamente, no habían sido en verdad muy halagüeños.

¿Qué ocurría, entretanto, en España, con la reincorporación al Consejo de Hacienda, de la dirección del Fisco de Indias? SCHAEFER señala muy bien los trastornos e incluso peligros que suponía aquella innovación; desde antes sólo se requería una Real Cédula dirigida por el Consejo de Indias a la Casa de Contratación para obtener los fondos necesarios para la administración de los territorios de Ultramar, ahora hacía falta dos cédulas: una, general, del Consejo de Indias y otra especial del Consejo de Hacienda, ya que los Oficiales de la Casa de Contratación no podían pagar más que las que fueran señaladas por este último; si al principio las cosas no fueron del todo mal, porque se procuraban enviar ambas libranzas en el mismo correo, pronto este procedimiento dio lugar a lamentables retrasos en la expedición de los

41

asuntos; por otra parte, el sistema, además del embara-
zo causado por la división de los negocios, tenía el pe-
ligro de un despilfarro mayor, ya que como señala tam-
bién SCHAEFER era preferible que cada Consejo tuviera su
propia administración, lo que tenía al menos la ventaja
de la especial competencia (145). Estos inconvenientes
y las incesantes protestas del Consejo de Indias debie-
ron decidir a principios del año 1562 la vuelta de las
cosas de Hacienda al estado primitivo. SCHAEFER afirma
que la orden de 1557 quedó vigente según parece de-
mostrar los hechos posteriores, aunque su aplicación no
fuera tan rigurosa; pero creemos se trata aquí de una
confusión en la interpretación de aquellos sucesos
originada por el desconocimiento del alcance exacto de
la reforma de 1557, y nos inclinamos más bien por la e-
xistencia de una Real Cédula revocadora, que sería pro-
mulgada en dicho año de 1562, promulgada a principios
del mes de febrero.

Varios datos avaloran esta opinión. Es ante todo muy
significativo que, como el propio SCHAEFER señala, no
se encuentre una sola cédula de ese año que esté seña-
lada por el Consejo de Hacienda: una, de fecha 27 de No-
viembre, refrendada por el Secretario Erazo, requirien-
do el inmediato envío al Rey de 6.000 ducados, aunque
lleva en el dorso el título "Consejo de Hacienda" no con-
tiene ya las rúbricas de los Contadores Mayores, y, en
cambio, otras dos de 22 de Enero y 17 de Julio apare-
cen ya señaladas por el Consejo de Indias. También des-
de este año, los oficiales de La Casa de Contratación
reciben de nuevo sus nombramientos del propio Consejo

de Indias. Parece poco lógico pensar en una variación tan brusca, si no fuera porque existía una orden real en tal sentido. Unas minutas de una carta dirigida a Ortega de Melgosa el 13 de Febrero de 1562, que se conserva en el Archivo de Indias (146), parecen corroborar nuestra opinión: como ya hemos señalado, con esa fecha se despachaba una Real Cédula dirigida al Conde de Nieva y Comisarios, ordenando la vuelta inmediata de éstos; una vez redactado el texto de dicha cédula, se redactó otra que debía acompañarla, dirigida al Contador Ortega de Melgosa, en la que se le contestaba a cartas suyas, en especial, a lo referente a las limosnas que, según contaba aquél, había librado el Virrey; se le dice que por aquella vez puede pasar, pero en adelante cuide de que se excusen tales gastos; y luego se añade: "Aunque veréis en la carta común que se os escribe, que los tres Comisarios y el Secretario os vengais, queremos que no embargante lo sobredicho vos solo quedáis y residais ahí, hasta tanto que otra cosa os enviemos a mandar, entendiendo con todo cuidado y diligencia, como confío que lo haréis, en los contenido en las instrucciones que llevaste despachadas por la Contaduría Mayor, teniendo correspondencia con ella y avisando particularmente de todo lo que se hiciere y ofreciere en los aprovechamientos y acrecentamientos que se podrán hacer de nuestra hacienda justa y honestamente y sin que pueda suceder inconveniente, que en estos nos serviréis". A continuación de este borrador se encuentran otros cuatro; en el primero, se añade un párrafo para que se excusen las libranzas del Virrey, y una nota marginal, probablemente de

Braso, indica que se vean las Instrucciones despachadas por Contaduría, para ver si Ortega de Melgosa ha de actuar separado o comunicar con el Virrey y si ha de estar sobre los Oficiales ordinarios del Perú; en los otros tres, se borra el párrafo que ordenaba se quedara allí, añadiéndose una nota marginal "mejor es que también se venga con los demás". El último de ellos, con la conveniente rectificación del primer párrafo, donde se añade "hasta que os portais y vengaís", y con el último párrafo suprimido, fué la definitivamente despachada el 13 de febrero, señalada de Braso.

¿Cuál fué la causa de tal cambio de opinión? Pudiera atribuirse a la llegada de noticias del Perú, refiriendo nuevos abusos de los Comisarios, pero relacionando esta decisión respecto al enviado especial del Consejo de Hacienda con los hechos anteriormente señalados, creemos más lógico ver en ello una consecuencia de la decisión tomada en esos últimos días de enero o primero de febrero de retirar las facultades concedidas al Consejo de Hacienda en materia fiscal indiana. Las palabras de SOLÓRZANO son también harto expresivas: "Con esto, -dice, refiriéndose a la vuelta de Ortega de Melgosa-, el año de 1562 se volvió al Consejo de Indias esta administración, porque se embarazaban las resoluciones con dividir los papeles en que iban juntos todos los negocios de Gobierno y Hacienda; pero con advertencia de que los del Consejo de ella pasasen al de las Indias las veces que fueren llamados por él, de orden de Su Majestad, ara conferir lo que en estas materias se dudase. Y esta for-

ma se ha ido guardando algunas veces, como se refiere en la del año de 1584, dada sobre el gobierno del mismo Consejo" (147). En íntima relación con esta decisión que apunta SOLÓRZANO, D. Luis Cabrera de Córdoba escribe también en sus "Relaciones de las cosas sucedidas en la Corte de España desde 1599 hasta 1614": "Quiéren que tenga dos veces en la semana, Junta de Algunos del mismo Consejo (de Indias) con dos consejeros de Hacienda para tratar de la de Indias" (148). No sabemos si estas palabras se refieren a la Junta ordinaria de Hacienda, creada en el Consejo de Indias en 1597 y que se compone inicialmente por miembros de dicho Consejo, en la cual se pide ahora la participación de sujetos pertenecientes al Consejo de Hacienda, o más bien a alguna Junta especial, para el examen de cualquier asunto concreto relacionado con la Hacienda indiana, como la que se reunió en los primeros años del siglo XVII para tratar de la creación de los Tribunales de Cuentas en Indias, Junta a la que sabemos asistieron miembros del Consejo de Hacienda (149). De todos modos, a partir de 1562, la participación de este último Consejo en la materia fiscal indiana, pierde el carácter que se le había señalado en 1557, quedando reducida a un papel secundario, principalmente consultivo; no se conoce ningún otro intento de administración en los territorios indianos por parte del Consejo de Hacienda y todo parece indicar volvió a estar en manos del Consejo de Indias durante muchísimo tiempo.

No faltarán sin embargo, en adelante, nuevos motivos

45

de rozamiento entre ambos Consejos. Según parece, las necesidades de la Corona, cada vez más apremiantes y angustiosas, obligaron a ordenar de nuevo a la Casa de Contratación que no fuera pagada ninguna libranza que no estuviese señalada por el Consejo de Hacienda (150); este control en la disposición de los ingresos procedentes de Indias y la facultad que tenía el Consejo de Hacienda de intervenir en lo referente al cobro de la parte de almojarifazgo de Indias que se recaudaba en España antes de la partida de las naves, por formar parte este ingreso de la Hacienda de Castilla (151) y no de la de Indias, produjo algunas fricciones y las consiguientes quejas del Consejo de Indias al Rey.

Parece ser que, a pesar de tales quejas, el Monarca estimó conveniente que continuase durante algún tiempo la facultad dispositiva de todas las rentas de la Corona en manos del Consejo de Hacienda, si bien procuró satisfacer las justas aspiraciones del Consejo de Indias, cuidando de evitar además toda ocasión de choque entre ambos organismos (152).

LA ACCION DE LOS VIRREYES EN MATERIA DE HACIENDA.

Continuando con el estudio del desarrollo histórico de la administración de la Hacienda indiana, será conveniente destacar, siquiera sea en sus líneas generales,

(153), la importante labor realizada por los Virreyes en este punto. Si bien las directrices habían sido ya trazadas por la Administración Central, su aplicación en los extensos territorios indianos requería disposiciones reglamentarias para cada caso concreto; tanto en esta labor, como en las restantes, que afectaban a la "administración por mayor" de la Hacienda (toma de cuentas a los Oficiales, Visitas a las Cajas, Juntas, etc.) la acción de Virreyes, como Don Francisco de Toledo en el Perú y Mendoza y Velasco en la Nueva España, fué de una importancia decisiva para la administración de la Hacienda indiana.

Al llegar en 1535 a la Nueva España, el primer Virrey D. Antonio de Mendoza, encontró la administración de la Hacienda en gran desorden, según refiere posteriormente al Rey (154). Fué preciso abordar uno tras otro los principales aspectos de la administración de la Hacienda, cosa que el Virrey acometió mediante una copiosa serie de disposiciones: en primer término, dictó una serie de mandamientos para regular las operaciones de evaluación de mercancías y cobro del almojarifazgo en el puerto de Veracruz, con lo que se logró disminuir los continuos fraudes al Fisco por parte de los mercaderes (155); dió después una detallada instrucción a los Oficiales Reales de México para el buen uso de sus oficios (156); regló asimismo la recaudación de los tributos para lo cual hizo unos capítulos que se entregaron a los alcaldes mayores y corregidores, y su venta en las almonedas (157); y finalmente ordenó que hubiere en su Cámara un libro de penas y condenaciones, haciendo que los escribanos de la Audiencia y Cabildo y los de número de la ciudad acudie-

ran a asentar en él las multas que se impusieran (158). Con estas y otras medidas, por ejemplo su preocupación por el buen funcionamiento de la explotación en las minas, y la conducta honrada y prudente del Virrey en materia de pagos (159) los ingresos del Fisco crecieron de modo extraordinario: una Relación de los Oficiales Reales, existente en la Colección Muñoz, y reproducida en la obra de PEREZ BUSTAMANTE (160), señala para los quince años de gobierno la cifra de 1.024.779 pesos. El 20 de junio de 1544, Mendoza resume su actuación en esta materia al Rey: "La Hacienda de V.M. no solo la he puesto en orden, porque antes que yo viniese no la tenía, mas he acrescentado las rentas reales al doble de lo que valían, como se verá en los libros de la Contaduría de V.M. y no se hallan con verdad que en poca ni mucha cantidad me haya aprovechado della de más del salario que V.M. me hace merced" (161). Entre los restantes Virreyes de la Nueva España, durante el período que estudiamos, merece ser destacada la figura del gran Virrey D. Luis de Velasco; es de especial interés para nosotros su Instrucción de Agosto de 1552 para el buen recaudo de la Hacienda, en la que se refiere de modo especial a la recaudación del tributo, fundición de la plata y deudas atrasadas, problema éste último de extraordinaria proporción en el último tercio del siglo XVI (162). El Virrey Martín Henríquez, además de regular la operación de evaluación en Veracruz, fué el encargado de introducir la alcabala en aquel Virreinato, para cuya recaudación dió sendas Ordenanzas en 1574 y 1579 (163).

No era mucho mejor el cuadro que presentaba la organización administrativa de la Hacienda en el Perú, después de las guerras civiles entre Pizarros y Almagros. El Gobernador Vaca de Castro escribía el 15 de Noviembre de 1541: "Todo anda malparado, porque desde que se ganó la tierra, no se ha tomado cuenta y son muertos los Oficiales sin tener fianzas. Al principio no hubo libros de cuentas, sino papeles; dicen que no había papel en la tierra" (164); más adelante, vuelve a insistir que hay muchas cosas que enmendar para el buen recaudo de la Hacienda y que en el orden de quintar, hay muchos defectos (165). No parece, sin embargo, que puso gran empeño en mejorar esta situación: si bien dió unas Instrucciones a los Oficiales Reales (166), descuidó completamente la toma de cuentas y el aumento de las rentas reales, preocupándose únicamente de atesorar para sí la mayor cantidad posible de dinero (167).

Después del asesinato del primer Virrey del Perú, Blasco Núñez de Vela, el Licenciado La Gasca emprende enérgicamente la tarea de poner un poco de orden en el caos gubernativo. A él se debe en materia de Hacienda la iniciativa, puesta en práctica inmediatamente, de reunirse semanalmente con los Oficiales Reales y el escribano (entonces, el ya citado Pedro de Avendaño), para el examen de los asuntos relacionados al Fisco. En estas Juntas o "Acuerdos" de Hacienda, que se extendieron muy pronto a la Nueva España, y que perduraron en Indias hasta el reinado de Carlos III, la labor de La Gasca fue muy importante: fueron revisadas todas las escrituras realizadas con el Fisco desde la conquista del

territorio; se tomó cuenta a varios Oficiales Reales y Tenientes; propuso al Monarca el nombramiento de Oficiales Reales en Nueva Toledo, donde sólo había un Factor, y éste "tan poco hábil para cuentas, que no hay que hacer caso dél", y entretanto llegaba la provisión real, ponía al frente de la Caja de Potosí al Licenciado Polo y al provincial de Santo Domingo, con lo que el funcionamiento de la principal Caja recaudadora mejoró notablemente con la consiguiente repercusión en los ingresos del Virreinato y los envíos a España (167). Su cuidado para lograr que éstos se efectúen, llega a los menores detalles; envía al Contador de Lima, Juan de Cáceres a las principales Cajas con el fin de obtener el censo de lo recaudado y al mismo tiempo tomar la cuenta a los Oficiales Reales (169) y él personalmente acude al puerto del Callao para recibir el oro y la plata remitido allí, después de penosísimo viaje por tierra y mar; el número de barras de plata obtenidos en este viaje rebasó la cifra de 3.800. Finalmente, abrió marca en el Cuzco, para todas las fundiciones del Perú y señaló la tasa de los indios (170).

Ya hemos examinado con bastante minuciosidad en el epígrafe anterior las funestas intervenciones del Marqués de Cañete y el Conde de Nieva en materia de Hacienda. Lope García de Castro tuvo que adoptar severas medidas para acabar con los exorbitantes gastos que consumían aquélla. En cuanto a la organización administrativa, lo que más se resentía era el sistema de toma de cuentas, que, aunque teóricamente perfecto, después de las Ordenanzas de Mayo de 1554, era de resultados nulos en la

práctica. El Contador especial Rodríguez Portocarrero, después de indicar en una carta al Rey, de enero de 1557, que calcula un plazo de diez años para examinar las cuentas retrasadas, le proponía que existieran de modo permanente en las Indias, Contadores de Cuentas, porque "no se ha podido ver el efecto y provecho que estos Contadores que ha proveído los Oidores, han hecho en la Hacienda Real" (171). En estas circunstancias, fué designado Virrey del Perú el famoso D. Francisco de Toledo.

En el largo y fecundo período de gobierno del quinto de los Virreyes del Perú (1569-81), fueron echadas sólidas bases en todos los aspectos administrativos del Virreinato (172). También en la administración de la Hacienda se notó profundamente la huella de este gran Virrey. Después de comprobar en sus visitas a las Cajas el desorden existente y aprovechando las amplias facultades que puso el Rey en sus manos, inició personalmente o por delegados, la tarea de revisar las cuentas de los Oficiales Reales, ordenando fueran residenciados algunos de ellos (173); dióles luego Instrucciones para el uso de sus oficios, entre las cuales conocemos las entregadas a los Oficiales de la Caja de Huamanga, Cuzco, Lima y Potosí (174); lo más característico de ellas es el importante papel asignado a los Corregidores en la administración de la Hacienda: han de tener una llave del cofre de la marca real y de la caja de las tres llaves, (las otras dos, el Tesorero y el Contador); deben estar presentes a las principales operaciones de la Hacienda (almonedas, funciones, etc.) y firmar conjuntamente con los Oficiales Reales en los libros (175). No

contento con estas garantías, escribía al Rey la conveniencia de que se cuidase mucho en la elección de personas para dichos oficios, pues de aplicar las penas contenidas en las leyes e instrucciones que tenían los Oficiales Reales, estimaba que algunos merecían ya la pena de muerte y confiscación de la mitad de sus bienes (176). Como la toma de cuentas era la principal garantía de una buena administración de la Hacienda, se preocupó de dejar establecido un sistema más o menos perfecto en este punto: cada cuatro meses los Oficiales deberían entregar un tiento de cuenta al Corregidor y al fin del año darían las cuentas completas (cargos y data) en el lugar que se les hubiere señalado (177). Dándose cuenta de que tampoco ésta era una solución definitiva, propuso al Rey la creación de un Tribunal de Contaduría Mayor en Lima pero se le contestó "que acá ha parecido que por ahora no hay necesidad de hacer novedad en esto, sino que se guarde la orden e instrucción que se envía" (178).

Muchos otros aspectos de la Hacienda abordó el Virrey. En su Relación de Gobierno, escribe que a su llegada al Virreinato, el volumen de la recaudación era escaso, (se enviaban en cada flota a España, unos 250.000 pesos, cuando más); esto se debía, según él, a que la única fuente importante de ingresos la constituía Potosí, a pesar de que la explotación del cerro se realizaba ~~may~~ imperfectamente; las minas de plata y oro de Huamanga estaban inútiles y lo mismo ocurría con las de oro de Garabaya y Sangabán; las de azogue de Huancavelica (descubiertas en 1563 durante el gobierno de Lo-

pe de Castro) rendían sólo de 8 a 10.000 pesos; el almojarifazgo, que se cobraba en los puertos del Callao y Arequipa, valía muy poco por no haber donde recoger las mercaderías ni cuenta ni razón en su cobranza. A consecuencia del agotamiento de las minas, los productos precedentes de los repartimientos de la Corona, -comida, coca, etc.-, que solían llevarse a los asientos mineros, se vendían a bajo precio. El Virrey Toledo puso eficaz remedio en estas materias: remitió al Rey y éste ratificó, una disposición para que se cobrara del almojarifazgo en el Callao y Arequipa "cosa que sintieron y contradijeron tanto como se ha entendido", dando la conveniente autoridad y facilidad a los Oficiales Reales para su cobro, y construyendo además una Aduana; hizo arrendamientos para la explotación del azogue en Huancavelica con lo que se obtuvieron pingües ganancias (179); dió facilidades para que los indios que tuvieran minas de oro pagaran su tributo en dicha moneda, con lo cual se logró que comenzaran a rendir las minas de Cuzco, Carabaya, Sangaban y Condosuyo. La provincia de Chucuito que constituía el mejor repartimiento de la Corona sólo daba de 20 a 25.000 pesos y para obtener éstos, se les causaban muchas molestias y extorsiones a los indios; Toledo mejoró la tasa (de 9 pesos la rebajó a 3 y medio) y aún así se obtuvo una cifra anual de 80 mil pesos, además de los salarios del Corregidor y Caciques. A este mayor rendimiento de los repartimientos de la Corona contribuyó el auge de los centros mineros, y en especial, de Potosí, en la que fué creada una Casa de Moneda y en donde, con una buena administración, se obtuvieron para

BIBLIOTECA
EZEQUIEL

la Real Hacienda ganancias desconocidas hasta entonces. (180). El Virrey podía mostrarse satisfecho al acabar la parte de su Relación dedicada a la Hacienda (181).

Tanto su sucesor, el Virrey D. Martín Henríquez como D. Hernando de Torres y Portugal, Conde de Villar, no tuvieron durante su período de gobierno más que cuidar de la aplicación de las numerosas disposiciones dadas por Don Francisco de Toledo. El descuido de los Oficiales Reales en el cumplimiento de las mismas y el deseo de efectuar algunas modificaciones que la experiencia aconsejaba, llevó a Don Martín Henríquez a la promulgación de unas Ordenanzas para los Oficiales Reales de Lima. En realidad, los veinte capítulos de que se componen, no son en los substancial, más que una reiteración de lo ordenado en las Instrucciones que el Virrey Toledo en 1571-2 y el Monarca en 1573 dieron a dichos Oficiales; instrucciones que siguen vigentes, según se hace constar en la exposición de motivos de las nuevas Ordenanzas (182). El Conde del Villar prestó especial atención a la toma de cuentas (183); las incursiones de los corsarios a las costas del Mar del Sur, además de absorber gran parte de su actividad, le obligaron a efectuar cuantioso gastos, lo que no obstó para que fuera durante su gestión, cuando se enviaron a España los caudales más cuantiosos conocidos hasta entonces (1.371.000 pesos y 71.420 ducados pertenecientes al Fisco y unos 3.000.000 de bienes de los particulares) (184).

El 30 de Julio de 1588 era nombrado Virrey del Perú, D. García Hurtado de Mendoza, hijo del tercer Virrey del Perú, D. Andrés Hurtado de Mendoza. Llevaba un poder ge-

54

neral, -pocas veces concedido por el Monarca- que le facultaba para obrar en muchos caso sin previa consulta, y la recomendación expresa hecha por el Monarca en la entrevista de despedida, de velar especialmente por el acrecentamiento de la hacienda, muy disminuída por los crecidos gastos que sobre ella habían pesado. SUAREZ DE FIGUEROA, en la biografía que escribió de este Virrey (téngase en cuenta las características encomiásticas de esta obra, para valorar el juicio), nos presenta un cuadro lamentable de la Hacienda (1854: hacía mucho tiempo que no se tomaba cuenta a los Oficiales Reales, (esto es verdad, sólo en parte, pues ya indicamos la intervención del Conde del Villar en este punto), no estaban las rentas entabladas, salvo el quinto y el almojarifazgo, que se cobraba en el Callao y Arica; los oficios no se vendían; entraban con gran libertad las mercaderías de la China; el factor del azogue lleno de trampas y con casi dos millones de deuda al Fisco; desacreditado el tesorero de la Bula de la Cruzada; muerto el arrendador del estanco de naipes, con lo que esta renta estaba en el mayor abandono; en Potosí, los mineros andaban entrapados, los indios mal repartidos, la Caja con más de cinco millones de deudas de azogue; las minas de oro sin indios con que beneficiarlas, etc.

Aun descontando lo que haya de exagerado en la relación de Suárez de Figueroa, no cabe duda que fué el nuevo Virrey uno de los que de modo más intenso se preocuparon por las cuestiones de Hacienda, cosa que mereció

las alabanzas de sus sucesores (186). Lo más destacado fué, como veremos más adelante, la introducción de la alcabala en el Perú, en cuya cuestión obró "con maña y prudencia", según expresión del Marqués de Montesclaros. Fué también el que implantó definitivamente el pago de una plus-valía del 5% en el almojarifazgo de las mercaderías traídas al Perú, cuota que habían reducido sus antecesores al 1% por la dificultad de su determinación, a pesar de las órdenes reales. Se pusieron en venta algunos oficios con lo que se obtuvieron unos 800.000 pesos y se arregló el estado del estanco de naipes. Un nuevo asiento con los mineros de Huancavelica proporcionó al Fisco una garantía de millón y medio de pesos más que en el anterior asiento. Se arregló lo referente a la composición de tierras y se hizo un nuevo reparto de indios en Potosí, lográndose que aumentara la recaudación del "quinto" en los seis años de gobierno en unos 400.000 pesos, respecto a los seis años anteriores (187) y se creó un nuevo asiento de minas en Castro Virreina; el Rey le felicitó por su celo en un aspecto tan importante de la administración virreinal (188).

El Virrey Don Luis de Velasco, Marqués de Salinas, último de los gobernantes del Perú en el período que estudiamos, demostró en su nuevo puesto un gran interés y cuidado por la Hacienda. Sus cartas al Rey, referentes a este asunto, son muy abundantes. De ellas y de la Memoria de Gobierno que dejó a su sucesor, Conde de Montemorey (189), se deduce le correspondió el llevar a la práctica la orden real de creación de una caja independiente en el Puerto del Callao, cosa que ofreció serios inconven-

56

nientes y que al parecer, no perduró mucho tiempo (190). Además de las instrucciones generales que se le dieron en 1590 (191), en 1595, se le dieron otras, referentes a diversos arbitrios; después de un acuerdo general, se mostró contrario a la venta de juros sobre la albabala y de cobrarle el quinto a los indios, además del tributo; sus razones prudentes fueron atendidas (192). Pidió, en cambio, otro donativo extraordinario, arrendó dos veces la explotación del azogue de Huancavelica, y procuró la mejora de la explotación minera en Potosí, pudiendo decir en su Memoria que "el estado en que queda es el mejor que ha tenido desde que estoy en este reino". Empezó también a ejecutar el arbitrio de las salinas, aunque no pudo concluirle. A pesar de sus lamentaciones por los excesivos gastos a que le llevaba la presencia de corsarios, su buena administración hizo que los envíos de metales preciosos fueran muy importantes: en 1.598, comunicaba el envío de 1.200.000 ducados. Fue el que más insistió en la creación de un Tribunal de Cuentas en Lima y sin duda, esta constante reiteración en casi todas sus cartas, influyó de modo decisivo en la creación de dichos Tribunales un año después de haber finalizado su gobierno (193).

LA HACIENDA INDIANA EN EL ULTIMO TERCIO DEL XVI Y PRINCIPIOS DEL XVII.

A fines del siglo XVI, merced al impulso dado por la Corona, con ayuda del Consejo de Indias y por los grandes gobernantes que tuvieron las Indias españolas en este pe-

riodo, la Hacienda indiana, mostraba una organización vasta (y hasta cierto punto, perfecta) y un rendimiento eficaz. Una tupida red de Cajas Reales cubría el territorio de la Monarquía desde la Florida hasta Chile y Río de la Plata, y los galeones de las flotas descargaban en Sevilla el oro enviado por los Oficiales Reales, que alcanzaba ya por esta época la suma anual de dos a tres millones de ducados (194).

Las fuentes principales de ingreso seguían siendo el "quinto" de los metales preciosos, el tributo de los indígenas y el almojarifazgo, a los cuales se agregaban los precedentes de comisos, condenaciones fiscales, "dos novenas" diezmales, monopolios y granjerías reales y otras de menor importancia (195). A ellas vino a sumarse, a fines del XVI, el derecho de alcabala.

Este famoso impuesto castellano sobre el comercio, objeto recientemente de un importante estudio del Dr. CARANDE THOVAR (196), no había sido introducido hasta entonces en América, a pesar de su abolengo en el sistema rentístico del país. Sin embargo, las fuentes demuestran el interés que la Corona tuvo desde el primer momento por transplantarlo a las Indias (197), interés que era más tarde acuciado por las necesidades del Tesoro y no cabe duda que si no lo llevó a efecto antes fué por el temor de las quejas que podrían producirse entre los colonos, ya bastante esquilados. Decididos, por fin, su implantación en el Virreinato de Nueva España el año 1574 y poco más tarde, en 1591, en el Perú, aunque la medida ocasionó aquí numerosas protestas y alborotos, especialmente en Quito (198) y hubo de diferirse su

aplicación en algunas regiones pobres, como las del Río de la Plata (199).

Entre las numerosas Cajas Reales establecidas en este período -Huancavelica (1577), Charcas (1578), Arequipa (1599), Durango o Guadiana (1590), etc.- es interesante hacer referencia especial a la de Acapulco, que debe su origen al tráfico entre aquel puerto y las islas del Poniente.

Ya señalamos el interés de la Corona por el tráfico de las especias que debería realizarse a través de Panamá (vid. p. 11). Las vivas esperanzas que en esta empresa se habían puesto y que llevó incluso a la creación de una Casa de la Especiería en La Coruña, quedaron frustradas por el fracaso de los navegantes en la búsqueda de la ruta de la vuelta de Poniente. Cuando esto se logra por fin con Urdaneta, Carlos V se había ya desprendido de las Molucas, cedidas a Portugal por el Tratado de Zaragoza de 1525. Este hecho que, sin duda, constituyó un grave error del Monarca (200) restaba importancia comercial a la hazaña de Urdaneta, a pesar de lo cual, pronto se inicia un tráfico regular, de sedas y especias, principalmente, entre México y Filipinas, con el famoso galeón de Acapulco (201). Con esta nueva fuente de riqueza hace su aparición una nueva organización de hacienda, que reúne caracteres especiales.

Un memorial del Contador especial que el Visitador Contreras envía a Acapulco en 1590 nos da detalles interesantes sobre la administración de hacienda en aquel puerto (202). La Caja real está a cargo de un "ministro"

59

que hace el oficio de factor y proveedor y que es nombrado por el alcalde mayor, que hace oficio de veedor, ambos subordinados en todo, como los de Veracruz, a los oficiales Reales de México. Caso excepcional en la organización administrativa del Fisco americano, falta el Tesorero y el Contador, aunque el Visitador propone en su Informe la creación de este último cargo con la misión de llevar los libros de cuentas, registros y despachos, y hacer cargo al factor-proveedor y tomar cuenta a los maestros que navegan en la carrera de las islas de poniente en navíos de Su Majestad. Las tareas de los funcionarios fiscales se centran exclusivamente en el tráfico con Oriente, debiendo atender sobre todo al abastecimiento de las naves pertenecientes al Rey, para lo cual existen los convenientes almacenes reales, y en todo lo referente a raciones y salarios de la gente de mar y tierra que se ocupan en el Real servicio; los ingresos proceden de las ventas de los géneros llegados de Filipinas; del almojarifazgo de mercaderías traídas por particulares, y de la venta de cosas procedentes de almacenes reales que necesitan los dueños de naves particulares, (un 10% de interés). El Memorial da muchos pormenores sobre los fraudes que se cometen constantemente por los maestros de navíos reales y personal del servicio real y entre las medidas que propone para evitarlos, señala como una de las más importantes, activar la comunicación entre los Oficiales Reales de Manila y Acapulco, ya bastante intensa hasta entonces.

Como puede verse por este rápido esbozo, de nuevo vuelve aquí a cobrar importancia el Factor como ocurrió en

los primeros tiempos, precisamente cuando en los restantes territorios ha disminuído considerablemente, y se ha suprimido como funcionario independiente en muchas regiones. Por su especial característica de punto de arranque de tráfico por el Mar del Sur, y por el hecho, quizá único en la administración de la Hacienda indiana, de que todas las operaciones de hacienda allí verificadas, así de gastos como de ingresos, se limitan al tráfico marítimo, las funciones del Oficial Real de Acapulco mantienen, en mayor grado que en los otros distritos, analogías con las de los Oficiales de la Casa de Contratación de Sevilla. Sin embargo, existe todavía una notable diferencia entre aquéllas y éstas, derivada de la importancia de uno y otro punto, -Sevilla es centro del monopolio comercial indiano y de la navegación con las Indias; Acapulco, base de una línea comercial de relativo volumen, lo que lleva en definitiva a una diferenciación profunda, tanto en la organización como en las facultades que poseen y otros Oficiales.

Hemos de referirnos, por último, a la creación de Tribunales de Cuentas en las Indias el año 1605, pero como su aparición señala el límite de nuestro trabajo, nos limitaremos únicamente a poner de relieve las características más importantes de esta reforma administrativa.

Ya hemos tenido ocasión de señalar repetidas veces que la toma de cuentas a los funcionarios de Hacienda era en la práctica el punto más flojo del sistema administrativo.

Por una parte, el sistema implantado en 1554 adolecía de un grave error; la renovación anual de los que tomaban

cuentas, hacía que carecieran de la práctica y experiencia necesarias, "no trayendo por ello la justificación, claridad y distinción que conviene, de que han resultado muchos inconvenientes y daños a nuestra Hacienda Real" (203), y por otra, dependiendo esta facultad de nombrar contadores de las autoridades gubernativas y judiciales, las muchas tareas que sobre ella pesaban, hicieron que descuidaran la toma de cuentas y el cobro de los alcances que resultaran de las mismas "de que se halla notablemente enflaquecida la Real Hacienda son los muchos retrasos y de consideración que hay pendientes en las Contadurías" (204). Esta grave situación nos ha obligado a considerar el medio más eficaz para su reparo". ESCALONA Y SOLÓRZANO aducen como elemento principal el crecimiento de Hacienda, que exigió para tomar cuenta con "ministros versados y científicos" (205).

La idea, por otra parte, no era nueva, como ya hemos tenido ocasión de examinar. Aparte de los Consejos creados en Lima por Don Andrés Hurtado de Mendoza, Marqués de Cañete y los comisarios que acompañaron al Conde de Nieva, el Contador especial Rodríguez Portocarrero y los Virreyes Don Francisco de Toledo y Conde de Villar, habían señalado la creación de Tribunales de Cuentas, como la única solución viable para resolver el arduo problema de la toma de cuentas. La decisión fue meditada antes de llevar la reforma a efecto. Ya en 1598 parece que se estaba tratando en el Consejo de Indias de esta cuestión (206); en la redacción de las Ordenanzas de 1605 intervinieron miembros de los Consejos de Indias y Hacienda, algunos, como el Doctor Bernaldo de Olmevilla, del Consejo de Indias, a

quien se cometió la nota e impresión de las Ordenanzas, y Juan de Gamboa, Contador Mayor de Cuentas (207).

La solución, pues, de esta grave deficiencia del sistema administrativo de la Hacienda, fué el principal motivo, que impulsó a la creación de tales organismos. Estos deberían tener su asiento en Lima, Santa Fe y México; constarían de tres Contadores de Cuentas, dos de Resultas, dos Oficiales Reales para ordenar las cuentas y un portero (208); y tendrían plenas atribuciones en todo lo referente a la toma de cuentas, en cuya materia constituirían la suprema jurisdicción, -dar el finiquito a las Cuentas; atribución antes del Consejo de Indias-, aunque se les señala la obligación de enviar copias por duplicado al Consejo de Indias (209). Por excepción, Cuba y Venezuela tendrán dos contadores especiales, con residencia en La Habana y Santiago de León de Caracas (210), que deben entenderse directamente con el Consejo de Indias (211).

Pero sus atribuciones no se limitan, como parece indicar su denominación, a "tomar y fenecer cuentas de tesoreros, arrendadores, administradores, fieles y cegedores de las rentas reales" (212), "conforme al orden y estino de la Contaduría Mayor de Cuentas de Castilla" (213), sino que se extienden a otros aspectos. En primer término, los retrasos en el pago de deudas a la Real Hacienda había ido haciéndose un mal endémico en las Indias, teniendo que acudirse constantemente al nombramiento de Contadores especiales -muchas veces, oidores de las Audiencias respectivas- para entender en la cobranza de estos alcances (214). La Ordenanza de 1605 confía esta mi-

sión a los Tribunales de Cuentas, ordenándose a los Oficiales Reales que envíen cada seis meses los cargos que tengan contra deudores (215) y que en los Tribunales hayan libros adeucados para el mejor desempeño de esta tarea (216). Pero, sobre todo, son interesantes por su significado, las funciones que se le asignan respecto a los Oficiales Reales y al funcionamiento de la Hacienda: los Contadores han de comprobar en las visitas a las Cajas si hay dinero fuera de ellas, dando cuenta al Virrey o Presidente de la Audiencia, para que proceda, averigüe y sentencie (217); reciben las fianzas que los Oficiales Reales tienen obligación de dar al tomar posesión de su cargo (218), velando en todo momento para que aquéllas se mantengan siempre firmes (219). Además, los Tribunales de Cuentas pueden hacer autos sobre cumplimientos de cédulas referentes a la Hacienda Real (220) y el Contador más antiguo está obligado a asistir a las Juntas de Hacienda que haga el Virrey, teniendo en ellas voz y voto, "por ser muy conveniente, que los Contadores estén instruídos y se puedan prevenir para las cuentas" (221).

Como Tribunal específico, está íntimamente ligado a las Audiencias (los pleitos de cuentas los conocen tres oidores, asistiendo dos Oidores con voto consultivo) (221), recibiendo sus miembros el mismo tratamiento que los de éstas (223). Las competencias entre ambos Tribunales son resueltas por el Virrey, un oidor y un contador (224).

En definitiva, la reforma de 1605, creadora de Tribunales de Cuentas en las Indias, supone la aparición de

unos organismos intermedios entre la organización central y los Oficiales Reales, cuyas relaciones habían sido directas durante el siglo XVI. Aunque en apariencia tengan una misión específica -la toma de cuentas-, hemos visto cómo en realidad, vienen a constituir órganos de control de la Corona que deben asegurar en todo momento el perfecto funcionamiento del sistema administrativo de la Hacienda que continuará centrado hasta las reformas de Carlos III en los Oficiales Reales de Hacienda (225). No cabe dudar del acierto que supuso la creación de estos Tribunales, aunque su eficacia no fuera, al parecer, tan grande como se esperara en un principio (226).

NOTAS AL CAPITULO PRIMERO

- (1). Es particularmente interesante la actual polémica en torno a dos trabajos del Catedrático de la Universidad de Sevilla Dr. MANUEL GIMENEZ FERNANDEZ, "Nuevas consideraciones sobre la historia, sentido y valor de las Bulas Alejandrinas de 1493, referentes a las Indias", en "Anuario de Estudios Americanos", I, Sevilla 1944, y "la política religiosa de Fernando V en Indias", en "Revista de la Universidad de Madrid", 1943. En ellos se llega a una posición extrema de crítica, que ha ocasionado interesantes réplicas (puede verse P. CONSTANTINO BAYLE, en "Razón y Fe", número y Madrid, 1946; en "Revista de Derecho Canónico", I, Madrid, 1946 y las contestaciones del Dr. GIMENEZ FERNANDEZ en "Anales de la Universidad Hispalense", año III, Sevilla 1945. Aunque indirectamente, otros americanistas mantienen una posición de crítica, pueden verse juicios sobre la política fernandina en las Antillas, en ERNST SCHAEFER, "El Real y Supremo Consejo de las Indias", I, Sevilla, 1935, p. 30 y JOSE DE LA PEÑA CAMARA, "El tributo: sus orígenes; su implantación en la Nueva España", Sevilla, 1934, p. 9, nota 1. No dejar de ser interesante el juicio de SANCHEZ LUSTRINO sobre la conducta del Monarca en materia de diezmos, (vid., su obra "Camino cristianos de América", ps. 314-5).
- (2). Sobre la Contaduría Mayor de Cuentas y sus antecedentes, han publicado trabajos D. FRANCISCO DE LA IGLESIA, "Organización de la Hacienda en la primera mitad del siglo XVI" Madrid, 1906 y CRISTOBAL ESPEJO, "Sobre organización de la Hacienda en el siglo XVI", en "Cultura Española", 1907, ps. 403-28 y 687-704 y "Antecedentes de la Contaduría Mayor de Cuentas hasta las Ordenanzas de 1478", en "Boletín de la Sociedad Castellana de Ex-

- curciones", Valladolid, 1910. Este último autor ha publicado en el citado Boletín varios artículos breves sobre la organización financiera en este período.
- (3). Vid. en Colección Torres Mendoza, 30, 183 ss., 187, 193, 205, 207 s., y 209 s.
 - (4). C.H. HARING, "Origen del poder real en Indias", p. 5 y "Comercio y navegación entró España y las Indias en la época de los Habsburgo", México, 1939, p. 22-4. También FABIE, comentando una Real Cédula dirigida a la Casa de Contratación para la explotación de los territorios del Golfo de Urabá, dice incidentalmente que "el principal motivo, aparte del religioso, era esencialmente comercial". (Véase, Col. docs. ineds. Ult., V. LIII).
 - (5). Instrucción a Colón para el segundo viaje, Barcelona, 29 de Mayo de 1493, n.º 14, en "Col. Torres Mendoza, XXX, 145-57; XXXVIII, 181-191, con alguna diferencia y en "Col. docs. ineds. Ult." V, XV.
 - (6). Se le concede la octava parte de lo que se ganase, con la condición de pagar el octavo de costo; una vez deducida la décima parte que le corresponde, con arreglo a las Capitulaciones de Santa Fe. Además de estos privilegios, que mermaban la Hacienda Real en los primeros tiempos, el Almirante o su Teniente podía con arreglo a las citadas capitulaciones, entender en los pleitos que surgieran a causa de las mercaderías, excluyendo a cualquier Juez, con la condición de que perteneciera al dicho oficio de Almirante "según que lo tenía el Almirante D. Alonso Enríquez o anteriores" y que fuera justo (vid., el texto de 17 de Abril de 1492, en "Colección de docs. ineds. Ultramar", V. XII).
 - (7). En "Col. docs. ineds. Ult.", V, XXIV y "Cedulario Cubano, I. Poco antes, el 7 de Mayo, era designado Gómez Tello, también miembro de la Casa Real "como receptor de los dineros reales y otros derechos", este es, con el cargo de tesorero. (HARING, "Origen del poder real", pgs. 5-6).
 - (8). Así lo hace constar A DE HERRERA en L. 2ª, la Des., cap. V.
 - (9). En 6 de Junio de 1497 el Rey concede la exención del pago de los derechos de almojarifazgo y portazgo ("Col. docs. ineds. Ult., IX, p. 98; se confirma por otra Real Cédula de 22-septiembre-1501 y más tarde, por otra de 16 de Julio de 1519). Se exige para dicha exención que se traiga carta de Cristóbal Colón "o personas que por nos o por nuestros contadores mayores en nuestro nombre estuviesen en las dichas Indias". Sin embargo, cuando en 1499, escribe Colón pidiendo un juez que vaya a ayudarle, no existían en la colonia ni tesorero ni contador, puesto que pide se le envíen tales funcionarios. (LAS CASAS: "Historia de las Indias", I, I, c. 160).
 - (10). En una instrucción a Nicolás de Ovando de 16 de Septiembre de 1501, (Col. Torres Mendoza, I, XXV, p. 13) se

ordena que se averigüen las cuentas del Almirante, sin darles finiquito y se citan ya los nuevos Oficiales Reales: Tesorero, Rodrigo Villacorta de Olmedo; Contador, Cristóbal de Cuéllar, Copero del Príncipe Don Juan; Oficial de Contador (este cargo se proveerá mas tarde por el Contador propietario); Pedro de Arbolanche; Factor, Hernando (o Francisco) de Monroy, (su título, de 2 de Septiembre de 1501, en "Col. Torres Mendoza", XXX, 517); Veedor, Diego Manrique, (título de fecha 22 de Septiembre de 1501, en "Col. Torres Mendoza", XXXI, 167, 244). Se nombraron también Fundidor a Rodrigo de Alcazar y Entretenido de la Armada, a Andrés Vázquez de Cuéllar, Contino de la Casa Real.

- (11). Los funcionarios que en Cádiz entienden en los referente al comercio indiano son delegados de los Contadores Mayores de Castilla (así se hace constar en la Real Cédula de 6 de junio de 1497, citada en nota 9, sobre exención de almojarifazgo). Las cédulas reales sobre Hacienda son refrendadas por Contaduría, por lo menos, hasta la creación de la Casa de Contratación de Sevilla en 1502, (vid., p. ej., en "Col. docs. ined. Ult." V, 72), tomando asimismo razón de los títulos de funcionarios nombrados por el Rey (así en el del Veedor de Castilla del Oro, Gonzalo Fernández de Oviedo, de 2 de Noviembre de 1513, se ordena tomen razón los "Contadores Mayores; ALVAREZ RUBIANO, "Pedrarias Dávila, Apéndices, p. 420; también el título de segundo Factor de la Casa de Contratación de Sevilla va sealado de los Contadores Mayores (Contratación, 5784, cit. SCHAEFER, "Consejo Indias", I, 14). Finalmente, envían a las Indias comisionados especiales para tomar cuenta a los funcionarios de Hacienda, p. ej., a Gil González Dávila en 1509, (vid. Instrucc. a Diego Colón, 3 de Mayo de 1509, "Cedulario Cubano", 141, ordenándose se le dé todo favor y ayuda y "Col. Torres Mendoza", 396, 453 y 455.
- (12). Publicado en "Investigación y Progreso", Madrid, año VIII, nº 2. Vid., también SCHAEFER, "Consejo de Indias", I, p. 9. Sobre antecedentes españoles y extranjeros de la Casa de Contratación, vid. los artículos de EDUARDO IBARRA, publicados en la "Revista de Indias", año II, nºs. 3, 4 y 5.
- (13). Publicados en "Col. docs. ineds. Ult." V, p. 29 y "Cedulario Cubano", p. 53.
- (14). Real Cédula de 29 de Marzo de 1503, citado por Fabié en "Col. docs. ined. Ult." V, XLIX.
- (15). "Col. docs. ineds. Ult.", V, XIV.
- (16). Existen las reuniones colegiales para los negocios de justicia y hacienda (segundas ordenanzas de Monzón, 15 de Junio de 1510, en "Col. docs. ineds. Ult.", V, 211), existiendo el régimen de mayorías en cosas de pequeña importancia; si son de gran trascendencia, hay

que informar al Rey, en caso de división de opiniones. Los Oficiales de la Casa son nombrados por toda la vida (título del segundo Factor Isasaga, en Contratación, 5784, citado por SCHAEFER, I, 14); están obligados a prestar juramento y guardar secreto (Memoria del segundo factor Isasaga, aprobado por El Rey) y sujetos a la responsabilidad solidaria (poderes de los primeros Oficiales Reales, vid. SCHAEFER, I, p. 13). Tienen también como obligaciones la de dar cuentas a los Contadores Mayores o representantes y la de llevar diversos libros: de Acuerdos, de Cédulas Reales para las Indias, de salida y entrada de bienes reales, Registro de objetos almacenados, de compra de material, bienes de difuntos, etc.).

- (17). Vid. una interesante relación de géneros que la Casa de Contratación de Sevilla remite a los Oficiales Reales de Puerto Rico en 1511, en Contaduría, 1073, nº 2.
- (18). Vid., en "Col. Torres Mendoza", XXXII, p. 76.
- (19). Todo este proceso de creación del Consejo de Indias ha sido estudiado minuciosamente por SCHAEFER en su citado libro sobre "El Real y Supremo Consejo de Indias", I, 1-45.
- (20). Ya desde los primeros tiempos existía un funcionario en Cádiz, (recuérdese que allí quedó Juan de Soria). En 1495, cuando se levanta la prohibición general de salir a las Indias sin licencia real, se ordena que los barcos salgan de Cadiz, donde a la ida y vuelta han de ser visitados por Oficiales Reales ("Col. Torres Mendoza", XXX, 317). En la Real Cédula sobre exención de almojarifazgo de 6 de Junio de 1497 ("Col. docs. ineds. Ult.", IX, p. 98) se habla de "la persona o personas que por mí o nuestros Contadores Menores estovieren en la dicha ciudad de Cadiz para atender en las cosas de las dichas Indias". Entonces poseían amplias facultades, -por delegación real o de la Contaduría Mayor de Castilla-, en todos los asuntos de Ultramar. Una vez creada la Casa de Contratación en Sevilla, se ordena en 1519 vaya un Oficial por turno a Cádiz para entender en el despacho de la flota. Parece ser que esto no se cumplía pues la orden se reproduce varias veces (Real Cédula de 22 de Noviembre de 1530, 27 de Abril de 1531, 7 de Agosto de 1535: vid. texto en "Col. docs. ined. Ult.", X, pgs. 275 y 287). En la última de ellas se dispone que desde el 1º de Enero de 1536, resida uno de ellos por turno durante cuatro meses y entienda, en compañía de los Tenientes de los demás Oficiales Reales, en la descarga del oro que envíen los Oficiales Reales de las Indias; recibido el Registro y comprobadas las partidas, se remite el otro a Sevilla. Volvió a abandonarse esta práctica hasta que finalmente en 22 de Diciembre de 1556 se crea la plaza de Oficial en Cádiz, aunque disponiéndose al mismo tiempo que los barcos de vuelta suban hasta Sevilla (Real Cédula, en Contratación 5784, citado por SCHAEFER, I, 90). El Contador Ortega de Melgosa hace mención

de estos Oficiales de Cádiz, en carta desde Nombre de Dios, de 18 de Mayo de 1560 (en LEVILLIER, "Gobernantes del Perú", II, 507).

- (21). Así, por ejemplo, en el título de factor de La Española, a Juan de Ampies, de 19 de Mayo de 1511, poco después de la creación de los Oficiales Reales en San Juan (Vid., "Col. docs. ineds. Ult. V, CXI). En carta del Rey a Pasamonte, tesorero de La Española, fecha 6 de Junio de 1511, (en "Cedulario Cubano", p. 535) señala expresamente que los Oficiales de San Juan "no esten debajo de la mano de los Oficiales de esa casa de la Española". Sin embargo, a causa de la gran amistad de Pasamonte con el Monarca, éste le concede la provisión del tesorero y factor de S. Juan, cuyos títulos le envía en blanco, según le comunica en la anterior carta. El Rey había designado personalmente al Contador (Francisco Lizarrí; título, de fecha 15 de Abril de 1511) y al Veedor (Diego Dares; 26 de Febrero). Ambos reciben sendas instrucciones para el desempeño de su cargo (publicadas en "Col. docs. ineds. Ult.", V, CXI, y "Col. Torres Mendoza, XXXII, p. 216, respectivamente).
- (22). El título e Instrucciones para este oficio son de 5 de Junio de 1513 (Vid. en "Col. docs. ineds. Ult.", I, 44). Con esa misma fecha escribe el Rey a Diego Velázquez se le entreguen al Contador Amador de Lares los indios y naborías, que le corresponden por razón de su oficio ("Epistolario de Nueva España", I, 28). El 7 de Junio de 1518 se nombra tesorero de la Isla a Pero Nuñez de Guzmán (Título, citado en "Col. docs. ineds. Ult. I, 77 e Instrucción de 20 de Agosto de 1520, en *ide.*, p. 99).
- (23). Los títulos e instrucciones dadas a los Oficiales Reales de Castilla del Oro están fechados en agosto de 1513 y han sido publicados por SERRANO SANZ, "Preliminares del Gobierno de Pedrarias Dávila en Castilla del Oro", en "Orígenes de la dominación española en América" Estudios Históricos, Tomo I; Nueva Biblioteca de Autores Españoles, Tomo XXV, Apéndices, pas. 78 ss., 297, 299 ss., 301 ss. Los designados eran Alonso de la Puente, contino y tesorero del Infante Don Fernando, tesorero; Diego Márquez, veedor en el 2º viaje de Colón y más tarde en La Española, Contador; Juan de Távira, ~~recomendado~~ especialmente por los Reyes de Portugal, Factor y Gonzalo Fernández de Oviedo, el más tarde famoso Cronista, Veedor de Fundiciones. El 29 de Junio de 1514 llegaban los navíos al puerto de Santa María de la Antigua del Darién e inmediatamente, los Oficiales Reales comenzaban sus actuaciones.
- (24). El 10 de Diciembre de 1518 se nombra tesorero de la isla de Santa María de los Remedios "que antes se decía Yucatán y Cozumel" a Gonzalo Guzmán (vid. Epist. Nva. Esp.", I, 37).
- (25). Por ejemplo, al nombrarse más tarde Oficiales de Nueva

España, el Tesorero de Santa María de los Remedios, citado en la nota anterior, alegó sus derechos como tesorero de San Juan de Ulúa, ordenando el Rey que se le pague el salario de tesorero, en tanto se tiene noticia más clara de la tierras de Yucatán, Sozúmel, Solucan y otras. (R.C. de 15 de Diciembre de 1520, en "Col. docs. ineds. Ult.", I, 116), y mientras, desempeña el oficio de tesorero de Nueva España (Epist. Nva. Esp., I, 51). También en América Central la pugna entre los conquistadores por las demarcaciones de sus respectivos gobiernos, repercutió en la organización de la Hacienda, quedando resuelta en 1528 con el nombramiento de Oficiales Reales independientes en Higueras (Honduras) y Nicaragua y prohibiendo a los primeros intervenir en el territorio de los últimos (vid., la interesante relación sobre este asunto del tesorero de Honduras, publicada por ALVAREZ RUBIANO en los Apéndices de su obra sobre Pedrarias, p. 661; la R.C. de 27 de Marzo de 1528 prohibitoria, dirigida a los Oficiales de Honduras, en A.G.I., Panamá, 234, p. 91).

- (26). Las instrucciones al contador Rodrigo de Albornoz y al tesorero Alonso de Estrada, de octubre de 1522, en "Col. docs. ineds. Ult." IX, pgs. 152 y 160, respectivamente.
- (27). En carta fechada en Compostela a 12 de Junio de 1532, el Gobernador Nuño Beltrán de Guzmán da gracias a la Emperatriz, por haber sido nombrado tesorero Sancho de Canego, deudo suyo. El Contador es Juan de Sámano y el Veedor, Cristóbal de Oñate (vid., Epist. Nva. Esp., II, 154). Establecidos en Compostela, trasladarán más tarde su asiento a Guadalajara, acudiendo también por turno a residir en Zacatecas, donde había Caja Real, a cargo de tenientes de aquéllos.
- (28). Los primeros Oficiales Reales de Honduras partieron de Sevilla el 8 de Septiembre de 1526. El Gobernador de aquella provincia se hallaba en Nicaragua, cuyo territorio disputaba al Gobernador de Castilla del Oro, Pedrarias, y los Oficiales Reales citados desempeñaron aquí sus oficios hasta Junio de 1527, en que el Rey designó Oficiales Reales de Nicaragua (vid., la relación del Tesorero de Honduras Rodrigo de Castillo, en ALVAREZ RUBIANO, "Pedrarias Dávila", Apéndices, pss. 661-5 y el título de Gobernador de Nicaragua a Jaime de Pedrarias, en id., Apéndices, p. 581). En cuanto a Guatemala y Santa Marta o Nuevo Reino de Granada, en el Archivo de Indias se conservan las cuentas desde 1529, la primera, y 1533, la segunda (este año empiezan las cuentas de la Casa de Contratación de Cartagena de Indias). En Venezuela existieron al parecer Oficiales Reales, desde 1529, pues las Cuentas que toma el Obispo Bastidas en 1535 empiezan aquél año; dos años más tarde (17 de Febrero de 1531) reciben una instrucción general, que va dirigida a los Oficiales de "Venezuela y Cayo de la Vela" ("Orígenes de la

Hacienda en Venezuela", Caracas, 1942, VII). En las Capitulaciones con Pizarro, de 26 de Julio de 1529, éste se obligaba a llevar y tener consigo a los Oficiales Reales nombrados por el Rey; los de Lima rinden cuentas desde 1533; Quito, desde 1535, Potosí, desde 1551 y Cuzco, desde 1558. En el Río de la Plata, con motivo de la expedición de Pedro de Mendoza, hacen su aparición en 1534 (Vid. ROBERTO LEVILLIER, "El Oficial Real de Hacienda", p. 33).

- (29). La presencia de estos Oficiales de carácter provisional puede señalarse en casi todos los territorios: así en Nueva España, Diego de Soto, al cual Hernán Cortés le había tomado sesenta y tantos mil pesos para ciertas armadas (Instrucción al Licenciado Ponce de León, 4 de Noviembre de 1525, en "Col. docs. ineds.", IX, 223; también en las Instrucciones al primer Contador propietario, Rodrigo de Albornoz, se le encarga tome cuentas "a la gente que con él (Cortés) ha estado por nuestros Oficiales para que tomasen recaudo y cuenta de nuestra hacienda"). En la expedición de Gil González Dávila por el Mar del Sur en 1523, se nombra dos tesoreros: uno de la expedición, Andrés de Cereceda y otro de la "veintena", cantidad que el Rey destina a la redención de cautivos y obras pías (vid., R.C. de 10 de Diciembre de 1524 al Tesorero de Castilla del Oro, en ALVAREZ RUBIANO, Pedrarias Davila, Apéndice, p. 552) También pueden verse los de la expedición de Villalobos en 1542 para buscar las islas de la Especiería, en "Col. docs. ineds. Ult.", II, XV) y los que acompañan a Legaspi en 1564 (en Instrucción a Audiencia México, de septiembre de 1564, "Col. docs. ineds. Ult.", II, 145).
- (30). Como la organización de la Hacienda requiere la cooperación de todos los Oficiales Reales, se estableció la costumbre de ir a estas expediciones o "entradas", uno de los Oficiales por tesorero, al cual acompañan los tenientes de sus compañeros. El capitán de la expedición hace un requerimiento a los Oficiales Reales, notificando la marcha y éstos, en "Acuerdo", designan cual ha de acompañarle (Vid., p.ej., en el Libro de Acuerdos de la Hacienda Venezolana, "Orígenes de la Hacienda en Venezuela", Caracas, 1942, ps. 3 y 16). los referentes a las expediciones de Nicolás Federmann (1535), Felipe de Hutton (1541) y Carvajal (1545).
- (31). Así van apareciendo dentro de cada gobernación, multitud de Cajas Reales al frente de las cuales se hallan Tenientes de los Oficiales propietarios, algunas de ellas, como la de Veracruz (1531) y Zacatecas (1544), de gran importancia.
- (32). El libro de Acuerdos de la Hacienda venezolana que empieza en 27 de Marzo de 1535 es una muestra clara de la regularidad con que funcionaba la Hacienda en un período como el del gobierno de los alemanes de grandes y sangrientos desórdenes. Es particularmente notable ver como se efectúan los envíos de oro a España, aprovechando la menor coyuntura favorable: p. ej., el

fiscal de la Audiencia de Santo Domingo, Pedro Moreno, encargado de arreglar en 1525 las cuestiones jurisdiccionales de América Central entre Hernando de Córdova y Alvarado y Las Casas, aprovecha su viaje a Higueras (Honduras), para cobrar a éstos caudillos los derechos reales. También el hermano del Presidente de la citada Audiencia, aprovecha el viaje que realiza al Perú para llevar refuerzos ante la sublevación de los indios del Cuzco, para traerse el oro y la plata que se hallaba en Lima (HARING: "Origen del poder real", ps. 58 y 61). La misma admiración causa al ver los libros mayores de Hacienda, que existen en el Archivo de Indias, con cuentas que se remontan al mismo año o al siguiente de haberse descubierto y conquistado un territorio.

(33). Vid. el cuadro de ingresos que inserta en su obra "American Treasure and the price revolution in Spain, 1501-1650", Harvard, 1934.

(34). La Bula "Eximie devotionis sinceritas" de fecha 16 de Noviembre de 1501 ha sido publicada en castellano en la "Col. docs. ined. Ult.", V, p. 7 y en castellano y latín, según el texto de la "Raccolta", por SANCHEZ LUSTRINO, "Camino cristiano de América", Rio de Janeiro, 1943, p. 253-6. La concesión se hacía a cambio de la obligación que tomaban sobre sí los Reyes Católicos y sus sucesores de dotar las iglesias y proveer las Indias del clero necesario para la conversión de los indígenas. A diferencia de España donde la parte de diezmos que el mismo Papa concediera a los Reyes Católicos en 13 de febrero de 1494 -las llamadas "tercias reales" -consistían en las dos novenas de todos los frutos que se diezaban, en las Indias, la Corona recía únicamente las "dos novenas" de la mita. En 1510 obtiene el Rey Fernando que el oro y la plata -sujetos al "quinto real"- no pagaran diezmos. (Vid. la Bula en SANCHEZ LUSTRINO, p. 318).

(35). El impuesto sobre los metales preciosos que empezó siendo de una mitad de los obtenidos fue reducido a un tercio y más tarde a un quinto, cantidad que quedó fija ya hasta el siglo XVIII. La explotación de las minas era realizada por los particulares, que estaban obligados a traer el oro a la Casa de fundición, donde los funcionarios de Hacienda percibían los derechos pertenecientes al Rey. En La Española había desde 1511 dos fundiciones anuales (Real Cédula de 6 de Junio de 1511 en "Col. docs. ined. Ult." 2a s. V, 312. También en Tierra Firme, el quinto del oro de las minas constituyó el principal ingreso junto con el quinto que se obtenía de los rescates.

(36). En tiempos de Colón se pagaban en las Indias derechos de almojarifazgo a razón de 7½% sobre el valor de las mercancías, como en los puertos de España con las mercancías importadas. En 1543, según ANTUNEZ, fue reducido al 5%, pero al mismo tiempo se imponía otro en Andalucía (2½%) sobre las mercancías que se lleva-

ban a las Indias y $5\frac{1}{2}\%$ sobre lo que llegaba de España, más derechos de alcabala del 10% , aunque no se vendieran estos productos de Indias). Este derecho de almojarifazgo fué introducido en Nueva España en 1528, a pesar de no haber cumplido el tiempo en que se solía conceder de franquicia (unos 20 años; generalmente). Vid. la instrucción a Nuño de Guzmán, 5 de abril de 1528, "Ced. Puga", ed. 1884, I, p. 79.

- (37). Sobre los orígenes del tributo existe un interesante trabajo de JOSE DE LA PEÑA CAMARA, "El tributo: sus orígenes; su implantación en Nueva España", Sevilla, 1934. Era, como es sabido, un impuesto personal, o "in capita", que el indio pagaba sin consideración a sus ganancias. Llegó a constituir pronto uno de los principales ingresos de la Real Hacienda: en Nueva España, se obtuvieron 93.000 pesos en el decenio 1521-31; 235.000 en el período 1531-9; 695.000 en el de 1539-49 y 1.381.000 en el de 1550-60; en el Perú: 76 mil en el período 1548-58 y 445.000 en el de 1558-67. (HARING: "Los libros mayores...").
- (38). Este ingreso eclesiástico que se extendió a América en 1535, según HARING, adquirió bastante importancia. Aun cuando ingresara en la Hacienda Real, la administración de sus fondos era realizada por personas eclesiásticas, existiendo una propia organización independiente de la de los Oficiales Reales; los Tribunales de la Santa Cruzada, que fueron regulados definitivamente a principios del siglo XVII; sus Ordenanzas fueron recogidas por BALLESTEROS en sus "Ordenanzas del Perú". Además de estos ingresos, la Hacienda tiene otros procedentes de monopolios reales (introducción de esclavos, etc.). Puede verse el interesante resumen sobre los mismos de C.H. HARING, cit. en nota 2 de Intr.
- (39). En 29 de Mayo de 1566, las necesidades de la Hacienda obligaron a un aumento del importe del almojarifazgo en el comercio indiano; las mercancías que salían de España pagarán allí $8\frac{1}{2}\%$ (en lugar del $2\frac{1}{2}\%$ por ciento, cobrado hasta entonces) y un 10% al llegar a las Indias (Real Cédula a Oficiales de Cartagena, en Contaduría, 1382, l. r 12). Los vinos pagaban el doble en Sevilla, aunque en 1567 se fijan en $7\frac{1}{2}\%$ únicamente más el 10% en Indias. Téngase en cuenta además que los Oficiales Reales de las Indias cobraban este impuesto con arreglo a las avallaciones que hacían de las mercancías, cuyo importe era doble o triple que en España.
- (40). En una Real Cédula de 6 de septiembre de 1521 a Pedrarias (ALVAREZ RUBIANO, "Pedrarias Dávila", Apéndice, cit., p. 330) se le dice: "porque esperamos en Nuestro Señor que por la Mar del Sur se ha de hacer descubrimiento de la especiería y será menester hacer alguna casa para contratación, yo vos encargo me enhyeis

la horden que en ello pensays tener y que aparejo te-
neys para ello y que costa se nos podía Recrecer en ello
y donde converná hazerse la dicha casa a propósito que
aya buen puerto e paso para las villas de Aera y el
Nombre de Dios para lo que Dios Nuestro Señor fuere
servido de descubrir, se traya a para allí".- Las mismas
esperanzas muestra en cartas a la ciudad de Panamá fe-
chada en el mismo día (ibid., p. 532) y en otras de 16
de Abril de 1524 (ibid. 549) y 16 de Marzo de 1527
(ibid. 577), dirigidas a los Gobernadores de Castilla
del Oro Pedrarias Dávila y Pedro de los Rios, respec-
tivamente.

- (41). La "Copulata", que, como ya dijimos, recoge la legisla-
ción anterior a 1570, dedica la quinta parte (todo el
último tomo) a materias de Hacienda. En la Recopilación
de 1680 éstas ocupan todo un libro (el VIII), que abar-
ca treinta títulos. Sólo los documentos jurídicos so-
bre Hacienda del siglo XVI, utilizados por nosotros,
rebasan la cifra de trescientos, sin contar las numero-
sas instrucciones a Gobernadores, Virreyes y Audiencias
en las que, entre otras cosas, se regulan materias fis-
cales.
- (42). Así, por ejemplo, Pedrarias Dávila dió una ordenanza
sobre fundición del oro (vid. el interrogatorio de la
defensa en la Residencia que le tomó Salmerón; pregun-
ta XLV, en ALVAREZ RUBIANO, "Pedrarias Dávila", Apéndice,
p. 627.- Vaca de Castro dió instrucciones en los
Oficiales Reales del Perú, (vid. en LEVILLIER, "Papeles
de Gobernantes del Perú", tomo I, 70); Pascual de Anda-
goya dió también unas instrucciones para el buen gobier-
no de Oficiales Reales en 1535 (Patronato, 193, nº 23);
el Capitán General de Nueva Galicia, Jerónimo de Oroz-
co, otras para las minas de Zacatecas a 27 de Noviem-
bre de 1579, (Patronato, 182, 53), e incluso el primer
Obispo del Cuzco, promulgó unas "Ordenanzas para el
buen recaudo de la Hacienda (Cit. en "Copulata", V, 221).
Por su parte, las Audiencias intervinieron algunas ve-
ces en la reglamentación de materias financieras (vid.
carta de Audiencia de Charcas al Rey, de 24 de Diciem-
bre de 1563, notificando que han dado unos "avisos" a
los Oficiales Reales sobre manera que han de tener en
tratar la Hacienda, suplicando los vea y provea sobre
ello; el Rey aprobó en parte LEVILLIER, "Correspon-
dencia Pres. y Oids. Charcas", I, 103) y las Ordenan-
zas sobre tasas de tributos hechas en 1566 por el
Oid. de Lima Gonzales Cuenca (Patronato, 189, nº 11).
- (43). Vid., p.ej., en "Copulata", V, 7.- También en las ins-
trucciones a Gil González Dávila, comisionado especial
para tomar cuentas a los Oficiales Reales de Castilla
del Oro, de fecha 15 de Enero de 1519, se le ordena
muestre a los Oficiales sevillanos la misma instrucción
que lleva y ellos, como mejor informados, le darán
junto con los cargos que tienen hechos a aquellos ins-
trucción y poder, firmados de sus nombres, sobre la mane-
ra que debe tomar cuenta, "que os mando guardeis" (vid.
la instrucción a Gil Dávila en ALVAREZ RUBIANO, Apéndice,
461).

(44). Vid., p.ej., en las Ordenanzas de Oficiales 1 inserta en "Copulata", V, 46.

(45). Un ejemplo típico de ello lo constituye las Ordenanzas para los Oficiales Reales de Lima del año 1573 (insertas en ESCALONA, "Gastophilacium...", Ap. I y BALLESTEROS, "Orden. Perú", p. 88). El texto de las Ordenanzas se dirige a los tres Oficiales, usando la denominación de Veedor al referirse al Factor en funciones de aquél (ord. 58). Sin embargo, el preámbulo va dirigido a los cuatro oficiales, cuando en esta época sólo existen tres y lo que es más significativo, para mostrar cómo estas Ordenanzas se copian de otras anteriores, se habla en una ocasión por error de los "cuatro" Oficiales y las "Cuatro" llaves de la Caja Real (Ord. 17).

Las Ordenanzas 9 dispone como lo hacían las Ordenanzas anteriores, que las ventas de tributos y almojarifazgos en las almonedas no se puedan hacer al fiado. ESCALONA explica en unas "Notas y Advertencias a estas Ordenanzas que tal disposición está derogada por uso contrario y costumbres y por la Ley de necesidad, y que, además, existe un auto de 11 de Agosto de 1552, dado por el Virrey de Nueva España, D. Luis de Velasco y confirmado por el Rey, en el que se permita puedan venderse "como se pudiesen", y lo mismo disponía el Virrey del Perú, Don Francisco de Toledo en sus Ordenanzas (nº 90). Como se ve, a pesar del tiempo transcurrido, en las Ordenanzas de 1593 se desconocen por completo estas disposiciones.

(46). En 13 de Diciembre de 1527 se dió una Instrucción especial para la organización de la Hacienda en esta isla (vid. en "Col. docs. ineds. Ult." IX, 290). La aparición de una importante fuente de ingresos (las perlas) origina la creación de una Caja Real independiente, que queda a cargo del tesorero y veedor y alcalde ordinario. La participación de este último en materia financiera es lógica, pues representa la máxima autoridad gubernativa de la isla y ya veremos, cómo Virreyes y Gobernadores toman parte activa en la administración fiscal de los territorios de su mando. Sin embargo, parece ser que, el alcalde ejerce las funciones del Contador y actúa plenamente como un Oficial Real.

(47). Escribía el Rey al Tesorero de la Española, Passamonte, en 6 de Junio de 1511, ("Cedulario Cubano", 235): "La jurisdicción y alguacil que decís es menester para la Casa de Contratación de esa isla, como lo tiene la Casa de aquí reside en Sevilla, no se os puede enviar tan ligeramante como pensáis, pero platicarse a ello y enviarse os ha todo lo que se os pudiese enviar y no dejéis de solicitarlo hasta que se acabe". Los Oficiales de Sevilla habían logrado en 1505 facultad para nombrar un Juez de Embargos (R.C. 15 de Abril de 1505, Indiferente General, 418, 21, citada por SCHIEFER,

- "Consejo Indias", I, 13). En 1510 existía ya un Juez letrado y poco después, en 26 de Septiembre de 1511, se les concedía plena jurisdicción civil y criminal en lo referente al comercio y navegación con las Indias, recibiendo el nombre de "Jueces de la Contratación".
- (48). Reales Cédulas de julio de 1513, en "Copulata", V, 18 y 19. Ya en Julio de 1510 se había urgido al Almirante esta diligencia en las causas del Fisco (vid. en "Copulata", V, 202).
- (49). Los Oficiales Reales de México al insistir en 12 de Agosto de 1533, que se les dé comisión para ejecutar con mandamientos propios los comisos, alegan que la justicia de Veracruz se entiende con los mercaderes, disimulando y ocultando sus fraudes (vid. en "Epistolario N. España", III, 100); piden asimismo se les conceda letrado y procurador. La nota marginal en que se les contesta, es tajante: "El Fiscal siga todo lo que al Rey tocara".- En Mayo de 1538 volvió a denegárseles ("Copulata", V, 19). En esta época suele insertarse con las Ordenanzas de Oficiales Reales un párrafo que dice así: "Las cosas que hubiere de determinar tocantes a su oficio por justicia y albedrío de buen varón, las comunique con la Justicia y los Oficiales (vid. p. ej., la dirigida a los Oficiales Reales de San Juan de Puerto Rico, en "Col. doc. ineds. Ultr.", IX, 355) y las Instrucciones al Contador de N. España, de octubre de 1592 (id., 157)).
- (50). Reales Cédulas de marzo de 1531, enero de 1532, y septiembre de 1533 a la Audiencia de La Española, ("Copulata", V, 202). Las causas de la isla de Cuba eran recibidas en apelación. A Nueva España, se dió la orde en septiembre de 1534 ("Copulata", V, 203).
- (51). En 1528 se concede a los de Santa Marta la facultad de verificar probanzas sobre los españoles que tomaran oro, joyas u otras cosas de las casas de los indios, sin manifestarlo al Fisco ("Copulata", V, 20). En 1548, se ordena con carácter general, que puedan hacer toda clase de probanzas en materia de hacienda, siempre que el Fiscal se lo pidiera (R.C. agosto 1548, en "Copulata", V, 203).
- (52). Rs. Cds. de enero de 1532 a Oficiales de la Española; de septiembre de 1534, a los de Nueva España; octubre 1537 a los de Cuba, y finalmente, con carácter general, agosto 1548. (Vid. "Copulata", V, 203).
- (53). R.C. abril de 1556 a N. España, en "Copulata", V, 205.
- (54). R.C. con carácter general de febrero de 1528, en "Copulata", V, 204.- Otra de 22 de Diciembre de 1529, dirigida a los escribanos de la Isla Fernandina les prohíbe que lleven derechos en autos y pleitos que pasen ante ellos, referentes al Patrimonio Real "por

ser este contra las leyes españolas", (Col. docs. ineds. Ult., IX, 447).- A los Oficiales de Cuba se les ordenó también en 1529 que fueran desempeñando por turno el oficio de Procurador, con el fin de excusar asimismo las costas procesales, (R.C. dic. 1529, en "Copulata", V, 203).

(55). Ordenanzas Nuevas de Audiencias, capítulo LXV e instrucción a Castro para el Perú, marzo 1555, (vid. "Copulata", V, 204.)

(56). R.C. de mayo de 1537 dirigida a los Oficiales Reales de La Española, les ordenaba paguen lo que por sentencia fiscal dada por las Audiencias, debía la Real Hacienda de soldadas o salarios ("Copulata", 204). En cuanto a los débitos de la Hacienda, una vez averiguados cuales eran, se ordenaba la ejecución al portero de la Audiencia, dando carta de pago de lo cobrado a los Oficiales Reales; éstos estaban obligados también a solicitar la cobranza (Carta de la Reina al Obispo de Santo Domingo y Presidente de la Audiencia de La Española, de 27 de Febrero de 1531, en "Epist. N. Esp.", II, 26).

(57). Vid. en "Cod. Puga", II, 350, f. 211 vs.

(58). Vid. L. VIII, Tit. III, ley 1. Reproducimos en el primero de los Apéndices de nuestro trabajo la Real Cédula de 24 de agosto 1563, concediendo la jurisdicción a los Oficiales del Perú y cuyo texto es reproducido en las concesiones a los demás Oficiales. Complementariamente, se disponía en 4 julio 1570 que las Justicias guardaran y cumplieran los despachos que en razón a la cobranza de la Real Hacienda, expidieran los Oficiales Reales, contra cualesquier persona, obligada y ausentes (recogida también en "Rec. Ind.", L. VIII, T. III, l. 18; vid. también R.C. 4 julio 1573 a Audiencia N. España, en "Col. Encinas", T. III, 294).

(59). Una R.C. de 6 de agosto 1571 ordenaba a los Oficiales Reales de Nombre de Dios tuvieran especial cuidado en las denunciaciones de mercaderías sin registrar, indicando que si los que denuncian no las siguen, lo hagan ellos, "porque haciéndose ante la justicia ordinaria como hasta agora se ha tenido por costumbre, contentando a parte al denunciador o juez que dello ha conocido quedan desiertas las denunciaciones" (Cod. Encinas, III, 308).- En 1577 se les concede (R.C. 18 febrero, en A.G.I., Comaduría, 1382, n. 1, r. 14), alegando como razones que no se pueden cobrar todas las deudas por falta de autoridad y que las cuestiones en tributos son "tan menudas y diferentes" que sería muy molesto acudir a las Audiencias.- Los del Río de la Plata tampoco poseían jurisdicción hacia 1585. De ese año es una carta al Rey del tesorero Montalvo pidiendo facultad para ser jueces y "conocer de las cosas y casos tocantes a la gente de la mar y navíos y cosas a ella anejas y concernientes sin que el Gobernador ni sus

tenientes y otras Justicias se entremetan... conforme a la merced que V.M. tiene hecha en los demás puertos de Indias a sus Oficiales y Jueces" (LEVILLIER, "Correspondencia de los Oficiales Reales del Río de la Plata", Madrid, 1914, p. 200 reproducido en prólogo, 35, nº 1); se quejan igualmente de las mañas de los deudores con la justicia, la cual suele dilatar las cobranzas, y de vejaciones del Gobernador y de sus tenientes en materia de libranzas que se evitarían siendo jueces los Oficiales Reales y teniendo facultad para juzgar si aquéllas eran justas y debían pagarse.- En cuanto a los de Panamá, la concesión sólo se hizo en 18 mayo 1572 (vid. la R.C. en "Cod. Encinas", III, 293).

- (60). "Col. Torres Mendoza", XXXI, 396, 453 y 455.- En 3 y 9 de mayo de dicho año, el Rey escribía a Diego Colón, a Pasamonte y a este Contador especial, (vid. "Ced. Cubano", 141 y 157). Cumpliendo los deseos de Rey que le instaba para que acelerara su cometido (Carta 14 agosto, en "Ced. Cubano", 167) terminaba su misión a mediados del año siguiente, regresando a España. ("Col. Torres Mendoza", XXXI, 547).
- (61). Instr. al mismo de 15 énero 1519 en ALVAREZ RUBIANO, "Pedrarias Dávila", Apéndice, p. 461.
- (62). Publicada en "Col. Torres Mendoza", XVIII, 481, y en gran parte reproducida en "Copulata", V, 183 ss.- En el AGI se encuentran distintas copias (Ind. Gral., 415, f. 195; id., 532, f. 71 vº; Contaduría, 1382, nº 1, r. 4). Fue reirrendada on 12 Junio 1559 (Lima, 568, Libro I, 180 vº), 2 febrero 1562 (Lima, 568, L. II, 220 vº), y 26 julio 1563 (Contaduría, 1382, nº 1, r. 1).
- (63). Cuando apenas se ha iniciado la explotación económica de un territorio o cuando éste es pobre en fuentes de riqueza, la Corona ha de acudir a diversos procedimientos para procurarse fondos con que pagar los salarios (R.C. julio 1554: Póngase en la Corona Real el primer repartimiento que vacare en Guatemala para que de lo que rentase se den a los Oficiales Reales 100.000 maravedís más, en "Copulata", V, 74; R.C. septiembre 1561: póngase en la Corona Real algunos repartimientos de indios en la provincia del Yucatán para pagar los salarios del Gobernador y Oficiales y otras cosas en "Copulata", V, 75). Según cuenta ESCALONA, ("Geographium...", L. II, P. II, C. XII, nº 11) los Oficiales de Castilla del Oro procuraban retirar el producto de los "quintos", cobrándose su salario y reteniendo el resto por si no hubiera más adelante oro para pagarse el salario. Como es lógico, esta costumbre, originada por la escasez de ingresos, fué muy pronto prohibida.

- (64). A esta interesante cuestión nos referiremos especialmente en el capítulo III, al hablar del régimen jurídico del Oficial Real. Puede verse también el último capítulo al referirnos a las desviaciones en la aplicación del sistema administrativo de la Hacienda.
- (65). RC. agosto 1543 para Tierra Firme, en "Copulata", V. 5. En 1549 (RC. 22 marzo) se dió para 16 partes y en noviembre 1550 para el Perú. Publicamos el texto de este importante documento en el Apéndice nº II, según copia existente en el AGI. Ha sido publicado también en el Cod. Puga, II, 18, f.º 162.
- (66). RC. 4 enero 1563, cuyo texto inédito constituye el Apéndice III de nuestro trabajo (vid. también en "Rec. I", L. VIII, T. IV, 1. 38).
- (67). En noviembre 1569 se hacía extensivo a Quito ("Copulata" V. 6).- También para Río de la Plata debió darse la orden aunque desconocemos la fecha exacta, pues en la Correspondencia de los Oficiales de aquella provincia en el siglo XVI, aparecen solo Contador y Tesorero; (LEVILLIER, "Corresp. Ofc. Reales R. Plata", Intr., 34, n. 2).
- (68). Puede verse en "Cod. Encinas", III, 350.
- (69). Nos remitimos al índice legislativo que acompaña nuestro trabajo, donde se efectúan las oportunas citas, a los lugares donde se hallan impresas o manuscritas.
- (70). Las más interesantes son las de Gil. G. Dávila para el territorio de Castilla del Oro, fecha 15 enero 1519 (en ALVAREZ RUBIANO, "Pedrarias Dávila", Agenda., p. 461) y las de Martín de Irigoyen; para la Nueva España en 1570, (AGI., México, 1089, L. V, p. 87-94).
- (71). Aparte de la ya citada de mayo 1554 (vid. nota 62), que sirve de modelo para Santa Marta (18 abril 1534, en "Cod. S. Marta", 277), es interesante sobre todo la de 1572, reproducida en gran parte por Encinas, que la distribuye por materias en diferentes partes de su Cedula; también se recoge en La Rec. de Ind. otra del año siguiente. Interesante también una Instrucción de 3 julio 1573 sobre materias de Hacienda, que se dió con motivo de una visita a las Cajas de Potosí y La Paz (vid., en ESCALONA, "Casophilacium...", Apend. 2 y BALLESTEROS "Ord. Perú", 96).
- (72). Citaremos las remitidas a la Española en 1527 (Patronato, 120) que en líneas generales se hace extensiva a distintas regiones (a Oficiales de San Juan de Puerto Rico, 29 Agosto 1538, en "Col. docs. ineds. Ult.", IX, 355; Venezuela, 12 febrero 1531, en "Orígenes de la Hacienda en Venezuela", Intr. VII y ss.; Nueva Galicia, también de 12 febrero 1531, en "Cod. Puga", ed. 1884, I, 338; Castilla del Oro, 4 abril 1531, en "Col. docs. ineds. Ult.", X, 73); Las instrucciones que dió el Virrey Velasco en agosto 1552 a los Oficiales Reales de Nueva España (reproducida también en "Col. docs. ineds. Ult.", V, 120); para los Oficiales Reales de Cartagena; Copulata

tiembre 1572 (Contaduría, 1382, I, r. 9); las Ordenanzas generales de 3 julio 1573, para la Caja de Lima (en ESCA-LENA: "Gasophilactia...", Apéndice I y BALLESTEROS, "Ord. Perú", 88) y las dadas para la misma caja en 1575 (Bibl. Nac. Madrid, ms. 1172, nº 7); las del Virrey Toledo a los Oficiales de Huamanga, Cuzco, Lima y Potosí (vid. nota 173); las del Virrey Martín Enriquez a los de Lima en 1582, (AGI., Patronato, 190, 34). Vid. también las citadas en la nota 42.

- (73). Sobre su vida anterior y genealogía, pueden verse las primeras páginas del libro de SUAREZ DE FIGUEROA, "Hechos de D. García Hurtado de Mendoza, cuarto Marqués de Cañete", Madrid, 1613. Recibe sendas instrucciones para caso de guerra o de paz (publicadas en LEVILLIER, "Gob. Perú", II, 432 y 437) y después de peticiones insistentes para que se le den las mismas facultades de Casa para hacer nuevos descubrimientos (carta 30 enero 1555, LEVILLIER, op. cit., I). Estas le son también concedidas, (vid. carta Rey a Princesa, 27 diciembre 1555 en LEVILLIER, p. cit. II, 429).
- (74). En LEVILLIER, "Gob. del Perú", I, p. 270.
- (75). "No piense remediar este reino - le dice al Rey - con medicinas blandas ni con perdones como las veces pasadas... castigue con castigo ejemplar" y en otro lugar "si me pudiera disfrazar que sin guerra les costara las cabezas, que es lo que conviene y si no puede ser que sea con ella, porque hacerles merced como ellos quieren y como vieron que lo hizo el Obispo de Palencia con Hinojosa y con otros por aquellos términos ser no tener Nuestro Señor ni V.M. este reino y así estoy en gran cuidado y aderezándome de guerras con color de fiestas".
- (76). Carta del Factor Román al Rey, Los Reyes, 23 diciembre 1557 (AGI.: Lima; 120, publicada por LEVILLIER, "Gob. Perú", II, 484), testimonio confirmado por otra anterior del Contador de Cuentas Pedro Rodríguez Portocarrero, de fecha 12 febrero 1557 (id., p. 456).
- (77). Vid., carta de Rodríguez Portocarrero, citada en nota anterior.
- (78). "Cierta este Reino es del temple y riqueza, que a V.M. tengo escrito y hay razón para tener cuenta con él e que sus cosas vayan adelante y se perpetúen (carta de 3 nov. 1556, en LEVILLIER, "Gob. Perú", I, 292); "es rico y del mejor temple del mundo" (carta 10 noviembre, en id., 306); "según lo que se entiende, esta tierra parece que andando el tiempo será este uno de los principales Reinos y más provechosos de cuantos V.M. tiene" (carta 28 enero 1560, en id., 351).
- (79). "Los oidores -escribe el 3 noviembre 1556- son los que menos saben si están en el cielo o en la tierra; no entienden sino en las cosas de justicia y en ver sus pleitos y sentenciarlos y en algunas cosas que yo les cometo

tecantes a la gobernación; les hice información secreta de lo que me pidieron... no les ha salido el miedo del cuerpo.... les firmo y autorizo porque conviene así" (LEVILLIER, "Gob. Perú", I, 300).

(80). Carta 3 noviembre 1556, citada nota anterior.

(81). Aparte de la Compañía de gentilhombres y guardia de arcabuces, diez escuderos hacían constantemente guardia delante de su Cámara y otros doce alabarderos en la Sala. (Carta del Marqués al Rey) 15 septiembre 1556, en LEVILLIER, "Gob. Perú", I, 270 ss.)

(82). Según cuenta Rodríguez Portocarrero nombró Oficiales hijos en Trujillo, Piura, Quito, Arequipa, La Paz y Cuzco, cuyas Cajas habían sido hasta entonces administradas por vecinos nombrados por el Cabildo, asignándoles un salario de 200 a 300 pesos; a los de Potosí, les subió el salario de 2000 a 3000 pesos, con lo que quedaron igualados a los Oidores (carta 1^a noviembre 1557 citada en LEVILLIER "Gob. Perú", II, 456 ss.)

(83). Carta citada de 23 diciembre 1557, en LEVILLIER, "Gob. Perú", II, 484 ss. Parte de los datos que recogemos en el texto proceden de la Correspondencia del Virrey recogida en la citada colección de LEVILLIER, tomos I y II, y de la Real Cédula al Conde Nieva de 15 marzo 1559, señalando los abusos del Marqués de Cañete y ordenando su revocación (vid. texto en Apéndice V).

(84). Vid. en LEVILLIER, "Gob. Perú", I, 299.

(85). La carta, de 10 noviembre 1556, (LEVILLIER, "Gob. Perú", I, 303), tanto por lo el contexto como por el tratamiento empleado --"vuestra merced" en lugar de "vuestra majestad" no puede ir dirigida al Monarca, aunque así conste en el título colando por los editores. Probablemente sea a uno de los Secretarios o algún personaje influyente de la Corte.

(86). Estas Ordenanzas fueron encontradas por el Archivero ESPEJO DE HINOJOSA, en el Archive de Simancas (Diversos Castilla, L.46, f.34) y dadas a conocer en extracto en uno de los breves artículos de divulgación histórica-financiera que publicó en el "Bol. de la Soc. Cast. de Excursiones", tomo III, Valladolid, 1907-8, pgs. 101-3, con el título "La creación del Consejo de Hacienda en el Perú y la intervención de la Contaduría Mayor en los asuntos de Indias".- Por su interés, hemos creído conveniente incorporarlas como uno de los apéndices a este trabajo. (Nos complace dar aquí las gracias por la bondad que tuvo en remitirnos su texto a D. Alfonso Corral, de la Facultad de Historia de la Universidad de Valladolid).

(87). En carta del Rey desde Panamá, fecha de 16 de Marzo de 1556, cuenta el Virrey que ha encontrado al Doctor Cuenca, Oidor de Lima, con gran necesidad y le ha socorrido con 1000 pesos (LEVILLIER, "Gob. Perú", I, 264). Una vez

llegado a Lima, lo puso en la Audiencia, sirviéndose de él para el gobierno del Virreinato. El 15 de septiembre escribe el Marqués que "es recién venido y bien intencionado y trabajador y creo que tiene letras y con la experiencia tengo que será un buen juez" (id., 270). No dice desde luego que hace un mes y medio que interviene en el Consejo de Hacienda.

- (88). Pedro de Avendaño tenía una gran experiencia en cosas de Hacienda. El Gobernador Gasea alababa en carta de 15 noviembre 1541 su intervención en las Juntas de Hacienda que había ordenado celebrar "en las cuales -dice- no ha sido de gran ayuda, así por la claridad que me ha dado como por la que con su trabajo y habilidad ha hecho y hace en ver todas las escrituras de tiempo de los gobernadores pasados" (LEVILLIER, "Gobs. Perú", I, p. 184) y unos años después, el 17 de Julio de 1549, escribe que ante "Avendaño han pasado y pasan las más cosas de la Hacienda y es la persona de quien en ellas me ayudo al presente" (LEVILLIER, id., p. 194). Su conducta, sin embargo, no parece haber sido muy limpia: según Rodríguez Portocarrero, cuando fue Contador de la Caja de Lima fue procesado por no cargar las partidas al Tesorero Riquelme, estando por ver en el Consejo de Indias el auto criminal (carta al Rey, 15 febrero 1557, en LEVILLIER, id., II, 475) y el mismo Marqués de Gasea en su primera carta desde Lima el 15 septiembre de 1554 cuenta que siendo aquel Escribano de Nueva Toledo solía arrendar las escribanías de Gobernación del distrito, obteniendo con ello una ganancia de 3500 pesos; el Marqués lo había prohibido "por ser grandísimo cargo de conciencia de V.M." ya que estos Tenientes robaban lo que podían para resarcirse; pero dado que Avendaño había pagado 8000 pesos por la Escribanía y tenía facultad para poner tenientes, ha ordenado en compensación se le dé un repartimiento que le dé otro tanto. "Es mucha su habilidad y experiencia de esta tierra, -escribe- aunque su conciencia y sénto yo no estoy bien satisfecho". (LEVILLIER, id. I, 277).

- (89). Según el Factor Romani, en carta 23 diciembre 1557 (LEVILLIER, id. II, 484).- Los Oficiales anteriores fueron presos "por un suceso muy liviano"; Romani fue reintegrado en su cargo, pagándose desde entonces dos sueldos de Factor al mismo tiempo.

- (90). Rodríguez Portocarrero fue comisionado el 3 agosto 1555 por el Consejo de Indias para tomar cuentas a los Oficiales Reales de Nueva Castilla y Nueva Toledo en un periodo de cinco años (Exposición de motivos al título de Contador de Cuentas Fernando de Sierralta, fecha 17 diciembre 1577, que publicamos como Apéndice VII a este trabajo). Dado lo enmarañadas que estaban, tuvo necesidad de pedir continuas prórogas que le fueron siendo concedidas (1 febrero 1558, 27 enero 1559, 19 mayo 1560, en AGI., Lima, I, f. 29 v. y 441). Estuvo en el Perú hasta mediados de 1562, por lo que tuvo un papel importante en los sucesos que estudiamos.

- (91). Sin especificar la causa verdadera que es la creación del Consejo de Hacienda, escribe el 8 de Diciembre de 1557 el Marqués, a propósito de la Visita a los Oficiales de Potosí, que "sienten ellos y los demás que yo les tome cuenta tan estrecha porque dicen que son propietarios de sus oficios y que si no es por especial comisión y mandato de V.M. no lo suelen hacer los Virreyes y hay de esto opinión los Oidores; y yo he entendido que de todo el más pecador que hubiere en este reino tendría la culpa si no lo remediase; V.M. mande lo que fuere ser vido" (LEVILLIER, id., I, 316). Para contentarlos, aumenta el sueldo a los de Potosí de 2000 a 3000 pesos; al dar cuenta de esta medida en carta de 28 febrero 1558, dice complacido que en su opinión "usan ahora sus oficios fiel y diligentemente y con la mejor orden que puede ser" (LEVILLIER, id., 324). No opina lo mismo de los de Lima, pues en su carta de 24 octubre 1559 vuelve a quejarse de ellos, que están disgustados, dice, "porque no les consentía usar de sus oficios como querían, sino como convenía" (LEVILLIER, id., 334).
- (92). El Factor Romaní era un fiel servidor del Rey que desde hacía mucho tiempo había desempeñado cargos de confianza en materias fiscales (Veedor General del Ejército en Alemania y Contador de Cuentas, con Juan Manrique de Lara, Rodrigo de Mendoza y Francisco de Erazo; Veedor de la Junta contra Langrave y Secretario del Rey de Bohemia). Nombrado Contino de la Casa Real el 1º mayo 1544, pasó a Indias con el cargo de Factor de la Caja de Lima, tomando parte activa como corregidor de la ciudad (fue nombrado por la Audiencia en 23 Enero 1553) contra las revueltas de Francisco Hernandez Girón y en el castigo de Francisco de Silva. La importancia de su actuación fue extraordinaria en los sucesos del Marqués de Cañete y Conde de Nieva; sus informes, muy numerosos, eran muy apreciados en la Corte, especialmente a partir de agosto del 59, en que es nombrado Secretario del Consejo su antiguo compañero de viajes Francisco de Erazo, (nombramiento de 24 agosto, sustituyendo a Samane, Indif. Gral. 425, I, f. 428). - Vid. la información hecha por la Audiencia de Lima, acompañando a un Memorial de Romaní del año 1561, en AGI., Lima, 120.
- (93). El choque surgió cuando Romaní le hizo constar la necesidad de poder especial en cada caso para dar libranzas sobre la Real Hacienda, pidiéndole le enseñara su instrucción, cosa que no hace (en ella se le daba poder para gastar lo necesario en caso de guerra "con parecer y acuerdo de los Oidores de la Audiencia o dos de ella y juntamente con los Oficiales Reales de aquella provincia": vid. Instr., de fecha 10 marzo 1555, en LEVILLIER, "Goba. Perú", II, 432 ss.). Después de tenerle encarcelado y suspendido del ejercicio de su cargo de Factor durante 48 días, le dejó en paz no sin decir que "le haría sudar como gato de algalia" (Carta de Romaní de 23 diciembre 1577, en LEVILLIER, id., II, 484, ss.).
- (94). En febrero 1557 escriben secretamente sendos informes Rodríguez Portocarrero y Romaní y este último vuelve a

hacerlo repetidas veces (LEVILLIER, id., II, pgs. 449, 454 y 484). Es curioso señalar que en la carta del primero de ellos de 12 febrero 1557, a pesar de la minuciosidad con que va describiendo la actuación del Marqués de Cañete, no hace la menor alusión al Consejo de Hacienda, probablemente por su anterior inclusión el mismo.

(95). Carta de 8 diciembre 1557, en LEVILLIER, id., I, 314.

(96). El 15 de Marzo de 1559 se dieron dos Instrucciones (una de ellas secreta) para la cuestión de la perpetuidad; están todavía en blanco los nombres del Virrey y Comisarios (AGI., Lima, 568, tomo I, fs. 194 a 204); el 17 de junio de dicho año se nombra Comisarios al Licenciado Gaspar de Saraya, Alcalde de Corte, al Licenciado Villagómez, antiguo Oidor de la Chancillería de Valladolid y a la sazón Consejero de Indias y a Diego de Vargas Carvajal, al parecer Capitan General de la provincia de Guipuzcoa y alcalde de la villa de Fuenterabía (RC. 19 diciembre 1559, en AGI. Ind. Gral., 425, I, 442); pero el pase de Villagómez al Consejo de Castilla a principios de julio (el 20 de junio aun se le cita como Comisario) y el nombramiento de Jarava para sustituirle en su puesto de Consejero de Indias (nombramiento 26 julio 1559 en AGI., Ind. Gral., leg. 425, I, 413 va), obliga a sustituir a los dos Comisarios por otros. Se elige por fin a Briviesca de Muñatones, del Consejo de Cámara y Estado, para acompañar a Diego de Vargas; el 7 de Agosto se le comunica a éste la decisión y el 18 del mismo mes se da una instrucción conjunta a ambos y al Conde de Nieva como futuro Virrey. (AGI., Lima, leg. 568, I, f. 292). Con ellos irá de secretario Domingo de Camarra, encargado de los bienes de difuntos de la Casa de Contratación de Sevilla (RC. 28 febrero 1558, en Ind. Gral., 425, I, f. 318 va). Más tarde se les unió como Comisario Ortega de Melgosa, Contador de la Casa de Contratación de Sevilla.

(97). El 16 de Octubre se da orden a Briviesca de Muñatones de que sin esperar al Conde de Nieva que ha caído enfermo, se haga a la vela rápidamente hacia el Perú, (Lima, 568, I, f. 364 va) y con la misma fecha se expide una cédula a los Oficiales de la Casa de Contratación de Sevilla en que un poco agriamente muestra su sorpresa por la noticia de que hasta enero no estarían listas para zarpar las naves (AGI., Contratación, 5011, n.º 3). - De la impaciencia del Rey da buena muestra el tono de disculpa de todas las cartas del Conde de Nieva, alegando que no ha sido a su cargo la dilación (carta Sanlúcar, 13 enero 1560, en LEVILLIER, "Gob. Perú", I, 344 y otra desde Nombre de Dios, 22 mayo 1560, en id., 357).

(98). En LEVILLIER, id., I, 369.

(99). La RC es de fecha 15 marzo 1559, los que indica la disconformidad real en la conducta del Marqués de

Cañete desde el primer momento. Este interesante documento que resume las arbitrariedades cometidas lo publicamos como Apéndice y de este trabajo, según la copia oficial que existe en AGI., Patronato, 188, n.º 24.

- (100). El 15 de Junio se había despachado una R.C. para que la Audiencia tomara residencia a los Jueces y Oficiales Reales provistos por el Marqués de Cañete (en "Col. Torres Mendoza", XIX, 42). El 18 de agosto se le da comisión e instrucciones a Briviesca de Muñatones para residenciar a los Oidores de la Audiencia de Lima (AGI., Lima, 568, I, 289 y 292 vº) y poco después, el 29, se le despacha otra cédula, facultándole para acabar la visita al Marqués de Cañete en el caso de que el Conde de Nieva muriese (AGI., Lima, 568, I, f. 322).
- (101). RC. 5 marzo 1559, en AGI., Lima, 568, I, f. 190.
- (102). Las únicas referencias que poseemos relacionadas con el Consejo de Hacienda, proceden de la carta del Factor Román de 23 diciembre 1557, en LEVILLIER, "Gobs. Perú", II, 486. Según dice Román en la carta citada "desfizó el Consejo de Hacienda diciendo que no servía de otra cosa sino de oír peticiones de personas que pretendían que S.M. les debía dineros".
- (103). Por ejemplo escribía al Cabildo de la Plata, poniéndole "magníficos señores" en el margen. Martín de Robles que estaba presente dijo: "Mal criado me parece que viene este visorrey; será bien que yo baje allá a ponerle en crianza como a los otros" (carta de Cañete al Rey, 3 noviembre 1556, en LEVILLIER, id., I, 292).
- (104). Carta del Marqués al Rey, 8 diciembre 1557, en LEVILLIER, id., I, 315 y otra de 28 febrero 1558, en id., I, 319.
- (105). Carta del Marqués al Rey 24 octubre 1559, en LEVILLIER, id., I, 334.
- (106). Cartas del Marqués de 8 abril, 24 octubre y 5 y 7 diciembre de 1559, y 28 enero y 28 octubre 1560 en LEVILLIER, id., pgs. 329, 332, 339, 342, 347 y 370.
- (107). La notificación del cumplimiento de la cédula revocadora es de fecha 20 marzo 1561 y su texto es recogido en nuestro Apéndice V. (AGI., Patronato, 188, 24). Con ello quedan disipadas las dudas que ESPEJO DE HINOJOSA se formulaba al dar a conocer las Ordenanzas de 12 agosto 1556, sobre la extinción del Consejo de Hacienda del Perú, creado por el Marqués de Cañete y la razón de que no se encontrase rastro de él en la Recopilación de Indias (vid. su citado artículo en "Bol. de la Soc. Exe.", Valladolid, t. III, 1907-8, p. 103).

- (108). El Factor Romaní hemos entendido ha servido a V.M. bien con toda diligencia y cuidado como debe" escriben Nieva y los comisarios el 28 abril 1561 (LEVILLIER, id., I, 384). El Doctor Cuenca actuó de asesor en el alcance que se le hizo al Marqués de Cañete (carta de Nieva al Rey, 26 abril 1561, en LEVILLIER, id., I, 381); Pedro de Avendaño, nombrado Secretario de la Audiencia, dió con el Factor Romaní una Memoria a los Comisarios cuando estos regresaron a España, en la que se exponía la mejor manera para que las renta reales fueran acrecentadas (carta de Romaní al Rey, 20 noviembre 1563, en AGI, Lima, 120).
- (109). Merece especial mención el estudio que de ello hace el Sr. ERNST SCHAEFER en el capítulo sobre la concesión de la perpetuidad, incluido en su reciente obra "El Real y Supremo Consejo de las Indias", Tomo II, (Publicaciones de la Esc. de Est. Hispano-Americanas), Sevilla, 1946.
- (110). Vid. SOLORZANO, "Política Indiana", L. VI, Cap. XV, ns. 4 y 5 y ESCALONA, "Gazophilacium...", L. I., C.I., también hay referencias explícitas en la "Relación de Gobierno del Virrey Príncipe de Esquilache" (en Beltrán y Rápido, I, p. 271) y en la Correspondencia del Virrey Nieva y Comisarios publicada por LEVILLIER en sus "Gobs. Perú", tomos I y II.
- (111). Vid. la interesante nota en la pag. 108 de su obra sobre El Consejo de Indias, tomo I.- No cabe duda que la concesión al Consejo de Indias del control de las cuantiosas rentas procedentes de Indias no era muy del agrado del Consejo de Hacienda, siempre apurado de fondos y celoso de su supremacía en estas cuestiones.
- (112). AGI., Contratación, 5784, L. I, f. 104, cit. por SCHAEFER a quien seguimos en buena parte en el desarrollo de estas gestiones en su citada obra "El Real y Supremo Consejo de las Indias", t. I, p. 103.
- (113). Simancas, quitaciones, leg.9, cit. por SCHAEFER, id., I, 103.
- (114). La Instrucción de fecha 23 Junio 1557, en AGI., Contratación, 5284, L.I., f.107, según SCHAEFER, id., I, 104.
- (115). Cit. por SCHAEFER, id. 105.
- (116). Este importante documento, no conocido por SCHAEFER, fué encontrado por ESPEJO DE HINOJOSA en Simancas y dado a conocer en extracto en su artículo citado en nota 86.- Su texto completo constituye el Apéndice VI de nuestro trabajo.

- (117). Así se desprende de una frase de una carta de Nieva y los Comisarios, fecha 28 abril 1561 (LEVILLIER, "Obs. Perú", I, 383).
- (118). Ortega de Melgosa era Contador de la Casa de Contratación sevillana desde el 22 de Noviembre de 1556; el 7 y 16 Octubre y el 22 noviembre 1559 se despachaban de oficio distintas cédulas, eximiéndole del pago del almojarifazgo y dándose licencia para llevar criados, armas y esclavos (AGI., Lima, 568, I, fs. 365-6 e Ind. Gral., 425, I, 431 v^a); poco después el 30 de diciembre 1559, dejaba poderes a Gabriel de Santagadea, para que desempeñara interinamente el cargo de Contador de la Casa de Contratación, (AGI., Contratación, 5011, 3) hasta tanto el Rey provea el oficio.- En todos estos documentos sólo se hace constar "va juntamente con el Virrey y otras personas a entender en el asunto y perpetuidad de las provincias del Perú".
- (119). "Estando las cosas en este estado -escribe SOLORZANO-, parece que se tomó resolución de incorporar la Real Hacienda de las Indias con la de Castilla y que la administración, cuenta y razón de ella, fuese a cargo del Consejo de Hacienda para juzgar que esta materia y ocupación son más propias de los ministros de ella, que de los consejeros de Indias", y en 9 de octubre de 1559, se despachó provisión y comisión en forma a Ortega de Melgosa, que era Contador de la Casa de Contratación de Sevilla, para que administrase las de la provincia del Perú juntamente con Hernando de Ochoa, que lo era de la Contaduría de Hacienda, y que se correspondiesen con el Consejo de ella, en lo que a esto tocase; pero por haber pasado al Perú el Hernando de Ochoa, se ejecutó esta orden por el Conde de Nieva que era Virrey de él, y los que se llamaron Comisarios; intervinendo Ortega de Melgosa..." ("pol. Ind.", L. VI, c. XV, n^o 4). El texto del Príncipe de Esquilache coincide en líneas generales con el de SOLORZANO (vid. en BELTRAN Y ROZPIDE, I, p. 271) Ochoa de Lugando era Oficial Mayor de Sámamo; probablemente la causa de su permanencia en la Metrópoli fué su nombramiento de secretario interino del Consejo de Indias el 4 de diciembre de 1558, cargo que ocupa como titular a partir de 3 febrero 1570 (vid. Apéndices del tomo I de la obra de SCHAEFER sobre el Consejo de Indias, p. 369). Confirma el nombramiento inicial de Hernando de Ochoa el hecho de que en el AGI. (Lima, 568, L. I, f. 377) aparezca una RC. a los Oficiales de Castilla del Oro para que se le den, al igual que a Melgosa, 4.000 ducados, a cuenta de las 12.000 que ha de tener de salario.
- (120). No hemos podido encontrar entre los papeles del Consejo de Indias, existentes en el AGI.; el texto completo de esta interesante Instrucción, que por estar despachada por la Contaduría Mayor debe estar registrada en los libros existentes en Siman-

cas. Además de los testimonios citados en la nota anterior, son constantes las referencias al mismo en la correspondencia de los Comisarios y en especial, de Melgosa; incluso anuncia en carta de 25 abril 1562, que envía un traslado de ella acompañada de su opinión sobre cada uno de los capítulos en ella incluida, (vid. en LEVILLIER, "Gobs. Perú", I, 384, 392; II, 529, 551, 553). ESCALONA AGUERO reproduce en su "Gazophilacium...", L.I.c.1, un fragmento del poder que la acompaña: "Para que el tiempo que por nuestro mandato y comisión y en las dichas provincias estuviereis, tengáis el cargo y administración de nuestro patrimonio y hacienda, así ordinaria como extraordinaria, y tengáis en ello el poder y facultad, así respecto de los nuestros Oficiales, como de las otras personas, que tienen nuestros Contadores Mayores...".- A pesar de que por una referencia en una carta del Presidente del Consejo, SCHAEFER apunta la posibilidad de que también en Indias pasó al Consejo de Hacienda el cuidado del Fisco (vid., ob.cit. I, 109, nota 3), el desconocimiento de la Instrucción de 9 de Octubre y por tanto de la misión de Melgosa le hace incurrir en algunos errores de interpretación en los sucesos posteriores, como tendremos ocasión de señalar.

- (121). Ortega de Melgosa resume así en carta de 28 abril 1561 la misión que se le ha confiado: "V.M. manda por su instrucción que lo que toca a su hacienda real de estas provincias se trate y administre por los Contadores Mayores de Castilla y que para ello será necesario dar orden en los negocios de la hacienda y qué forma se tendrá y cuáles se harán y tratarán acá por los Oficiales y cuáles se han de reservar y ocurrir a los Contadores Mayores y la correspondencia y recurso que en la Hacienda y en todo lo a ella concerniente se ha de tener con los Contadores Mayores y qué libros y oficiales convenirá que haya allá y que jurisdicción y facultad tendrán acá en que hubiesen de gobernar..." (LEVILLIER, "Gobs. Perú", II, 529).- De las cartas de Nieva y los Comisarios, de fecha 26 abril 1561 y 4 mayo 1562 se deduce que llevaba también orden de tomar cuentas a los Oficiales Reales y demás personas que tuviesen alguna función fiscal; deberá informar sobre la posibilidad de obtener nuevos ingresos en el almojarifazgo y venta de oficios y opinar si creía factible la implantación de la alcabala u otro arbitrio, con el fin de obtener más fondos. Se les dió facultad al Virrey y Comisarios para crear escribanías de número y un alferazgo mayor en todas las villas de españoles residentes en el Perú y además la autorización para cobrar un tanto "la mayor cantidad que se pueda" a cambio de la merced real de permitir a los hijos naturales la sucesión en las encomiendas de su padre, en el caso de que no hubiera hijos legítimos (memorial, publicado sin fecha, en "Col. Torres Mendoza, XVIII, 21-23). De que esta misión de obtener el mayor nú-

mero de dinero tenía gran importancia en el viaje de los comisarios, da buena idea una frase de la Carta-informe que escriben el 4 mayo 1562: "y porque para el primer capítulo de la Instrucción que V.M. nos dió orden por justas consideraciones que porque no pareciese que solamente veníamos a imponer derechos e imposiciones y adquirir hacienda real a V.M., nos dió orden entendíáramos en algunas cosas que hemos ordenado y proveído concerniente á la buena gobernación.." (LEVILLIER, "Gobs. Perú", I, 463).

(122). Consulta al Rey de 12 marzo 1558, en AGI, Ind. Gral. 738 (SCHAFER, ob. cit.; I, 109).

(123). Dejando aparte los poderes comunes que llevan Nieva y los Comisarios en la implantación de algunos recursos para obtener fondos para la Corona (vid. nota 121, "in fine"), siempre reconocen la especial comisión de Melgosa. Así, p. ej., escriben el 28 abril 1561: "el Contador O. de Melgosa, entre otras cosas de su poder y comisión por Contaduría o por Consejo de Hacienda, se le manda tome las cuentas a los Oficiales Reales y a otras personas..." y más explícitamente comunica aún Nieva el 30 abril 1562: "de las cosas tocantes a la Real Hacienda no trato porque el Contador O. de Melgosa dará razón de todo ello como persona a quien está encargada", (LEVILLIER, "Gobs. Perú", I, 384 y 392).

(124). Es interesante señalar esta limitación de poderes, porque servirá para juzgar hasta qué punto hubo extralimitaciones en la conducta de Ortega de Melgosa. Aun cuando no puedan señalarse aquellas con toda exactitud por el desconocimiento del texto completo de la Instrucción de 9 de Octubre de 1559, del fragmento del poder reproducido por ESCALONA y del texto de la Cédula de Gante, traspasando al Consejo de Hacienda la dirección de la Hacienda indiana, se deducen las limitaciones señaladas en el texto. Para corroborar esta opinión la frase de Melgosa, reproducida en la nota 121, en que parece resaltar el papel fundamentalmente informativo de su comisión, y otra del de Nieva, de la que parece deducirse que también alcanzaba la restricción en la decisión a la cuestión de la perpetuidad: "Lo que toca a la perpetuidad y diezmos y alcabalas y almojarifazgos se ha tratado por mí y por los comisarios con todo cuidado y diligencia posible y porque S.M. por las instrucciones que trajimos nos manda que no resolvamos ningún negocio de éstos sin enviallo primero a comunicar con su Real persona lo cumplimos así y le enviamos los términos en que quedan estos negocios juntamente con nuestro parecer..." (30 abril 1562, en LEVILLIER, "Gobs. Perú", I, 392).

- (125). Cartá desde Nombre de Dios, de fecha 18 mayo 1560, cuyo texto seguimos para esta parte de nuestra relación (Vid., en LEVILLIER, "Gobs. Perú", II, 507).
- (126). Desde Panamá escribió tres cartas; las dos primeras, de 26 junio y 5 julio 1560, publicadas en LEVILLIER, id., II, 519 y 525; la otra, de 22 agosto, citada en carta posterior fechada en la Ciudad de los Reyes, 25 abril 1561 (en LEVILLIER, id., II, 548).
- (127). Carta de Ortega de Melgosa, de 10 junio 1562, en LEVILLIER, id., II, 570.
- (128). Carta al Rey de 28 abril 1561, en LEVILLIER, id. I, 383.
- (129). Conviene resaltar esta opinión de Ortega de Melgosa sobre el sistema administrativo del Fisco indiano en el siglo XVI, por su gran importancia para nuestro trabajo, ya que es el juicio de un contemporáneo perito en estas cuestiones de Hacienda y cuyo testimonio no podía pecar de interesado en ningún momento, según él explica, la Hacienda indiana se compone desde el punto de vista del objeto, de una serie de ingresos; los Oficiales Reales llevan cuenta de cada uno de ellos por sí y en este punto no encuentra nada que justifique una reforma; respecto a los oficios, no ve que haya necesidad de aumentar su número, a no ser un asesor que se letrado, para los pleitos fiscales. Da cuenta de haber ordenado a todos los Oficiales que le sean remitidas relaciones de ingresos y gastos ordinarios, de las cuales piensa remitir copia a los Contadores Mayores, para que los asienten en sus libros. (Carta de 28 abril 1561, en LEVILLIER, id., II, 530).
- (130). Los Oidores nombrados para la nueva Audiencia de Charcas escriben el 8 abril 1561, que no han ido todavía a su distrito porque como el Virrey y los Comisarios han entendido y entienden en negocios tocantes a la Hacienda y el Lic. Mufia-torres en esto y en los de la visita, no se ha podido aún señalar el distrito de aquella Audiencia (LEVILLIER, id. I, 374).
- (131). Una parte puede ser dada en perpetuidad a los encomendados; otra, debe ponerse en la Corona Real, a medida que vaya vacando y esta no se puede encomendar; una última parte podrá encomendarse cuando vacare, pero sólo por una vida.- La misma solución se apunta en otra carta de Ortega de Melgosa al Secretario Eraso, de fecha 10 junio 1562 (LEVILLIER, id., II, 569).- Puede ver-

se el estudio detallado de esta cuestión en SCHAEFER, "El Real y Supremo Consejo de las Indias", tomo II, Sevilla, 1946.

(132) Vid. texto en LEVILLIER, "Gobs. Perú", II, 395 ss.

(133). En carta de 30 abril 1562 dirigida probablemente al Presidente del Consejo de Indias escribe con cierta ironía: "Tan bien solicitador seré yo como Ortega de Melgosa, aunque no aconsejaré a vuestra merced que ponga en mi poder sus dineros, pues en tal mal cobro he puesto yo los míos, y sabiendo esto S.M. no quiso que yo solo pudiese tener mano en su Hacienda Real" (LEVILLIER, id., I, 394). - Por su parte, Ortega de Melgosa se queja de la actitud de aquél: "Aunque por los poderes que yo truje -escribe el 25 de abril de 1562- parece que lo que toca al gobierno y administración de la Real Hacienda lo había yo de proveer, dice el señor Conde que no, sino él" (LEVILLIER, id., II, 551); después de quejarse en otra carta de las arbitrariedades del Virrey, dice que él ha querido poner remedio, pero el Conde le pone obstáculos, haciendo sólo lo que a él le parece; señala una contradicción entre los despachos que lleva del Consejo de Hacienda y los del Consejo de Indias y recomienda que los Virreyes sean de gran entendimiento y conciencia, pues de lo contrario hacen lo que mejor les parece: "como se ven acá, -dice-, quieren ser Reyes" (Carta de 10 junio 1562, en LEVILLIER, id., II, 571). También en una carta secreta de los Comisarios, tachando a Nieva de remiso en los negocios y codicioso sin límite, se señala: "Comoquiera que podamos hacer nosotros solo como V.M. lo manda, lo siente en tanto grado como se le de pusieramos de su gobierno", (Carta de 28 abril 1561, en LEVILLIER, id., II, 540; Lima, 120).

(134). El 30 abril 1562 comunica al Presidente del Consejo de Indias, que aunque se le había ordenado suprimir los repartimientos hechos por su antecesor y deshiciera la compañía de gentileshombres, no lo había hecho para evitar algún escándalo y con el temor de alguna sublevación (LEVILLIER, id., 389). En cuanto a los situados, no bastándole los ingresos procedentes de otras fuentes, empezó a disponer de los "quintos reales", fondos que hasta entonces se habían considerado intangibles y que siempre se habían enviado a España. - Así lo hacen constar Ortega de Melgosa y el Licenciado Castro en cartas de fecha 10 junio 1562 y 31 diciembre 1565 respectivamente (LEVILLIER, id., II, 520 y III, 114). También se entremetió a quitar y a poner administradores de rentas reales (Carta de Melgosa, 25 abril 1562 (LEVILLIER, id., II, 551)).

(135). La creación de este Consejo es consignada por SOLORZANO en el breve pero importante párrafo que

dedica a la intervención del Consejo de Hacienda: "... haciendo una sala, un dosel y armas reales, a quienes llamaban "Consejo de Cámara y Estado para el asiento y quietud de las provincias del Perú y beneficio de la Real Hacienda", y despachando con el selló y registro de la Real Audiencia" ("Pol. Ind.", L. VI, c. IV; n.º 4). Ya hemos visto que el Contador Ortega de Melgosa había solicitado en abril de 1561 de le diese gran solemnidad y autoridad a sus decisiones; sin esperar la contestación, se procedió a crear este Consejo de cuya actuación, da también testimonio el Virrey Nieva en carta de 26 diciembre 1562, al preguntar si puede continuar despachado las provisiones con la misma solemnidad que lo habían hecho los Comisarios; es decir, encabezándolas con el nombre del Rey Felipe y señalándolas con el real sello (LEVILLIER, "Obs. Perú", I, 503).

(136). La relación que de estos situados hace el Secretario Cámara es extensísima (vid. en LEVILLIER, id., II.).- Al igual que el Marqués de Cañete y el Conde de Nieva hicieron también nuevas concesiones de repartimientos a particulares, frente a la actitud mantenida por el Consejo de Indias de tener el mayor número posible de ellos en la Corona Real (vid. carta del Lic. Castro, fecha 31 diciembre 1565, en LEVILLIER, id., III, 114). El Rey les censuraba también en RC., de 13 de Febrero 1562 su actuación en la tasa del tributo, en lo cual solo se les había señalado una runción informativa; más tarde, en agosto de 1563, mandaba al Lic. Castro que fuera revocada la disposición dada por aquéllos para que se dieran las minas del oro al diezmo (vid. en "Copulata", V, 229).

(137). En las quejas posteriores del Conde de Nieva al Rey respecto a la actuación de las Audiencias de Lima y Charcas, señala que sobre todo esta última "se atravesó contra los Comisarios" (carta 26 diciembre 1562, en LEVILLIER, id., I, 503).- También parece que el Factor Romaní se mostró ahora muy activo: en 1561 había solicitado que se le jubilara a causa de su avanzada edad y se le diera el cargo de Factor a su hijo Nuño. No se le admitió, por lo que continuó durante algunos años más. Sus cartas informativas son especialmente interesantes en el año 1563 (AGI., Lima, 120).

(138). Conocemos algunos detalles de la actuación de Ortega de Melgosa en el Perú; mientras espera respuesta de España, aclarando quien ha de hacer la toma de cuentas -él o el Contador Rodríguez Portocarrero que estaba comisionado para ello desde hacía varios años-, da orden para que todos los Oficiales Reales le remitan a la mayor bre-

vedad posible una relación de los ingresos y gastos de sus Cajas; toma cuenta a los maestros de los galeones del Mar del Sur; destituye a los Oficiales Reales puestos por el Marqués de Caffete en las Cajas del interior, nombrando en su lugar a otros con un salario menor (120.000 pesos); quita al Contador de Lima, un criado del Marqués, y desempeña personalmente el cargo; visita la Caja de Trujillo y toma un tanteo de cuentas a los Oficiales de Piura; envía un delegado a dicha Caja para arreglar la mina y da orden de pagar el diezmo en las minas de oro; redacta unas Instrucciones para los Oficiales de Huamanga (insertas en la Ordenanza del Virrey Toledo; a los Oficiales del Cuzco, (LEVILLIER, id., VIII, 2-3) (Carta de Melgosa, de fecha 28 abril 1561, 31 mayo y 10 junio 1562, en LEVILLIER, id., II, 526, 543 y 569). Según esta última carta, los Comisarios tienen también orden de poblar algunas villas; un manuscrito utilizado por JUSTO ZARAGOZA señala que consiguieron del Conde de Nieva diera autorización a la villa del Potosí para constituirse en Municipalidad, con cabildo y regimiento independiente, a cambio de 112.000 pesos para la Real Hacienda (cit. por BELTRAN Y ROZPIDE, I, 95-96).

- (139). Carta a Ensa, de fecha 25 abril 1562 (LEVILLIER, id., II, 549). En la carta posterior que le remite, señala siempre que le envía cartas por duplicado para uno y otro Consejo. Ruega que si alguna cosa se provee por ambos sea con plena conformidad, para que no surjan dudas.
- (140). La RC. ordenándole su regreso a España, de fecha 13 febrero 1562; ha sido publicada en "Col. Torres Mendoza", XVIII, p. 25. Se dió otra RC. para el Vidor Bravo de Sarabia, en la que se le da facultades para ejecutar las provisiones que se enviaban al Licenciado Ramirez de Quiñones; el 5 octubre 1563 comunica aquél al Rey, que la salud del Regente es buena y que espera podrá ir a Lima a cumplir las órdenes recibidas (AGI., Lima, 120). Se ordenaba también la vuelta del Contador Rodríguez Portocarrero (RC. 2 febrero 1562, en AGI., Lima, 568, L. II, 215) y que la Audiencia prosiguiera la toma de cuentas; al comunicar Sarabia en 24 diciembre 1562 la llegada en la flota de las 17 cédulas que se remiten a aquella Audiencia, comunica que el Licenciado Saavedra y él han empezado ya a tomar las cuentas del Cuzco (AGI., Lima, 120).
- (141). Carta de 26 diciembre 1562, en LEVILLIER, id., 503. Según escribe Román, los Comisarios llevaron consigo un Memorial sobre la manera posible de aumentar las rentas que le entregarán Pedro de Avendaño y él (cartas 20 noviembre 1563, en AGI., Lima, 120).
- (142). Vid. las quejas del Conde de Nieva sobre la actuación de los Oidores y el Fiscal en carta de 12 julio 1563 (LEVILLIER, id., II, 508) y las informaciones

del factor Romani, de fecha 20 diciembre 1562, 25 abril y 20 noviembre 1563. (AGI., Lima, 120). Según escribe Romani, el déficit anual entre gastos e ingresos casi alcanzaba la cifra de 100.000 pesos, con tendencia a seguir aumentando.- El Fiscal de la Audiencia y el Lic. Castro elevan el déficit anual a los 150.000 pesos (Cartas de 4 diciembre 1562 y 20 noviembre 1564, respectivamente: vid. nota siguiente).

- (143). Cartas de Castro al Rey, de fecha 20 noviembre 1564 y 31 diciembre 1565 (en LEVILLIER, id., III, pgs. 31 y 114). En otra carta del Fiscal de la Audiencia de Lima, de fecha 4 diciembre 1562 (AGI., Lima, 120) se ofrece un cuadro desolador del Virreinato; en ella no se habla más que de desventura y miseria del país, disolución de los gobernantes y aflicción de los vasallos; la justicia se vende públicamente; las leyes reales no son guardadas, "antes en este tiempo que este Consejo ha estado acá, se han deshecho todas y las provisiones y cédulas de V.M., ninguna se ha obedecido más de las que les ha estado bien y del cumplimiento de ellas se les ha seguido interés"; los indios han sido y son más vejados que jamás ni en tiempo de revoluciones lo habían sido; la Hacienda ha sido dilapidada. Pide en consecuencia un castigo ejemplar y el envío por el Consejo de Indias de un Presidente de la Audiencia que ponga todo en orden y castigue los delitos cometidos por Nieva y los Comisarios con lo que se ahorrarían además los 100.000 pesos que se le paga a un Virrey.
- (144). Fue reintegrado en el cargo de Contador de la Casa el 8 junio 1566, permaneciendo hasta 1576; en que le sucedió Antonio de Melgosa. (SCHAEFER, "El Real y Supremo Consejo de las Indias", I, 380.
- (145). Op.cit. nota anterior, I, 106 y 107.
- (146). AGI., Patronato, 192, n. 1, r. 63.
- (147). El testimonio de SOLORZANO en este punto ("Pol. Ind." L.VI, c.XV, n.5) se ve avalorado por la notable exactitud que muestra en la breve exposición de estos sucesos, según hemos podido comprobar documentalmente en la mayor parte de ellos.
- (148). Vid. día 13 septiembre 1600, p. 83 (cit. por SCHAEFER, id., I, 206.
- (149). Vid. p. 61-2.
- (150). Según se desprende de una consulta del Consejo de Indias, de fecha 4 junio 1594, (AGI., Ind.Gral., 742).

los Oficiales de la Casa de Contratación sevillana, a fines del año 1593, manifestaban al Rey que los fondos existentes en sus Cajas eran muy escasos; en vista de la situación se exige la autorización del Consejo de Hacienda, para retirar cantidades de aquellos con la indicación de que el Tesorero responderá con sus bienes toda contravención en este punto. La orden fué reiterada el 16 de enero de 1597. Según se desprende de una Real Cédula del Consejo de Hacienda a la Casa de Contratación, sólo se le permitía a ésta hacer pagos sin previa autorización en los casos urgentes, y aun entonces había obligación de comunicársela después de realizado (RC. 11 mayo 1594, cit. por SCHAEFER, 162). El empeño de SCHAEFER de ligar esta facultad dispositiva del Consejo de Hacienda con la reforma ordenada en 1557, que cree continúa vigente, tiene por origen la creencia en que dicha reforma sólo afectaba a esta facultad dispositiva de los fondos de la Hacienda indiana, cuando en realidad la cédula dada en Gante el 15 de Julio de 1557 tenía un alcance mucho mayor, afectando principalmente a la organización administrativa; de ahí se deriva que para SCHAEFER, los nombramientos de los Oficiales de la Casa de Contratación de Sevilla realizados por el Consejo de Hacienda durante el período 1557-62 tenga meramente el carácter de extralimitaciones, que cesan inesperadamente en 1562, si bien continúan produciéndose otras en años posteriores (vid. nota 152). Aunque el aspecto fundamental de la reforma, la dirección administrativa, cesara en 1562, como he procurado demostrar, pudiera ser posible que se hubiera dejado al Consejo de Hacienda, la facultad de disponer de los fondos de la Hacienda indiana, con lo que la orden de 1593 no sería más que una reiteración de esta concesión; extremo éste que no cabe resolver de un modo definitivo, en tanto no sea conocido el texto de la Cédula revocadora del año 1562.

- (151). En las relaciones de ingresos de la Hacienda castellana del siglo XVI, figura siempre con perfecta distinción el "almojarifazgo de Sevilla" el "almojarifazgo de Indias", que como veremos se pagaba tanto en el punto de partida, como en el de llegada. En las Indias, correspondía su recaudación a los Oficiales Reales; en cambio, en Sevilla, solía ser arrendado por la Contaduría Mayor de Castilla, como los restantes ingresos. En 1575, el importe obtenido del almojarifazgo de Indias en el puerto de Sevilla ascendió la cifra de 178.666 ducados (vid. en "Dic. Hac." de CANGA ARGÜELLES, año ed. 1833-35, voz "rentas", según datos procedentes de los manuscritos de la Contaduría Mayor existente en el Museo Británico de Londres.)
- (152). En Consulta de 22 junio 1597, el Consejo de Indias representaba al Monarca los graves perjuicios que se derivaban de no poder disponer directamente de los fondos, especialmente en los casos urgentes; el Rey ordenó la reunión de una comisión compuesta por los

Presidentes de ambos Consejos, el Secretario del de Indias y el Fiscal de Hacienda, con el fin de llegar a un acuerdo que evitara los retrasos; no se llegó a una solución definitiva (Consulta 22 junio 1597, Ind. Gral., 746); ante nuevas quejas del Consejo de Indias, en 1601, el Duque de Lerma les reiteró, un poco energicamente la prohibición de librar por su cuenta sobre la hacienda venida de Indias. (Consultas 16 enero y 24 marzo 1601, y Carta desde Távera; 23 octubre 1601, en AGI., Ind. Gral., 746); finalmente, en 1602, le fué dada autorización para disponer de un fondo de 10.000 ducados, reservado de un modo permanente en la Casa de Contratación, para las necesidades urgentes de aquél (SCHAEFER, id., I, 192).- Hubo algunas extralimitaciones del Consejo de Hacienda, tales como el facilitar licencias de esclavos para las Indias en cantidad excesiva, en cuyo punto el Rey atendió las quejas del Consejo de Indias, y el pretender que las apelaciones de los pleitos tocantes a contravenciones de las Ordenanzas de Registro, fueran a aquel consejo (vid. Consultas del Consejo de Indias, de 31 octubre 1577 y 22 junio 1597, en AGI., Ind. Gral., 739 y 746, cit. por EXHAEPER, id. I, 162 y 191). En cambio, no tiene este carácter de intrusión, como cree SCHAEFER, la orden dada por el Consejo de Hacienda al Licenciado Ochoa de Villanueva, encargado de la visita a las salinas andaluzas, para que procurara averiguar en Sanlúcar si había habido defraudaciones en el pago del almojarifazgo, ya que según hemos señalado en la nota anterior, le correspondía la administración de este ingreso fiscal; el Secretario del Rey indicó al Consejo de Indias la conveniencia de que el Lic. Gamboa, comisionado por este último Consejo en Sevilla para hacer la visita a la Casa de Contratación, no acudiera a Sanlúcar, ya que lo hacía Ochoa; sin duda con el objeto de evitar fricciones entre ambos; el Consejo de Indias señaló los inconvenientes de que el Consejo de Hacienda intentara obligar, como lo había hecho otras veces, a desempañar de nuevo los fondos, cosa que además de suponer una vejación para los mercaderes y un retraso de la flota, era perfectamente inútil a su entender, ya que el impuesto se pagaba en Sevilla y los navíos eran visitados tres veces; atendiendo estas razones el Rey ordenó al Consejo de Hacienda que el Licenciado Ochoa aunque fuera a Sanlúcar, no mandara desempañar las mercancías (Consulta de 6 mayo 1578, en AGI., Ind. Gral., 739) SCHAEFER, id., I, 162). Poco después encontramos una RC. dirigida a la Casa de Contratación de Sevilla, aporrande un auto hecho por ésta para que sin exigir factura los administradores del almojarifazgo, se despachen licencias para embarcar fardos para Indias (RC. 13 agosto 1586, en "Ced. Encinas", III, 147).

- (153). Describir minuciosamente las actividades de los Virreyes en materia de Hacienda, además de lo fatigoso que sería, requeriría una especial investigación en cada caso, ya que salvo las figuras de D. Antonio de Men-

doza, que ha merecido los honores de dos monografías (las de S.S. AITON y PEREZ BUSTAMANTE), la del Virrey D. Francisco de Toledo, estudiada por LEVILLIER, y la de D. García Hurtado de Mendoza, sobre cuya vida publicó en el siglo XVII un libro SUAREZ DE FIGUEROA, no existen estudios particulares sobre los Virreyes del siglo XVI.- Hemos reunido en este epígrafe una serie de datos extraídos de modo principal de las Memorias y Correspondencia de los Virreyes y también de los documentos que hemos podido conocer de un modo indirecto en nuestras investigaciones. Estimamos que serán suficientes para el fin que nos proponemos que es señalar el importante papel que tienen los Virreyes en el desarrollo de la administración de Hacienda.

- (154). Carta desde México de 20 junio 1544, citada nota 161.
- (155). Ordenes de 23 de agosto de 1539, al Alcalde Mayor de Veracruz, para que no haya descuido en las avaliaciones; 26 agosto del mismo año, para que ninguna justicia entre antes que los Oficiales Reales en los navíos; 15 noviembre 1539 para que el Alcalde y un Regidor asistan a las avaliaciones (citadas por PEREZ BUSTAMANTE, "D. Antonio de Mendoza", Santiago de Compostela, 1928, p.125).- El Virrey dice en su "Memoria de Gobierno", que ha hecho muchas Ordenanzas para Veracruz, citando las referencias a la carga y descarga de los navíos y a la visita a éstos por los Oficiales Reales ("Instrucciones que dejaron los Virreyes de Nueva España a sus sucesores", México, 1867, p.232).- En AGI. existen las de los años 1533 (Patronato, 46) y 1542 (id., 48 y 49).
- (156). Son de fecha 19 mayo 1541.- Están extractadas, según PEREZ BUSTAMANTE; en la Colección Muñoz de la Academia de la Historia, t.82, f.220.- En la Memoria de Gobierno, refiere Mendoza que "ha proveído para el buen orden de la Hacienda, Casa de fundición, almoneadas y Caja, y cómo los Oficiales han de repartir el tiempo además de lo que S.M. tiene mandado. Creo que está bastante en esto, y con lo demás que V.S. añadirá habrá buen orden" ("Instrucciones que dejaron Virreyes N. Esp.", p. 228).
- (157). "Instr. que dejaron... Virreyes N.Esp.", p. 228.- Las ordenanzas sobre la venta de los tributos, de fecha 19 mayo 1541, en AGI., 48, 1-2/24.
- (158). "Inst... Virreyes N. Esp.", p. 228.
- (159). Contrasta su actitud en materia de libranzas con la seguida por otros Virreyes, como el Marqués de Cañete o el Conde de Nieva; según refiere en su Memoria de Gobierno, viendo por una parte el deseo del Monarca de que no se librara en lo posible sobre la Real Hacienda y existiendo por otra una serie de necesidades que cubrir, procuraba dejar algún tiempo

vacos los corregimientos y alguacilazgos y con el productos de estas quitas y vacaciones realizaba las mercedes y ayuda de costa necesarias ("Inst. que dejaron los Virreyes de N.Esp.", 234); "teniendo cuenta conmigo, -escribe a su sucesor-, que antes sobre en las quitas o vacaciones que no para en las libranzas".

- (160). Vid. el Apéndice XXX de su obra "D. Antonio de Mendoza".
- (161). Inserta en "Instruccs. que dejaron los Virreyes N. Esp.", p. 240.
- (162). La instrucción se reproduce en su mayor parte en "Copulata", V, 180-3.- En abril de 1550 había recibido del Monarca una instrucción especial para la administración del Fisco, en la que se reproducían en líneas generales, disposiciones dadas con anterioridad (vid. su texto en "Copulata", V, 177). Vid. también su relación sobre el estado en que dejó la Nueva España, en AGI., Patronato, 238, 1.
- (163). Relación de gobierno a su sucesor el Conde de la Coruña (en las "Instr.... Virreyes N. Esp.", 247). Las ordenanzas referentes a la alcabala, en AGI., Patronato, leg. 56.
- (164). Carta al Rey, uito, 15 noviembre 1541, en LEVILLIER, "Gobds. Perú", I, 35.
- (165). Carta al Rey, Guzco, 24 noviembre 1542, en LEVILLIER, id., I, 70. A este descrito se sumaban los numerosos fraudes cometidos en los primeros tiempos por los Gobernadores y los Oficiales Reales (vid. la querella del Fiscal Villalobos contra Pizarro, Almagro y Oficiales Reales, por fraudes al Fisco, en LEVILLIER, id., II, 84).
- (166). El 24 noviembre 1542 escribía al Rey que estaba entendiendo en hacer Ordenanzas (LEVILLIER, id., I, 70).- Estas aparecen citadas en "Copulata", V.
- (167). -Los Oficiales Reales de Lima escribían al Monarca el 6 marzo 1543, que Vaca de Castro se había quedado con todos los repartimientos de Pizarro, mientras la Hacienda Real estaba agotada y entrapada, "que aun en este año no se acabará de pagar lo que debe la Caja", el Gobernador no hace más que enviar dinero a España: "si dos más le diera el cargo -dice- tendrá un millon de oro" (LEVILLIER, id., II, 246). A su regreso a España, Vaca de Castro fué sometido a proceso criminal, en el que tuvo que ~~abonar~~ abonar una crecida pena pecuniaria (Sentencia, en LEVILLIER, id., II, 301).
- (168). La mayor parte de estos datos proceden de una carta del Licenciado Gasca al Rey, 15 de noviembre de 1541, en LEVILLIER, id., I, 688.

- (169). El viaje del Contador Cáceres fué cuidado en los menores detalles: le acompañaba un perito en asunto de cuentas; en Cuzco y Arequipa, deberían reunirse en Junta, al igual que en Lima, con asistencia del Corregidor; en Charcas, debería prestarles toda su ayuda Pedro Hinojosa y, en caso de ausencia, el Corregidor. Las cuentas debían ser enviadas a Lima con la firma de todos ellos y el oro y plata al puerto de Arequipa, de donde sería embarcado para el puerto del Callao (Carta de La Gasca, 17 julio 1549, en LEVILLIER, id., 194).
- (170). Carta de La Gasca desde el Callao, 8 noviembre 1549 (en LEVILLIER, id., I, 237); carta de Nieva y Comisarios 4 mayo 1562 (LEVILLIER, id., I, 435).
- (171). Carta al Rey, de 1^a febrero 1557, en LEVILLIER, id., II, 456.
- (172). Puede verse el excelente estudio de ROBERTO LEVILLIER, "Don Francisco de Toledo, supremo organizador del Perú", Madrid, 1935. La intervención en materia de hacienda ha merecido poca atención en dicha obra, y hemos tenido que acudir directamente a las fuentes.
- (173). RC. de 6 febrero 1573 (cit. por ESCALONA, "Gazophilacium...", L.I, c. XXII) agradeciéndole mucho el cuidado que pone en las cosas de la Hacienda, entre ellas la de ordenar tome residencia a los Oficiales Reales y a los depositarios de bienes de difuntos y el haber cometido al Licenciado Altamirano las cuentas del Cuzco.- En los papeles de Contaduría del Consejo de Indias consta que tomó personalmente las cuentas de Lima y Potosí.
- (174). Las de Guamanga (1571) en "Col. Torres Mendoza", VIII, 462.- Las del Cuzco (1572) en LEVILLIER, "Gobs. Perú", IX, 1 ss.; las de Lima aparecen citadas por el Virrey Martín Henríquez que las rectificó y amplió en 1582 (AGI., Patronato, 190, 34); el 3^o junio 1573, el Rey les había dado otras ordenanzas, (publicadas por ESCALONA, "Gazophilacium...", Ap. I y BALLESTEROS, "Ords. Perú", 88); las de Potosí, en AGI., Patronato, 190, 35. En la RC. de 1^a diciembre 1573, aprobando el haber dado ordenanzas, se citan además las de La Paz y La Plata (ESCALONA; id., L.I, c. XIX).
- (175). Vid. la Instrucción a los Oficiales del Cuzco, en LEVILLIER; id., IX.- En ella se señalaba otras medidas de garantía, tal como la de obligar a los Cabildos, que tengan un libro de las provisiones dadas por el Virrey a los Oficiales Reales "para tomarles cuenta por él de como las han cumplido". Se ordenaba que llevaran diversos libros de contabilidad (aparte del "común" en la Caja, y los

- del tesorero y contador, libros de cédulas reales, de rentas en almonedas. Se reiteraba la prohibición de tener oro fuera de la Caja, hacer granjerías o utilizar los indios puestos en la Corona Real, y se especificaba se les daría por cobrada las rentas, cuya recaudación se retrasase por su culpa.
- (176). RC. de 6 febrero 1573, cit. nota 173 y carta al Rey, citada por SCHAEFER, id., I, 118.
- (177). Inst. cit. a los Oficiales del Cuzco, LEVILLIER, id. IX, 9.- Una Rc. de fecha 27 septiembre 1575, aprobaba el orden establecido por el Virrey para la toma de cuentas: Cajas de La Paz y Chuquico, la Audiencia de Charcas; las del Cuzco, el Corregidor que las enviará a Lima; las Arequipa, Huamanga, Sata y Huahuco, directamente a Lima; las de Guayaquil, Loja, Cuenca, Jaén y Zamora, Audiencia de uito; Piura y Paíta, el Corregidor las enviará a Lima; Popayán, a uito.- Si se retrasaran los Oficiales Reales en el envío de cuentas, se enviará quien las tome, siendo a su costa los gastos ("Cedulario de Encinas", III, 296).
- (178). RC. 1 diciembre 1573. cit. por ESCALONA, L. II, P. I. c. I.
- (179). Los arrendamientos eran por tres años. En el primero se obtuvo 600.000 pesos; 800.000 en el segundo y 400.000 sólo en el primer año del tercero. Cuando llegó Toledo, solía obtenerse unos 20.000 pesos anuales ("Relación de Gobierno", en BELTRAN Y ROZPIDE; "Memorias Virreyes Perú", I, 100).
- (180). Frente a los 200.000 pesos que se cobraban anteriormente una vez pagados los salarios del Corregidor y Oficiales Reales, según la Relación del Virrey se obtenían bajo su gobierno de 700.000 a 800.000 pesos del quinto de la plata, aparte de las ganancias obtenidas con desechos y desmontes beneficiados con el azogue.
- (181). "Queda la Hacienda de V.M. tan acrecentada y engrosada y el reino tan rico y caudaloso como las flotas pasadas y plata que han traído han mostrado." (Vid. la Relac. de Gob. en BELTRAN Y ROZPIDE, id., I, 99 y ss.) y la interesante carta al Rey de 9 abril 1580, en LEVILLIER, id., VI, 263.
- (182). Se reiteran las prohibiciones de sacar oro de la Caja de las tres llaves fuera de los días señalados o coger cantidad a cuenta de su salario bajo pena de pérdida del oficio. Se regula con detalle lo referente a libros (en cuyo punto constituye una novedad la creación de un "manual" señalando los deudores del Fisco y plazos para el pago, cuyo cuidado queda encomendado al Factor, que debe exhibirlo semanalmente para proceder al cobro, avaluaciones y registro de mercaderías en el Callao, almonedas, toma de cuentas a los Oficiales de las Cajas del Interior.

recaudación de impuestos, etc.- En AGI., Patronato, 190, 34, existe un testimonio oficial de dichas Ordenanzas, de fecha 7 septiembre 1582, seguido de las respuestas dadas por los Oficiales Reales a cada uno de los veinte capítulos y de lo resuelto por el Virrey a cada respuesta.

- (183). En una RC. de 8 marzo 1589, citada por ESCALONA, "Gazophilacium...", L.I, c. XXII, se le agradece el envío de las cuentas de años 1586 y 1587 al Consejo y su solicitud en la toma de cuentas.
- (184). Sobre la actividad del Virrey Hernando de Torres y Portugal en materia de Hacienda; vid., una relación del año 1584, en AGI., Patronato, 190, 43.
- (185). "Hechos de D. García Hurtado de Mendoza, 4º Marqués de Cañete", Madrid, 1613, p. 144 y sgts.
- (186). Vid. p.ej: la Relación de Gob. del Marqués de Montecclaros, en BELTRAN Y ROZPIDE, id. I, 185.
- (187). "Hechos de D. García Hurtado de Mendoza", 201 y 304.- Según datos dados por SUAREZ DE FIGUEROA, id. 304, el total de ingresos, incluyendo el servicio extraordinario que logró para el Rey (1.504.961 ducados) abarcaron la cifra de cuatro millones de ducados.- Vid. también la relación del año 1590, en AGI., Contad. 1775, nº 15.
- (188). Carta de 29 diciembre 1593, citadas por SUAREZ DE FIGUEROA, id., 207 y 301.
- (189). En BELTRAN Y ROZPIDE, id. Tomo I.
- (190). El Virrey escribe al Monarca en 5 mayo 1600, haciendo constar las numerosas protestas que ha causado en los vecinos de Lima tal medida por temer que sufrir el control del Fisco en ambos sitios; el Virrey propone la supresión de esta Caja, ya que además de las posibles competencias de jurisdicción entre los distintos Oficiales Reales de Lima y el Callao y de la confusión y molestias que causó el verse los negocios fiscales en dos tribunales, no ve ninguna ventaja para el Fisco (vid. en LEVILLIER, id., XIV, 255). En relaciones posteriores de las Cajas del Virreinato no figura la de dicho puerto.
- (191). La instrucción que se le dió en 22 junio 1590 consta de 72 capítulos. Del 61 al 72 se refieren a la Hacienda (AGI., Lima, 570, L.15, f.198 y ss.).
- (192). Vid. la carta al Rey 11 abril 1597, en LEVILLIER, id. XIV, 43 y ss.
- (193). Además de su Memoria de Gobierno, muy lacónica en materia de hacienda, pueden verse sus cartas de 8 febrero y 16 abril 1598, 25 octubre 1599 y 5 mayo

1600 (en LEVILLIER, id., XIV, pgs. 77, 98, 169 y 250) y las RC. de 10 febrero 1601 y 16 febrero 1602, referentes a la Real Hacienda. (en AGI., Lima, 570, L.16, fs. 34 y 49).

(194). HAMILTON: "American Treasures..."; cuadro de ingresos que en dicha obra publica.

(195). En el capítulo II de la Instrucción de 1567 al Contador Mayor Martín Irigoyen, enviado a la Nueva España, se le ordena lleve un traslado de lo que está proveído sobre la orden de la cobranza de la Real Hacienda, a saber: del oro y plata que se era de quintas y tasaciones de tributos sobre la venta de ellos, cobranza del almojarifazgo y cosas perdidas, penas de cámara, dos novenos, pastel, seda y azogue que en substancia son las haciendas de S.M. en la Nueva España" (AGI., México, 1089, L.5, f.87 ss. y A fines del siglo empiezan también a cobrar alguna importancia los ingresos procedentes de la renta de oficios, estanco de naipes, sin contar el de Cruzada, que ya dijimos tenía administradores autónomos.

(196). RAMON GARANDE THOVAR: "Las llevaderas alcabalas", en "Moneda y Crédito", nº 13, Madrid, 1945.

(197). Ya en una instrucción secreta a Ovando de fecha 29 marzo 1503 se le pedían informes para el establecimiento de la alcabala (cit. en "Col. docs. ineds. Ult.", V, LI). El Virrey Mendoza recibió ordenes en 1535 de implantarla en Nueva España, aunque el año siguiente se aprueba su decisión de no implantarla (RC. mayo 1536, en "Copulata", V, 124); en el Perú, se había establecido en las capitulaciones con Pizarro, la concesión de una exención de 12 años; en 1559 se encargó al Conde de Nieva y a los Comisarios vieran la posibilidad de implantarla y aun cuando contestan favorablemente con ciertas exenciones (Carta-informe de los comisarios, 12 mayo 1562, en LEVILLIER, I, 395 ss.), no se hizo nada en tal sentido. En la famosa Junta de 1568 celebrada en Madrid y a la que asistió como es sabido Don Francisco de Toledo, resolviéndose se hiciera un esfuerzo para que se cobrara en el Perú, pero tanto Toledo como Martín Enriquez y el Conde de Villar prefirieron dejar las cosas como estaban (RC. al Virrey del Perú, de 12 noviembre 1591, reproducida en SUAREZ DE FIGUEROA, "Hechos de D. García Hurtado de Mendoza, 4º Marqués de Cañete", Madrid, 1613, p. 160).

(198). Vid. la RC. al Virrey del Perú 12 noviembre 1591 en el libro de SUAREZ DE FIGUEROA, citado en nota anterior. Se especifica en ella que en Nueva España se viene cobrando desde 1574, confirmado con las cuentas de Veraacruz del año 1586, (AGI., Cont., 692, nº 11) y se ordena entre en vigencia en el Virreinato del Perú desde 12 enero 1592. El

Virrey D. García Hurtado de Mendoza después de una reunión en el Cabildo, Justicia y Regimiento de Lima preguntó solemnemente el arancel de la alcabala, cuyos derechos ascendían al 27%, en vez del 10% que se cobraba en España. Aunque con disgusto general, se le prestó obediencia en casi todo el Virreinato; únicamente en Quito hubo una sedición que tuvo que dominar el general Pedro de Arana (vid. la descripción minuciosa de este suceso en el citado libro de SUAREZ DE FIGUEROA, pgs. 185-181 y la relación existente en AGI., Patronato, 191, ns. 12 y 13). Pueden verse también en el citado Archivo, un Memorial de los mercaderes de Lima de 1593 pidiendo que las primeras mercaderías no paguen alcabala (Contaduría, 1775, 19 y 20) y un acuerdo del Marqués de Cañete de 1592, sobre la alcabala de Potosí (Cont., 1780, 1).— El Virrey de México dió unas Ordenanzas en 1574 y 1579 para la recaudación de la alcabala (Patronato, 56).

- (199). Vid. en LEVILLIER, "Antecedente de Política económica del Río de la Plata"; I, 36, una carta del Gobernador de Buenos Aires, Diego Rodríguez de Valdés, (23 julio 1599), aconsejando que por la gran pobreza de los habitantes de aquella región no se establezca el impuesto de alcabala).
- (200). Vid. el artículo del Dr. RODRÍGUEZ CASADO, en la Revista "Arbor", nº 6, Madrid 1945. En él se afirma la tesis de PEREYRA de que el enclave del Imperio estaba en la Nueva España, cuya expansión natural hacia el Norte y el Oeste, había ya sido planeada por el genio de Cortés, pero que no llegó a captar el Emperador, preocupado por las cuestiones europeas. No cabe duda que las Molucas hubieran sido foco de atracción de los españoles hacia el Extremo Oriente; en cambio, una vez perdidas, Manila quedó convertida en una estación comercial de poca importancia, a pesar de su maravillosa situación.
- (201). La obra más completa sobre este comercio la constituye la obra del norteamericano WILLIAM INTLIE SCHURZ, "The Manila Galleon", New York, 1929.
- (202). Memorial de advertencias del Contador Hernández de Sanetotis tocantes al puerto de Acapulco y carrera de las islas del Poniente (AGI., Contaduría, 692, n. 7).
- (203). Exposición de motivos de las Ordenanzas del 14 de agosto de 1605.— El texto de esta importante pieza jurídica ha sido publicado por ESCALONA, "Sociophilacina...", Ap. III y BALLESTEROS, "Ordens. Perú", 49 y recogido en su mayor parte en la Recopilación de Indias, L. VIII, T. I. Sobre los Tribunales de Cuentas, ESCALONA, dedica varios capítulos en su obra citada.

- (204).Ord. 22 del año 1605. (Rec.Ind.; L.VIII, T.I., 1.88).
- (205). "Gasophilacium...", L.II, P.I, c.I; "Pol. Ind.", L.VI, c. XVI, nº 10.
- (206). Cuando el Virrey Velasco insiste en la necesidad de que se provean Ministros expertos para la toma de cuentas (carta 8 febrero 1598 en LEVI-LLIER, "Gobs. Perú", XIV, 77), una nota marginal ordena: "que esto se apunte para lo de las Contadurías de Cuentas y se junte con los papeles que tocan a esto y se traiga".
- (207). SOLORZANO, "Pol. Ind.", L.VI, c. XVI, num. 12.
- (208).Ord. 1 del año 1605, (Rec. I., L. VIII, T.I, 1.1)
- (209).RC. 2 mayo 1615, (Rec.I, L.VIII, T. I, 1.207).
- (210).Ord. 2 de 1605, (Rec. I, L. VIII, Tit. I, 1. 2).
También Chile (salvo Concepción), Panamá y Potosí, quedaron excluidas de la jurisdicción de los Tribunales de Cuentas y sujetas a la Contaduría del Consejo de Indias, (ord. 24, 1609).
- (211).Ord. 26 de 1605 (Rec. I., L. VIII, T. I, 1.30).
- (212).Ord. 5 de 1605 (Rec. I., L. VIII, T.I., 1.5).
- (213).Ord. 43 de 1605 (Rec. I, L. VIII, T. I., 1. 48).
ESCALONA dice que ésta le influyó "su jurisdicción y acertadas disposiciones y preeminencias" (libro XI, P. I., c.I).
- (214).Vid. en esta respecto la larga relación en 13 ramas de débitos en Nueva España desde 1541 a 1575, junto con diversas medidas tomadas para liquidar esta situación, en Contaduría, 672.
- (215).Ord. 6 del 1605 (Rec. I., L. VIII, Tit. I, 1.6).
- (216).Ords. 9 y 10 (Rec. I., L. VIII, T. I, ls. 9 y 10).
- (217).Cuarta parte de la Ord. 20 del año 1605 (Rec. I., L. VIII, T. I., 1. 23).
- (218).Ord. 46 de 1605 (Rec. I., L. VIII, T. I., 51).
- (219).RC. 15 diciembre 1629 (Rec.I., L.VIII, T.I, 1.104).
- (220).RC. 23 julio 1630 (Rec.I., L.VIII, T.I, 1.102).
- (221).Ord. 41 de 1605. (Rec.I., L.VIII, T.I, 1.45).
- (222).Ord. 32 de 1605. (Rec.I., L.VIII, T.I, 1.36).
- (223).~~Ord. 12 de 1605~~ RC. 17 agosto 1605 (Rec. I. L.VIII, T.I., 1.58).

Vídel para más detalle, ESCALONA, L.II, P.I, C.I, 60.

(224). Ord. 38 de 1605. (Rec. I., L.VIII, T.I, 1.42).

(225). La administración de la Hacienda -lo que llama ESCALONA "administración por menor", puesto que la "administración por mayor" está reservada al Virrey- continúa en manos de los Oficiales Reales. Expresamente, la Ord. 5 de 1605, señala que "no es de nuestra voluntad alterar ni innovar en la cobranza y administración de nuestra Real Hacienda como hasta ahora se hace por los Oficiales Reales". Continúan éstos tomando cuentas a sus Tenientes (Ord. 29, 1609) y delegados o comisarios suyos (RC. 1º diciembre 1573), Corregidores (Cédula 20 marzo 1637) y Caciques (ESCALONA, L.II, P.I, c.II).

(226). El testimonio que nos deja SOLÓRZANO a mediados del siglo XVII no puede ser más significativo: "ofreciéronse tantas dificultades que necesitaron de consultas y nuevas declaraciones y Ordenanzas del Consejo y de los Virreyes y todavía se fué medrando poco en esta materia" (Pol. Ind., L.VI, c.XVI, nº 13). La causa no era únicamente los grandes retrasos y la dificultad de las distancias, si no la impericia de los Contadores y su afán por conseguir más y más preeminencias, "que parece que en solo eso han puesto su principal estudio, trabajo y cuidado" (id., nº 16). La imposibilidad de abarcar tan inmensa tarea obligó a aumentar el número de funcionarios, "más no por eso -dice SOLÓRZANO-, se han reconocido efectos de importancia, ni que aun corresponden a los gastos de salarios" (id., nº 26). Se llegó a pensar en su supresión, pero no se hizo por el temor de que si se volvían a dejar las cosas como antes de la reforma, la situación de la Hacienda hubiera sido más caótica. El organismo continuó vegetando a lo largo del siglo XVII y XVIII y cuando el Visitador Areche, enviado por Carlos III, visitó el de Lima hacia 1775, informaba al Monarca del estado de descomposición en que aquel organismo se encontraba (GUILLERMO CESPEDÉS, "La Visita de Areche...", en preparación). No sabemos si desapareció con la reforma llevada a cabo por Carlos III en la Hacienda, por la falta de estudios sobre ésta.

CAPITULO SEGUNDO

CUADRO GENERAL ADMINISTRATIVO

La Administración de la Real Hacienda indiana requería una amplia organización que se extendía desde la persona del Rey hasta el más inferior de los funcionarios encargados de la percepción de ingresos en aquellos lejanos territorios. En este capítulo intentaremos dar una visión general de toda la red administrativa, empezando por señalar los caracteres generales del conjunto, examinando después los organismos peninsulares -la administración central-, para acabar con el estudio de la organización de la Hacienda en Indias en su doble aspecto territorial y personal.

CARACTERES GENERALES.

Hay una serie de caracteres generales en la organización de la Hacienda indiana, que conviene destacar de modo especial: la unidad del objeto, la centralización y la autonomía de las regiones administrativas, la actuación colegiada, la homogeneidad del sistema y, por último, su originalidad respecto de la organización castellana funda-

mentalmente en el sistema predominante de administración (administración directa por funcionarios reales, en Indias; arrendamientos, en Castilla). Examinemos por separado las características anteriormente indicadas.

La Hacienda indiana recibe siempre el nombre de "Hacienda Real". Es la primera característica fundamental, que conviene señalar. No se trata aquí de una "Hacienda del Estado", sino de una "Hacienda de la Corona", de unos bienes propios y exclusivos del monarca. Conforme al criterio jurídico de la época, el soberano era la representación del Estado y, por tanto, era a él a quien correspondía en propiedad los bienes del dominio eminente de un territorio; el término de "Hacienda Pública" tardará aún bastante tiempo en imponerse. Las consecuencias que se deducen lógicamente, son, por una parte, como veremos muy pronto al hablar de la administración central, un poder absoluto del Rey en todo lo que se refiere al Fisco; por otra, una confusión, desde el punto de vista práctico, entre los bienes reales de origen público, -los impuestos-, con los bienes privados, -granjerías del Rey, que éste puede tener en Indias, como cualquier particular-: unos y otros son administrados conjuntamente por los funcionarios de Hacienda. La simplificación y unidad del sistema se acentúa en la Hacienda indiana, porque en ella no hay, como ocurre en nuestros días, distinta organización financiera para grandes demarcaciones de índole territorial, -Virreinos, Gobernaciones, Provincias, etc.-; existen en ellas, como es lógico, una serie crecida de gastos propios, -sueldos de los funcionarios, expediciones militares, etc. (1)-, pero

éstos no son administrados autónomamente, ni satisfechos con fondos procedentes de impuestos típicamente virreinales, que no existen: hay una sola organización para todo (impuestos, funcionarios, etc.), que está centralizada en los Oficiales Reales de Hacienda.

La única excepción en este punto lo constituye la Hacienda municipal. La organización del municipio en Indias, estudiada por OTS CAPDEQUI, AVELLA VIVES y FRANCOIS CHEVALIER -los dos primeros con referencia especial al municipio de españoles y el último, al de indios- (2), es todavía bastante desconocida en el aspecto económico y rentístico. Las fuentes nos muestran la existencia de un sistema fiscal autónomo: los pueblos tienen además de los "propios" (3) el derecho a exigir determinar "sisas" y "repartimientos" a los vecinos, para los gastos comunes, cuya administración parece estar en manos de los oficiales del Consejo (4). Así, por ejemplo, en 1526 se le encarga al Licenciado Salmerón, Juez de Residencia de Castilla del Oro la tome entre otros a los Regidores, Escribanos, procuradores, fieles, resmeros de la tierra, alcaldes de hermandad, alguaciles de campos, etc., exigiéndoles cuentas de los propios, sisas y repartimientos que se hubieren hecho, enviándolas fenecidas al Concejo, a pesar de cuentas apelaciones se interpongan y acompañándolas de una breve relación de la renta de estos propios, sisas y repartimientos y de los gastos ordinarios y extraordinarios (5). La pregunta 17 de la pesquisa secreta que inició dicho Juez de Residencia trata de averiguar si el Gobernador, Alcaldes Mayores y sus tenientes, alcaldes

ordinarios y regidores han puesto el debido recaudo en los propios y rentas de los concejos, tomando las cuentas de los mismos a los que de ellos eran obligados a tomar, y los han gastado en las cosas útiles y provechosas a los Concejos y con la moderación que se requería, o si han echado algunas sisas o derramas sobre los dichos Concejos (4). No es nuestra intención hacer aquí un estudio detallado de esta Hacienda municipal, por estimar que merece constituir un trabajo aparte; basta a nuestro propósito el señalar esta excepción al principio de unidad administrativa que preside toda la organización fiscal en las Indias.

Decíamos también que esta organización estaba centralizada y que las regiones o distritos administrativos mantenían entre sí una completa autonomía. La centralización de la Hacienda era una consecuencia lógica de una Monarquía absoluta como la española en aquella época y no era más que una faceta de la centralización de todas las funciones de gobierno en la persona del Rey, el cual contaba con la ayuda de sus consejeros particulares y de aquellos que pertenecían a los distintos consejos. Ya vimos cómo en un principio Fonseca y el Secretario Conchillos tuvieron un papel principalísimo en los problemas indianos por la influencia de su opinión en la persona del Rey; una vez creado el Consejo de Indias, la dirección de los asuntos de Ultramar pasó en gran parte a aquél, aunque siempre la decisión siguiera perteneciendo al Rey. Más notable es todavía en materia de Hacienda la separación absoluta entre las

Cajas Reales, incluso aquellas que existen dentro de un territorio político perfectamente delimitado (Virreinato, Gobernación): los Oficiales Reales que las administran no tienen entre sí ninguna dependencia, ni siquiera con los de la capital del Virreinato o Gobernación (5), mantienen se bien distintas las unas de las otras en los pagos (6) y no pueden entrometerse en los distritos de los otros (7); sus relaciones son directas con el poder central (Rey, Consejo de Indias, Casa de la Contratación de Sevilla) y únicamente mantienen aquellas relaciones necesarias para una buena administración (remesas de oro a los Oficiales de los puertos, para su envío a España, etc.), pero siempre en un plano de igualdad jerárquica. Esto, claro está, en lo que se refiere a lo que en lenguaje de la época, llamaríamos "administración por menor"; por encima de estos distritos fiscales está en los Virreinos la persona del Virrey en cuyas manos recaía la dirección o "administración por mayor" de los territorios bajo su mando y que, por lo tanto, podía intervenir, en nombre del Rey, en todas las Cajas Reales, siempre dentro del límite de facultades que la Corona le señalare en materia fiscal. Así, por ejemplo, una Real Cédula dirigida a la Audiencia de Panamá le ordenaba que en materia de Hacienda -y también en la de Guerra y Gobierno- debían obedecer en todo al Virrey del Perú (8) y en la práctica fueron numerosas, como ya vimos en el capítulo anterior, las intervenciones de los Virreyes en materia legislativa de Hacienda,

///

visitas a Cajas, toma de cuentas, etc. La creación de los Tribunales de Cuentas en 1605 produjo en este punto una profunda innovación, ya que a partir de entonces existía un organismo fiscal en Indias, con facultades sobre los Oficiales Reales, aunque éstas fueran limitadas a ciertas materias, como ya dijimos.

Otra característica de la administración de la Hacienda era la actuación colegiada. Esto, en cuanto a la Administración Central no constituye ninguna particularidad, puesto que todas las actuaciones del Consejo de Indias eran de esta clase. Pero también en Indias, los Oficiales Reales han de actuar en todo conjuntamente y ya ésta característica quizá la más acusada del sistema administrativo, como veremos con más detalle al hablar de los Oficiales Reales (cap. III) y de las Juntas o "Acuerdos" de Hacienda, expresión típica de aquella actuación colegiada (cap. IV).

Sobre la homogeneidad del sistema administrativo en todas las regiones, ya indicamos la causa al hablar de la legislación de Hacienda (9). Es cierto que un afán generalizador en otras materias daría lugar a grandes errores como por ejemplo en aquellas instituciones, como la encomienda, que tuvieron que aplicarse a regiones donde la condición del indígena era muy distinta y que, por lo tanto, tuvo que sufrir en la práctica distintas modificaciones según aquellas condiciones. Pero en la organización de la Hacienda no había obstáculos a esta difusión de un mismo sistema, porque no existía una organización indígena lo bastante importante para impedirlo (y aquí se relaciona esta característica de la homogeneidad).

geneidad con la de la originalidad, que examinaremos a continuación) y, además, se hacía tabla rasa de ella. Por otra parte, la centralización absoluta de la Hacienda en manos del Rey, sobre todo en el nombramiento de los Oficiales Reales, facilitaba un criterio uniforme para todas las regiones.

Finalmente, nos resta hablar de la originalidad de la organización administrativa de la Hacienda indiana. Al plantearnos este problema de la originalidad de las instituciones indianas hay que partir siempre de la idea, destacada por todos los autores (10), de que la Corona tendió siempre a transplantar en lo posible a los nuevos territorios las instituciones castellanas, y casi siempre es en éstas donde hay que buscar el origen de aquéllas. Ahora bien, al intentar llevarlas a la práctica, se tropezaba con un medio totalmente distinto al de la Península (en que, por ejemplo, el factor distancia constituía a veces un obstáculo difícilmente insuperable) y, además, muchas veces, en especial en Nueva España y Perú, con una organización política y social fuertemente arraigada. La consecuencia era que, unas veces, desde el principio, y otras, paulatinamente, se iban introduciendo modificaciones que daban origen a instituciones peculiares (11). "Hasta qué punto estas instituciones se implantaron en su forma original, hasta qué medida por el contrario se aprovecharon del estado de cosas existente, que formas, por último, nacían del esfuerzo de adaptación, tal es todo el problema de la colonización" (12).

Respecto a la Hacienda, los españoles encontraron únicamente una organización administrativa en los pueblos aztecas e incásicos, pero aún en éstos, el sistema rentístico era muy simple, pues se reducía en substancia al tributo que el indígena debía pagar a su señor (13). Como ya vimos en el capítulo anterior, aunque la implantación del tributo del indígena se ensayó en las Antillas, no alcanzó en realidad carta de naturaleza hasta la conquista de Nueva España, donde no fué muy dificultosa su exigencia, puesto que el indígena no hacía más que cambiar de señor; en cambio, hace su aparición desde el primer momento un impuesto típicamente castellano -el almojarifazgo- al que viene a sumarse el procedente de las minas de metales preciosos y rescates (14) -el famoso "quinto"- que viene a cobrar gran importancia en Indias. Paulatinamente aparecen en los libros de los funcionarios de Hacienda otras fuentes de ingresos: unos, como las salinas, penas de cámara y la alcabala, que son típicos en el sistema rentístico castellano; otros, como el monopolio real del azogue nacen a consecuencia de las nuevas circunstancias (invención de ricos yacimientos de oro y plata). En conjunto, puede afirmarse que el sistema fiscal indiano, aunque en parte derivado del de Castilla, sufre una notable variación respecto de éste debido por una parte a la aparición de especiales fuentes de riqueza ("quinto" del oro y la plata, monopolio del azogue) que da origen a ingresos típicos y, por otra, a la incorporación del tributo, que deriva del sistema indígena.

En cuanto a la organización administrativa, puede afirmarse que la influencia indígena es casi nula, incluso en la forma de repartirse y cobrarse el tributo. Hubo desde el primer momento un gran interés por conocer la organización indígena: ya en la Instrucción a Hernán Cortés se le encargaba que se informara en compañía de los Oficiales Reales si los indios pagaban tributo y en caso afirmativo, asentaran con ellos que dieran otro tanto como daban a su señor (15); respondiendo a esta preocupación, se escribieron en Indias diversos tratados sobre la forma de tributar los gentiles, algunos de autores famosos, como los juristas POLO DE ONDEGARDO y VASCO DE PUGA y el franciscano Fray TORIBIO DE BENAVENTE o MOTOLINIA que en su mayor parte, se conservan en el Archivo de Indias (16). A pesar del vivo deseo de algunos de ellos porque se mantuviera la forma primitiva, ya veremos al hablar de la recaudación de impuestos en el capítulo IV que se siguió un sistema distinto. La única supervivencia indígena la constituye al parecer la permanencia en los pueblos de indios de los antiguos funcionarios encargados de la percepción del tributo (17).

Más difícil es determinar hasta qué punto se copió del sistema administrativo castellano, por el imperfecto conocimiento de éste (18). Intentaremos, siquiera sea brevemente, exponer las líneas generales de la administración de la Hacienda en Castilla durante el siglo XVI, para poder aclarar en lo posible, la influencia en la organización indiana del mismo período.

La administración central (o "por mayor", como dicen

los autores antiguos), después de la reforma de los Reyes Católicos en 1476 (leyes de Madrigal) correspondía a la Contaduría Mayor de Castilla, que se subdividía a su vez en dos Secciones: la Contaduría Mayor de Hacienda, encargada de la administración, cobro y distribución de la Real Hacienda, y la Contaduría Mayor de Cuentas, con la misión de formarlas a todos los que tuvieran a su cargo rentas reales. No entramos a detallar su constitución que puede verse en la obra de GALLARDO (19), donde se señalan las distintas modificaciones sufridas en 1554 (Ordenanzas de La Coruña, que establece tres Oidores en la Contaduría Mayor de Hacienda) (20); 1568-9 (Ordenanzas del Pardo y Madrid); y 1593 (Ordenanzas del Pardo (21)). En esta última fecha, se desgajaba de la Contaduría Mayor de Hacienda el llamado "Consejo de Hacienda", encargado desde entonces de la administración por mayor y de la remisión de los negocios de justicia al Tribunal de Oidores; los antiguos Contadores Mayores de aquella Contaduría, (que perdían la calificación de "Mayores") mantenían únicamente las tareas de la "administración por menor", que antes tenían (22).

Estas funciones de "administración por menor" de la antigua Contaduría Mayor de Hacienda correspondía a los llamados ^U oficiales Contadores. En 1476 se distinguían dos clases: los del cargo o recaudación (oficiales de rentas, encargados de despachar las receptorías para la cobranza de las rentas y de tomar razón de las fianzas que daban Tesoreros y Receptores; los de Relaciones, que firmaban las relaciones del cargo a los Tesoreros y Receptores de cada partido, con exclusión de los jures que

les correspondían; los de lo extraordinario que hacían las relaciones de las rentas en que no había juro situados), y los Oficiales Contadores de la data o distribución (de sueldo, encargado de llevar la cuenta de los sueldos de la tropa; de Tierras, que cuidaban de las consignaciones a algunos militares en Guipuzcoa y Vizcaya; de Asostamiento o Tenencias, para los sueldos de los Tenientes de los castillos; de Quitaciones, para los empleos civiles; y los de Mercedes, encargados de las concesiones reales temporales o perpetuas) (23). Junto a estos ocho Oficiales, el Escribano Mayor de Rentas tomaba parte activa en todo el manejo de la Real Hacienda; así, por ejemplo, si las rentas eran encabezadas -caso de las alcabalas y tercias- debía el Reino otorgar ante él el encabezamiento general, despachando además las provisiones a los ejecutores de los partidos; si eran arrendadas -caso de las salinas-, era él quien recibía las posturas y pujas y ante él se hacían los remates y se daban las fianzas, dando copia de las condiciones a los arrendadores y despachándose en su presencia los recudimientos hechos a los arrendadores. Efectuaba las comisiones e instrucciones para la administración de las rentas y llevaba la correspondencia con los administradores. Lo que se encabezaba lo pasaba al Contador de Rentas para hacer las receptorías que se daban a los ejecutores, y de lo que iba en administración, al de Relaciones, para que supieran lo que cabía a cada situado. GALLARDO dice que por este tiempo no era muy considerable la ocupación de los Contadores, ni en lo judicial, porque no estaban inhibidos los demás Tribunales, ni en lo económico, per-

117

que las rentas de la Corona eran pocas y de ellas administraba el Reino los servicios y por encabezamiento general las alcabalas y tercias (24). Es interesante destacar esto último: en Castilla la "administración por mayor" está centralizada en la Contaduría Mayor de Hacienda, pero la "administración por menor" se verifica en buena parte por el propio Reino, que se entiende directamente en la administración central (25). Nos fijaremos concretamente en las rentas que administra la Corona.

Una simple ojeada a la Recopilación castellana de 1567 muestra que la mayor parte de las leyes del Fisco se dirigen a los arrendadores y es que fué éste -hasta 1749-, según GALLARDO (26)- el sistema preferido en la administración de rentas. El arrendamiento podía ser por mayor y por menor; el primero es el que se hacía por el Consejo de Hacienda de todo un partido, o de una renta que abarcaba en sí muchas rentas diferentes; el segundo era el que hacían a su vez los Arrendadores Mayores, o también los Administradores y los pueblos encabezados (27). El Monarca toma al arrendador "sobre su seguro y amparo real", ordenando que en todas partes sean acogidos y bien tratados bajo las penas de los que quebrantan seguro puesto por su Rey (28), concediéndoles al mismo tiempo amplias facultades para el desempeño de sus tareas (29). Interesa destacar que entre el órgano central -la Contaduría Mayor de Hacienda- y el arrendador, aparece la figura de un Tesorero, Recaudador o Receptor -de las tres maneras se les suele denominar en las fuentes- en las Cabezas de Partido. Sabemos que son nombrados por el Rey, y después de prestar fianzas ante los Contadores Mayores, reciben

Carta de Receptoría, que les faculta para el ejercicio de sus funciones (30); estas funciones se refieren principalmente a cobrar de los arrendadores por menor, fieles o cogedores, las rentas reales recaudadas por éstos, dándoles carta de pago, y a pagar los privilegios y situados que la Corona señalo sobre las rentas reales, remitiendo el resto de los ingresos a la Contaduría Mayor de Hacienda (31); al hablar de los arrendamientos por menor, la legislación hace referencia además como dijimos a la posibilidad de que éstos puedan hacerse en los Partidos, no sólo por los Arrendadores Mayores, sino por los propios Receptores, sin detallar en qué casos les corresponde efectuados (32).

Examinando ahora la organización indiana, vemos que hay un aspecto de la administración del que no cabe dudar ni un momento en la imitación de la organización castellana. Nos referimos a la forma de llevar las cuentas, tanto la Contaduría del Consejo de Indias (33), como los Oficiales Reales de las Indias (34), y que se extendió al fuzga Consejo de Hacienda creado en el Perú por el primer Marqués de Cañete (35), y a los Tribunales de Cuentas, implantados en Indias el año 1605 (36). Aunque la práctica obligue a algunas modificaciones, en líneas generales, puede afirmarse la identidad en todo lo que haga referencia a este aspecto de la contabilidad (número de libros y su forma, modo de llevarlos, toma de cuentas, etc.).

Es innegable también que en Indias se conoció bien pronto la forma de recaudación por arrendamiento, característica de la Hacienda castellana, y así las fuentes nos muestran que era ésta la forma usada para el almojarifazgo en

un principio (37) y para las salinas y diques en todo tiempo (38); lo mismo podría decirse de las almonedas, conocidas y muy utilizadas siempre por los Oficiales Reales de Hacienda. Tampoco fue desconocida en Indias el encabezamiento de rentas, limitado a la alcabala y centralizado también en los Oficiales Reales (39). Pero la característica fundamental de la organización indiana es la administración directa por funcionarios de la Corona -los Oficiales Reales- de las principales rentas ("quinto" de los metales y rescates, tributo del indio, almojarifazgo por lo menos a partir de mediades del siglo XVI, etc.). Esta característica, que no se implantará en Castilla, al parecer, hasta 1742, se refleja en la legislación, la cual se refiere de modo casi exclusivo a estos Oficiales Reales, y escasamente a los arrendadores, precisamente lo contrario de lo que ocurre en la legislación castellana.

¿Cuál fue la causa de este cambio fundamental en la administración por menor y de dónde procedían esos Oficiales Reales?

Cuando planteábamos en general el problema de la originalidad de las instituciones indianas, aludíamos de pasada a una de las causas que obligaron a modificar las instituciones del modelo castellano: la distancia a que se hallaban los nuevos territorios, de hecho acrecentada gigantesca por los deficientes medios de comunicación de la época. No cabe duda que fue ésta la principal razón que llevó a crear estos funcionarios reales, siempre de la absoluta confianza del Rey -esto se hace más visible en los primeros tiempos, en los cuales el nombramiento recaía en personas muy cercanas a la Corte- que deberían actuar en las lejanas Indias con amplia auto-

mía y con las más amplias facultades. Los principios en que se basa la actuación de estos funcionarios, -administración conjunta y responsabilidad solidaria-, no tienen probablemente otra causa: la larga distancia les va a obligar a resolver por sí en la mayoría de los asuntos, y es preciso que, por otra parte, la más completa identificación de todos, asegurada por aquellos principios, haga eficaz la administración (40). Probablemente también el deseo de hacer valer desde el primer momento los intereses económicos de la Corona, frente a las posibles ambiciones de los conquistadores fué la que llevó a una concentración de atribuciones en estos funcionarios de Hacienda.

Esta amplitud de funciones administrativas recae en Indias, como sabemos, en los llamados "Oficiales Reales", título común con que se designa al Tesorero, Contador, Factor, y Veedor de la Real Hacienda. En la organización castellana, sólo encontrábamos el Tesorero de los Partidos, funcionario real intermediario entre la Contaduría y los arrendadores. ¿De dónde, pues, procedían estos títulos? ¿Podía haberse creado instantáneamente una serie de oficios nuevos? SOLORZANO nos demuestra una vez más que no era esto lo corriente: "El hombre y título de Oficiales Reales, -nos dice en su "Política Indiana"-, se hizo a imitación de los que servían en la Corona de Aragón en las aduanas y tablas donde se cobran los derechos de puertos secos, y los títulos de los oficios fueron imitados de los que servían en las Armadas de la Corona de Castilla" (34). Estas palabras del insigne jurista

nos aclaran el proceso seguido y el por qué de la diferenciación en este punto de la organización de Indias, respecto a la de Castilla: la empresa de las Indias es una empresa marítima, en la cual los funcionarios de Hacienda eran los que velaban, al igual que en las Armadas, por los intereses reales; el proceso fue la transformación y estabilización de estos funcionarios en administradores territoriales y la desmembración de los órganos centrales de la Hacienda castellana en cuanto al nombramiento, que lo reciben muy pronto directamente del Rey. Es curioso comprobar el éxito del sistema que vamos arraigar desde el primer momento en la Española, extenderse a la Casa de Contratación sevillana y perdurar por último en todas las Indias durante casi tres siglos (42).

LA ADMINISTRACION CENTRAL.

Examinadas ya las principales características de la organización administrativa de la Hacienda indiana, empezaremos la exposición del sistema administrativo refiriéndonos a los órganos superiores, lo que llamamos administración central, constituida fundamentalmente por el Monarca y el Consejo de Indias, y de modo más secundario por la Casa de Contratación de Sevilla y el Consejo de Hacienda.

Hemos señalado como primera y principal característica de la Hacienda indiana el tratarse en todo momento de una Hacienda propia y exclusiva de la Corona, derivación

lógica de la concepción política de la época. Si como consecuencia de esta concepción, el Rey poseerá, en su calidad de absoluto señor, facultades omnímodas en todo lo que se refiere a esa Hacienda, es lógico pensar que no ya la "administración por menor", encargada a sus Oficiales Reales, sino gran parte de la "administración por mayor", es decir, la que se refiere a la dirección e impulso de la Hacienda, será delegada en los órganos superiores de la administración, ya sea el Consejo de Indias, ya sean las autoridades gubernativas que representan al Monarca en los nuevos territorios. Ahora bien, ¿cuáles son las facultades, que, de modo estricto, reserva el Rey para sí?

Partiendo de aquella idea del dominio eminente de la Corona respecto a los territorios descubiertos, se comprende que quede al Monarca la voluntad de señalar las condiciones de explotación económica de las Indias; y así, desde el primer momento, deja sentado su derecho a fijar el sistema de explotación minera (43); pacta con los caudillos las capitulaciones de descubrimiento y población que adoptan, incluso en la forma, carácter de concesión; señala cuáles han de ser las granjerías reales; y, desde el punto de vista fiscal, establece los impuestos que crea convenientes, incluso cede parte de los ingresos procedentes de éstos, por ejemplo, los derechos de fundición, a título de merced (44).

Cuando, después de algún tiempo, quedan fijadas las líneas generales del aprovechamiento económico y está delimitada la esfera de actividad de los organismos fiscales que velan por los intereses reales, la participación directa del

Rey, desde el punto de vista de la administración de la Hacienda, sigue siendo muy importante en algunos aspectos. El más destacable es, sin duda, la fijación de los gastos de Hacienda, materia en la cual el Rey mantiene siempre la iniciativa; en este punto, el Rey establece los salarios de los distintos funcionarios, cuya cuantía sólo podrá modificarse por disposición real (45), por otra parte, prohíbe a las autoridades de Indias, la concesión de mercedes pecunias sin previa autorización, al mismo tiempo que les exige autorización expresa, para que puedan hacer gastos extraordinarios (46). Aparte de esta actividad personal muy explicable ante la necesidad de velar por sus intereses en el punto neurágico, el Rey efectúa el nombramiento de los Oficiales Reales propietarios, es decir, los de carácter permanente, como tendremos ocasión de examinar más detenidamente en el capítulo próximo. Finalmente, el Rey se reserva en todo momento la facultad de crear nuevas imposiciones en Indias (47) o modificar el número de los funcionarios fiscales (48).

El Consejo de Indias recibe delegadas del Monarca amplias facultades en materia de Hacienda. No se trata ahora de entrar a examinar las características de este órgano supremo de la Administración indiana, por otra parte, estudiadas con detalle por SCHAEFER, pero conviene que destaquemos que ningún otro de los Consejos existentes en la Península recibe esta amplitud de facultades. El hecho de que se le concedan en materia de Hacienda, cuando estaba ésta centralizada en la Contaduría Mayor y luego, en el Consejo de Hacienda, fué ocasión de una pugna constante de estos órganos con el Consejo de Indias por mantener la dirección de la

Hacienda indiana. Si bien se consigue desgajar por unos años, estas funciones, como vimos detenidamente en el capítulo anterior (49), el fracaso de los comisionados del Consejo de Hacienda en el Perú y quizá las presiones de los Consejeros de Indias cerca del Rey llevaron muy pronto al restablecimiento de las anteriores facultades, las cuales vamos a examinar rápidamente.

Podemos distinguir dentro de la actividad del Consejo de Indias en materia de Hacienda dos direcciones claramente señaladas: una, la de velar por el desarrollo y fomento de la Hacienda Real, y otra, dirigida a asegurar la pureza en la administración de los Oficiales Reales.

Las Ordenanzas que recibe el Consejo señalaban la obligación de deliberar con la mayor frecuencia posible sobre las medidas que fueren convenientes al aumento de la Hacienda Real (50). Aparte de estas reuniones ordinarias del Consejo para tratar de asuntos relacionados con el funcionamiento de la Hacienda, (resolución de expedientes, nombramiento de Oficiales Reales (51), expedientes, consultas, etc.), a fines del año 1595 se creaba una "Junta de Hacienda de Indias", que al igual de otras Juntas, -de la Armada del Océano, de Guerra, etc.- debería funcionar en el seno del Consejo, asignándosele la única misión de procurar el aumento de ingresos en las colonias (52). Esta finalidad, causa de su creación, hace que el objeto de su actividad rebase el aspecto puramente rentístico, extendiéndose también al comercio, fuente posible de riqueza, que había sido muy mal aprovechada hasta entonces, y así vemos que el Informe con que comienza su labor en 1596, está dirigido de modo exclu-

sivo al desarrollo del comercio (53). Parece ser que trabajó la Junta con vivo interés en el cumplimiento de su cometido; concretamente sabemos que en materia de Hacienda, comenzó por investigar los "asientos" o convenios financieros entre el Fisco y los particulares para la explotación de determinados productos coloniales, concretamente dos convenios antiguos, uno con Don Francisco de Mendoza, hijo del primer Virrey de Nueva España, referente al cultivo de pimienta, clavo, canela, jengibre, y otras especias y otro con los alemanes Enrique Ehinger y Alberto Kuhn sobre el pastel y azafrán, aunque parece que no se resolvió nada de momento hasta tanto el Virrey de Nueva España informara sobre el asunto (54); también propuso la Junta, previa consulta al Virrey, que se importase la cochinita de Nueva España por cuenta de la Corona, con lo que se esperaba obtener una ganancia superior a los 100.000 ducados; dió una serie de disposiciones sobre las minas de Quito (55); y finalmente, intervino de modo eficaz en la solución del tráfico del azogue en el Perú (56) y en la introducción de la alcabala en Indias, que como tuvimos ocasión de ver al hablar del desarrollo histórico de la administración de la Hacienda, se comenzó a establecer el año 1591 en el Virreinato del Perú. Según ESCHAEFER, esta Junta debió desaparecer hacia 1604 y su actuación no tuvo gran importancia (57).

Dijimos que la labor directora del Consejo en Materia de Hacienda se dirigía también a fiscalizar la actuación de los Oficiales Reales de Hacienda. Esta función era conseguida por dos caminos diferentes: mediante inspecciones directas a los distritos fiscales (visitas) y por la revisión de las cuentas que los Oficiales Reales están obligados a llevar en sus libros, bien directamente en Indias, por medio de

contadores especiales, o, lo que es más usual, por la revisión de las copias que aquellos funcionarios están obligados a remitir anualmente a la Contaduría del Consejo. En cuanto a la primera facultad -efectuar visitas a las Cajas Reales- es simplemente una ampliación de las facultades concedidas al Consejo para tomar residencia u ordenar visitas a los órganos administrativos coloniales (58); en la práctica se llevó a cabo en diversas ocasiones, bien de un modo especial, bien, con motivo de una Visita General a un territorio. La revisión de las cuentas por enviados especiales fue práctica usada durante todo el siglo XVI, como ya veremos, si bien es cierto, con escasa frecuencia. Finalmente, la práctica que prevalece -revisión de copias de las cuentas en el propio Consejo- da lugar a la creación de una Sección propia en el Consejo: la Contaduría Mayor, cuya gestación y características esbozamos ligeramente.

En las Ordenanzas dadas en Monzón el 15 de Junio de 1510 para la Casa de Contratación de Sevilla (59) se señalaba la obligación de asentar en un libro especial las cuentas que los Oficiales Reales enviaran de las Indias. No debían intervenir en su revisión los Contadores Mayores de Castilla, a pesar de su gran influjo, siendo misión exclusiva de los Oficiales de la Casa, entonces supremos directores de los asuntos indianos (60). Cuando se crea el Consejo de Indias y la Casa de Contratación sevillana le queda subordinada, vemos intervenir muy pronto a aquel organismo en materia de cuentas: el 29 de Noviembre de 1537, el Consejo ordenaba al Juez Visitador de la Casa que después de examinadas las cuentas de la misma, fueran revisadas las de los Oficiales Reales y las de los Contadores de Armadas (61). La necesidad de llevar la contabilidad propia del Consejo

llevó a crear en 1538 un Oficial de Cuentas, que sirvió el cargo hasta su muerte, ocurrida en 1556 (62). A partir de 1567, encontramos ya Contadores en propiedad, cargo que se estabiliza a partir de entonces (63); probablemente en esta medida, que da vida propia a la Contaduría, ha influido la acumulación de trabajo originada por la revisión de las cuentas de los Oficiales Reales, tarea que se encomienda ahora al Consejo (64).

La Contaduría no contaba con un cuerpo de ordenanzas propio; las ordenanzas del Consejo de Indias del año 1571 hacía en los capítulos 103 a 104 una remisión a las respectivas Ordenanzas de la Contaduría Mayor, que habían sido promulgadas en La Coruña el 11 de Junio de 1564 y que fueron insertadas en la Recopilación Castellana del año 1567. Sabemos que en 1568 se hicieron algunas reformas en la composición de la Contaduría Mayor de Hacienda de Castilla y al año siguiente en la de Cuentas; estas reformas no debieron afectar a la Contaduría del Consejo de Indias (65). En 17 de Abril de 1577 encontramos unas "Adiciones para la exacta dirección de la Contaduría General del Consejo de Indias", firmadas por el Secretario del Consejo, Juan de Ledesma (66). Las indicaciones de Ledesma que por las razones anteriores reciben el simple nombre de "adiciones", van dirigidas en su mayor parte a salvar el retraso en la revisión de cuentas, mediante horas extraordinarias; no señalan en lo que se refiere a la organización de la Contaduría ninguna especialidad respecto a la de Castilla; aparte de urgir se lleve el Libro de Cargos, como se hace en ésta, indica la necesidad de que haya un libro aparte donde se asienten por su orden las cuentas que hay en la Contaduría y las que en

adelante vinieren de las Indias, "porque ay grandissima confusión en esto" y finalmente la conveniencia de que los Oficiales de la Casa de Contratación sevillana dieran cuenta a aquel organismo de lo que hasta entonces hubiera llegado de Indias procedente de los bienes de difuntos (67). No sabemos, por último, si alcanzarían también a la Contaduría del Consejo de Indias las reformas que GALLARDO señala en la organización de la Contaduría Mayor de Cuentas de Castilla en los años 1581, 1583 y 1593, aunque no lo creemos tampoco probable (68).

Las funciones de la Contaduría del Consejo de Indias eran muy extensas pues abarcaban tanto las cuentas propias del Consejo (cuentas del Receptor de Penas (69), sueldos de los Consejeros, aumentados a medida que crece la burocracia dentro del mismo, etc.), como la revisión de las de la Casa de la Contratación sevillana (70) y las enviadas por los Oficiales Reales de las Indias. También debía entender en el envío por el Consejo de los Contadores especiales a las Indias (Portocarrero, Sierraalta, Irigoyen, etc., que eran probablemente miembros de la misma), y finalmente llevaba razón de los gastos extraordinarios que el Rey permitía hacer en Indias, función análoga a la que desempeñaba anteriormente la Contaduría Mayor de Castilla (71). Es interesante consignar que en un Memorial suscrito hacia 1608, referente a la Casa de Contratación de Sevilla (72), se proponía como medida muy conveniente la supresión de la Contaduría del Consejo de Indias una vez que las cuentas de Indias eran vistas por los Tribunales de Cuentas recientemente creados. Las de la Casa de Contratación de Sevilla po-

drían ser tomadas por los Contadores del Consejo de Hacienda, encargado de la distribución de los ingresos existentes en la Casa, procedentes del Fisco indiano (73); en caso de que la medida pareciera excesiva podría limitarse a una reducción del número de Contadores, pudiendo dejarse dos para tomar las cuentas del Receptor del Consejo. La propuesta no parece que tuvo éxito, pues vemos que continúa en los años posteriores al envío de las cuentas de los Oficiales Reales al Consejo de Indias para darles el finiquito, como última nota interesante respecto a la Contaduría diremos que algunos ministros de ella fueron promovidos posteriormente a la Contaduría Mayor de Castilla (74).

Restáanos para completar el cuadro de la administración central de la Hacienda de Indias señalar brevemente la participación que tienen en este punto la Casa de Contratación de Sevilla y el Consejo de Hacienda de Castilla. Respecto a la primera, hemos visto el papel importantísimo que asume en materia de Hacienda en los primeros tiempos de la colonización (75). Una vez estabilizado el Consejo de Indias y la Contaduría del mismo, sus funciones se reducen únicamente a mantener estrecha relación con los Factores de las Indias, a los que remite mercancías para su venta, a recibir y custodiar las remesas de oro y plata que le hacen los Oficiales Reales y cuya contabilidad ha de llevar escrupulosamente y finalmente a recibir las fianzas de los funcionarios reales antes de pasar a Indias, aunque en este punto, es con carácter facultativo, ya que se permite la libertad de hacerlo en aquellos territorios. En cuanto al Consejo de Hacienda, aún parece menor su intervención a partir de 1542, fecha en

que se le quita la dirección de la Hacienda que se le encomendara en 1557. Cuando volvió a darse la dirección de la Hacienda indiana al Consejo de Indias -cuenta SOLÓRZANO- "fue con advertencia de que dos del Consejo de ella (el de Hacienda) pasaran al de las Indias las veces que fuesen llamados por él, de orden de Su Magestad, para conferir lo que en estas materias dudase. Y esta forma se ha ido guardando algunas veces, como se refiere en la del año de 1584, dada sobre el Gobierno del mismo Consejo" (76). Esta labor consultiva, única del Consejo de Hacienda, cuya realización queda además a potestad del Consejo de Indias, debió ser limitada en la práctica, como parece deducirse de las palabras de SOLÓRZANO, reduciéndose probablemente a aquella en que habían de tomarse medidas muy importantes relacionadas con la Hacienda. No es extraño, pues, que al proyectarse la creación de Tribunales de Cuentas en Indias, a principios del siglo XVII, se acuerde confiar el estudio de tan importante cuestión a una comisión compuesta de miembros de uno y otro Consejo (77).

ORGANIZACION TERRITORIAL.

Y entrando ya a estudiar la organización implantada en las Indias, vamos a referirnos en primer término al aspecto territorial, con la advertencia previa de que es el elemento personal, el Oficial Real, el fundamental y el que da personalidad a los distritos fiscales: existe un distrito en tanto en cuanto existen Oficiales Reales con jurisdic-

ción sobre el territorio que aquél abarca; la creación del distrito es, pues, una consecuencia, y no un antecedente de la aparición de los Oficiales Reales en un determinado territorio (78).

Generalmente, cuando se nombran los funcionarios fiscales para un nuevo lugar descubierto, se les señala en sus títulos una esfera de actividad, por lo regular, excesivamente amplia y sin delimitación exacta. Esto transitoriamente da origen a confusión en las respectivas demarcaciones como vimos ocurrió en la Nueva España y América Central (79), confusión que desaparece a medida que aumenta un conocimiento mayor del territorio y se hace posible corregir los errores iniciales. Así van perfilándose una serie de esferas territoriales de carácter fiscal que reciben su nombre de la cabecera donde se fija la sede de los Oficiales Reales y se establece una Caja Real. Del período que estudiamos hasta 1605 conocemos las siguientes Cajas (80):

México, Guadalajara, Zacateca (81), Veracruz, Acapulco, Guadiana e Durango, Yucatán, Tabasco, S. Agustín de la Florida, Guatemala, Nicaragua, Comayagua u Honduras (82), Sonsonate, Chiapa, Santo Domingo, Puerto Rico, Cuba, Jamaica, Habana, Santa Fé de Bogotá, Cartagena, Antioquia (83), Panamá, Popayán (84), Portobelo, Santa Marta, Quito, Valladolid, Remedios, Rio Hacha, Mariquita, Zaragoza, Muros, Cáceres, Santa Ana de Core, Nueva Segovia, Santiago de León, Caracas, Valencia del Rey, Marquicimete, Portillo de Carera, Trujillo (de Venezuela), Tocuyo, Burburuata (85), Cumand,

Isla Margarita, Lima, Potosí, Trujillo, Arequipa, Cuzco, Huancavelica, Charcas, La Paz, Chile, Piura, Paita, Castrovirreina, Zamora, Chuquito, Guanuco, Guananga, Cuenca, Chachapoyas, Jaén, Loja, Panilla (86), Río de la Plata, Tucumán, islas Salomón y la de la Gobernación de Seipa o Guayanas (87).

¿Obedece a un plan lógico esta creación de distintas Cajas o, por el contrario, van apareciendo a voluntad y capricho del Monarca? ¿Constituyen una organización rígida o bien puede alterarse el número o la amplitud de los ministros? ¿Tienen todas las cabeceras de distrito la misma categoría? ¿Se mantienen aisladas entre sí o bien establecen relaciones mutuas? Tales son los problemas más interesantes de la organización fiscal, cuyo estudio nos toca abordar a continuación.

LOPEZ DE VELASCO en su "Descripción Universal de las Indias", escrita hacia 1575 (88), dice que "los asientos y distritos de los Oficiales propietarios de la Hacienda Real y Cajas Reales y Casas de fundición suelen ser en las partes donde hay Audiencias y Gobernadores con título de Su Majestad y en algunas otras donde hay puertos". Vemos apuntar aquí los dos motivos que tuvieron generalmente de criterio para la fijación de las cabeceras de los distritos fiscales: uno, relacionado con la organización territorial general, -sedes audienciales, residencias del Gobernador-, otro, estrictamente económico -puertos de mar, asientos mineros, etc.- A estos motivos viene a añadirse algunas veces otro: sucede a veces que la gran distancia

de una región a la cabecera o sede de los Oficiales Reales, hace muy difícil la administración normal de la Hacienda (recaudación de diezmos, tributos, etc.); en tales casos, aun sin existir una fuente importantísima de ingresos, suele crearse una Caja Real cuya administración queda en manos de los Tenientes de los Oficiales de la cabecera (89). Es definitiva, pueden resumirse estos tres factores generatrices en uno sólo: se establecen Cajas Reales allí donde las necesidades de la Hacienda lo requieran.

De esta última conclusión surge una consecuencia lógica: si los intereses de la Hacienda son los determinantes de la aparición de Cajas Reales, cuando aparece una nueva fuente de ingresos de cierta importancia, (aumento de tráfico en un puerto, descubrimiento de nuevas minas), deberá crearse allí una nueva Caja, aunque para ello tengan que modificarse los límites anteriores de los distritos fiscales: tal es el caso de numerosas Cajas, como las de Veracruz, Acapulco, Zacatecas, Potosí, etc. Y viceversa, cuando se agote totalmente una fuente de riqueza que dió origen a una Caja Real, caso mucho menos frecuente en el siglo XVI esta última será suprimida (90). Como puede verse, la organización de la Hacienda, desde el punto de vista territorial, es lo suficientemente elástica para amoldarse a la realidad en todo momento. Estas transformaciones pueden ser dispuestas por el Virrey, aun cuando necesite posteriormente confirmación real (91).

Partiendo de un nuevo punto de vista, podemos clasificar las Cajas Reales en dos grupos: aquellas que están administradas por Oficiales Reales propietarios, que lla-

haremos "principales" y las que lo son por sus Tenientes, al menos en número de dos (aun cuando haya también de modo permanente y transitorio un Oficial propietario) y que están subordinadas a las primeras. Suelen ser principales las Cajas de las cabeceras de los Virreinos y Gobernaciones y subordinadas las Cajas Reales de los puertos. Esta distinción tiene gran interés para explicar las relaciones existentes entre las distintas Cajas Reales. En principio, las Cajas principales mantienen entre sí la más completa autonomía administrativa, aun cuando estén enclavadas dentro de un mismo Virreinato, como ocurre con las de México y Guadalajara. Sin embargo, la necesidad de efectuar los envíos de oro y plata a la Península a través del sistema de flotas, crea una serie de relaciones entre los Oficiales de las distintas Cajas principales. Como es sabido, las flotas suelen tocar en Cartagena, Nombre de Dios (o Portobelo) y Veracruz, y por eso vemos concentrarse el producto de los ingresos de la Hacienda indiana en estos puertos. Los Oficiales de Veracruz reciben el oro de las cajas de Nueva Galicia (92), México y Guatemala (93); el procedente de las Cajas de Potosí, Oruro, La Paz, Cuzco, Castrovirreina, Arequipa, Trujillo y Lima es enviado por el puerto del Callao a Panamá y posteriormente a Nombre de Dios (94); los Oficiales de Popayán lo hacían por tierra a través del Nuevo Reino de Granada para embarcar en Cartagena, pero desde 1562 prefieren seguir el camino de Panamá (95); los envíos de Veragua se hacían por Nombre de

Dios o Panamá, según que los metales preciosos fueran extraídos en la vertiente del Atlántico o del Pacífico (96); la Caja de Cabo de la Vela y Cubagua le enviaba al principio por Cartagena, pero desde 1547 lo hacía a la Española (97); las remesas de Venezuela, aunque podían enviarse directamente a Sevilla, solían hacerse a través de la Española (98) y el mismo camino parece que usaban los de San Juan de Puerto Rico (99) y finalmente, la Caja de Manila, creada a mediados del siglo XVI, mantenía una constante relación con la de Acapulco. Aun cuando las actividades de las Cajas respectivas se limiten simplemente a recibir el oro y efectuar su embarque, este tráfico daba lugar, como habrá podido apreciarse, a una constante relación entre los Oficiales de los distintos distritos. También los "situados" y el comercio entre los puertos indianos (tal el tráfico desde Panamá al Callao y de Manila a Acapulco), exigían constantes relaciones entre los funcionarios de Hacienda.

Las Cajas Reales "subordinadas" mantenían otra especie de relaciones, limitadas además generalmente (excepciones principales la constituyen los puertos de Veracruz y Acapulco) a las relaciones con la Caja principal respectiva. Solían ser Cajas subordinadas todas aquellas desgajadas de una principal por necesidades de la Hacienda y casi siempre estaban situadas en los puertos o en regiones muy alejadas del asiento de los Oficiales propietarios (100). La dependencia de estas Cajas respecto a la principal no tenía el mismo alcance en todas ellas; en general, los Tenientes que las administraban recaudaban los ingresos en el distrito que se les señalaba, reducidos casi siempre a la ciudad donde tenían su residencia (101

pagando únicamente cuando se les exhibía una libranza expedida por los Oficiales propietarios de la Caja principal respectiva. Pero la larga distancia que había desde las Cajas subordinadas del interior del país a la cabecera respectiva, que ya había sido causa de su creación, hizo que algunas veces se les concediera mayor autonomía en esta cuestión de los pagos: tal ocurrió, por ejemplo, en algunas de la Gobernación de Venezuela (102). De todos modos la subordinación y con ella, la distinción de las principales (103) era siempre evidente.

La subordinación de los Tenientes que administraban estas Cajas respecto a los Oficiales propietarios de la Caja principal respectiva obligaba a una serie de relaciones entre ellas; de un modo periódico, los Oficiales Reales de la cabecera acordaban en las Juntas de Hacienda la necesidad de efectuar un viaje a las Cajas subordinadas. Las causas de estos viajes era generalmente "el buen recaudo y claridad de la Hacienda Real" que exigía la concentración del oro en una sola Caja y una contabilidad única (104), aunque a veces eran necesidades puramente circunstanciales, como la falta de dinero en la Caja principal para el pago de salarios y alguna vez el riesgo de ataques de corsarios a los puertos (105). Por regla general se nombraba un Comisario con facultades especiales, Comisario que solía ser algún Teniente de Hacienda y muchas veces un vecino cualquiera, que ofreciera garantías de "habilidad, suficiencia y riqueza" y que prestara además fianzas "legas, llanas y abonadas a contento de los Oficiales Reales". Estos viajes de los Comisarios duraban a veces largo tiempo, sobre

todo cuando se trataba de recoger el oro de varias Cajas, generalmente muy alejadas unas de otras (106) con la consiguiente abundancia de riesgos en una época de tan malas comunicaciones; esto hacía que muchas veces no se encontrase a nadie que aceptase la comisión y entonces tenía que efectuarlo uno de los Oficiales propietarios (107). También era uno de éstos quien solía realizar la visita a los puertos, generalmente por turno, como expresamente se ordenaba en las Instrucciones y Ordenanzas (108). En todos estos casos en que era un Oficial propietario el visitante los efectos de la Caja quedaban durante el tiempo de su estancia, bajo su custodia, lo cual-explican los Oficiales Reales de Venezuela en uno de sus Acuerdos, refiriéndose a un viaje del Contador-, "se entiende que se hace sin poner mácula ni escórquile en ningún teniente de tesorero, sino porque el dicho Contador es oficial principal de S.M. y en quien S.M. tiene hecha confianza" (109).

LOS FUNCIONARIOS DE HACIENDA.

Cuando del aspecto territorial se pasa a examinar el elemento personal de la administración de la Hacienda en los territorios indianos, nos encontramos con una intervención de la mayor parte de las personas que en aquellas tierras gozan de alguna autoridad: Virreyes, Gobernado-

res, miembros de las Reales Audiencias, Corregidores, Oficiales Reales, etc. (110). A continuación nos proponemos exponer en líneas generales cuál es el alcance de esta intervención en materia de Hacienda en cada una de ellas, para lo cual, rechazando la clasificación usual en escritos de la época de "administración por mayor", y "administración por menor", que solo permite contraponer las funciones del Virrey y Oficiales Reales (111), agrupamos todo lo que de algún modo participen en la administración de la Hacienda en dos grandes grupos: los propiamente funcionarios fiscales y los que, aun desempeñando tareas de gobierno o de administración de justicia, poseen además por mandato o autorización real alguna función en la administración de la Hacienda.

Los funcionarios típicos de la Hacienda en Indias son los Oficiales Reales. Bajo este nombre genérico - escribe ESCALONA - se comprende al Contador, Tesorero, Factor, Proveedor, Pagador y Veedor (112). Los proveedores de bastimentos y pertrechos para el aparejo de las Armadas y los Ejércitos no tienen interés para nosotros por desempeñar funciones ajenas a la administración de la Hacienda indiana (113), y por otra parte en el siglo XVI no aparece nunca en los documentos referente al Fisco la figura del Pagador, cuyas tareas no nos explica ESCALONA. Quedan, pues, los cuatro Oficiales Reales por antonomasia: Contador, Tesorero,

Factor y Veedor. Ya hemos visto (114) cómo los cargos de Factor y Veedor se unieron en una sola persona, y en muchos territorios sus funciones se acumularon a las de Contadores y Tesoreros. Pero sea en número de tres personas, que es el que más predominó, sea en el de dos, las tareas asignadas a cada uno de esos títulos estaba perfectamente delimitada:

El Contador ejerce una misión de control sobre lo que entra y sale en la Caja; certifica y cuida de los papeles y ordena las libranzas.

El Tesorero cuida del Tesoro; recibe los ingresos y efectúa los pagos que se le libran.

El Factor es un gerente real de negocios; como tal, mantiene un constante intercambio con los otros factores y la Casa de Contratación de Sevilla; tiene a su custodia los almacenes en que se depositan las mercancías pertenecientes al Rey, bien sean los procedentes del pago de tributos, bien del intercambio comercial, bien de mercancías caídas en comiso; cuida de todo lo referente a las ventas de estos géneros, y finalmente, custodia también en los almacenes reales las armas y las municiones.

El Veedor de fundiciones y rescates, una vez que disminuyen o cesan éstos a medida que avanza el tiempo, limita sus tareas a velar por los intereses reales, en lo referente a fundiciones, aunque en la segunda mitad del XVI desaparece como funcionario independiente.

Basta esta enumeración por ahora ya que la importan-

cia de estos Oficiales en lo referente a la administración del Pisco, exigirá nos detengamos posteriormente en su estudio. El examinar cómo se nombran, cuáles son sus derechos y obligaciones, cuáles sus preeminencias, qué clase de jurisdicción poseen causas que originan la pérdida del oficio; es decir, todo lo que constituye el régimen jurídico de estos Oficiales Reales, constituirá el objeto del capítulo siguiente, dejando para los posteriores el estudio de otros aspectos interesantes relacionados con ellos (sistema de garantías que asegure la fidelidad en el desempeño de sus cargos, participación de estos Oficiales en las tareas de gobierno, etc.).

Continuando con el cuadro de funcionarios de la Hacienda, nos toca hablar ahora de los Tenientes de Oficiales Reales. La aparición de estos Tenientes o Lugartenientes no constituía ninguna innovación; desde los primeros momentos, se hace práctica acostumbrada el que las autoridades de la colonia (p. ej., los gobernadores) tengan uno o varios Tenientes. En materia de Hacienda vimos que en los primeros momentos pasa a Indias uno de los Tenientes de los Contadores Mayores de Castilla. A pesar de esto, parece ser que en algunos territorios, como los de la Nueva España, no hubo Tenientes durante algún tiempo; cuando hicieron su aparición fue debido a iniciativa de los Oficiales Reales, no de la Corona (115).

Las necesidades prácticas de la administración de la Hacienda y las mismas características de esta admi-

nistración generalizaron a todos los territorios la práctica de nombrar Tenientes. El principio de administración personal consignado en todas las Ordenanzas de Oficiales (116) no podía ser cumplido en aquellas circunstancias -numerosas- en que uno de los Oficiales Reales contraía una enfermedad o se veía obligado a una ausencia forzosa (p. ej., por ir de Oficial de entradas, o haber ido a visitar las Cajas de los puertos o del interior del distrito o tener que marchar a la Península) (117); en estos casos fué necesario autorizar el nombramiento de un sustituto Teniente que realizara las tareas propias del Oficial propietario (118). La necesidad de velar de un modo permanente por los intereses del Fisco en los puertos y en los centros mineros importantes (119), y la de crear Cajas en regiones apartadas de la cabecera, exigió ampliar el número de Tenientes. Finalmente, el principio de administración conjunta, básico en el sistema administrativo de la Hacienda indiana, obligó necesariamente a que en toda actuación aislada de un Oficial Real (viajes al interior o a los puertos), viajes de rescates) intervinieran los Tenientes de los otros Oficiales.

Toda esta variedad de Tenientes, ya residan en la sede de los Oficiales propietarios, ya permanescan de modo invariable al frente de las Cajas subordinadas, pueden ser reunidas. desde el punto de vista jurídico, en un solo grupo y conjuntamente será estudiado su régimen jurídico en el capítulo próximo. Frente a ellos, conviene distinguir aquellas personas que también susti-

tuyen a los Oficiales Reales, pero sólo en aquellos casos en que un Oficial Real abandone de modo definitivo el ejercicio de su cargo, ya sea por muerte, ya por pérdida del oficio. Este segundo grupo no recibe nunca el nombre de Teniente, se le conceden casi todos los derechos y prerrogativas del Oficial Real, y en realidad no se distingue de éste, más que por su carácter interino lo que, como veremos también en el próximo capítulo, es causa de algunas diferencias en su régimen jurídico.

En esta enumeración de los funcionarios de la Hacienda, debemos incluir un grupo caracterizado por la interinidad en el desempeño de su oficio. Nos referimos a los Oficiales de entradas y expediciones y a los Comisarios. La aparición de los Oficiales de entradas y expediciones es una consecuencia de la práctica exigida desde el primer momento por la Gerencia de que un representante real acompañara a los Caudillos en sus expediciones de conquista; ya vimos como se incorporó a las capitulaciones la obligación de llevarlos consigo y cómo normalmente solían quedarse como primeros Oficiales propietarios en el territorio conquistado. Una vez asentados en una región determinada, solían realizarse numerosas expediciones o "entradas" que tenían por objeto un mejor conocimiento del país o la obtención de botín; en estos casos, los Oficiales Reales en "Acuerdos", designaban la persona que había de llevar la marca real y debía velar por los derechos del Fisco durante la expedición (120); muchas veces era designado uno de los propios Oficiales, pero otras

señal encomendarse a un sujeto solvente que se constituía en Oficial de la "entrada", terminando sus facultades al regresar al asiento de los Oficiales propietarios, ante los cuales debía rendir cuentas (121). Pueden asimilarse a ellos los Oficiales nombrados para expediciones marítimas, como la realizada por el Contador Gil González Dávila por las costas centro-americanas del Mar del Sur en 1523 (122).

Los Comisarios eran enviados especiales de los Oficiales Reales con una misión concreta, generalmente la visita a las Cajas subordinadas para recoger los fondos recaudados desde la anterior visita. El Libro de Acuerdos de los Oficiales Reales de Venezuela nos ha proporcionado algunos datos interesantes sobre estos Comisarios: su designación ha de hacerse en Junta de Oficiales y puede recaer en un Teniente como persona práctica en cosas de Hacienda o en un vecino cualquiera que reúna las condiciones de habilidad y suficiencia necesarias; después de prestar fianzas "legas, llanas y abonadas, a contento de los Oficiales Reales", recibe de éstos una comisión y poder, con las cuales se presenta al Gobernador "pidiendo le dé orden que ha de tener en el recoger y traer la dicha moneda con la seguridad que convenga y para que le dé comisión para que pueda obligar a los vecinos de las dichas ciudades a que vengán haciendo escolta a la Real Hacienda en las partes que viere que convenga". Se le concede poder para tomar cuentas a los Tenientes de cada pueblo "y a los demás personas a cuyo cargo estuviere la Hacienda", como de mo-

y arrendadores, pudiendo además cobrarles el alcance que resulte en dicha toma de cuentas; se le exige traiga un testimonio, realizado ante escribano público, de cada cuenta que tomase con el fin de asentarlo en los libros reales, finalmente, el enviado recibe por su trabajo una cantidad variable que fijan los Oficiales Reales en Acuerdo. A veces se nombran comisionados con una misión distinta: la de cobrar a los deudores de la Real Hacienda, en los distritos de los Tenientes; según nos hace saber uno de los Acuerdos citados, solía encargarse del cobro de estas deudas a los Tenientes de los pueblos, pero éstos "por ser vecinos dallas, no las han hecho ni se tiene esperanza la harán"; la consecuencia en estos casos era una acumulación de deudas (20.000 escudos de buena moneda, señala un acuerdo de 1602), y la necesidad de enviar un delegado con amplios poderes (123); este Comisario (o Juez de Cobranza como también se le llama en las fuentes) notifica a los deudores la obligación de pagar dentro de un plazo no superior a 15 días, pasado el cual se le ha de pagar "repartido entre los deudores rata por cantidad en el tiempo" un salario de dos pesos de oro fino cada día, cuantía que algunas veces vemos rebajar a petición de las ciudades interesadas; si los deudores pagan dentro del plazo señalado, el Juez comisionado cobra entonces de la Real Hacienda (124).

También debemos mencionar entre los que actúan con carácter transitorio a los Contadores especiales comisionados por la Administración Central para la toma de cuentas a los Oficiales Reales (125).

Las fuentes hacen referencia a distintos funcionarios que intervienen en la administración de un impuesto determinado. Hemos de mencionar entre ellos al receptor de alcabalas (126), al contador de tributos y arregues (127), y ya en el siglo XVII, al receptor de penas de cámara (128).

Finalmente, completaremos el cuadro de funcionarios de la Hacienda en Indias con los escribanos Mayores de rentas y los de minas y registros. La escribanía mayor de rentas aparece en Indias en 1508 (129), en 1526 se concede la de Nueva España a título de merced al doctor Beltrán, señalándosele un salario de 10.000 maravedís que ha de cobrar de las propias rentas (130); sin embargo, ya en 1580 se ordena a los Oficiales Reales de Nueva España "no se le pague cosa de la Real Hacienda por razón del dicho oficio" (131) y dos años más tarde, se incorporaba a la Corona (132).

La participación del escribano mayor de minas y registros en la administración de la Hacienda ofrece un gran interés. Su misión no está limitada, como pudiera hacer creer el título que recibe, a las cuestiones relacionadas con el "quinto" de los metales preciosos; aunque en este punto, su participación es muy importante (133), le vemos asumir desde los primeros momentos un papel fiscalizador de toda actividad relacionada con el Tesoro Real, constituyéndose en elemento principal para poder hacer los cargos a los Oficiales Reales; con este objeto se ordena le sean entregadas relaciones de los ingresos de la Hacienda Real y de los gastos ordinarios de la misma (salarios, mercedes, situaciones); asude a todas aque-

llas operaciones donde se recibe o entrega Hacienda Real (almonedas, fundiciones, evaluaciones, etc.); es necesaria su presencia en todas las ocasiones en que los Oficiales Reales introduzcan fondos en la Caja y no puede pagarse ninguna libranza que no vaya señalada por él; debe llevar libro de cargo del Tesorero y finalmente, asiste siempre que se hacen cargos a alguno de los Oficiales Reales (134). Este oficio fué concedido también durante algún tiempo como merced (135), y solía acumularse de hecho a otros especialmente al de Veedor de Fundiciones (136).

PARTICIPACION DE LOS ORGANOS
DE GOBIERNO Y DE JUSTICIA EN
LA ADMINISTRACION DE LA HA-
CIENDA INDIANA.

Quédanos por examinar, para completar el estudio del elemento personal en la Administración de la Hacienda indiana, las funciones asignadas por la Corona a los órganos de gobierno y de justicia, y, concretamente, la participación en estas tareas administrativas de los Virreyes, Gobernadores, Fiscales y Oidores de las Audiencias, Corregidores y Alcaldes Ordinarios.

Corresponde al Virrey como suprema autoridad gubernativa del territorio la "superintendencia" o "administración por mayor" de la Hacienda. Esta función es reconocida constantemente en las fuentes y en los estudios his-

tóricos modernos, pero sin puntualizar concretamente el contenido de esta facultad (137). Convendría, pues hacerla aquí, con la mayor brevedad posible.

Desde el punto de vista territorial, la jurisdicción del Virrey en materia fiscal se extiende a todas las Cajas del Virreinato. Para ello, suele dárseles en el momento de su provisión una serie de cédulas reales dirigidas a los Presidentes de las Audiencias respectivas, para que se guarden las providencias dadas por él en materia de Hacienda (138). Desde el punto de vista práctico, es muy diversa la intervención del Virrey en los distintos territorios de su demarcación, limitándose muchas veces en cuestiones fiscales a la facultad de aquél para exigir de los Oficiales Reales el envío de dinero o mantenimientos o armas en caso de necesidad (139), facultad que incluso se extiende a todas las Cajas de las Indias. De todos modos, siempre que surge contradicción entre lo proveído por el Virrey y la Audiencia correspondiente, los Oficiales Reales deben atenerse a lo ordenado por el Presidente de esta última (140).

Descendiendo ahora a examinar casuísticamente la intervención del Virrey en materia de Hacienda, podemos agruparlas en funciones legislativas (dar ordenanzas o instrucciones en materia de Hacienda, si lo estima conveniente para su mejor funcionamiento y desarrollo); funciones fiscalizadoras (tomar cuentas; visitar y castigar a los Oficiales Reales por los excesos cometidos en el uso y ejercicio de sus oficios; velar porque los Oficiales cumplan sus oficios y den las convenientes fianzas; cuidar que no se retrase el pago de deudas al Fis-

es); y funciones administrativas (intervención en los Acuerdos de Hacienda; arrendamientos de determinadas rentas y monopolios como las alcabalas, el azogue de Huancavelica y el estanco de naipes; tasación de tributos y formación del arancel para las avaluaciones. Corresponde también al "superior gobierno" de la Hacienda, la de introducir modificaciones en el número, situación y composición de las Cajas; el nombrar Oficiales Reales provisionales, cuando cesaren de modo permanente los propietarios; librar sobre el Tesoro las cantidades que juzgue necesario invertir para el gobierno del Virreinato; pedir donativos extraordinarios para la Corona y cuidar de los envíos de metales preciosos a la Península. En el siglo XVII, cuando fueron creados los Tribunales de Cuentas y los de Cruzada, se le concedió la declaración de competencia entre aquellos Tribunales y cierta participación en lo referente a la Bula de Cruzada, cuya administración había sido siempre autónoma y cerrada a toda intervención del Virrey (141).

La mayor parte de estas funciones serán estudiadas en los capítulos próximos y allí tendremos ocasión de examinarlas detalladamente (142). La función legislativa, ejercida con amplitud en todo momento, como vimos en el capítulo anterior (143), no era más que una consecuencia del poder concedido a los Virreyes para proveer en todo lo tocante a la gobernación de la tierra; las disposiciones que se dieran, tenían además que ser confirmadas por el Monarca, pero según cuenta LEÓN PINELLO, solían guardarse, aunque no tuviesen la confirmación real (144). Buena parte de las restantes facultades fueron utiliza-

das por primera vez en el gobierno del Virrey Toledo (143). En conjunto, el Virrey podía disponer libremente por delegación real, en todo lo referente a la administración de la Hacienda. El Rey se reservaba el nombramiento de los Oficiales propietarios, la creación de oficios nuevos y la implantación de nuevos impuestos (146) y sobre todo, el poder dispositivo de los fondos en cuyo punto quedó muy limitada la facultad de los Virrey, exigiendo además en casi todas las materias la confirmación real para que la decisión de aquél tuviera carácter definitivo.

Es difícil señalar de un modo general las atribuciones de los Gobernadores, porque éstas son muy distintas según los tiempos, según esté el territorio de su jurisdicción incluido o no en el de uno de los Virreinos y, también según que esté o no en ella la sede de la Audiencia.

En general, les corresponden las mismas funciones de "superior gobierno de la Hacienda" que posee el Virrey en aquellos casos en que el Gobernador es la máxima autoridad gubernativa del territorio (147). Así, por ejemplo, poseen la facultad de dar disposiciones referentes a la Hacienda (148); fiscalizan la actuación de los Oficiales Reales (toma de cuentas y cobro de los alcances que resulten (149); intervienen en las operaciones administrativas de aquéllos (Juntas, principalmente, y en algún caso excepcional, la participación en las operaciones corrientes del Fisco) (150). Nombra finalmente a los Oficiales Reales provisionales de la Gobernación y a los

calpisques y mayordomos de los pueblos de indios que están en la Corte Real (151) e interviene en los envíos de metales preciosos (152).

Las Audiencias son desde su creación y durante todo el siglo XVI, los órganos típicamente fiscalizadores de la actuación de los Oficiales Reales de la Hacienda. Acudir a enviar comisionados de España para el control de aquellos funcionarios era, además de costoso, completamente ineficaz; fué, pues, lógico, encomendar esta tarea a las Audiencias, órganos de administración de justicia, completando las garantías con el mayor poder concedido en materia de Hacienda a los Gobernadores de los territorios apartados, donde no pudiera llegar la acción de aquella. Esta función, característica del Fiscal, se hace extensiva al organismo en pleno, y vamos a ver como gran parte de su intencionalidad en la administración del Fisco no tiene más que aquel fundamento. Como es natural, a estas funciones normales de las Audiencias en materia de hacienda, vienen a añadirse en las de México y Lima la de "superior gobierno" que poseen los Virreyes, siempre que dichas Audiencias se constituyen en supremo órgano del gobierno, por quedar vacante el cargo de Virrey.

Corresponde, ante todo, a la Audiencia la función de velar por el exacto cumplimiento de las Instrucciones y Ordenanzas dadas por el Monarca a los Oficiales Reales; en este punto -aplicación lógica de su misión de velar por el cumplimiento de las leyes- son constantes las órdenes reales (153). Es también función típica suya la toma de cuentas a los Oficiales de las Cajas enalavadas en su

distritos; este, que fué práctica acostumbrada desde su creación, quedó establecido de modo permanente por las famosas Ordenanzas de 10 de Mayo de 1554 (154). El Fiscal y un Oidor por turno, asisten a las almonedas, que se celebren en la localidad donde tiene la sede la Audiencia, velando en ellas por los intereses reales; en las restantes localidades, esta función fiscalizadora la ejerce el Gobernador o la justicia de los pueblos. La Audiencia de Santo Domingo extiende esta fiscalización a las operaciones de evaluación de mercaderías llegadas a aquel punto (155). También el Fiscal y un Oidor asisten a la venta de los diezmos, ya que del importe obtenido ha de deducirse la parte correspondiente al Fisco ("dos novenas") (156). En estas tareas de las Audiencias dirigidas a velar por los intereses de la Corona frente a los abusos de los funcionarios o de los particulares, tiene un papel importantísimo el Fiscal de las mismas, del que dice ESCALONA un tanto enfáticamente, "es celador de los que administran su Hacienda, sobrestante de los que la ordenan y reducen a cálculo (escribe en una época en que ya existen los Tribunales de Cuentas), inquisidor de los que la detentan; delator de los que la defraudan; procurador de lo que conduce a su beneficio y finalmente, protector y abogado del soberano señor, con ardimiento lícito y sin ánimo calumnioso" (157). En defensa de los intereses reales, acude a las almonedas, a los remates de los diezmos, a las causas de contrabandos y comisos que ven los Oficiales Reales en sus Tribunales, y a los arrendamientos y asientos de rentas y monopolios reales, porque se juzga que su presencia mejorará la condición del Fisco; cui-

da de que se tomen las cuentas y se nombre las corregidas al acabar el tiempo de su oficio para que se enteren los Oficiales Reales, castigándoles si hubiera lugar y avisando al Consejo de Indias; cuida de modo especial se guarden las Provisiones, Cédulas Reales y Ordenanzas dadas para el aumento de la Hacienda Real; asiste a los Acuerdos de Hacienda para estar enterado de lo que se disponga en esta materia, estando obligado a remitir al Consejo de Indias copia de lo allí tratado; y vela porque el Virrey no haga libramientos injustos, eponiéndose con el respeto debido, a que se paguen libranzas de éste si no han sido aprobadas en Acuerdo; vigila para que las concesiones de dilatorias para el pago de deudas fiscales hechas por los Virreyes, no perjudiquen los derechos del Monarca. En general, en todos los actos en que puede ser perjudicada la Real Hacienda, debe ser citado como parte formal y procurador del Fisco; por eso, ha de constar su citación por escrito en los repartimientos de la Corona, firmando sus últimas retasas (158).

Pero el papel de las Audiencias en materia de Hacienda no queda limitado a esta función de control. Hay que añadir, aparte de la facultad de conocer las causas fiscales hasta la concesión de jurisdicción propia a los Oficiales Reales, su participación en las Juntas Generales de Hacienda (159) y el ejercicio constante de una labor informativa al Consejo de Indias de las medidas convenientes para la mejora del Fisco.

Es muy importante asimismo su participación en la tasación de los tributos (160). Por último, y en íntima relación con sus funciones políticas, tuvieron facultades

propias del "superior gobierno" del Fisco, tales como dar instrucciones, librar sobre el tesoro, nombrar Oficiales Reales con carácter interino, modificar las Cajas, etc.:

La función legislativa, aunque propia de las autoridades de gobierno, es ejercida en Indias, aunque en pequeña escala, por los órganos de administración de justicia (161). La facultad dispositiva estaba limitada de ordinario a la posibilidad de librar entre las penas de Cámara para gastos de la Audiencia, y para el pago de los salarios de los Corregidores (162). Cuando ejercía funciones de gobierno, podía, al igual que los Virreyes, librar para gastos extraordinarios, siempre que esto hubiera sido aprobado en Acuerdo. En este punto es muy significativa una Real Cédula dirigida a la Audiencia de Nueva España el 3 de octubre de 1559: enterado el Monarca de que aquélla ha disminuido "motu proprio" la tasa de los tributos de la Corona Real, le ordena vuelva todo al punto y estado en que estaba antes "porque en lo que toca a nuestra Hacienda no habeis de tener ni en nuestra voluntad que tengias mano alguna para disponer della sin que primero nos lo consulteis y aguardeis nuestra respuesta" (163). También eran limitadas sus facultades en lo referente a los envíos de oro y plata a la Península (164). El nombramiento de Oficiales Reales provisionales solo podía realizarlo la Audiencia en función de gobierno, es decir, en casos excepcionales. También encontramos algún caso aislado en que la Audiencia recibe facultades relacionadas con la organización territorial del Fisco (165) o con otros aspectos de la Hacienda

propio de la "administración por mayor", reservada, como hemos dicho, a los Virreyes (166).

Los Corregidores tenían dentro de sus distritos, la facultad de percibir los tributos (167); en algunos casos excepcionales, desempeñaron funciones más importantes; así, por ejemplo, el Virrey Toledo concedió a algunos la facultad de tomar las cuentas a los Oficiales de determinadas Cajas e incluso les concedió la facultad de tener una de las llaves del arca y la participación en las operaciones de la Hacienda (168).

Los Alcaldes ordinarios, finalmente, tenían a veces participación en la administración de la Hacienda, en las Cajas menores (169). En Cubagua se le concedió a algunos la categoría de un contador (170). De un modo transitorio, y mientras desempeñaba el cargo de Gobernador interino, debía asistir a los Acuerdos de Hacienda (171).

NOTAS AL CAPITULO SEGUNDO

- (1). Vid. Capítulo IV. "Gastos de la Hacienda".
- (2). JOSE M^a OTS CAPDEGUI. "Apuntes para la Historia del Municipio hispano-americano del periodo colonial", en "Anuario de H^a del Derecho Español", I, 1924, pp. 93-126 y también "El regimen municipal hispanoamericano del periodo colonial", en "Tierra Firme", II, 1936, pgs. 352-82; AVELLA VIVES, JOAQUIN, "Los cabildos coloniales" (tesis doctoral) en "Revista de Ciencias Jurídicas y Sociales", ts. XIII a XVII, Madrid 1930-4; FRANCOXS CHEVALIER, "Los municipalitos indios en Nouvelle Espagne", 1520-1620"; en "Anuario de H^a del Derecho Español"; XV, 1944, pgs. 352-68. También es interesante el libro de SARRETON, "La municipalidad colonial". Buenos Aires desde su fundación hasta el Gobierno de Lariz", Bs. Aires, 1933.
- (3). A veces estos "propios" de una ciudad debían abarcar varios pueblos.
Una Real Cédula de 1534 a la Audiencia de México (extracto en "Cepulata", V.72) le ordena provea si se han de poner en la Corona Real los pueblos que se mandaron dar por "propios" a aquella ciudad.
- (4). ALVAREZ RUBIANO, "Pedrerina Dávila", Apéndices, pgs. 569 y 591. (Vid. también nota 11 de este capítulo).
- (5). Hay que insistir en que esto ocurre con aquellos distritos cuya administración corre a cargo de Oficiales Reales propietarios, que son, como vemos más adelante; la inmensa mayoría. Existen otras Cajas a cargo de Tenientes de Oficiales Reales, como las de Veracruz

y Acapulco, que dependen de modo absoluto de los Oficiales propietarios, en este caso, los de México.

- (6). Un aspecto de esta autonomía es la imposibilidad de pagar en una Caja Real una deuda contraída con los Oficiales de otra. Este principio de la autonomía en los pagos que tienen señaladísimas excepciones dispuestas siempre por el Soberano, como los situados en Chile sobre la Caja de Lima, aparece muy bien reflejado en las siguientes palabras de ESCALONA: "La consonancia del Ministerio no induce mancomunidad de una Caja a otra, ni de una a otra región, aunque el patrimonio sea de un mismo dueño" ("Ganophilacium...", L.I, P. II, c. XI, n° 5). Un ejemplo de que esta autonomía en los pagos fue una realidad en la práctica nos lo ofrece el hecho de que cuando el Gobernador de Santa Marta Alonso Luis de Lugo al que el Rey cedió el dozavo de las rentas que se obtuvieron en la Caja de Santa Marta, pretendió cobrarle en perlas en la Caja del Cabo de la Vela, los Oficiales de esta última se negaron rotundamente a entregárselo porque "las provisiones no hablaban con ellos;" cuando el Gobernador desoyendo razones hubo cobrado el dozavo en perlas, el Rey dió cédulas de 20 septiembre 1522 y 6 junio 1543 mostrándose "muy deservido", ordenando la restitución a la Caja y confirmando la opinión de los Oficiales Reales, pues para cobrar de ellas "habíais de llevar mandamiento nuestro para que se acudieran con ello". (AGX., Ind. Gral., 532, fc. 1-4).
- (7). Una R.C. de 22 febrero 1573 ("Ced. Encinas", III, 295; Rec. I., L. VIII, T. III, 1.3) prohíbe a los Oficiales Reales entrometerse a nombrar Tenientes, ejercer jurisdicción proveer autos o diligencias en el distrito de otros Oficiales, debiendo todos y cada uno de ellos contenerse en los límites de la jurisdicción que se les señala al poblar la tierra y poner Oficiales Reales en cada provincia.
- (8). R.C. 15 febrero 1577 inserta en un testimonio autorizado sobre jurisdicción y autoridad del Virrey del Perú, expedido en Panamá a 18 de mayo 1576. (Patronato, 190, 22).- Lo mismo se ordena a las Audiencias de Charcas, La Plata, y Quito.
- (9). Vid. página-----
- (10). Vid. sobre todo el interesante artículo de CLAUDIO SANCHEZ ALBORNOZ, "La Edad Media y la empresa de América". La Plata. Univ. Nac., 1933.
- (11). Un ejemplo típico de estas modificaciones que van introduciéndose en las instituciones castellanas a medida que la realidad va haciéndolas necesarias, lo tomamos en una R.C. al Comendador Ovando, de 15 noviembre 1505 (vid. FARIE, "Ensayo histórico de la legislación española de los asuntos de Ultramar", en Col. docs. ineds. Ult.", V, LXV):, ordena que si no bastaren los

"propios" de los pueblos para hacer caminos, fuentes y demás edificios públicos, ordeno se tenga con ellos repartimiento de los maravedís que fueron necesarios sin regirse en esto por las leyes de Castilla, porque allí hay más necesidad de estos edificios públicos y se hace menos daño a los poblados aunque los reparte entre sí".

- (12).FRANCOIS CHEVALIER. " Los municipalitós indiennes en Muovelle Espagne". 1520-1620" . un "An,II^e D^e Esp.",XV. 1944.p. 352.
- (13).Puede verse sobre este punto: ESGUXVEL OBREGON,"Apuntes para la Historia del Derecho en México", t. II. México 1937, y los intereses manuscritos de la época citados en la nota 16.
- (14).Tenemos una relación de las rentas de la Corona castellana poco antes del descubrimiento de América: los Reyes Católicos en la instrucción de 1476 a los nuevos Contadores Mayores de Castilla, les decían que tomen cuentas de todos los que hubieren tenido cargos de alcabalas, rentas, pedidos, mercedes, moneda forera, salinas, martiniega, pedido líquido, servicios y medidos servicios, cabezas de pechos de judíos e moros, empréstos e diezmo de las partes de la mar, e de la tierra, e diezmo o medio diezmo de lo morisco, derechos de la casa de la moneda, e servicios, e montazgo, e penas de Cámara, o de los Reales Alcázares e Atarazanas: (inserto en GALLARDO: "ORIGEN DE LAS RENTAS", Y, 19).- RIPIA señala como fundamentales ingresos los procedentes de alcabala, tercias reales (dos novenos de todos los diezmos), almojarifazgo, diezmos de la mar, servicios, montazgo, seña de Granada, renta de lanas, salinas, y desde 1590 los millones ("Práctica de la administración y cobranza de rentas reales", X, 1).- Aunque no aparezcan mencionados en estas relaciones los ingresos procedentes de rescates, cosa lógica ya que con el fin de la Reconquista había cesado aquel tipo de ingresos, esta fuente de ingresos era típica en Derecho castellano y aparecía regulada las Partidas.
- (15).Instrucción a Cortés, 26 Julio 1523, nº 5 ("Col.docs.Ineds. Ult", IX, p.172.
- (16).POLO DE ONGARDO, "Información acerca de la religión y gobierno de los Incas": VASCO DE PUGA, "Lo que deben tributar las Indias", en AGI., Patronato, 52.- FRAYTORIBIO DE BENAVENTE, "Sobre el modo de tributar los indios" (1554), en AGI., Patronato, 53.- DIEGO DE OLARTE: "Modo de tributar los indios" (1554), en AGI, Patronato, 52.- ORTUÑO DE IBARRA, "Forma de tributar los indios, 1554", en AGI., Patronato, 51.- (Uno de estos dos debe ser el "Modo de tributar los indios en la gentilidad" (27 agosto 1554), en "Epist. Nv. Esp.", t. XVI. p. 56.- "Relación de las contribuciones de los INCAS" (1561), en AGI., Patronato, 188, r. 22.- "Representación que envía el Obispo de Antequera de

Los inconvenientes que resultan de poner nueva tasa en el Perú a los indios (1564), en AGI., Patronato, 189, 4.- vid. También las "Odenanzas sobre tasa de tributos", del Oidor de Lima CONZALEZ CUENCA (1566), en AGI., Patronato 189, 11.- La mejor parte de estas relaciones debieron escribirse respondiendo al requerimiento hecho por la Corona con el fin de establecer las tasas de tributos; para Nueva España, encontramos una RC. de 20 enero 1553 (Cod. Puga), II, 229, f. 140 vº), dando un minucioso formulario de preguntas referentes a la forma antigua y nueva de tributar, y ordenando que "para desgargo de la Real conciencia" se comuniquen con religiosos y personas de buena conciencia y que la Audiencia envíe su parecer sobre estos tributos.

- (177). Esta supervivencia de funcionarios alcanza incluso el nombre que reciben ("golaves, tequitatos, etc.) FRANCISCO CHEVALIER en su interesante trabajo sobre el municipio indiano, citado en la nota 12, aporta algunos textos interesantes que aclaran las funciones de estos personajes.

Los "golaves", muy corrientes en el Obispado de Oaxaca, tienen a su cargo los indios de un barrio, generalmente muy reducido - de 10 a 30 hombres, en el cual están encargado de recoger los tributos y repartir los servicios personales; puede también tener las funciones de fiscal. Las fuentes les comparan a capitanes o "cuadrilleros".

Los "tequitatos" parecen tener la misma función recuada dentro de un barrio, se los encuentra más frecuentemente en la diócesis de México, donde reunía a los indios, para el repatimiento. A veces gobiernan también el municipio, si es muy pequeño. Hablando de Cauhuilpán un documento de 1581, dice: "gobiernanle ciertos tequitates, que son como mayordomos". Estos "mayordomos", son también muy frecuentes en el municipio indiano y parece que tenían las funciones del mayordomo castellano: administran los bienes comunales. sus funciones se desempeñan por un solo año en algunos pueblos (ahiahuatlán) y en los de la provincia de Pánuco son sustituidos por los caciques en la tarea de recoger el dinero de la comunidad.

Los "cálpisques" parecen ser gestores de los encomenderos; probablemente, deofan excederse en la defensa de los intereses de éstos, pues hay disposiciones que les prohíben tener varas de justicia entre los indios bajo imposición de penas, y que exigen sean "personas tales y de tanta satisfacción que no hagan daño y agravio a los indios", debiendo además presentarse en la Audiencia ante el Gobernador del distrito "para que teniendo estas calidades se les dé licencia y de otra forma no se les permita entrar y administrar" y dar tanto ellos como los encomendadores firma de que si hicieran daño o agravio a los indios les repararan (Reales Cédulas 10 agosto 1562, 6 mayo 1550 y 2 diciembre 1563, recogidas en RecI., L.VI, T.III, leyes 27 28). Vid. también Instr. Virrey de Nueva España D. Antonio de Mendoza, de 25 abril 1535 en "Col. doc. inede. Ult", X, 245.- Los caciques perciben

a veces el tributo; así ocurre, por ej., con los yanacunas (ESCALONA, L.II, P/I, c.II).- Una RC. dirigida a los Oficiales Reales de Ensigna de Indias, nos muestra también la existencia de mayordomos y calpisques en los pueblos de la Corona Real, en los cuales tenía funciones económicas y fiscales. La administración económica de estos pueblos corría a cargo de los Oficiales Reales de Hacienda, que como es lógico no lo desempeñaban directamente, sino por medio de estos mayordomos y calpisques; según se deduce del texto de dicho documento, existía viva pugna entre el Gobernador y los Oficiales Reales sobre el derecho a efectuar los nombramientos de aquellos administradores, pugna que el Rey resuelve decidiendo que el nombramiento pertenezca al Gobernador y la toma de cuentas absoluciones. (RC 26 mayo 1573, en AGI., Contaduría, 1382, l.r.2°).

- (122). CRISTOBAL ESPEJO Y FRANCISCO DE LA IGLESIA han publicado algunos trabajos sobre la Contaduría Mayor de Castilla y el Consejo de Hacienda (Vid., la nota bibliográfica final sobre la Hacienda Española). Sin embargo, sobre la forma de hacerse la "administración por menor" (recaudación de impuestos, pagos, etc.) apenas si existían unas cuantas páginas en RIPIA, "Práctica de la administración y cobranza de la rentas reales", Madrid, 1676; la edición, por nosotros manejada, Madrid, 1795, 6 vols. en 4°.- También FRANCISCO GALLARDO FERNANDEZ en su libro "Origen, progresos y estados de la rentas reales de la corona de España, su gobierno y administración", Madrid 1817, da algunos detalles en el capítulo que dedica en el primer tomo a la Hacienda de los Reyes Católicos.
- (22). "Origen", 1719-31. Hemos podido localizar estas últimas Ordenanzas de 1593, en Ribl.Nac, Madrid, ms. 1172, N°8
- (20). Según ESPEJO LE HINOJOSA se hallan en Simanas, Cámara, 2211.- Se recogen en su mayor parte en la Recopilación castellana.
- (28). No está todavía resuelto claramente el problema de la creación del Consejo de Hacienda. Al parecer esta institución de origen flamenco, hizo su aparición en Castilla mucho antes. GALLARDO dice que ya en 1569 empezaba a dársele la denominación de la Contaduría Mayor de Hacienda ("Origen...", I, 26). Según ESPEJO fue creado por Carlos I en 1523, señalando como primer presidente nombrando oficialmente (los anteriores no tuvieron este carácter) a Juan de Ovando en 1575 (vid. sus dos trabajos: "Sobre organización de la Hacienda en el siglo XVI", en "Cultura Española", 1907, D.403-28 y 687-704, Madrid, 1907; y "El Consejo de Hacienda durante la presidencia del Marqués de Pozas", en "Asoc. Española Progreso de las ciencias", Granada-Madrid, 1924).
- (23). Los Ordenanzas de la corona de 1554 los refundían en cuatro Sueldos-acostamientos, Rentas-Quitaciones, Relaciones Extraordinario, Rentas y de Mercedes.



(24). "Origen", I, 24.

(25). La razón de estos acontecimientos de las Rentas, especialmente de las alcabalas, fué debido a los deseos de los arrendadores; la reina Isabel la Católica lo dejó expresamente consignado en su testamento para "desgargo de la real conciencia", aunque parece que las apremiantes necesidades de los Reyes de la Casa de Austria restringieron en gran parte su aplicación ya que les era más provechoso recibir los adelantos de dinero hechos por los arrendadores, (Vid. José GARCIA ARGUELLES, "Diccionario de Hacienda", Madrid, 1833-5, voz "Arrendamiento").

(26). DIEGO MARIA GALLARD; en sus adiciones a la obra de RIPIA, "Práctica...", I, 209.

(27). Ro. Cast., L9, T. 11.1.- Todo el Título 11 está dedicado a exportar la forma en que ha de realizarse el arrendamiento por mayor: mediante almoneda, en el Estrado de Rentas, ante el Escribano Mayor de Rentas o su Teniente y previa citación de los Contadores Mayores; el arrendador que gane la paja, abona fianzas, y recibe un recudimiento que ha de presentar en la Cabeza del Partido, dentro de los sesenta días; luego ha de enviar al Consejo de Hacienda una relación jurada del valor de las rentas y de quienes son los arrendadores, fieles o cogedores de cada lugar del Partido, señalando si queda algún pueblo por arrendar. Según la ley 17, una misma persona puede ser Arrendador Mayor de dos o más partidos, El título 10 del mismo libro señala que no pueden ser arrendadas ni fiadas.

(28). Ro.Cast., Libro 9.T.11,1.23.

(29). Véase, para la recaudación de la alcabala, el L.9, T.19 y también el T.9 de este libro que trata de las condiciones generales con que se arriendan las rentas reales y la Rc. 26 noviembre 1575, regulando la administración de las rentas reales (inserta en RIPIA "Práctica....", I, 212-225). Entre las más interesantes de carácter general está la de recibir cartas y provisiones reales para la sobranza; la de enviar jueces de Comisión, a su costa, y pone guardas en las ciudades y sobre todo que se les den jueces ante quien se pida, demanden y ejecuten las rentas, "asistentes corregidores, Gobernadores y otras Justicias, cada uno en su jurisdicción" (Libro 9, T.9, 1.2) Rec.ca st.) concretando esta última facultad la RC. citada del año 1575, ordenaba que las sentencias dadas en favor de los arrendadores de cuantías no superior a los 1500 maravedises, se ejecutarán sin más apelación y en las de mayor cuantía se pudiese apelar pero sólo ante el consejo de la Contaduría Mayor, "donde privativamente es su real voluntad, que se conozca de todos los dichos negocios".

- (30).RC. Citada de 26 de noviembre 1575: "Los dichos arrendadores paguen lo que montase de surcarga de las dichas rentas al Tesorero o Receptor de la Cabeza de Partido u otra persona, la que para ello fuere nombrado por S.M. a los plazos que fueron obligados, constándoles primero, que los dichos Tesoreros, Receptores u otras personas tienen afianzadas para para ellos ante los Contadores Mayores de S.M. y teniendo carta de Receptoría para cobrar las dichas rentas el tal año despachada por los dichos Contadores Mayores (vid. texto en RIPIA, "Origen...", I, 215; más adelante, (p.214), vuelva a insistirse en la necesidad de que se hallan en posesión de la citada Carta de Receptoría).
- (31).Los arrendadores por menor, fieles y cogedores, han de pagar las Rentas Reales por los tercios del año y los Tesoreros, Recaudadores, y Receptores que han de recibir estas Rentas de dichos Fieles y Arrendadores por menor, las han de pagar a S.M. un mes después de dichos plazos; y los privilegios y situados que sobre dichas rentas están, se han de pagar en la forma que contiene en ellas, solo con un traslado signado de Escribano, sin esperar libramiento ni otro despacho (Rec.Cast.; l.9,T.16; l.1).- Vid. también RC. de 20 noviembre 1575, que les obliga a recibir de los arrendadores cantidades que éstos les entreguen por adelantado a cuenta de las rentas sobre que han de rendir cuentas, con tal no baje de 2000 maravedís, y con la entrega de la correspondiente carta de pago (RIPIA, "Origen...", I, 219).
- (32).Vid. Rec.Cast., L.9,T.12, las.5, 11 y 12 y Libro 9, T. 19,l.15, regulando la forma de hacer esta clase de arrendamientos.
- (33).Sus Ordenanzas son las mismas que se han dado anteriormente para la Contaduría Mayor de Castilla, con algunas adiciones; vid. pg. 127.
- (34).Por ejemplo, cuando el Contador Mayor Fernando de Sierralta, ofrecía Visita a los Oficiales Reales de Cartagena de Indias el año 1578, señala como una de las negligencias el que los libros no sean de la misma forma que los de la Contaduría Mayor;
- (35).Véase lo que digimos en la pg.
- (36).También señalamos al hablar de los Ordenanzas de estos Tribunales, como se especificaba en ellos que la toma de sus cuentas se hiciese "Conforme al orden y estilo de la Contaduría Mayor de Cuentas e Castilla" (Ord.43 del año 1605, en Ro.I.,L.VIII, T.I,T.48).
- (37).Testimonio de la postura y condiciones del arrendamiento al mejor fazgo de la Isla Fernandina, remitido por Diego Velazquez de 6 noviembre 1517 (Citado en "Col.doces. nede. II; T,170). Una RC. de 20 marzo 1518, dirigida a los Jueces de Resistencia y Justicias de la Española, exige que apremiar al Tenen-

te de Contador, para el cobro del arrendamiento del almojarifazgo de la Española y San Juan del año 1516 y los tres primeros meses de 1517 ("Epist. N. Esp.", I, 32).

- (38). Ya en la Instrucción de Diego Colón de 3 de mayo 1505 se le indicaba que pudiese mucho cuidado en que las salinas y los diezmos se arrendasen en su tiempo ("Cod. Cubano; 269) y numerosos textos que tendremos ocasión de ver en el capítulo IV muestran la persistencia de este sistema a lo largo del siglo XVI.
- (39). Vid. cap. IV. "Recaudación de ingresos".
- (40). Vimos al referirnos a la Contaduría Mayor de Hacienda cómo radicaban en ella no sólo funciones directivas, sino también de las que hemos llamado de "administración por menor". En la Hacienda indiana estas funciones pasan en su totalidad a los Oficiales Reales de las Indias, quedando únicamente el Consejo de Indias a funciones de alta dirección, tanto en la organización y desarrollo de la Hacienda, en la regisión y finiquito de las cuentas y aún esta última misión se traslada en 1605 a los Tribunales de Cuentas que no crean en los nuevos territorios. No cabe duda que también el factor distancia influyó de forma decisiva en esta variación en los órganos superiores de la Hacienda.
- (41). SOLÓRZANO, "Pol. Ind.", L. VI, c. XV, n.º 10.
- (42). No entramos en el estudio de los cuatro funcionarios reales de las Armadas castellanas, y nos remitimos en esto a la importante obra de FLORENTINO PÉREZ FERRER, "La marina andaluza frente al Descubrimiento de América en prensa de la Esc. de Est. Hisp-america. Estos funcionarios persistieron en la composición del personal de las Armadas que acompañaban a las flotas en Indias o las que protegían a las costas americanas; eran totalmente independientes de los Oficiales Reales de la Hacienda indiana.
- (43). Una RC. a Ovando 3 diciembre 1505 señala expresamente la propiedad del Monarca: "Sepades que a Nos, se ha hecho relación, que perteneciendo como pertenecen a Nos todos mineros de metales y otras cosas que hay y se han hallado y descubierto hasta aquí y se hallaron y descubrieron de aquí en adelante en las dichas Indias..." ("Col. Torres Mendoza", XXXI, p. 108-10). Consecuencia de este derecho, se revoca la franquicia que el Contador Bobadilla había concedido a los vecinos de la Española "sin tener para ello Nuestro poder ni mandato" para la libre explotación de las minas, ordenándose a Ovando que del oro hasta entonces recogido se cobre la parte que corresponda a la Corona, según el asiento que el Almirante Colón haya hecho con ellos y señalando que del que se cogiere en adelante habrá de entregarse la mitad, para el Monarca (Instrucción a Ovando).
- (44). Los derechos de mondaje fueron concedidos a su Se-

cretario Cobos,, haciéndose extensivos a su mujer y a su hijo, Marqués de Camarasa. El beneficiario podía defender su derecho frente a la Corona, una vez concedido y prueba de ello es el pleito entablado por Diego de Cobos, Marqués de Camarasa con la corona en 1549, PUGA, II, 37, f.170). (Vid. autos en RC. 4 septiembre 1549, PUGA, 137, f.170). En 22 de enero 1535 concede también al Adelantado de Canarias Pedro Fernández de Lago, el dozavo de la rentas que se obtuvieron en la provincia de Santa Marta (Ced. Sta. Marta, 308) Esta merced que revocada en 5 enero 1552, hecha en que revierten a la Corona (RC. a Oficiales de Nueva España, Puga, II, 183) También el Rey podía a título de merced conceder señeríos sobre los súbditos de un territorio determinado; vid. a Hernán Cortés el de 29.000 vasallos, correspondientes a 19 villas y pueblos de la Nueva España en 6 de julio 1529 (Puga, I, 129).

- (45). "Acrecentar salarios o señalarlos a Ministerios nuevamente introducidos, -dice ESCALONA-, es prohibido por ser regalía, y así una RC. de 1 diciembre 1583 ordenó a los Oficiales Reales se excusaran en tales casos con el Virrey y se negaran a pagarlos ("Gazophiliacium...", L.I, P.II, c. XII, n°13) SOLORZANO dice que "no se permite a los virreyes y gobernadores hacer nuevos gastos, ni acrecentar oficiosni salarios a su voluntad, por que eso siempre fué prohibido, como cosa perteneciente a la suprema potestad del Principe, que los nombra como los resuelve una glosa seguida por Inocencio Placios Rubio, Matienzo y otros" ("Pol. Ind"; L.VI, c. XV, n°9).
- (46). Vid. en el c. IV, donde se trata detalladamente esta cuestión de los gastos de Hacienda.
- (47). De un modo negativo, ESCALONA afirma esta facultad, como exclusiva del Rey, cuando indica que es una de la prohibiciones expresas señaladas a los Virreyes; únicamente, sin necesidades imperiosas lo exigen, podrá el Virrey exigir un donativo, recurso al que acudieron algunas veces (vid. "Gazophiliacium"..., L.I, c. XL). Los impuestos fueron apreciando en Indias, a medida que la voluntad real le creyó conveniente; El Virrey se limitaba a implantarlos "en la templanza y consideración" debida (vid. la Inst. al virrey Toledo de 15 diciembre 1568, cit. por ESCALONA, id., L.o, XXXIII).
- (48) Al hablar de las prohibiciones que afectan al virrey en materia de hacienda, ESCALONA señala la de crear oficios nuevos, o venderlos sin mandato regio (id. L.I, c. XLIV). - No sabemos si a pesar de las prohibiciones, las autoridades gubernativas de Indias intentaron crear oficios nuevos, aunque una Real Cédula de junio 1564, cuyo extracto se conserva en la "Copulata", t.V, p.12, parece afirmar el intento: "no se creen nuevos oficios para la guarda de la Hacienda, sino los Oficiales usen sus oficios como son obligados, y cuando fuese necesario crear alguno, informe la Audiencia primero".

(49). Vid. en el opp.I, pag.

- (50). Han de reunirse todos los miércoles y "las más veces que pudieren" para ver en que cosas pueden aprovecharse la Hacienda en Indias, proveyendo de tales medios y personas para Ministerios y Oficiales de ella, que siempre sea acrecentada y en ella haya el buen recaudo y guarda que conviene (Ordenanzas de 20 1542 y 1517, han sido publicados en "Col, Torres Mendoza", XVI, Ps: 376 ss. y 406 ss.- Hacenn- referencia a las deliberaciones de Hacienda los capítulos 10 y 11 de las primeras y el 9 de las segundas respectivamente.
- (51) Según SCHAEFER correspondía al Consejo el nombramiento de Oficiales Reales (op.cit., X, 50). Así parece deducirse de las ordenanzas citadas en la nota anterior. Sobre este punto nos remitimos al capítulo siguiente, donde trataremos del régimen político jurídico de estos funcionarios.
- (52). El doctor ERNST SCHAEFER ha proporcionado por primera vez algunos datos sobre el Consejo de Indias bajo la Casa de Austria, (T.I, p. 171 yss.). Parece ser que fue el estado gravísimo del Tesoro por aquellas fechas la causa que impulsó al Monarca a prestar especial atención a la riqueza de las Indias. La Junta quedó constituida por el Presidente del Consejo, Laguna; el secretario Ibarra y los consejeros de Indias, Alvarez de Toledo y Medina de Medrano.
- (53). Este Informe, de fecha 22 febrero 1596, no halla en el AGI., Indif. Gral. 743 extraído por el doctor SCHAEFER en su citada obra, T.I, ps. 171-2. Se refiere al nombramiento de los Presidentes de la Casa de Contratación de Sevilla y de la Audiencia de Panamá, este último por su relación con el tráfico del Mar del Sur, prohibición a los extranjeros de tener comercio con Indias, Armadas, etc.
- (54). SCHAEFER, id., p. 173f.
- (55). Pueden verse en AGI., Patronato, 240, s. 11.
- (56). El exceso en la producción de azogue de Huancavilica se estimó por la Junta en más de tres millones de ducados que era capital muerto; a esto se sumaba la producción aminorada de la plata, que se calculó en 30 millones. El Consejo envió al Virrey Luis de Velasco una larga Instrucción de fecha 11 agosto 1596 para solucionar este problema, ordenándose además en 1597 la reducción del precio del azogue destinando a la Nueva España.- (SCHAEFER, id., I, 1757).
- (57). No es posible concretar cuál fuera esta labor por haberse perdido los registros de este tiempo. La última Consulta encontrada por SCHAEFER es de 3 abril 1604 y se refiere a las "relaciones juradas" de los mercaderes sevillanos (Ind. Gral., 1867, citado por SCHAEFER, I, 28). En AGI. (Lima, 280) se encuentra, sin embargo, un parecer

de dicha Junta de Hacienda, de fecha 26 junio 1662 sobre unos "Avisos tocantes a los grandes fraudes que hay en el reino del Perú contra la Real Hacienda", de 12 de noviembre 1660. A raíz de aquel informe se ordenó una Visita General al Perú. No sabemos si la citada Junta era la mencionada más arriba o una de carácter extraordinario.

- (58). LOPEZ DE VELASCO al hablar del Consejo en su famosa "Descripción universal de las Indias, dice que este tiene la suprema administración de la Hacienda Real y que conoce de las visitas u residencias de los Oficiales Reales (p.50). También el doctor SCHÄFFER reconoce al Consejo esta facultad concreta de ordenar visitas y residencias a los Oficiales Reales (id., I, 63, n°1).
- (59). "Col. docs. ineds. Ult", V, 211.
- (60). Vid. en lo referente a la Hacienda, lo que se dijo en pag.
- (61). RC. 29 noviembre 1527, en AGI., Ind. Gral., 421, L. 12. f. 233 citado por SCHÄFFER, I, p. 80.
- (62). Este Oficial, según el Dr. SCHÄFFER, fue Juan del Portillo, Escribano; recibió su nombramiento el 19 febrero 1528 (id., I, 48).
- (63). El Dr. SCHÄFFER publica en uno de los Apéndices insertos en el tomo I de su obra una relación personal de los Contadores que sirvieron este oficio desde 1567 hasta el fin de la casa de Austria.- El salario que se les asignaba era pagado por la casa de Contratación de Sevilla.
- (64). En una de las adiciones hechas a las famosas Ordenanzas de noviembre de 1542, de fecha 4 junio 1543, se ordenaba a los Oficiales Reales de Indias "nos envíen anualmente un tiente de cuentas de su cargo" (es decir, una relación de los ingresos habidos) y cada tres años, una cuenta completa (ingresos y gastos) a la Casa de Contratación de Sevilla. Puede verse el texto de las famosas Leyes Nuevas de 1542-3 en la edición de MUÑOZ OREJON, en "An. de Este. América.", II, Sevilla, 1945.- El capítulo referente al envío de cuentas, en pgs. 834-5. Posteriormente debió darse la orden de que se enviaran todas las cuentas al consejo, porque en las Ordenanzas de 1554, sobre el modo de tomar las cuentas a los Oficiales Reales, se especificaba que han de enviarse al consejo para darles finiquito. En la documentación de la Contaduría, conservada en su mayor parte en AGI., aparece la casi totalidad de estas cuentas.
- (65). La Contaduría de Castilla, según GALLARDO ("Origen de las resntas...", I, 27) quedaba constituida por los Contadores Mayores con sus Tenientes, un asesor, un Fiscal Letrado, dos contadores de Libros, dos de results

y un Receptor de Alcañices.- Unicamente sabemos que hasta 1578 la Contaduría del Consejo de Indias contaba con dos Contadores, a los cuales se les dio un ayudante en 1575 (SCHAEFER, id., I, 111). La composición, al parecer, debió ser aún más reducida que la Contaduría de Castilla y probablemente sólo se aplicaban a ésta las normas que regulaban su funcionamiento (reuniones, forma de tomar cuantas, libros, etc.)

- (66). El texto entre los papeles de la Contaduría, existentes en AGI., leg. 1780.
- (67). Notas marginales ordena que se cumpla lo referente a los libros de cargo y cuentas, y que se guarde para la visita la toma de cuentas de bienes de difuntos llegados a Sevilla.
- (68). A petición del Visitador Chamucero, creáranse el 29 julio 1581, dos Contadores llamados de la "Razón" y otro de la "Caja", y se desgajaron las cuentas de penas de cámara, que quedaron a cargo de dos Contadores con este título. En 1583 se ordenaba que a los Tribunales de cuentas asistieran dos Auditores de la Contaduría de Hacienda, en lugar del Asesor. Finalmente en la importante reforma originada con las Ordenanzas de 1593, se suprimía el Fiscal Letrado de la Contaduría de Cuentas, pasando los pleitos a la Hacienda se quitaba el título de "Mayor" a los Contadores y se dejaba el cuadro de Contadores de Cuentas reducidos a cuatro de libros y resultados, dos oficiales y cuatro ordenadores de cuentas (GALLARDO, "Origen", ... I, 27-30). Según SCHAEFER (I, 117 y 128), la Contaduría del Consejo se componía a partir de 1578 de cuatro contadores. Su salario era elevado de cien mil maravedís en 1567 a 150.000, a pagar por la Casa de Contratación de Sevilla.
- (69). Las multas impuestas por el Consejo eran administradas en un principio por un Oficial receptor y el Oficial de Cuentas. En 1567, el Oficial de Cuentas se transforma en Contador. Ese mismo año se nombra ya Receptor perpetuo de penas (SCHAEFER, id., I, 102, nota 1).
- (70). Las citadas Adiciones de CESPEDES nos dan algunos ejemplos de ello al enumerar las cuentas que se hallan retrasadas; veágracia, dice "Las que tomó Diego de Guzmán a los Oficiales de Sevilla de las cosas en pie de las atarazanas que fueron a su cargo desde el año 1530 en adelante...".- A los ocho meses de regresar las flotas, debía la Casa de Contratación enviar las cuentas de la avería al Consejo (Ord. 1573, cit. por GUILLERMO CESPEDES, "La avería en el comercio de Indias", y en An. de Est. Am.: II, Sevilla, 1945, p. 75) y si no se recibían en el plazo previsto, se nombra un Contador que las tomaba en Sevilla, de modo que recaía el pago del salario en el funcionario.

- (71). Ya señalamos, al hablar del desarrollo histórico que las Reales Cédulas concediendo mercedes sobre la Hacienda Real, solían ir dirigidas a los Contadores Mayores de Castilla, ordenándoles tomar razón de ellas en sus libros. Ahora, en cambio, cuando el Rey de una cédula ordenando pagos, la orden de tomar razón de ello va dirigida a los Contadores de Cuentas del Consejo (vid., p.ej., la RC. de 19 Octubre 1596 a los Oficiales Reales de Venezuela para que puedan hacerse gastos extraordinarios para salvar el peligro de corsarios, inserta en "Orig. de la Hacienda en Venezuela", p.118).
- (72). "Noticia de fundación de la Casa de la Contratación sus Ministerios y de las novedades que hubo en este Tribunal desde el año 1503 hasta el de 1618", folio 3 en AGI., Contratación, 5973 (citado por LEOPOLDO ZUMALAGARRIGUI, "Contribución al estudio de la avería en el siglo XVI y principios del XVII", en "Anales de Economía", Vol.IV, n°16, p.41, Madrid, 1945).
- (73). Vid. Ca p.I, pg.
- (74). Tales fueron Tomás de Ayardí y Juan de Para Murciano en los últimos años del siglo XVI, (SCHAEFER, I 372).
- (75). Vid. p----- y p-----.
- (76). "Política Indiana", L.VI, c.XV, n°5.
- (77). Esta intervención era en este caso muy lógica, pues se trataba de crear un organismo, que aunque dependiente del Consejo de Indias, debería tener muchos puntos comunes con la Contaduría Mayor de Cuentas de Castilla, ya que su misión principal, la toma de cuentas, era idéntica a la de la Contaduría. Como ya dijimos, fué el Contador Mayor de Cuentas, Juande Camboa el representante del Consejo de Hacienda.
- (78). La denominación más corriente en la legislación y escritores de la época para mencionar a las delimitaciones territoriales del Fisco es la de "asientos de Oficiales Reales", aunque, también suele usarse en el de "distritos" (vid., p.ej., la RC. de 22 febrero 1579, en "Ced. Encinas" III, 295) y también la de "Cajas Reales", en sentido territorial ("Geophilacium...", L.VIII, r.22, citado por ESCALONA, L.II, p.I, c.I; Juan Lat: "Nove Orbe", L.VIII, c.23, citado por ESCALONA, L.I, c.XXXV). Acuerdo de Oficiales Reales de Cartagena de 3 julio 1603 en "Orfanosux dela Hacienda de Venezuela", 111). Esta última tiene, ante todo, un sentido material: es la Caja de hierro fuerte, en la que se guarda el producto metálico de los ingresos, el Libro General de ingresos y gastos, y las marcas o cuños reales (RC. 22 diciembre 1529, en "Col. docs. indés. Ult.", IX, 448); sólo por extensión toma un sentido territorial que abarca la esfera de acción de los Oficiales propietarios de que la guardan.
- (79). Vid. pag.-----
- (80). Para la formación de esta lista hemos utilizado diver-

ses caminos. Desaparecida en el incendio ocurrido hace algunos años, una "Relación de las provincias e islas que hay en las Indias, donde S.M. tienen Oficiales reales que rinden quantas", del año X 1563, que se conservaba en los papeles de Centaduffa (leg. 809, n.º 23), del AGI., hemos acudido al Catálogo de dicha sección, donde figuran las cuentas remitidas desde Ultramar, con especificación de las Cajas y fecha que no hemos querido citar aquí por comprobar en la mayoría de los casos que no corresponde al momento inicial de la Caja. LOPEZ DE VELASCO nos da una relación de las Cajas existentes hacia 1574; también en la "Copulata", al señalarse los salarios de los distintos Oficiales Reales, se nos ofrece indirectamente otra enumeración de las mismas hacia 1570. Igualmente hemos reunido otras pruebas indirectas en que figuran Cajas, como la relación de gastos del factor de Lima, Romanf (Lima, 120). Tampoco creemos dar una lista total de las Cajas, pues existían otras Cajas menores o subordinadas, cuyas rentas quedaban englobadas en las de los Oficiales de la Caja principal.

- (81). En 1548 se ordenó a los Oficiales de la Nueva Galicia que desde Compostela, se habían trasladado a Guadalajara, hacia 1550 (Puga, II, 92), se trasladaran a Zacatecas (C.V., 14); en marzo 1562, en cédula a la Audiencia de Guadalajara se manda que uno de los Oficiales Reales resida por turno durante cuatro meses en Zacatecas (Capít., V, 14), en junio de 1563, que a pesar de lo mandado, los Oficiales Reales residan en Zacatecas, y si se hubiesen mudado, se vuelva allí (C.V.).
- (82). Una RC. de agosto 1540 ordenaba el Presidente de la Audiencia de los Confines proveyera lo que le parezca sobre que convendría que los Oficiales reales de Honduras residan en Puerto Caballos, ("Copulata", V, 14)
- (83). En marzo 1546, una Real Cédula al Licenciado Armerindía lo ordena provoca sobre que la ciudad de Antioquia pide residan en ella los Oficiales de la provincia. ("Copulata", V, 13).
- (84). Una real Cédula de de enero 1539 disponía que los Tenientes de Quito, residieron en Popayán y que y habriera en esta ciudad casa de fundición. ("Copulata", V, 15.).
- (85). En Venezuela, el primer asiento de Oficiales Reales fué establecido en Santa Ana de Coro; más tarde, los oficiales propietarios pasaron a Nueva Segovia (1565) y a Santiago de Leon (1577), continuando existiendo Caja Real en todos ellos administrada por Tenientes de Oficiales. No figura en el Catálogo de Cuentas la Caja real Burbura, probablemente por estar englobada en las de cabecera, pero una RC. de septiembre 1552 ordenaba su creación, disponiéndose la administra en un Oficial Real y dos Tenientes. ("Cop.", V, 15).
- (86). Estas últimas Cajas del Virreinato del Perú no apare

mencionadas en el Catálogo de cuentas, debido probablemente a que éstas venían englobadas en las de la Caja de Lima. En una relación del Factor-Vecedor de Lima, Bernardino de Román del año 1563 (AGI, I, Lima 130) aparecen citadas 17 Cajas del Reino (Los Reyes Charcas, Arequipa, Cuzco, La Paz, Quito, Puerto Viejo, Santiago, Guayaquil, Leja, Piura, Trujillo, Papilla, Chachapoyas, Guamanga, Chuquito, Guanuco, y Cuenca); no se incluyen las de Potosí ni las de Jaén, Zamora, y Popayán, de la Audiencia de Quito, ni las de Río de la Plata y Chile. La RC. de 27 febrero 1575 (en Poinas, III, 396) cita también Zamora, Chuquito, Guanuco, Guamanga, Cuenca, Chachapoyas, que no están en el Catálogo añade las de Jaén a la relación de Román. Los Virreyes Montecinos y Esquilache dan en sus memorias de Gobierno la cifra de 19 Cajas que probablemente corresponden a las 17 del factor Román, más las de Potosí y Castrovirreina, esta última, creada al empezar el siglo XVII. Como puede apreciarse, es difícil determinar exactamente el número de Cajas por la gran variedad que reina en los distintos testimonios debido a la inclusión o no en dichas enumeraciones de alguna de las Cajas subordinadas.

- (87). No figuran en el Catálogo de Contaduría cuentas de 1 Caja de Buenos Aires hasta 1658, probablemente también porque las cuentas eran enviadas conjuntamente con la de Charcas. Según LOPEZ DE VELASCO ("Descripción ...", 51) existían Cajas en Río de la Plata y Tucumán, que confirma la correspondencia de los Oficiales, publicada por LVILLIER/. Cita aquí también las de las Islas Salomón y Guayana.
- (88). LOPEZ DE VELASCO, ("Descripción universal de las Indias edit. por Justo Zaragoza, Barcelona, 1911, p. 51. Como es sabido, esta interesantísima obra ofreció una visión general de las Indias hacia 1574.
- (89). Si examinamos la relación de Cajas Reales que dimos anteriormente, podemos observar como la aparición de todas ellas responde a una de estas tres causas que llamamos: son creadas una gran parte en los puertos, generalmente en los de mayor tráfico, con el objeto de recaudar los derechos de almojarifazgo y efectuar el control de las cargazonas de los navíos (Veracruz, Acapulco, Santo Domingo, Puerto Rico, Habana, Cartago, Panamá, Portobelo, Santa Marta, Guayaquil, Puerto Viejo, Core y Piura). Otras deben su creación a la invención de ricas minas (Potosí, Huancavelica, Zacatecas, Mariquita), o de criaderos de perlas (isla Margarita). Otras como Barquimiceto, Carora, y Tonyo, deben su existencia a la gran distancia a Cerro y Nueva Segovia, asiente sucesito de los Oficiales propietarios de la Gobernación de Venezuela. Finalmente, un gran número de Cajas son establecidas en las cabeceras de los Virreinos (México, Lima) o Gobernaciones (Casi todo el rostro) que a veces coincide con el de las Audiencias (Charcas, Guatemala, Quito). Las de este último grupo son las

que generalmente aparecen primero; apenas es descubierta un nuevo territorio suele dársele un régimen político (generalmente el de una gobernación) y a continuación se designan los Oficiales Reales que han de velar por la Hacienda dentro de los límites que se señalaren a aquel (p.ej., Oficiales reales de la Nueva España); En algunos casos, este distrito fiscal sufre una reducción, bien por la subdivisión política del territorio (en el ejemplo citado la constitución de los reinos de Nueva Galicia y más tarde de Nueva Vizcaya dentro del Virreinato de Nueva España que cuando cobran importancia económica originan la creación de Cajas Reales autónomas en Guadalajara y Durango); otras veces, por la importancia económica que cobran algunos puertos (en el caso de Nueva España los de Veracruz y Acapulco pero con una diferencia notable y es que los Oficiales Reales de las mismas no son propietarios sino tenientes, al menos en el siglo XVI, de los Oficiales Reales de México, es decir, son cajas que carecen de autonomía y son como delegaciones de la primitiva). Cuando se trata de Oficiales Reales para una Gobernación determinada suelen coincidir los límites territoriales de los distritos fiscales y los de las gobernaciones; eso tiene importancia desde el punto de vista de la toma de cuentas y la visita de los Oficiales Reales, subordinados siempre en Audiencias y a Gobernadores; por eso cuando no está aún claramente delimitado el territorio de una comarcación político-administrativa (y siempre que hable de límites en Indias, hay que partir de la base de que en esto no existe la exactitud de hoy), suelen darse una confusión respecto a cuál de las autoridades de las demarcaciones limítrofes corresponde la tarea fiscalizadora (tal era el caso de Potórf, al separarse Nueva Castilla, de Nuevo Toledo, que da lugar a una pugna entre las Audiencias de Lima y Charcas sobre la toma de cuentas a los Oficiales Reales de aquella ciudad.

- (90). Conocemos un solo ejemplo, ocurrido en Nueva España. En la "Descripción Geográfica de la Nueva Galicia en 1621", publicada por FRANÇOIS CHEVALIER en la Colección de la Escuela de Estudios Hispano-Americanos, de Sevilla, se habla de que en la provincia de Chametán, el Mar del Sur, que correspondía a la Nueva Vizcaya, hubo anteriormente una Cja Real en San Sebastián (hoy Concordia) a título de las minas de Copala, Panuco y San Marcial, Caja que 1621 había desaparecido porque las minas y con ella, la villa, estaban casi acabadas. (id., p. 103). La buena administración de la Hacienda es causa algunas veces de cambio de asiento de las Cajas Reales principales. Así cuando en 1564, los Oficiales Reales de Venezuela que residen en el puerto de Cere, deciden trasladarse a Nueva Segovia, alegan con el Libro de Acuerdos, como causa de traslado "ser éste el pueblo que está más en medio de la Gobernación y de los demás pueblos que hay en ella"; en 1577 se acuerda trasladarse a Santiago de León, en la provincia de Caracas, "porque es aquella ciudad casi pueblo marítimo que no está más de cuatro o cinco leguas del puerto de Caraballeda, y que allí se saca y vende más cantidad de oro que en otros pueblos de la Gobernación y que allí podemos visitar los navíos que vienen con registro y sin él." En este último caso, el cambio se efectúa

171

con la autorización del Gobernador y tras un acuerdo conjunto de los Oficiales Reales, aunque se da aviso al Rey "para que él mande lo que es más a su servicio que se haga" ("Orígenes de la Hacienda en Venezuela", ps. 26 y 27).

- (91) Esta facultad de crear o suprimir Cajas Reales los Virreyes es reconocida por ESCALONA, apoyándose en tres de las varias Cédulas dirigidas al Virrey Toledo: una, de fecha 1º de diciembre 1571, en la que se le dice expresamente que "Dende os pareciere que no conviene haya Oficiales, los quitareis"; otra, 6 febrero 1571, en que se aprobaban las cabeceras que aquel ha señalado dende acudan los Oficiales que tienen a su cargo rentas de poca calidad, y, finalmente, otra de 30 diciembre del mismo año, aprobando la decisión de poner Corregidor en Guayaquil para para los negocios de la Hacienda y la supresión de una marca real en Piura por el poco aprovechamiento de los Oficiales de allí y haberla en Loja y puerto Pahta.- No sabemos si también los Gobernadores reciben facultades análogas; parece más probable inclinarse por la negativa, dada la importancia de estas decisiones.
- (92). Este envío se realiza primeramente desde la Caja de Guadalajara a la de México (c. XXV de las Instrucciones a los Oficiales Reales, en "Copulata", V, 278), y de esta se remite a la de Veracruz.
- (93). Los envíos de Guatemala se hacen directamente a Veracruz (RC. de marzo 1536, en "Cop.", V, 279).
- (94). JUAN LAET----- en su obra "In Nove Orbe", L. VIII, c. 22, escrita en la primera mitad del siglo XVI, nos ha dejado una detallada descripción de la forma de hacer estos envíos, descripción que conocemos por la reproducción que de ella hace ESCALONA en su "Geographiconium..." L. I, c. XXXV. Hacia agosto y septiembre llevaban a Lima los despachos reales ordenando se realicen los envíos. En los "chasquis" de noviembre y diciembre se escribía a los Oficiales reales de Potosí, Oruro, y la Paz, indicándoles actuaren la cobranza. En el 1º de febrero se les señalaba un día fijo en que debía cerrarse la última carta cuenta, de manera que a mediados de abril pudiera estar la plata en el puerto de Arica para llegar al Callao a principios de mayo; para este transporte marítimo, el virrey elgía algunos galeones de la Armada llegados desde Panamá que utilizaban el viaje de ida a Arica para llevar de 2000 a 3000 quintales de azeite para el beneficio de la plata. Otras Cjas como las de Cusco, Castrovirreina, Arequipa y Trujillo (después, también Carabaya y Guanaco) hacían los envíos por tierra con arrieros que daban fianzas. El oro era embarcado con destino a Panamá; aquí era custodiado en las Cajas Reales hasta la llegada de la flota a Nombre de Dios (RC. mayo 1553, en "Cop.", V, 277); al iniciarse el siglo XVII el transporte del oro a través del istmo se realiza en reuas por tierra y no por el río de Chagre, como era costumbre para otras mercancías (RC. 1619, citada por ESCALONA, "Geographiconium...", L. I, p. II, c. IV, n.º 14); la Audiencia de Panamá tenía facultad para obtener de los vecinos

las mulas que hicieran falta para el viaje. (RC. 1555 y 1565, cits. por ESCALONA, id.), moderando los precios de alquiler si eran excesivos (RC. de 1573 y 1593, en id.). Una carta de los Oficiales Reales de Panamá al Monarca (AGI., Patronato, 194, n° 43) muestra que el tráfico desde el Callao se realizaba ya en 1537.

- (95). Vid. RC. octubre 1562 en "Cop.", V, 280. Parece poque las Cajas del Nuevo Reino solían remitir el oro a Cartagena; así lo demuestra para la de Zaragoza un testimonio de las cantidades enviadas aquel puerto por sus Oficiales en el año 1597 (AGI., Contaduría 1583, n° 7). Una relación de envíos desde 1620 a 1682 a la Caja de Cartagena (AGI., Contaduría, 1370) hace referencia a las Cajas de Santa Pó, Quito, Zaragoza, Antioquia, Santa Marta, Mariquita, isla Margarita, Guanira y también las de Panamá y Portobelo, lo que parece indicar se ha variado un tanto al sistema de envíos son redacción al siglo XVI.
- (96). RC. 15 ag. 1540, en "Copulata", V, 280.
- (97). RC. febrero 1547, en "Cop.", V, 281.
- (98). Vid. RC., sin fecha, en "Cop.", V, 282.
- (99). En enero de 1526 se les ordenaba lo enviaran directamente a España, pero una Real Cédula a los Oficiales de quella Caja, de septiembre 1533, (en "Cop.", V, 279), les ordenaba avisaran a los de la Española, para que estos enviaran un navío a San Juan para recoger el oro.
- (100). La necesidad de velar por los intereses reales se hacía mayor en los puertos. Se hizo práctica corriente sancionada por numerosas disposiciones de la Corona, al que los Oficiales Reales acudieron anualmente por turno de tres o seis meses a visitar los puertos existentes en sus distritos a medida que el tráfico comercial fue cobrando importancia, se hizo preciso crear en ellos Cajas Reales permanentes administradas por Tenientes de los Oficiales Reales propietarios, acudiendo un Oficial, por turnos desde la cabecera para ayudarles en la administración; Así surgieron las Cajas subordinadas de Veracruz, Acapulco, Darbumata, Popayán, Cabaigua y del mismo tipo era la de Coro, cuando se mandó la cabecera a Nueva Segovia. También se obligó a los oficiales a que acudieran por turno a los asientos de las minas de sus distritos, lo que dió origen a una serie de Cajas subordinadas, que, en algunos casos, como en Potosí, llegaron con el tiempo a ser principales; es decir, a ser administradas por Oficiales Reales propietarios. Finalmente eran también subordinados las creadas con el fin de recaudar los ingresos de regiones alejadas.
- (101). En las Cajas subordinadas de los puertos no sólo se recaudaban los derechos del algemarifazgo; una RC. a los Oficiales de Nueva España, del 16 abril 1550 (reproducida en otra a los Oficiales de Cartagena de fecha 10 mayo 1554, en AGI., Contaduría, 1382, n°

1, r.4) ordena a los Tenientes de Veracruz que envíen a México cada dos meses el oro procedente de almojarifazgo, almoneda y tributes.- En otras Cajas subordinadas del interior vemos se recaudan diezmos (el principal ingreso de la Nueva segovia y Tecuayo), funciones, ventas de oficios, composición de tierras, y alcabalas (Acuerdos de los Oficiales Reales de Venezuela, de fecha 4 febrero 1555 y 18 septiembre 1507, en "Origs. de la Hac. en Venez.", ps. 20 y 86). Salvo que están administradas por Tenientes (de hecho eran muchas veces los mismos mientras vivían) Y que están subordinadas a otras Cajas las características de estas Cajas eran idénticas a las de las Cajas principales.

(102). En 1555 existían cuatro pueblos en toda la Gobernación. Los Oficiales Reales propietarios residían en el puerto de Coro y también Tenientes en cada uno de los otros tres pueblos. Estos Tenientes tenían facultad para efectuar el cobro de ingresos y el pago de salarios a los curas (que lo cobraban de la Real Hacienda, conforme a la Bula de concesión de diezmos a la Corona); para evitar el desplazamiento constantes de estos curas a la sede de los oficiales propietarios "que está muy lejos de las de la tierra adentro" para recibir las libranzas que han de presentar a los Tenientes para el pago,, se decide en uno de los Acuerdos celebrados en Coro por los Oficiales propietarios que los Tenientes puedan efectuar los pagos sin necesidad de libranzas, bastando "traigan información los curas de lo que hubieren servido y tomado carta de pago, al pie de la misma información" ("Origs. de la Hac. en Venez.", p.20.

(103). Esta dependencia de los Tenientes de las Cajas subordinadas con respecto a los Oficiales Reales propietarios de la Cabeceira se manifestaba principalmente: 1º, en la facultad concedida en todo momento a estos últimos de exigirles la rendición de cuentas y de cobrarles, a ellos o a sus fiadores, los alcances que resultasen en estas revisiones (vid., p.ej., en "Origs. de la Hac. en Venez.", p.52); 2º en la falta de autonomía en sus relaciones con la Administración Central, manifestada en el hecho de no recibir instrucciones directas de aquella y en el de que sus cuantías suelen enviarse a la Metrópoli englobadas en las cuentas de los Oficiales propietarios (vid. nota siguiente); 3º, en la contratación del oro en la Caja principal; y 4º, en la necesidad de contar con la autorización expresa de los Oficiales Reales para poder efectuar los pagos. Existían algunas excepciones p.ej., además de la señalada en el texto, respecto a los pagos, Los Tenientes de Veracruz recibían muchas veces instrucciones directas de la Administración Central y sus cuentas no solían englobarse en las de los Oficiales de México, según puede apreciarse en el Catálogo de la Contaduría, existente en el Archivo de Indias.

Un ejemplo claro de la diferencia con las Cajas principales, lo encontramos en un Acuerdo de los Oficiales de Venezuela, de fecha 22 de junio 1590 ("Origs. de la Hac. en Venez.", 46). señalamos como una característica de las primeras,

la imposibilidad de efectuar pagos de deudas contraídas en una Caja, en otra diversa; en el Acuerdo citado se decide vender una serba de libras de ámbar existentes en la Caja subordinada de Cere "para venir cada día a menos y merma"; la venta se hará con lamonedá delebrada en el asiento de los Oficiales propietarios (Santiago de León), con la condición de que el pago ha de realizarse precisamente en esta ciudad, dandosele al comprador ámbar en Cere.

(104). En Acuerdo del año 1564, los Oficiales Reales de Venezuela se quejan de que ha habido hasta entonces "gran ceguedad" en las cuentas por haberse hecho los cargos en diversos libros; y partes; para remediarlo, deciden unificar la administración y teneduría de libros; desde entonces habrá únicamente libros encuadernados y Libro General en el asiento de los Oficiales propietarios y los Tenientes de las Cajas subordinadas deberán enviar anualmente sus cuentas en pliegos herdados, que deberán ir firmados de sus nombres, cuentas que deberán ser anotadas en los libros citados. ("Origs. de la Hac. en Venez.", 23).

(105). En Acuerdos habidos en los años 1555 y 1590, los Oficiales Reales de Venezuela hacen constar la necesidad de traer el oro de las cajas del interior para el pago de salarios ("Origs. de la Hac. en Venez.", 20 y 46). A través de los Acuerdos de los Oficiales de esta Gobernación se advierte la constante tensión creada por las incursiones de los corsarios a los puertos; en 1590 se acordó: recoger el oro de las Cjas de Cere y la Laguna de Maracaibo (Origs. de la Hac. en Venez., p. 46) ante el temor de que se repitiera el desvalijo que pocos años antes cometieran aquellos en la primera de las Cajas.

(106). El Comisario enviado por los Oficiales Reales de Cere en 1586 a recoger el oro debía visitar las siete Cjas establecidas en el interior de Venezuela, lo que suponía un recorrido de más de 300 leguas ("Origs. de la Hac. en Venez.", p. 35); según hacer constar para otro viaje posterior acordado en 5 noviembre 1599, el comisionado tardó ochenta días en realizarlo (id. p. 106).

(107). En uno de los Acuerdos citados, de fecha cuatro febrero 1555 se dice: "y por que ninguna persona se quiere encargar de ello para lo traer por el riesgo que hay en el camino, lo traiga uno de los Oficiales a riesgo de S.M." (Origs. de la Hac. en Venez., p. 20). En 1590 se envía también al Contador (id., p. 42).

(108). Así vemos efectuarse todas las regiones: uno de los Oficiales Reales de México reside por turno en el puerto de Veracruz desde ----- ("Epist. N. Esp.", ----); los de Venezuela en el puerto de Boroboroata ("Origs. Hac. Venez.", p. 24); los de Lima, en el de el Callao; uno de Arequipa va a Chile (RC. a Toledo, 27 febrero 1575, en Encinas, III, 296, y otro de Trujillo reside en Sata.

- (109). "Origs". Hac. Venez ", p.24.
- (110). Esta variedad en la composición del elemento personal queda perfectamente reflejado en la Instrucción dada en 1567 al contador Mayor Martín de Irigoyen dirigido a la Nueva España: "Lleve todo lo que para la Hacienda real estuviere escrito y dado por Instrucciones a Virreyes, Audiencias, y Oficiales, para que ves como se ha cumplido (AGI., México. }.
- (111). La estructura del "Gazophilacium" Regium Perubieum", de ESCALONA AGÜERO responde a esta distinción: el Libro consta de dos partes: la una, en latín, dedicada al estudio de la administración por mayor de la Hacienda (funciones del Virrey en estas materias); la segunda, en romance, a la administración por menor (funciones de los Oficiales Reales). La misma distinción encontramos en las relaciones que dejaron los Virreyes a sus sucesores, especialmente en el siglo XVII (Monteseros Esquilache). En ellas se dice "La gobernación superior de la Hacienda de Su Majestad en estos Reinos está a cargo de los Virreyes y por menor administran y cobran en sus distritos los Oficiales Reales. También SOLÓRZANO habla de esta distinción en su "pol. Ind.", L.VI, c.XV.
- (112). "Gazophilacium"...? L.P.II, c.I.
- (113). Excluimos también de nuestro estudio: 1º, Los Oficiales Reales de Armadas. Las Armadas que acompañan a los galeones de Indias, suele llevar Oficiales de Hacienda como al parecer ya los llevaban las Armadas Reales de Castilla en el siglo XV. ("MARINER", "comercio y navegación entre España e Indias".- GUILLERMO C. CESPEDES "La avería en el Comercio de Indias").- También es posible que se hallen en las armadas que guarnecen las costas de los territorios de Ultramar. Ninguno de ellos forma parte de la administración de la Hacienda indiana en sentido estricto.
- 2º. Los Comisarios de la Cruzada. Esta fuente de ingresos, aunque propia de la Hacienda Real, constituye una organización autónoma, que se desenvuelve paralelamente a la que gira en torno a los Oficiales Reales, objeto de este estudio. A principios del siglo XVII, se introdujeron también importantes innovaciones en la administración de la Cruzada, constituyéndose los Tribunales del mismo nombre (vid. sus Ordenanzas en BALLESTEROS, "Ords. Perú").
- (114). Vid. pg.-----
- (115). En una carta de los Oficiales Reales de México al Rey de fecha 1º de agosto de 1533 ["opist. Nª Esp.", III, 100] le dicen que "viendo la necesidad que hay de poner recaude para cobrar rentas e quintos e almejarifos en algunos puertos y lugares de la Nueva España" habían puesto algunos tenientes en nombre propio "puesto que V.M. no nos ha dado poder para ello pensando por ventura que no eran necesarios". Suplican, si es aprobado por el Monarca este nombramiento, se les co-

hale, cantidad con que se les autente o bien se les de indios o corregimientos junto a los lugares donde residieren, " como se dan a otros que no sirven como ellos a V.M.", porque los Oficiales Reales no tienen siquiera suficiente para sustentarse ellos mismos con un salario reducido en dos tercios.- Una nota marginal señala: que no se responda".

- (116). Ordenanzas a Oficiales de San Juan, de 1528; Ord. Lima, 1573; vid. también la RC. de marzo 1535 a Oficiales de Santo Domingo, en "Cop.", V, 10.
- (117). Este último caso era rarísimo por la obligación de residencia consignada en las Ordenanzas de los Oficiales Reales de Venezuela de fecha 26 febrero 1594 (Orig. de la Hac. en Venez., 56) a un Contador sustituido por ausencia del Contador propietario Simón de Delívar que marchó a España como procurador de los municipios venezolanos.
- (118). En los títulos de los Oficiales fue introducida la costumbre de señalar como facultad de los mismos el que "estando legítimamente impedido" pudiera poner persona que actuase en su nombre (vid. el del Veedor Oviedo, de 2 noviembre 1513, confirmado en el 19 de junio 1519 en ALVAREZ RUBIANO, "Pedrarias Dávila", Apéndice, p. 484).
- (119). Vimos en la nota 95 la designación de Tenientes para la Caja de Veracruz; una RC. de junio 1540 (en "Cop.", V, 11), autoriza se ponga en el Río de la Plata; otra de diciembre 1567 ("Cop. id.") en Tambico. Respecto a asientos de minas, en marzo 1549 se nombran tenientes para las de Sierra Nevada en Venezuela ("Cop.", id.).
- (120). Esta facultad de los Oficiales Reales fue a alguna vez impugnada por los Gobernadores. Una RC. de 22 abril 1535 ordena a los Oficiales Reales de Cartagena que "provean a persona que vaya a las entradas que se hicieren y hubieren de hacer", a pesar de la opinión del Gobernador de que los Oficios de aquellos no se han de extender a lo que se ganare de nuevo en las entradas y que de su mano ha de poner factor y veedor (Ced. S^a Marta y Cartagena, 374).
- (121). En la Instrucción que se da a Gil González Dávila para tomar cuentas a los Oficiales Reales de Castilla del Oro de fecha 15 enero 1519 se le encarga examine los libros del Contador y compruebe en ellos los cargos hechos a "los vedores y contadores que han sido de las entradas". (ALVAREZ RUBIANO, "Pedrarias", Apéndice, p. 462).
- (122). ALVAREZ RUBIANO, id., Apéndice, 552.
- (123). Según ESCALONA, sólo se debe efectuar cuando después de encargarlo a los Corregidores y estos no lo cumplen ("Gazophilacium...", L.I.P.N., c. XV).

- (124). Los datos que anteceden sobre los comisarios han sido tomados de diferentes Acuerdos de los Oficiales Reales de Venezuela. Estos Acuerdos que recogemos aquí globalmente para evitar la multiplicación de citas, son de las siguientes fechas: 1590, 26 agosto 1593, 1º marzo 1597, 18 septiembre 1597, 5 noviembre 1599 y 1603; vid. "Origs. de la Hac. en Venez." pags. 42, 54, 64, 86, 90, 102, y 125).
- (125). Cid. cap. V., "Toma de cuentas"
- (126). Vid. cap. IV, "Recaudación", donde hablaremos de estos Receptores.
- (127). La Ordenanza 23 del año 1609 referente a los Tribunales de quantas (Roe., L.VIII, T.I, 1.78) habla del contador de Tributes y azogues, señalando "que donde hubiere este oficio" tendrá facultad de nombrar al igual que los Oficiales Reales, los Tenientes o Comisarios que estime necesarios, pudiendo exigirles fianzas, pero respondiendo personalmente a su gestión.
- (128). Durante el siglo XVI, el Tesorero es siempre el encargado de la Recepción de los ingresos procedentes de este ramo. Una RC. de 14 enero 1530, ordenaba al Receptor General de Penas de Cámara, no cobrara lo que no saliera en Indias. ("Col. Docs. ineds. Ult.", X, 1). Según ESCALONA ("Gazophilacium...", L.I, P.II, c.VII) en el siglo XVII estos fondos se custodiaban en Cajas distintas. El Receptor de dichas penas "es en cuanto a ellas Oficial Real en Ordenanzas, libros, cuenta y razón especial distinta; el Virrey Montesclaros explica en su Relación al Principio de Esquilache, pues existe este Receptor General en algunos Partidos y que estos Oficios les han sido vendidos (vid. ROZPIDA, 190).
- (129). El Título, fecha 8 de enero 1508, cit. en "Cop. V, 164.
- (130). La concesión se hizo en febrero 1526, confirmando el 27 agosto ("Cop.", V, 165). Los arrendadores de las rentas reales habían de acudir a él con la cantidad señalada "no embargante que no se dé licencia para ello" (RC. abril 1526, "Cop.", V, 165).
- (131). RC. 30 agosto 1530, "Cop.", V, 165.
- (132). RC. diciembre 1532 a la Española, "Cop.", V, 165.
- (133). Todo el oro extraído de las minas debe ser registrado en su presencia (Ordenanzas sobre modo de hacer las fundiciones en Castilla del Oro, 14 septiembre 1518: en ALVAREZ RUBIANO, "Pedrerías", Apéndice, p. 511). Lleva un libro en que se asientan las licencias para hacer oro; la relación de ellas se envía al veeder para comprobar las que fraudulentamente no acuden a la fundición. (Instruc. al Veeder de fundiciones de Castilla del Oro, Gonzalo Fernández Oviedo, 19 junio 1519, en ALVAREZ RUBIANO, "Pedrerías", Apéndice, p. 488 e Instr. para los escribanos mayores de Minas y Registros recogido literalmente en RC. L.VIII, T.V, 1.3).

- (134). En 1509 llegaba a la Española un Teniente del Secretario Conchillos pa-ra desempeñar en nombre de éste la escribanía de Minas en la Isla; el Rey ordena primero al Almirante Diego Colón, Gobernador de la isla, (Inst. 3 mayo, en Ced. cubano, 141) y después el Tesorero Pa samonte (RC. 13 mayo 1509, en "Ced. Cubano; 157) no se recibe ni pague cosa alguna sin que tome razón dicho Teniente; todo documento de Hacienda iría firmado por el siguiente orden: Gobernador, Tesorero, Factor, Contador y teniente Conchillos.- El principio es recogido en la Instr. para los Escribanos de Minas y Registros, dada por el Emperador el 4 mayo 1534, sancionada por Felipe II el 9 julio 1565 y que por recogerse íntegramente en la Rec. Ind. (L. VIII, T. V, 13) estuvo vigente durante toda la colonización española. También aparece en otra serie de fuentes jurídicas: las reglamentaciones dadas por los gobernantes sobre las Indias (sexta de las adiciones hechas por el Virrey del Perú Martín Henríquez el 7 septiembre 1562 a las Ordenanzas del Virrey Toledo a los Oficiales Reales de Lima, AGI., Patronato, 190, n.º 34; Orden dada el 27 noviembre 1579 por el Capitán General de Nueva Galicia Jerónimo de Corzo, referente al Escribano de Minas y Registros creado en Zacatecas, en AGI., Patronato, 182, n.º 53).- El resto de las obligaciones del Escribano señaladas en texto pueden verse en la citada Instrucción de 4 mayo 1534.
- (135). Con fecha 30 marzo 1508, era nombrado Escribano Mayor de Minas de todas las Indias el Secretario del Rey Conchillos ("Col. docs. ineds. Ult.", V, 120); el oficio era desempeñado por Tenientes suyos; ya le hemos visto aparecer en la Española en 1509; Gonzalo Fernández de Oviedo fué con el mismo objeto a Castilla del Oro en 1519.- la merced cesó en 1562.
- (136). En la Residencia que tomó el Licenciado Salmerón a Pedrarias el año 1526-7 se le causó de acumular en su Secretario los Oficios de fundidor y mareador, escribano mayor de minas veedor de fundiciones (carge XXXIII). El descaigo que da a esto el Procurador de Pedrarias es que Gonzalo Fernández de Oviedo los tuvo acumulados (era veedor real y tenía la representación del secretario del Rey Conchillos). "De la misma manera se ha hecho despés acá". La razón es la carestía de vida: "no se sufre nino lo podía servir con lo que renta cada Oficio si no los tuviere todos una persona ALVAREZ RUBIANO, "Pedrarias", p. 617).- Lo mismo ocurría en Santo Domingo como nos lo demuestra un auto fiscal del año 1531 contra el veedor y escribano mayor de minas sobre asuntos de su oficio (AGI., Patronato, 987, 2r. 1). El escribano de minas cobraba por arancel; una real de plata de 34 maravedises por cada Cédula de licencia que diere para coger oro o plata (RC. 7 julio 1549); a pesar de las súplicas del Escribano de Nueva España de que no se aumentase, fué confirmada la cédula anterior por otra de 10 junio 1551 (En "Ced. Puga", II, 114, f.º 126 v.º).
- (137). Constituye única excepción ESCALONA Y AGÜERO, el cual dedica la primera parte del Libro Ide su

"Gazophilacium..." a examinar los límites de la intervención del Virrey en materia de Hacienda.- La palabra "superintendencia" aparece ya en una cédula al Virrey Toledo de 17 octubre 1575; en otras fuentes se llama "Administradores Generales de la Real Hacienda"; la más utilizada en los siglos XVI y XVII (Escalona, Solórzano, Marqués de Montesclaros, Príncipe de Esquilache, etc.) es la de la "administración por Mayor" o "gobernación superior de la Hacienda".- Es curioso que al tratar de fundamentar y señalar el origen de esta facultad, el Príncipe de Esquilache se remonte a la Instrucción dada a los Comisarios en 1559: "Habiéndose mandado cesar aquella Junta -dice en su Memoria de Gobierno refiriéndose al Consejo que aquellos crearon- quedó la jurisdicción radicada en sólo el Virrey y sus sucesores y por no haber revocado y por darles como Instrucción se entienden con las despachadas a los demás...." (en BELTRAN Y ROZPIDE, "Memorias Virreyes Perú, I, 271); como ya señalamos, en aquella Instrucción se decía a Melgosa: "Tengas el cargo y administración de nuestro patrimonio y Hacienda, así ordinaria como extraordinaria y de todo lo ella ajeno y concerniente"; en realidad esta comisión se refería a una situación transitoria que no tenía nada que ver con las facultades del Virrey.- El Conde de Chinchón distingue en el Virrey tres funciones: Gobernador, Capitán General y Presidente de la Audiencia; a la primera de ellos corresponde el gobierno eclesiástico, el gobierno secular y la superintendencia de la Hacienda Real (Memoria de Gobierno en "Relaciones que dejaron los Virreyes del Perú, Madrid 1871, T.II, p.67).

- (138). Vid., p.ej. el testimonio expedido en Panamá el 18 mayo 1578 sobre la jurisdicción del Virrey del Perú (AGI., Patronato, 190, 23), donde se inserta una serie de cédulas dirigidas al Presidente y Oidores de las Audiencias del Virreinato para que guarden las providencias del Virrey en cosas de Gobierno, Guerra, y administración de la Real Hacienda.- SUAREZ DE FIGUEROA señala idéntica disposición entre los que se dieron a Don García Hurtado de Mendoza.- El Príncipe de Esquilache señala en su "Relación de Gobierno que las 19 Cajas del Perú, y las de Chile y Tierra Firme tienen la misma subordinación al Virrey (en BELTRAN Y ROZPIDE, id. I, 272).

- (139). Para esta necesidad concreta se le dieron al conde de Nieva despachos para los Oficiales de Nueva España, isla Española, Cartagena, Nicaragua, Santa Marta, y Nuevo Reino, Tierra Firme, Popagán, Guatemala y Honduras se especifica en ellas el envío de gente, armas, mantenimiento, artillería, navíos, y otras cosas necesarias siempre el Virrey escriba que tiene necesidad de ello (AGI., Lima, 568, f.135 v° y 182).- Por ejemplo, es notable la constante intervención del Virrey del Perú en las Cajas del distrito de las Audiencias de Lima y Charcas, y la casi nula de la de Panamá y en las

enclavadas de la Audiencia de Santa Fé y Quito.

- (140). Así lo dispuso una RC. de 28 octubre 1580 para Tierra Firme, inserta en la Recopilación (L.VIII,T.3,1.23).
- (141). El Marqués de Montesclaros, después de explicar como se administra lo referente a dicha Bula, dice: "Ultimamente, en estos postreros años, parece ha querido S.M. tenga alguna más entrada el Virrey, con quien manda al comisario General (de la Cruzada) se comuniquen las cosas del gobierno, y que sin su voluntad y parecer no se ejecute nada"; muy conveniente es -continúa diciendo- el Príncipe de Esquilache- que V.E. asista y dé favor a esta causa en que S.M. se halla tan interesado" (Vid. su Relación de Gobierno, en Beltrán y Rospide: "Memorias Virreyes Perú", I, 140ss).
- (142). La toma de cuentas y visitas a los Oficiales Reales es estudiada en el capítulo V dedicado a las garantías de la administración; las Juntas de Hacienda, arrendamientos, tasación de tributos, avaluaciones, y libranzas, en el IV, referente a las operaciones de la Hacienda y el nombramiento de Oficiales provinciales en el III, donde se hablará del régimen jurídico de los Oficiales Reales y sus Tenientes.
- (143). Ordenanzas e Instrucciones dadas a los Oficiales Reales por Mendoza, Velasco, Toledo y Martín Henríquez.- En el siglo XVII, continuó siendo muy abundante: el Marqués de Montesclaros hizo Ordenanzas para el gobierno de cada una de las Cajas (Memoria de Gobierno, en BELTRAN Y ROSPIDO, id., I, 211); las Ordenanzas sobre los libros que han de llevar los Oficiales Reales, de 18 mayo 1608, en BALLESTEROS, "Ordenanzas Perú", 99); el Príncipe de Esquilache, para la de Potosí (id., 216, ss.) el conde de Chinchón, para Trujillo y Huanuco ("Reales Virreyes Perú", Madrid, 1887, p. 98).
- (144). "Requiere también confirmación real en todas las Ordenanzas y estatutos que en las Indias hicieron los Virreyes, Audiencias, Gobernadores, Universidades, Comunidades etc. Pero con esta distinción: que las Ordenanzas que los virreyes hacen se ejecutan luego, y aunque de alguna se envía a pedir confirmación, las más pasan y se guardan sin ella, aun pudiendo la apelación de ellas. Lo mismo es de la que hacen las Audiencias, si bien éstas son pocas, porque como no tienen el gobierno, no les toca esta parte de él" (LEON PINELLO "Tratado de confirmaciones reales...", p.2, c.23, n°40 cit. por ESCALONA, "Gazophilacium..." L.I, c.XXX), vid. la RC.1 diciembre 1570a Toledo pidiéndoles mande al Consejo de Indias las Ordenanzas que ha hecho, para que como está mandado se vean y confirmen (ESCALONA 10) En 26 diciembre de 1563 se le había dado facultad para ordenar "lo que a nuestro servicio y buen recaudo de nuestra Hacienda entendieredes que conviene" (id.).

(145). Los virreyes del Perú del Siglo XVII suelen remontarse a él al explicar en sus Memorias de Gobierno el origen de sus facultades en materia de Hacienda. En una RC. de 30 noviembre 1568 (Cod. Vnoinas, IV, 229), se lo facultaba para nombrar Oficiales Reales provisionales y en otra de 1º diciembre 1573 inclase para proveer a los Tenientes de Oficiales Reales (Vnoinas, III, 295). El 1º de diciembre de 1571 le indicaba: "Donde os pareciere que no conviene haya Oficiales, los quitareis" y poco después el 90 día se prueba de haber puesto Corregidor en Guayaquil para los negocios de la hacienda y su decisión de quitar la marca real en Piura y ponerla en Loja y Puerto Paíta ("Gazophilacium...", L.I, c. XXIX). El 30 diciembre 1571 se le remitió la visita vindicativa y castigo de los Oficiales Reales, (Cita. en Memoria del Principe de Esquilache, vid. BELTRAN Y ROZPIDE, id. I, 272); el 2 diciembre 1578 se les encarga fiscalice la actuación de los Oficiales Reales de Charcas, dando aviso de lo que orea oportuno resolver (Cit. por ESCALONA, "Gazophilacium..." L.I, c. XXI). Es particularmente interesante un párrafo de la RC. de 1º diciembre 1573 (Cit. por ESCALONA, "Gazophilacium...", L.I, c. XXII) "y en lo de la comisión que pedís para en los casos necesarios, parece que para tomar las cuentas y visitas los Oficiales y ejecutar los alcances, no tenéis necesidad de comisión y basta el poder que tenéis". El 27 febrero 1575 (Vnoinas, III, 296), se aprueban las cabecezas que han señalado para la toma de cuentas; el 17 octubre 1575 ("Gazophilacium...", L.I, c. XV) se le ordena venda a arriendo las minas reales "o como mejor os pareciere que conviene al acrecentamiento de esta hacienda".

(146). Vid. notas 47 y 38. SOLORZANO, después de señalar la necesidad de previo Acuerdo para hacer gastos nuevos y extraordinarios, indica además la posibilidad de hacer terrias que sea en menoscabode las rentas reales. (pol. Ind.", L.V, c. XIII, n° 26).

(147). Tal es el caso del gobernador de Castilla del Oro antes de la creación del Virreinato del Perú (Pedrarias Dávila Lope de Sosa...) y de los gobernadores de las provincias mayores (Guatemala, Guadaluajara, y Charcas); a estos ejemplos puede asimilarse el caso de los Presidentes-Gobernadores (Santo Domingo, Panamá). Entre las provincias menores puede citarse también el caso de Venezuela; en cuyo territorio el gobernador ejerce la máxima representación de gobierno.

(148). En el título del gobernador de Castilla del Oro, Lope de Sosa (3 marzo 1519, en ALVAREZ RUBIANO, "Pedrarias Dávila", Apéndices, p. 467). Se le da poder para hacer ordenanzas generales en toda la gobe nación y así mismo para señalar el orden que se ha de tener para sacar el oro de las minas; a Vaca de Castro se le concedía en junio de 1540 la facultad de proveer lo que le pareciere para el buen recaudo de los almojarifazgos y avalaciones. "Darles si vos -se añadía las más instrucciones que os pareciere que

convienen para el buen recaudo de nuestra hacienda, apuntando lo que os pareciese que se debe dar o añadir en las dichas Instrucciones que así ellos de nos tienen para que en todo mejor se cumpla lo que a nuestro servicio convenga" (Instr. a Vaca de Castro, en "Col. docs. inedit. Ult.", X, 481).— En la nota 42 del C.I. señalamos algunas instrucciones referentes a la hacienda dadas por Gobernadores, —

- (149). Generalmente la toma de cuantas era realizada en la primera mitad del siglo XVI o por Oidores en la Audiencia o por Contadores especiales comisionados por el Rey; por eso se explica que al pretender en 1529 el Gobernador de Santa Marta tomar cuentas a los Oficiales del territorio, éstos se niegan a dárselas, diciendo que no están obligados a dársela (RC. en "Cedulario-Santa Marta", 68); las Ordenanzas de 10 mayo 1554 establecía que allí donde no estuviere la sede de la Audiencia, fueran tomadas por los Gobernadores y Regidores y las remesas de cuentas existentes en AGI. muestran que se llevó a cabo con regularidad.— A Vaca de Castro solo facultó para castigar los fraudes cometidos en la Hacienda (Instr. cit. nota ant.); una RC. dirigida al Gobernador de Nueva Galicia de 26 octubre 1541 (en "Ced. Puga", I, 430, llv 2) le ordena que averigüe si el Contador ha dado al Tesorero copia de las condenaciones de Cámara y si el tesorero ha puesto la debida diligencia en ello; al de San Juan de Puerto Rico, que haga cumplir lo dispuesto sobre que estén presentes todos los Oficiales en la recaudación de ingresos (RC. enero 1555, cit. en "Cop.", V, 174); al de Cuba, que haga guardar la cédula que ordena se lleve a la fundición un effe de 3 llaves para cobrar los derechos reales (Cop. V, 170).
- (150). El Libro de Acuerdos de Venezuela muestran la constante participación en las Juntas de los Gobernadores del Territorio.— Ya en la Instr. del Gobernador de la Española de enero de 1519, se ordenaba que los Oficiales Reales comunicaran las cosas de que sus oficios juntamente o con el gobernador así como las del acrecentamiento de la Hacienda Real (c. XIII, cit. en "Cop.", V, 24). En Castilla del Oro, durante el mando de Pedraria Dávila, se realizaba también conjuntamente.— En la Instr. del Veedor de Castilla del Oro, Gonzalo Fernández de Oviedo, se especificaba la obligación de que el lugarteniente general esté presente con los Oficiales Reales a las horas de fundición (19 junio 1519, en ALVARO RUBIANO, "Pedrarias Dávila", Apéndices 488).— Una RC. de junio de 1565 (cit. en "Cop." V, 170) ordenaba que el gobernador de las provincias de Yucatán, Gosumel, y Tabasco poseyera una de las tres llaves de la Caja Real; la misma facultad le concedió al Gobernador de Cartagena (RC. 23 marzo 1574, en Contaduría, 1383 n° 7, r. 19).
- (151). El nombramiento de Oficiales Reales interinos hasta que el Rey nombre los propietarios, es facultad propia de la autoridad gubernativa; por eso es muy frecuente

como veremos en el capítulo próximo, el nombramiento efectuado por el gobernador.- Así le decidió una RC. dirigida a los Oficiales de Cartagena de 26 de mayo 1573, (AGI., Contaduría, 1382, 1, r. 30), a pesar de la petición de éstos para que se les reserven este nombramiento.

- (152). En compañía de los Oficiales Reales, nombrará los Capitanes de los navíos en los que se hubiere de enviar el oro, cuidando de que los tales navíos vengán bien abastecidos de lo que hubiere menester (Instr. de Gobernador de 1536, c. XI e Instr. al Gobernador de Tierra Firme del año 1562, cit. en "Cop.", V, 382 y 384).
- (153). "Cuide haya buen recaudo del oro y plata", "prevea como no ande fuera del arca la hacienda real", "esté muy advertido de mirar como se efectúa el meter del oro en al arca y de como se cobran los derechos del almojarifazgo", etc. (RCs. marzo 1544, abril 1550, septiembre 1532, en "Cop.", V, 169, 172 y 171). De modo más general, una RC. a la Audiencia del Nuevo Reino de Granada, de noviembre 1569 indica que haga que se cumplan las instrucciones dadas a los Oficiales ("Cop.", V, 153). La RC. de 15 febrero 1523 ordenaba que los Oidores de la Audiencia de la Española visitaran solamente la residencia de los Oficiales Reales para comprobar si quedaba algún dinero fuera de ella (Col. docs. ineds. USNt., IX, 305) y las Leyes Nuevas de 4 julio 1543 después de ordenar que en adelante se envíen las cuentas a la Casa de Contratación de Sevilla, añade dirigiéndose al Presidente y Oidores de las Audiencias "que tengan muy particular cuidado de que los dichos nuestros Oficiales que residen en la islas y provincias de sus distritos hagan y cumplan todo lo suso contenido y de nos avisar de los que no lo hicieren", (Texto, en "An. de Este . America", II, Sevilla, 1945, p. 835).
- (154). Vid. cap., IV, donde se estudia ampliamente lo referente a esta cuestión.
- (155). Sobre las almonedas y evaluaciones hablaremos extensamente en el capítulo IV.
- (156). Ord. 60 de la Audiencia de Lima (ESCALONA, "Gazophilacium..." L. II, P. II, c. XXXIV).
- (157). "Gazophilacium...", L. II, P. II, c. XXX.
- (158). ESCALONA, id., L. II, P. II, c. XXX.- La mayor parte de estas funciones son señaladas en las ordenanzas de las Audiencias (vid. la de Lima, de 17 agosto 1568, en EMBLETTES, "Ord. Perú", I, 124; vid. También la querrela del Fiscal del Perú, Licenciado Villalobos contra los fraudes de Pizarro, Almagro, y Oficiales Reales en 1537, en LEVILLIER, "Coba. Perú", II, 84). En una relación del personal de la Audiencia de Lima hecha por el Virrey Velasco en 1597 se distingue como personaje distinto del fiscal un "solicitador del Fisco (Diego García de Orepesa),

nombrado por el virrey, (LEVILLIER, id., XIV, 62).

- (159) id. el cap. IV.
- (160). Da su parecer antes de hacerse la tasación de los tributos que han de pagar los indios puestos en la Corona Real; ha de vigilar que no se efectúen fraudes al realizarse dicha operación, tales como tasar en menos los tributos en los cuales se hubiese consignado alguna merced, para luego retrasarlos en mayor cantidad; llega incluso a encargárselo a la Audiencia el formar medidas y padrones del largo, ancho y peso que han de tener las mantas que han de tributar los indios. (RCs. a la Audiencia de Nueva España, de marzo 1563, febrero 1563 y junio 1567, cit. en "Cop.", V, 53 y 86).
- (161). id. nota 143, - Citaremos, como ejemplo, los avisos" dados por la Audiencia de Charcas a los Oficiales Reales en 1563, aprobándose gran parte por el Monarca (Carta de aquella Audiencia al Rey del 24 diciembre 1563 en LEVILLIER, "Correspondencia de Presidente y Oidores de la Audiencia de Charcas", I, 103) la cedula confirmatoria es de julio 1566, en "Cop.", V, 167).
- (162). La facultad de librar sobre las penas de Cámara para gastos se consigna en las Ordenanzas de las Audiencias. - La de librar los salarios de los corregidores era una consecuencia de su facultad de nombrar los titulares de dichos Oficios (salvo los de Corregimiento muy importantes y aun de éstos, alguno, como el de Zacatecas, no reserva también a la Audiencia). En las Instrucciones al Marqués de Cañete, se reserva también a la Audiencia la de señalarles salarios competente, conforme al trabajo y calidad de la tierra (cit. en "Cop.", V, 267); los Oficiales Reales pagan estos salarios mediante libramiento de las Audiencias (RC. 1562 a Nueva España Galicia, cit. en "Cop.", V, 267).
- (163). En "Ced. Puga", II, 335, f. 211 v°.
- (164). En 1533, la Audiencia Gobernadora de México juzgó conveniente enviar al Monarca los 50.000 ducados existentes en poder de los Oficiales Reales. Estos se negaron a ello, "y por estar esto a su cargo y tener sus instrucciones de los que han de hacer, no se entrometió esta Audiencia, sino en lo que tiene poder" (Carta de la Audiencia de México a la Emperatriz de 9 febrero 1533, en "Epist. N° esp.", III, 32).
- (165). La Audiencia de los Reyes provea si conviniere que no haya Caja Real y cuño más que en los Reyes, Cuzco, Puerto Viejo y Quito" (RC. marzo 1544, en "Cop." V, 169).
- (166). "La Audiencia de México provea lo que le pareciese sobre si se avalliarán las mercaderías en Veracruz a oro de minas o a se de Tepusque, como antes se ha hecho" (RC. febrero 1538, en "Cop.", V, 116). - "La Audiencia de México mire la orden que se podrá tener para sacar algún

aprovechamiento a rentas de donde se pudieren pagar los salarios de los Alcaldes del Crimen" (RC. julio 1568, en "Cop", V, 157).— En la Instrucción a la 2ª Audiencia de México, de 12 julio 1530, se le ordenaba cobrara de Nuño Beltrán de Guzmán 3.000 pesos que había tomado de la Hacienda Real, cuando fué a la conquista de los Teuleos y Chichimecas, y en caso de que no pudiera recobrarse enteramente esa cantidad por falta de bienes, los fueron cobrados a los Oficiales Reales por haberle dado sin expreso mandamiento real que, previa información, hicieran justicia de los desordenes habidos en la recaudación de las rentas, cuando Pedro de Alvarado estuvo en la provincia de Guatemala (en "Cod. Puga.", I, 179 y 184). Eran muchas veces comisionadas para poner en la corona Real indios que estaban bajo encomienda; en marzo 1530 se le ordenaba además a la de México que "enviase siempre relación de los indios que están en la Corona Real y lo que rentan, y así lo hagan siempre de los que en adelante nacaren" ("Cop.", V, 79). El 25 noviembre 1553, la de Lima dió facultad al Factor Reman, a quien poco antes había nombrado Corregidor y Juez de Residencia, para ser proveedor de la gente de guerra, lo que llevaba incluido la posibilidad de hacer sobre el Fisco las libranzas que fueran necesarias (vid. el nombramiento de la Información de la Audiencia que acompaña al Memorial enviado por dicho Factor al Consejo de Indias en 1561, en AGI., Lima, 120).

- (157). No conocemos exactamente las atribuciones en materia fiscal de los Corregidores. SOLÓRZANO señala en el siglo XVII su intervención en el cobro y los rezagos de los tributos de los encomenderos y en la administración de las Cajas de Censos y Cajas de Comunidad de los indios ("Pól. ind.", L. VI, c. XVI, n.º 24). Desde un principio se les encomendó la recaudación del tributo en sus distritos; los enormes abusos cometidos hizo que se diera una RC. para la Nueva España el 16 abril 1550, en la que solo les prohibe recibir tributos bajo penas severas (pérdida del salario de un año, pérdida del Oficio e imposibilidad de desempeñar otro en Indias), debiendo únicamente solicitar que los indios les paguen a los Oficiales Reales o a quien los hubiere de cobrar (Cod. Puga., II, 67. f.º 126); debió derogarse ensiguida por que en las Instrucciones dada por Don, Luis de Velasco a los Oficiales Reales de la Nueva España dos años más tarde, se regula minuciosamente la participación de los Corregidores en el cobro de los Tributos; el 8 noviembre 1563, Felipe II ordenaba que le cobraran los Corregidores y Alcaldes Mayores, donde no haya Oficiales Reales (vid. el epígrafe "Recaudación de ingresos", de nuestro capítulo IV). En cuanto a las informaciones para las retasas de tributos, una RC. de 9 octubre 1556 dirigida a la Audiencia de Nueva España, dispónia que no se encomendase a los Corregidores "porque para tomar grates a los indios paralo que han menester de ellos e porque en las residencias no se les pidan algunas cosas, siempre son de su parte y hacen sus negocios a sus propósitos"

(en "ced.Puga.", II, 277, f°197); tres años después, sin embargo, no se le decía a la misma Audiencia que proveyera lo que convenga en este punto apesar de la prohibición que se le dió de cometer las informaciones a los Corregidores, ya que lo importante es que las cobranzas se hagan bien y justificadamente " ("Cop.", V, 89).- Los abusos de los Corregidores en materia de tributos eran ya proverbiales y son constantes los testimonios: además de las cédulas citadas de 16 abril 1550 y 9 octubre 1556, vial Memoria de Gobierno de Don. Antonio Mendoza, D. Luis de Velasco y Principe de Esquilache. (inst.Virr.N°Esp., 233; BELTRAN Y ROZPIDE, "Memorias Virreyes Perú", I, 115 y 340) y SOLÓRZANO ("Pol. ind.", L/VI, c.XVI, n°24).

- (168). En el cap.I, p----- ya indicamos el importante papel señalado al Corregidor en las Instrucciones dadas por el Virrey Toledo a los Oficiales de algunas Cajas del Perú de hecho, equivale al de un Oficial Real más. La RC. de 27 septiembre 1575 confirmaba la decisión de dicho gobernante de que los Corregidores del Cuzco, Quito, Piura y Paiza tomaran anualmente las cuentas a los Oficiales de dichas Cajas. (Encinas, II, 296).
- (169). Un acuerdo de los Oficiales Reales de Venezuela del año 1577 muestra que en aquella Gobernación existía la costumbre de que los Alcaldes Ordinarios de las poblaciones donde hubiera Cja subordinada, tuvieran una de las llaves del arca y su asistencia a las operaciones administrativas en compañía de los Tenientes ("Origs. de la Hac. en Venez", p.25).
- (170). Según el sistema administrativo fiscal establecido por RC. de 13 diciembre 1527 (Col.doos.ineds. Ult', 290) el alcalde de Cubagua llevará uno de los tres libros de contabilidad del Fisco (los otros, el tesorero y el vecor), libro que entregará a su sucesor al terminar el tiempo de su oficio de alcalde (un año).
- (171). Aparece su firma en uno de los Acuerdos de los Oficiales de Venezuela, al tiempo que desempeñaba el cargo de Gobernador por muerte del titular ("Orgs.Hac.Venez" 103).

CAPITULO TERCERO

REGIMEN JURIDICO DE LOS OFICIALES REALES Y SUS TENIENTES

Los administradores por antonomasia de la Hacienda indiana son los Oficiales Reales. Convendría, pues, que nos detengamos un poco en el estudio de su régimen jurídico. Para ello estableceremos una clara separación entre los "propietarios", los de carácter provisional y los tenientes, ya que desde el punto de vista jurídico existen marcada diferencia entre unos y otros.

Examinado ya en el capítulo anterior el origen histórico de los Oficiales Reales, y reducido el problema de la naturaleza jurídica al concepto moderno de "funcionarios" (prestación de una función de carácter público a cambio de una retribución pecuniaria) entraremos a continuación en el estudio de los principales aspectos que informan su régimen jurídico (nóminas, obligaciones, derechos, jurisdicción, causas de pérdida del oficio y principios que rigen su actuación), pasando después al examen del régimen correspondiente.

a los Oficiales provisionales y a los Tenientes.

NOMBRAMIENTO.

Ante todo hay que señalar que estos oficios no pudieron ser vendidos durante el siglo XVI. Esta forma de provisión de cargos públicos, aunque conocida ya en Indias en la segunda mitad de aquel siglo, no fué permitida nunca para los Oficiales Reales. El Virrey Toledo llegó a proponer que se vendieran las que fueran quedando vacantes; la contestación fué terminante: "Se tiene por inconveniente la venta de estos oficios acá (en España) y allí; y así de aquí adelante se tendrá cuidado de buscar personas competentes para ellos" (1). La prohibición se extendía a todos los oficios del Fisco, como se hace constar en cédulas de los años 1575 y 1595 (2), ya que es el mismo el fundamento: evitar los fraudes con que probablemente procurará resarcirse de los gastos realizados para la posesión del tal cargo. Los documentos examinados demuestran que se cumplió lo dispuesto en este punto (3); sin embargo, y a pesar de que persistió la ~~causa de~~ ~~causa~~ aconsejaba que no se vendieran; las necesidades apremiantes de la Corona llevaron a ampliar la relación de oficios vendibles con algunos de los del Fisco (receptor de penas de Cámara), alcanzando la medida incluso a los de Oficiales Reales. (4).

Los oficios de Tesorero, Contador, Factor y Vendedor de la Real Hacienda son, pues, provistos por elección, entre las personas que reúnan determinadas calidades. ¿Quien efectúa esta elección y cuáles son las cualidades requeridas para ser elegido Oficial Real?

El nombramiento de los Oficiales Reales propietarios corresponde siempre al Monarca, que de hecho lo delegaba muchas veces en el Consejo de Indias (5). De un modo negativo lo confirman así todos los nombramientos de Oficiales Reales provinciales realizados por los Virreyes y Gobernadores de Indias, que se realizan hasta tanto el Rey provea propietarios y de un modo positivo ^{1.)} demuestran los títulos, expedidos siempre por el Monarca.

Decíamos que, de hecho, el nombramiento era efectuado por el Consejo de Indias. Así lo indica SCHERFER al examinar las atribuciones de dicho organismo que, añade, era ayudado en los pormenores técnicos por la Casa de Contratación de Sevilla. La elección ha de ser comprobada por el Monarca, el cual ^{demuestra} expresa voluntad de reservar para sí esta facultad; así, cuando a la muerte de la Emperatriz Isabel (12 de mayo de 1539) se establece un Consejo de Regencia, en el que figuraba Loaysa, presidente del Consejo de Indias, se le dió poder de decretar para los territorios de Ultramar en todo lo que podía el mismo Emperador, excepto las mercedes extraordinarias y los nombramientos de miembros de las Audiencias,

Oficiales Reales y Obispos, sobre los cuales había de consultar por escrito al Emperador (6). Buena prueba de la importancia que se le daba a estos oficios del Fisco.

Esta importancia queda realzada, si nos fijamos en los sujetos en que recaían estos nombramientos. De modo especial durante los primeros tiempos, solían concederse a personas de bastante relieve social, muchas veces pertenecientes a la Corte, y desde luego, siempre de la confianza del Rey. Más adelante se descuidó algo este punto lo que mereció que el Virrey Toledo llamara la atención al Consejo (7); en general, se fué haciendo práctica acostumbrada el conceder el título del propietario a personas que habían desempeñado el cargo interinamente o, al menos, habían demostrado tener la condición necesarias para ocuparlo en el desempeño de otras tareas administrativas del Fisco (8). Estas condiciones eran fundamentalmente las de carácter moral y técnico; es decir, se elegían entre aquellos que por su conducta anterior ofrecían garantías de honradez en su conducta y que, además, contaban con la pericia necesaria para el desempeño del cargo. Existían diversas prohibiciones e incompatibilidades: en primer lugar, no podrían ser Oficiales Reales los mercaderes "por el riesgo de traducir a la Real Hacienda la contratación profesada en la propia" (9); tampoco, los que estuvieran emparentados con la autoridad gubernativa del territorio, ya que esto coartaba la libertad en la actuación de los Oficiales (10); ~~además~~ era

también aplicable a estos oficios la prohibición de desempeñar cargos públicos en Indias los hijos y nietos de condenados y quemados por la Inquisición (11). Finalmente, como es lógico, tampoco podían ser elegidas aquellas personas que, como los arrendadores de rentas o los deudores del Fisco, no ofrecían las garantías necesarias (12).

El nombramiento de los Oficiales Reales propietarios suele hacerse independientemente para cada oficio (Contador, Tesorero, Factor o Veedor) (13), y además por toda la vida (de ahí, la denominación de Oficiales propietarios, usada constantemente en las fuentes para designarlos) (14). El designado recibe un "título" que le da poder y facultad para el ejercicio del cargo y además una "Instrucción": el primero, que se le entrega directamente, si reside en España, señala de modo general su derecho al cargo "con todos los honores, franquicias, ejecuciones, libertades, preeminencias, etc." que ordena se le guarden, y de modo especial la retribución económica que ha de percibir anualmente, ~~460~~ facultad de nombrar Teniente "estando justamente impedido" y la cantidad que ha de depositar como fianza (15). La Instrucción señala detalladamente sus obligaciones específicas; como ya dijimos, responde a un formulario general; algunas veces se le remite a la de sus antecesor y en algunas ocasiones, se le envía con posterioridad. En los primeros tiempos, solían entregársela los Oficiales de la Casa de Contratación sevillana o le refogían una copia a los Oficiales

de la Española (16).

Una vez recibido el título, el Oficial debía presentarse en la Casa de Contratación de Sevilla para entregar la cantidad especificada como fianza; el título era asentado en los libros de la Casa y se le devolvía después de consignar en él la entrega del dinero; si el interesado estaba en Indias, las daba ante los Corregidores y se remitían a Sevilla (17).

Finalmente, venía la presentación y toma de posesión. Llegado a su destino (18), tenía lugar una solemne reunión a la que asistía además de los otros Oficiales Reales, la máxima autoridad gubernativa del territorio, un escribano y algunos testigos. El nuevo Oficial presentaba el título que era leído en alta voz por el Escribano; los presentes se obligan a cumplirlo, y conforme a él, admitir al uso y ejercicio de su oficio al nuevo Oficial Real con tal que hiciera el juramento acostumbrado y se comprometiera a dar (si no lo hubiera hecho ya en Sevilla) las fianzas consignadas en el título (19). El juramento era hecho "por Dios Nuestro Señor e por Santa Maria, su bendita e gloriosa Madre, e por las palabras de los Sanctos quatro Evangelios e por la señal de la Cruz" y por él se obligaba a usar bien y fielmente el oficio, guardando su servicio y lo que conviniera al aumento y conservación de la Real Hacienda (20). Lo firmaban el titular y dos testigos; y luego, el Virrey o Gobernador presente ordenaba

se le tuviera por tal Oficial Real; en señal de posesión, el Oficial Real cerraba, abría y volvía a cerrar el arca y sacaba la llave (21). Tanto el título como el testimonio de posesión eran inscritos en el Libro de Acuerdos (21).

La toma de posesión tenía como complemento, la realización de un inventario de los bienes existentes en el arca de tres llaves, tanto en numerario, como en escrituras de deudas, las cuales se comprometía a cobrar el funcionario entrante (22).

PRINCIPIOS QUE RIGEN LA ACTUACIÓN DE LOS OFICIALES REALES.

Al hablar de las características generales del sistema administrativo ~~que~~ señalábamos como una de las principales la completa autonomía de los distritos fiscales y, por ende, la falta de una reglamentación jerárquica entre los Oficiales propietarios de Cajas enclavadas dentro de un mismo Virreinato. ¿Existe al menos una jerarquía entre los de una misma Caja?

A la vista de los documentos, creemos que no se puede hablar tampoco aquí de prelación jerárquica ni de preeminencias de unos cargos sobre otros. Las diferencias que señalan las fuentes son una consecuencia de la especialización y de la distinta re-

ponsabilidad de los mismos: en relación con la primera de estas causas, vemos que el Tesorero tiene la primacía en el llamamiento de acreedores de la Hacienda, lo cual es lógico ya que es él el que paga los libramientos y cobra las deudas fiscales (23); la mayor responsabilidad del Tesorero y Contador hace que éstos reciban generalmente un mayor salario que el Factor y Veedor(24); pero, en el aspecto esencial de la administración, la decisión en los asuntos, tienen la misma fuerza sus votos, y aún en caso de que uno no esté conforme con el voto de la mayoría, que es la que decide, debe hacer constar su reserva en el Libro de Acuerdos (25).

Toda la actuación de los Oficiales Reales queda regida por los principios de administración conjunta y responsabilidad solidaria. Ambos quedaron fijados desde el primer momento y fueron constantemente reiterados en la legislación.

La actuación colegiada es obligatoria para todas las operaciones de la administración, y su cumplimiento ⁱⁿ suele estar sancionado en cada caso particular por penas pecuniarias, y algunas veces incluso por la pérdida del oficio. Juntos han de asistir a los Acuerdos, junto a las fundiciones y almonedas, al cobro de impuestos y al abrir y meter oro en el arca, que precisamente por eso, suele tener tantas llaves como Oficiales ~~que~~ hay; juntos han de abrir los despachos que envíe el Rey y juntos han de contestarle (26); las libranzas, pagas, entregas, etc.

tos, diligencias y recaudos referentes a la Hacienda; los acuerdos ~~en~~ incluso las ~~fés~~ que han de darse a los que salen de un territorio con seguridad de que no son ~~deudores~~ al Fisco, han de ir firmadas por todos; los envíos entre las Cajas han de ir consignados a todos los Oficiales (27). Más aún: la partida de pagos, asentada en los libros del arca (~~que~~ son comunes a los tres Oficiales), libra al deudor real y el recurso por incumplimiento de pago, se vuelve contra los Oficiales Reales; pero si el certificado de pago aparece firmado únicamente por el Tesorero y no aparece ninguna ~~men~~ción en los libros de los demás Oficiales, no se reconoce el pago (28). En alguna de las Ordenanzas, (verbigracia, la dada para los Oficiales de Lima en 1573), se señala la obligación de que alguna de estas operaciones colegiadas, concretamente la de meter oro o plata en el arca, sea realizada siempre en presencia del Presidente u Oidor más antiguo de la Audiencia (ord. 17). Los documentos demuestran que este último punto no se cumplía en la práctica (29). En todas estas actuaciones colegiadas regía el principio de la mayoría de votos; en el orden de votar y en el expediente de los casos judiciales, la preeminencia -cuestión tan puntillosa en aquellos tiempos- quedaba establecida automáticamente por la antigüedad en la toma de posesión del oficio (30).

La responsabilidad solidaria era el complemento lógico de la administración conjunta. "Cada uno de

los Oficiales ha de hacer cuenta y considerar que le toca a él el oficio del otro*: tal es la fórmula empleada constantemente en las leyes (31). "Si delinque un Oficial -dice ESCALONA AGUERO- es verosímil lo sepa o participe el compañero que en una misma ~~Caja~~, en un mismo ejercicio y en una íntima y más que doméstica comunicación se ejercitan y corresponden, debajo de unas llaves, de unos libros, y dentro de unas mismas puertas, cobrando y pagando juntos, y no unos sin otros; de que resulta están obligados los unos por los otros, y que el que se halla inocente, padezca por la culpa del compañero desatento" (32). En la aplicación del principio hay sin embargo una interpretación benigna en el caso de simple negligencia de uno de los Oficiales en el ejercicio de su ~~vargo~~: en este caso, sólo se exige el pago a sus compañeros, si el culpado y sus fiadores no tienen ~~bién~~ bienes suficientes para hacerlo; en cambio, si se entiende que ha habido delito, entonces la responsabilidad solidaria se hace efectiva en todas ~~por~~ partes iguales (33).

OBLIGACIONES.

En este epígrafe agrupamos tanto las positivas como las negativas o prohibiciones, ya que éstas son en su mayor parte una consecuencia, y consti-

tuyen un complemento necesario de las primeras. Entre las positivas o de hacer, distinguiremos las que son comunes a todos los Oficiales y las que son propias de cada uno.

En realidad, todas las obligaciones de los Oficiales Reales se pueden reducir a una sola: la de cumplir las Ordenanzas, Instrucciones, ~~E~~ Provisiones y Cédulas Reales que se les entregue o envíe para la buena administración de su oficio y en general de la Caja respectiva, obligación cuya observancia se compromete a cumplir bajo juramento en la toma de posesión de su cargo. Esta obligación de los Oficiales debe interpretarse, como el resto de la legislación indiana, en el sentido de que si "de su cumplimiento se siguiera escándalo conocido o daño irreparable, habiendo lugar de derecho, suplicación ~~ex~~ interponiéndose por quien y como deba se pueda sobraseer en el dicho cumplimiento"; en los restantes casos, debe cumplirse bajo pena de la merced ~~real~~ y la mitad de los bienes, quedando únicamente la facultad de súplica, con tal de que no se suspenda el cumplimiento (34).

Esta obligación puede desdoblarse a su vez en otras varias: desempeñar fielmente sus oficios, desempeñarlos personalmente, dedicarse plenamente a sus funciones administrativas y guardar secreto en todo lo concerniente al Fisco. Hemos hablado ya de esta última obligación

a las que se obligaban expresamente bajo juramento. Veamos ahora el contenido de las tres primeras.

La obligación de desempeñar fielmente sus oficios, suponía el cumplimiento de las numerosas ~~de-~~ ~~ses~~ que pesaban conjuntamente sobre los Oficiales Reales: asistencia a las fundiciones; Juntas de Hacienda (Acuerdos ordinarios y Acuerdos Generales), almohedas, viajes a los puertos ~~xx~~ para la avaluación de mercaderías y sobro del almojarifazgo, y a las Cajas subordinadas para tomar cuentas y recoger los ingresos, administración superior de las granjerías reales, toma de cuentas a los Corregidores, llevar los numerosos libros de contabilidad que re- quería la administración, enviarlos ^{a España} ~~los~~ cada seis meses un tiento de cuentas, ver las caudas fiscales, informar constantemente al Consejo de Indias del estado de la Hacienda y preparar los envíos de oro y plata a España; Aún se podrían añadir otras, como la administración de las mercaderías enviadas por la Casa de Contratación de Sevilla, función muy im- portante en los primeros tiempos, que estaba a car- go del Factor; también las própias de otros oficios, como la de receptor y pagador de la gente de a caballo, que les fué acumulado en algunos casos (35).

El estudio minucioso de cada una de estas tareas encomendadas a los Oficiales Reales nos llevaría muy lejos, por lo cual nos limitamos únicamente a examinar las de mayor relieve en el próximo capítulo ~~lo, dedicado a las operaciones de la Hacienda. Co-~~

lo, dedicado a las operaciones de la Hacienda. Como ya se supone, el realizar tan numerosas ocupaciones, requería un trabajo constante de los Oficiales; las Instrucciones de los Virreyes Toledo y Martín Henriquez reglamentaban minuciosamente la distribución de las tareas, señalando las correspondientes a cada día y especificando el número mínimo de horas de trabajo (36).

Aun cuando estas operaciones eran realizadas siempre conjuntamente (cuando iba de viaje un solo Oficial, las realizaba con los tenientes de ~~las~~ compañeros), cada uno de los Oficiales Reales tenía una misión específica que cumplir :

Al Tesorero le correspondía de modo especial la obligación de custodia de los fondos reales depositados en la caja de tres llaves (37), y por este motivo estaba obligado a residir en la casa donde se depositara ésta; tenía como funciones administrativas propias las del cobro de los ingresos procedentes de las penas de Cámara, y de las salinas, y al parecer les correspondía también efectuar el arrendamiento de los diezmos (38).

El papel desempeñado por el Contador era muy importante. El Licenciado Gasca dice en una de sus Cartas, que "el Contador es la llave dél recaudo dé la Hacienda de Su Majestad" y en una de las Instrucciones de Gobernador se encarga que "el Contador tenga mucho cuidado de las cosas de su oficio por

ser el fiel de los otros e importa tanto la fidelidad en él * (39). Su misión principal es el control del recaudo y disposición de los bienes reales: para el ejercicio de esta función debe llevar cuentas minuciosas de lo que entre en poder del tesororo y del factor para hacerles los cargos correspondientes y ha de tener una relación de los salarios y situados sobre la Caja respectiva, para dar al tesororo las libranzas correspondientes (40); a demás tiene el encargo expreso de solicitar la ejecución de las reales cédulas que les sean entiadas, así como de cuidar por su contestación (41).

El Factor tiene a su cargo de modo preferente todo lo relacionado con los ingresos en especie de la Real Hacienda. En los primeros tiempos, en que estaba iniciándose la organización económica de las colonias, tenía una importancia extraordinaria la misión comercial del Factor, que en íntima relación con los Oficiales de la Casa de Contratación deVillana, realizaba un intenso tráfico de mercancías por cuenta real; más tarde, aun cuando estas tareas comerciales ^{siguieran} teniendo algún relieve en ciertos puertos (Cartagena, Panamá, Veracruz, Acapulco, Lima, Callao) (42), la misión específica del Factor tenía sólo interés, en la mayoría de las Cajas, en las constatadones relacionadas con los tributos y con los repartimientos de la Corona: como es sabido, aquellos solían pagarse en especie, con los productos

de
característicos de cada región; los repartim
mientos que el Monarca solía reservarse para
sí, se obtenía una serie de productos en espe
cie (ganado, coa, etc.), de cuya venta esta
ba encargado el Factor (43); como además los
Oficiales Reales tenían la superintendencia
de la administración de estos repartimientos,
(la administración por menor está en manos de
mayordomos nombrados por el Gobernador), el
Factor tenía a su cargo la obligación de rea
lizar viajes de inspección (visitas) a aque
llos repartimientos (44).

El Veedor tuvo a su cargo en los primeros
tiempos la percepción de los derechos reales
en las "entradas" (de ahí, la denominación de
veedor de rescates y fundiciones*), pero a me
diados del siglo XVI, ya avanzada la conquis
ta y colonización del territorio, esta función
perdió casi todo el interés; la misión especí
fica del Veedor quedaba limitada a velar por
la perfecta realización de las fundiciones
de oro y plata (45). Esta disminución de ta
reas, paralela a la que vimos en el Factor,
~~como ya dijimos,~~ y la necesidad de suprimir
gastos, llevó, ^{como ya vimos,} a disponer en los años 1543-9
que en todos los territorios indianos queda
ran unidos en una misma persona los oficios
de Factor y Veedor; más adelante, en 1569, se
ordenaba la acumulación de las tareas del F

Factor-~~Ve~~ador a las propias del Tesorero y Contador, reduciéndose a estos dos últimos el número de Oficiales. Esta nueva medida no tiene, sin embargo, caracter general: en las Cajas de los puertos en que siguen teniendo importancia las operaciones comerciales por cuenta del Rey (Veracruz, Panamá, Lima, Callao; más tarde en la nueva Caja de Acapulco) o en aquellos otros en que los ingresos en especie son de mucho volumen (México, Guadalajara, Lima...) se permite que continúe existiendo un Factor-~~Ve~~edor como Oficial Real independiente (46).

Las leyes no se limitaban a señalar la obligación de cumplir estas tareas colectivas y particulares que abarcaba "el desempeño de sus oficios". Establecían también la obligación de ejercerlos siempre personalmente, salvo que no fuera posible hacerlo por "causa justa". Naturalmente, este principio era más bien teórico que práctico: si a las numerosas tareas que obligaban a ausentarse por largos períodos a Oficiales Reales (entradas, viajes a los puertos, viajes a los pueblos puestos en la Corona Real, etc.), unimos las enfermedades y achaques de la vejez (siendo nombrados para toda la vida era muy frecuente, como demuestran los documentos, el caso del Oficial anciano que delega parte de sus funciones en otra persona), es muy lógico comprender que la actuación de Tenientes o sustitutos no era una cosa esporádica, sino más bien un procedimiento habitual en la administración de la Hacienda indiana. A esto venía a añadirse muy pronto la imposibilidad de que los Oficiales Reales propietarios de un territorio, general-

mente muy extenso, pudieran llevar la administración directa y conjunta de la zona comprendida/dentro de su jurisdicción, aparecieron así las Cajas subordinadas, en las cuales, las operaciones usuales de la administración fiscal eran realizadas por Tenientes de aquellos Oficiales propietarios (47). De todos modos, la obligación de desempeñar los oficios personalmente continuó establecida en la legislación y era desde luego, *aplicable* (mas no siempre aplicada por las negligencias de los funcionarios, como veremos en el último capítulo) a los casos en que el Oficial pudiera estar presente a las operaciones administrativas del Fisco (48).

La obligación de dedicarse únicamente al desempeño de sus tareas administrativas, adopta en las leyes una forma negativa: "no se pueden ir a descubrir minas, no pueden participar en las entradas y rancherías a no ser que vayan en cumplimiento de su función", no pueden aceptar comisiones especiales de los Virreyes, Gobernadores o Audiencias (50); no pueden desempeñar funciones políticas o judiciales (prohibición expresa de ser Tenientes de Gobernador, alcaldes o Corregidores) (52), y todo esto por una razón: "para que los dichos Oficiales estén libres para en las cosas de nuestra Hacienda" (53).

Pero no se trata tan sólo de desembarazarles de otras ocupaciones "para entender en sus libros": la libertad que se pretende lograr con tales prohibiciones debe procurarles además una independencia completa en el ejercicio de su delicada función, imposible de lograr si existen intereses del funcionario en juego. El prohibirles que ocupen cargos políticos en el territorio de su ju-

jurisdicción, tiene en gran parte este fundamento (54). A completar esa independencia se endereza otro grupo de prohibiciones: los Oficiales Reales no pueden casarse con hijas, hermanas o parientas, dentro del cuarto grado, de los otros Oficiales de los mismos distritos, bajo la pena de privación del oficio y la imposibilidad de tener otro en las Indias (55); y tanto ellos, como sus hijos, hermanos o cuñados, por sí o por otras personas, no pueden tener minas o ingenios ni entrar en compañías con otros dentro del distrito del Oficial Real (56).

No queda, con esto, agotada la lista legal de prohibiciones. Por supuesto, el Oficial Real no podía realizar ninguna clase de tratos comerciales; en este punto, la tendencia legislativa fué hacer cada vez más rigurosa la aplicación de la prohibición. El fundamento de ésta era mu lógico: se trataba por una parte de evitar el empleo de los fondos reales para fines particulares, y de otra defender los derechos de los comerciantes, ya que era lógico pensar que los Oficiales antepondrían sus mercancías a las de los particulares, como de hecho ocurrió; únase a esto, el deseo de la Administración Central, ya indicado, de que los Oficiales se dedicaran exclusivamente al desempeño de sus numerosas tareas y el peligro que supondría para la Hacienda el que hicieran tratos aquellos que tenían como función específica la fijación del precio a las mercancías llegadas de España (avaliaciones), y se explicará la insistencia de la Corona en este punto. Al iniciarse la conquista de un

territorio, cuando la recaudación es escasa y no se obtiene siquiera para el pago de los salarios de los funcionarios, se mantiene una actitud tolerante: en tanto no lo hagan con la Hacienda real, cuya sustracción por los funcionarios fiscales estaba castigada en las Partidas con la pena de muerte y la pérdida de todos los bienes (Partida 7, Tit. 18, l. 14), y en tanto que no se cobraran los derechos del almojarifazgo, los Oficiales pod~~ían~~^{rían} tratar y contratar y rescat~~ar~~^{ar} de los indios como el resto de los vecinos (57). De todos modos, esa autorización fué concedida transitoriamente y sólo en casos concretos en que las especiales condiciones económicas del territorio la hacían necesaria. Ya en 1514 encontramos en las leyes, la prohibición de realizar tratos, y pronto este precepto constituyó un capítulo fijo en todas las Instrucciones y Ordenanzas dadas a ⁱⁿ los Oficiales Reales. El cumplimiento de la prohibición de contratar, (extendida también a los Oficiales de la Casa de Contratación de Sevilla) (58), solía pensarse en la legislación indiana con la pérdida del oficio y de la mitad de los bienes (59), pero, viendo que continuaba siendo incumplida y con el deseo de acabar radicalmente con los abusos, en las Ordenanzas de 1573 se dispuso que la pena de muerte y la pérdida de todos los bienes señalada en las Partidas fuera aplicada en India, al que manejare indebidamente fondos reales, haciéndose además extensiva aún a los tratos realizados por los Oficiales Reales con sus propios bienes (60).

Otro de los preceptos prohibitivos que sufrieron modificaciones en el transcurso del tiempo fué el que establecía la imposibilidad de tener encomiendas de indios. En un principio, el mismo problema de la insuficiencia de ingresos para el pago de los salarios, que apuntábase más arriba, llevó de la Corona a la concesión de encomiendas a los funcionarios fiscales, en número de cien y muy pronto de doscientos indios (61). Los grandes abusos cometidos en este punto, tanto en el número de indios concedidos (en Cuba, por ejemplo, ^{llevan} ~~los~~ repartidos al Contador, 269 indios de labor más trece naborías, y al Tesorero, 407 más nueve naborías, en lugar de los doscientos permitidos por las leyes) (62), ~~llegando a ser~~ como en el trato durísimo que se les daba, llevaron a señalar en las Instrucciones dadas a los Padres Jerónimos en 1516 que se enmendaran lo dispuesto por la legislación anterior y que se prohibiera a los Oficiales y Visitadores el tener indios y el recibir un salario de los vecinos (63). Parece, sin embargo, que en la práctica esta disposición no pasó de ser una débil protesta de los abusos cometidos y una prueba de que la Corona estaba vivamente interesada en acabar con una situación tan desastrosa para el indígena. De hecho, - y ciñendonos a los funcionarios reales, aunque la política seguida por la Corona con los particulares, fuera paralela a la de aquéllos en esta materia-, y a pesar de los buenos deseos del Monarca, hubo que permitir a los Oficiales Reales que tuvieran repartimientos para poder sustentarse. Al nombrar en 1522 Oficiales Reales para la Nueva España, se les señaló ya un

salario crecido (510.000 mrs. el Tesorero y Contador; 460.000 el Factor y 390.000 el Veedor), y juzgándolo ~~de~~ suficiente para su mantenim~~iento~~, se ordenó que no pudie~~ran~~ tener ningún otro progecho; como bien pronto la realidad vino a demostrar, este precepto no se cumplía; se acude entonces a una solución intermedia acorde con los hechos: "sin perjuicio de que se provea más adelante ~~so~~ bre si sería conveniente que los Oficiales tengan indios como los demás vecinos particulares, moderando los salarios, una vez que el Consejo de Indias examine la información que se pide", se ordena por Real Cédula de 5 junio 1528 que aquellos Oficiales que tuvieran indios no reciban ~~nada~~ en adelante más que un tercio de su salario, salvo el caso de que los indios que tengan sean tan pocos que no basten, en unión del salario reducido, a su cómoda sustentación; si se da esta circunstancia, se les podrá dar en encomienda una cantidad justa, competente y razonable de los indios que vacaren y que no fuesen y de los que habrán de reservarse a la Corona; el ~~Tesorero~~ ro responderá en todo caso, bajo pena del duplo, de que ~~no~~ se pague a los Oficiales más del tercio señalado (64). Muy poco después, el 4 de octubre del mismo año, se daban en Toledo unas Ordenanzas para el buen trato de los naturales y en consonancia con ellas se prohíbe que el Presidente y los Oidores de la Audiencia tuviesen más de diez indios y aún éstos habían de ser destinados únicamente a servicios domésticos (65); decidido el Monarca a ser enérgico en este punto, y después de recriminar a la Audiencia el incumplimiento de esta limitación, ~~asda~~ ora

den a los Oficiales Reales de que no se les libre salario al Presidente interino Nuño de Guzmán y a los Oidores Matienzo y Delgadillo, si no dejan los indios que tienen injustamente (66). Como es sabido, la actitud protectora de la ~~Corona~~ chocaba con los intereses de los colonos y el resultado fué que la realidad indiana continuó siendo muy distinta de lo que el examen de la legislación pudiera hacer creer. Los funcionarios reales, y concretamente los Oficiales Reales de la Hacienda, no estaban al margen de los abusos, y las disposiciones limitativas del año 1528, eran en muchos casos papel mojado (67). La segunda Audiencia presidida por el virtuoso Obispo de Santo Domingo Ramón de Fuenleal, representaba en 1532 a la Emperatriz la conveniencia de suprimir radicalmente las encomiendas de los funcionarios: "En tener los Gobernadores de estas partes e Oficiales de V.M. indios, -escriben el 3 de noviembre- nacen y suceden muchas inconvenientes y daños en las repúblicas; sería conveniente que V.M. mandase tuviesen competentes salarios y no indios por manera alguna" (68). La contestación puesta al margen indica que se consultará y en efecto parece que aquella y otras observaciones parecidas no cayeron en el vacío: un capítulo de las "Leyes Nuevas" de 1542-3 disponía terminantemente que se pusieran en la Corona los indios que poseyesen Virreyes, Gobernadores, Oficiales Reales, miembros de las Audiencias, Prelados, monasterios, hospitales, cofradías, casas de religión y casa de moneda y tesorería y las otras personas favorecidas en

este punto por razón de sus oficios, aunque los indios no les hayan sido encomendados por razón de los oficios; y ~~que~~ aunque los tales Oficiales y Gobernadores digan que quieren abandonar los oficios y gobernaciones y quedarse con los indios, no les valga ni por eso se deje de cumplir lo que mandamos* (69). No vamos aquí a examinar el problema de la aplicación de estas famosas Leyes y basta a nuestro propósito el indicar que ~~en~~ lo referente a la prohibición de tener indios los Oficiales Reales (como en otros de los preceptos consignados en ellas) todo parece indicar que con el tiempo fué aplicado ~~en~~ todo su alcance: si en 1554 aún encontramos pruebas de tolerancia en este punto (70), no las hemos hallado ya en los documentos de los años posteriores; en cambio, es bastante significativo ~~que~~ al nombrar en 1570, Contador de Cartagena a Antonio Bermúdez, vecino de Santa Fé, se le haga renunciar previamente mediante escritura a los indios que tenía encomendados, obligando ~~a~~ que su mujer dará otra escritura consintiendo en dicha renuncia (71).

Para asegurar el cumplimiento de esta última prohibición y con el fin también de asegurar el perfecto desarrollo de la administración de Hacienda, pronto apareció la prohibición de ausentarse del lugar señalado para el ejercicio de sus funciones. En 1525 una Real Cédula establecía que sólo podría hacerse con licencia del Presidente y Oidores de la Audiencia respectiva y esta misma condición queda fijada posterior-

riormente en las Instrucciones y Ordenanzas de los Oficiales de Hacienda y aún más: en las propias Ordenanzas de los Tribunales de Justicia (72). La licencia deberá darse siempre que la Audiencia estime que existe causa justa o necesaria, debiéndose nombrar un sustituto "calificado y abonado" que después de jurar que guardará la forma y orden usada por el Oficial ausente, actuará en su cargo en compañía de los restantes Oficiales.

Finalmente, la legislación establece la prohibición de hacerse acompañar públicamente por los vecinos de la población, punto en el que parece que se había llegado a grandes abusos (73), y la de entrar con armas en los Acuerdos de Hacienda (74).

DERECHOS.

Los Oficiales Reales propietarios tienen fundamentalmente, en virtud de su nombramiento, dos derechos: el de inamovilidad del oficio, salvo en el caso de cese en el mismo en concepto de pena, y el de percibir una retribución económica o salario, a cambio de la prestación de sus servicios. Ambos derechos constan en los títulos: el primero, al señalar que la provisión es de por vida; el segundo, fijando concretamente el importe de la retribución. La inamovilidad del oficio no ofrece ninguna particularidad digna de

mención. La retribución económica, en cambio, ofrece algunas variedades en el tiempo y en el espacio, que convendrá examinar.

Los Oficiales Reales propietarios reciben su salario de los bienes del Rey y concretamente, de los fondos de la Hacienda Real indiana. Lo primero parece lógico si se quiere asegurar la independencia de los Oficiales Realesy así lo comprende la Corona ~~cu~~ cuando ordena en 1516 a los Padres Jerónimos, gobernadores de la Española, que aquellos no reciban su salario de los vecinos "para que ~~no~~ ~~hagan~~ lo que éstos quisieran", sino de los bienes reales (75); a pesar de que subsiste el mismo fundamento para que también los Tenientes de las Cajas subordinadas recibían su retribución del Monarca, ya veremos como ~~por~~ razones de economía no se hace así en ningún territorio indiano.

Decíamos también que se les paga del producto de los ingresos obtenidos por el Rey en los territorios de Ultramar. Esta medida, lógica y explicable en un período como el que estudiamos, es el que la Corona se halla constantemente necesitada de recursos y procura evitar desembolsos, se lleva a la práctica desde los primeros tiempos: cuando los ingresos del Fisco indiano son escasos o insuficientes para el mantenimiento de los funcionarios de Hacienda, se les permite tener indios en encomienda y realizar tratos comerciales. Cuando se ve que esto es perjudicial ~~y los ingresos fiscales~~ para el propio Fisco y se plantea

la cuestión de supresión de las encomiendas, y el ^{supremo permiso} aumento del importe del salario, se ordena suprimir aquellas facultades de índole económica, limitando sus beneficios a la cantidad fija señalada, cantidad que ha de librar el Contador sobre la Caja respectiva. No se limita a esto la legislación: se especifica además en ella la clase de moneda que se ha de utilizar para el pago de estos salarios, extremo de gran importancia en aquella época por la gran variedad y constante alteración de la ley en la fabricación de moneda (76).

Precisamente estas alteraciones en la ley de los metales preciosos y la gran abundancia de éstos en la circulación, lleva a la depreciación de la moneda y al alza constante del índice de vida (77). Este fenómeno repercute sensiblemente en la fijación del salario, cuya cuantía tiende a subir con el tiempo, aunque, como suele ocurrir en todos los períodos de inflación, no en la proporción necesaria para compensar el alza de precios: el resultado será, como ya veremos, el incumplimiento de las prohibiciones de hacer tratos y, lo que es peor, la comisión de numerosos fraudes al Fisco.

Del examen de los datos que poseemos se deduce que la cuantía de los salarios no oscila únicamente con el tiempo, sino que son también distintos según los diversos territorios (parece ser que los de Lima y Mérida reciben un salario algo mayor por la impor-

tancia de las Cajas) (78) y aún entre los mismos Oficiales. En general, el ~~Veedor~~, durante el tiempo que constituye un oficio autónomo, suele tener un salario inferior al de sus compañeros; los de los otros ~~los~~ tienden a igualarse con el tiempo (79). No nos es posible ~~dar~~ una tabla de salarios durante el siglo XVI por insuficiencia de datos; los que hemos podido reunir ofrecen, por los motivos indicados, una variación constante; al suprimirse la facultad de tener indios en 1542 ~~suelen~~ experimentar los salarios un alza importante (80); hacia mediados del siglo XVI, oscilan entre 200.000 y 560.000 mrs., a los cuales hay que añadir lo cobrado en concepto de ayuda de costa (81). Estos salarios que, como dijimos, se hallan preestablecidos en los Títulos, suelen ser satisfechos desde tres meses antes de la toma de posesión del cargo de Oficial Real (82).

Otro derecho reconocido desde el primer momento y generalmente ~~practicado~~ en todos los territorios, es el de nombrar Tenientes que le ~~substituyan~~ en aquellas operaciones que no puedan ser realizadas por los propietarios a causa de enfermedad o ~~ausencia~~ o por tener que efectuarse fuera de la cabecera. Sobre estos nombramientos volveremos a ~~hablar~~ hablar al ~~tratar~~ tratar del régimen jurídico de los Tenientes. Pueden igualmente nombrar Jueces Comisarios para el cobro de Hacienda real dentro de su distrito (83). También se les permite nombrar Oficiales de libros u otros auxi

liares que les ayuden en las operaciones administrativas, pero a diferencia de los ~~Tenientes y de~~ los Comisarios (~~que~~ suelen recibir una retribución de los bienes reales) ~~o de los vecinos de las Cajas donde se hallan establecidos~~ estos Oficiales menores reciben únicamente la cantidad que el respectivo Oficial Real les señale de su propio salario, ya que es a éste a quien corresponde desempeñar las tareas administrativas de la Hacienda (84). ~~Los Oficiales, Re-~~

l. Tienen, en general, las más amplias facultades para la administración de la Caja respectiva, pero ceñidas siempre al contenido de las Instrucciones y Ordenanzas que reciben; es decir, se establece una serie de limitaciones a sus facultades administrativas, como el diferir el pago de deudas al Fisco, ~~o~~ el hacer envíos extraordinarios de oro y plata a España por propia iniciativa, o el ~~de~~ disponer libremente de los fondos reales aún en casos necesarios (85) .

La administración conjunta exigida para las operaciones administrativas del Fisco lleva a la necesidad de una convigencia bajo el mismo techo en los edificios públicos (Cajas Reales, Casa de fundición), siempre que las circunstancias lo permiten. Esto, que constituye, ~~si~~ estrictamente un deber, ~~si~~ a una recomendación insistente de la Corona, constituye también un derecho por la preeminencia que encierra. Dado el interés que esto tiene para la salvaguardia de los bienes reales, no es extraño que

se llegue a decir en una RC. de marzo de 1567 que los Oficiales Reales de Lima, o al menos, el Tesorero (y por tanto, el arca del dinero, ya que ésta debe estar siempre bajo su custodia directa) pasen a vivir a las Casas Reales "aunque sea menester ~~pa~~ para ello echar de la casa algún Oidor" (85).

Era natural que por la importante función que desempeñaban en nombre del Rey, éste concediera a los Oficiales Reales propietarios una serie de preeminencias como correspondía a uno de los funcionarios de mayor relieve de las provincias de Ultramar. Ya en 1511, el Rey encarga al Almirante Diego Colón que ~~hore~~ y favorezca a los Oficiales Reales, castigando el desmán de un ~~x~~ Alcalde Mayor que había dado mandamiento contra el Tesorero Pasamonte, para que entregara cierto oro que había dado en depósito a otra persona "porque ~~se~~ la justicia no es favorable a los que tienen cargo de la Hacienda Real, con mucho trabajo se podría cobrar, según lo pagan de mala gana" (87). Idénticas recomendaciones fueron hechas a los Virreyes y Audiencias (88). Las preeminencias no se limitan a concederles un lugar honorífico en los actos públicos, ⁽⁸⁹⁾ permitirles tener acompañamiento y guardia personal (90) o la imposibilidad de tenerlos presos en las cárceles públicas ~~si~~ hubieren dado causa para ellos, (han de ser custodiados en las Casas Reales), donde viven, mediante fianza, y tratados conforme a su calidad (91), sino que se extiende también a la vida municipal al darles voz y voto en los Cabildos.

Esta última concesión era muy lógica, además, por la falta de personas de lustre para los cargos de Regidor. Por ello es práctica acostumbrada desde los primeros tiempos la concesión de este nombramiento, al mismo tiempo que se les da el título de Oficial Real, como ocurre con los primeros Oficiales de Santa Marta y Tierra Firme (92). Sin embargo, como se temía que esto desviara a los Oficiales de su función principal, la administración del Fisco, hubo alguna vacilación en concederles a los de Nueva España (93), cosa que al fin se permite también en 1538, haciéndolo extensivo a todos los territorios (94). Unicamente, ya entrado el siglo XVII, en 1621 o 1622, las necesidades urgentes de la Corona llevaban a ésta a ordenar la supresión de estas facultades y la venta de los Regimientos que solían concederse a los Oficiales Reales (95). SOLÓRZANO apunta que con esta medida no se obtuvo ningún provecho pecuniario y sí muchas cuestiones de precedencia.

La facultad de ser Regidores concedida a los Oficiales Reales era por su importancia exclusivamente personal, y así, le especificaba en la concesión, que, estando ausentes de la ciudad donde tuvieran su asiento, el Teniente que los substituyera en las tareas administrativas, no podía tener voto en el Cabildo. Los Oficiales preferían en el asiento y en el voto al resto de los Regidores, ya que se les consideraba como de mayor antigüedad "por ser Ofi-

ciales del Rey" y lo mismo al Alguacil Mayor, ocupando su puesto a continuación del Corregidor y los Oidores de la Audiencia (96). Como ya dijimos, es to hacía que en la práctica ocuparan el cargo de Alcalde en las vacantes de éstos, hasta que fué prohibido en 1588.

JURISDICCION FISCAL.

La más importante de las facultades concedidas a los Oficiales Reales, la constituye la creación a mediados del siglo XVI (1559, a los de Nueva España; 1563, a los del Perú) de una jurisdicción propia en materia fiscal. Hemos examinado ya en el capítulo I (epígrafe III) el desarrollo histórico de los hechos que condujeron a esta concesión. Nos toca ~~examinar~~ ahora el contenido de esta importante facultad de los Oficiales de la Hacienda Real.

Señalábamos como causa decisiva para la creación de esta jurisdicción autónoma la abundancia de plei^{los que}tos fiscales, ~~recargaban~~ excesivamente la labor de las Audiencias, encargadas entonces de su resolución; el resultado era una aglomeración de causas fiscales pendientes, con el consiguiente perjuicio a los intereses reales; este desorden puesto de manifiesto constantemente por los Oficiales Reales y también por el Contador especial Rodríguez Portoc-

rrero (97), decidieron al Rey a dar un paso tan im-
 portante. ¿Cual era el origen o la ^{fuerza de esta} abundancia de
 pleitos fiscales?

Dos hechos históricos típicos del siglo XVI da-
 ban materia abundante para esta actividad judicial,
 primero, de las Audiencias; después, de los Oficia-
 les Reales: la abundancia de deudas fiscales, por
 una parte, ~~propia~~, y la existencia de un intenso e
 contrabando de mercancías, ~~por otra~~

Los papeles de Hacienda de la época nos muestran
 el problema de las deudas fiscales como uno de los
 más agobiantes de la administración del Fisco; la
 legislación exige insistentemente su cobro; los Vi-
 rreyes señalan en sus Memorias sus esfuerzos por
 reducir estas deudas, cuyo importe llegó a cifras
 muy elevadas. Unas deudas eran debidas al retraso
 en el pago de los impuestos; otras, a retrasos en
 la devolución de las cantidades dadas por el Fisco
 en concepto de préstamos; las de este último concep-
 to eran de gran volumen por la política de crédito
 ampliamente utilizada en un principio y la desidia
 de los Oficiales Reales, especialmente en la admi-
 nistración del monopolio del azogue. La amplitud
 y gravedad del problema llevó a la Corona al esta-
 blecimiento de una serie de medidas de garantía:
 se prohibió a los Oficiales Reales las operaciones
 de crédito, y se establece la prohibición de salir
 de una provincia de Indias sin un certificado expe-
 dido por los Oficiales Reales que especifica que

no son deudores del Fisco(98); en 1581 se ordena también que para la admisión como soldado de las flotas y armadas será requisito indispensable la presentación del certificado mencionado, acompañado de una licencia del Gobernador de la provincia en que residía hasta entonces, en la que se haga constar que no existe ningún pleito fiscal pendiente con el interesado (99).

El contrabando de mercancías era la consecuencia lógica del ~~la~~ establecimiento de un monopolio real del comercio con todos los territorios de Ultramar. La gran extensión de las costas y la precaria vigilancia de las mismas condujo a un activo contrabando de los comerciantes extranjeros ~~comercio~~ comercio clandestino, que en algunas regiones, como la del Mar Caribe, constituía casi un tráfico regular. A este contrabando, venía a sumarse el realizado en los navíos españoles, introduciendo en Indias mercancías fuera de Registro, bien con el objeto de evitar el pago del almojarifazgo, bien con el de hacer llegar mercancías de tráfico prohibido (libros ~~determinados~~, ropa de la China, etc.); viceversa, existía otro tráfico clandestino de oro y plata de las Indias, con el fin principal de evitar los derechos del ~~&~~ "Quinto".

La Corona concede a los Oficiales Reales la facultad de iniciar "de oficio" los pleitos fiscales (100) y seguirlos por la vía ejecutiva, si es ejecutable, o ^{por} mandamiento de apremio en los que es invencible y líquido (101). Respecto a las deudas,

tienen facultad de despachar requisitorias para su pago a las autoridades judiciales ordinarias, que deben cumplirlas, siempre que vayan firmados por todos los Oficiales (102). Tanto las cobranzas de deudas atrasadas, como las procedentes de tributos de las ciudades de la Corona Real, donde no existen Oficiales Reales ni Tenientes suelen cometerse a los Corregidores correspondientes, que tienen que acudir con el importe de lo recaudado a los Oficiales Reales de la cabecera; los grandes abusos cometidos por aquellos, llevaron a establecer medidas de garantía como el retener los salarios de los Corregidores, (vid. cap. IV, "Recaudación"); si no cumplían las requisitorias de cobradas por los Oficiales Reales, éstos podían mandar Jueces Comisarios a los que comunicaban su jurisdicción (103) y si, habiendo cobrado, se negaban a entregarlo, los Oficiales Reales podían proceder contra ellos jurídicamente "una vez transcurridos dos meses desde los tercios de San Juan y Navidad," hasta el punto, según ESCALONA, de suspenderlos de sus oficios, previa información al Virrey (104).

En materia de deudas, solía haber una gradación: las de tributos tenían prelación y llevaban aparejada ejecución (105); las de préstamos de azogue, aunque tenían precedencia judicial, al menos, en algún momento, tendía a suavizar la actuación judicial (106); las de alcabala eran tratadas más moderadamente, por ser este impuesto, una carga muy molesta para los vecinos de Indias, como demostra-

ron los disturbios habidos en su introducción (107). Los Oficiales Reales estaban obligados, en virtud de la concesión real, a urgir el pago de los impuestos, préstamos y deudas atrasadas, "pudiendo para ello hacer las ejecuciones, prisiones, ventas y remates de bienes y otras diligencias que convengan" (108); en esto, la ley es rigurosa: no cabe recibir prenda para seguridad del pago, ~~ni lo~~ es preciso que se ejecute ~~sobre~~ los bienes, vendiéndose éstos en almoneda pública; los presos por deudas fiscales no deben salir de la cárcel, mediante fianza, salvo las mujeres (109); a pesar de estos preceptos, solía haber cierta benevolencia en la práctica, en las regiones más pobres (110). ESCALONA aplica a esta materia algunas disposiciones de la legislación castellana referentes a la jurisdicción fiscal de la Contaduría Mayor: deben cobrarse intereses por la demora, en cuantía de diez por ciento; los Oficiales Reales deben velar para que no transcurra el plazo de prescripción de deudas, ~~retrasadas~~, (los diez años acostumbrados, ~~más~~ los cuatro que tiene el Fisco para pedir restitución contra el decenio), transcurrido el cual, sólo podrán cobrarse ~~me~~diante reconocimiento judicial del deudor; desde luego, no admite proscripción contra el Fisco el incumplimiento del pago de los impuestos "por fundarse en utilidad pública y conservación de la Monarquía" (111).

En cuanto al contrabando, la legislación se mues

tra rigurosísima: las mercancías de tráfico prohi
bido o simplemente las que se hallaren fuera de re
gistro, y el oro y plata que fuese hallado sin de
"quintar", sufrirá la pena de comiso (112). El p
procedimiento es sumario y ejecutivo; en tanto se
sustancia el pleito, las mercancías quedan bajo la
custodia de personas de confianza y si se cree que
este depósito va a ocasionar merma o deterioro, se
venden inmediatamente en almoneda; una vez que en
el proceso se demuestra la infracción de las leyes,
se da auto ordenando la pérdida de las mercancías
y su venta en almoneda pública (113); si el navio
que transportó las mercancías es extranjero, hay
cierta indulgencia si se comprueba que llegó a cos
tas españolas en arribada forzosa (114); pero si se
demuestra que ha habido malicia, se ordena no sólo
la pérdida de las mercancías, sino también la de
la nave (115).

A las causas fiscales referentes al cobro de d
deudas y a los comisos, puede añadirse las produci
das con motivo de los arrendamientos por incumpli-
miento de las obligaciones del arrendador. (116).

Por último, en cuanto a las apelaciones, la le-
gislación establecía que sólo pudieran interponer-
se ante la Audiencia del distrito respectivo, no
pudiendo hacerse ante otra justicia (117); cuando
no había Audiencia en la sede de los Oficiales Rea
les, y existía en cambio un Gobernador, las apela-
ciones se llevaban a éste (118); los Oficiales po-

dian apelar al Consejo de Indias contra las decisiones injustas de los Gobernadores (119).

La concesión de jurisdicción propia y además privilegiada (avocan a sí todos los pleitos pendientes ante los Jueces ordinarios si afectan a la Real Hacienda) (120), elevó al máximo el rango social de los Oficiales Reales en la sociedad colonial. Reciben además a partir de entonces la denominación de "Jueces Oficiales" (los escribanos del Tribunal de Hacienda se llaman también "Escribanos de Registro y del Juzgado de Oficiales Reales"), título que les será suprimido en 1621, aun cuando continúen teniendo jurisdicción autónoma (121).

SUSPENSION Y PERDIDA DEL OFICIO

Los Oficiales Reales reciben un nombramiento vitalicio: son propietarios del cargo que desempeñan; no tiene, como dijimos, carácter limitativo la fórmula "cuanto nuestra merced e voluntad fuere" consignada en sus títulos. Esto simplifica las causas de pérdida del oficio, que en realidad se reduce principalmente a una sola: la debida a una pena por infracción de las leyes.

No cabe, en primer lugar, la causa de transcurso del plazo (que no existe) ni la jubilación forzosa. Pero de hecho encontramos una jubilación voluntaria, aunque el Oficial siga recibiendo su sa-

227

lario y se le guarden las mismas preeminencias que estando al frente de su oficio (122).

Una RC. de agosto de 1559 habla de "suspensión de los oficios" si no se casan en un plazo de tres años (123). Es una aplicación de lo ordenado unos años antes por Carlos V para acrecentar la población de las Indias (los vecinos casados deben llevar sus mujeres; los solteros y viudos deben casarse en el plazo de tres años, debiendo los Obispos y Gobernadores persuadirles para ello) (124). No conocemos ningún caso en que se aplicara la citada cédula de 1559 ni estimamos que debió tener aplicación.

Otra causa discutible es la de renuncia del cargo. ESCALONA estima que puede hacerse ya que el Monarca no quiere servirse de nadie contra su voluntad, pero con la condición de que se haga en manos de quien le hizo la merced (recuérdese la fórmula citada al principio, que adopta, en todos los nombramientos reales, la forma de concesión) o en las del Virrey que le representa (125). A pesar de lo lógico de este razonamiento, cuando el Factor de Lima, Bernardino de Román, eleva en 1561 un Memorial al Consejo de Indias para retirarse del oficio y dejar el cargo a su hijo, se le contesta "que no se renuncian estos oficios" (126), continuando en su puesto a pesar de su edad avanzada.

Nos queda, por último, examinar las causas de ~~una~~ suspensión y pérdida del oficio debido a una pena. ~~renuncia y pérdida~~
La legislación emplea ambos términos como sinónimos, dándoles siempre un carácter permanente. Conocemos

al menos tres causas citadas en las Instrucciones; como es natural, muy graves: el hacer tratos con mercancías (127), el ausentarse sin licencia (128) y el pagar libramientos de las Audiencias sin aprobación real expresa (129). En realidad, estas penas; como otras muchas de menor relieve que figuran a continuación decada una de las obligaciones consignadas en Instrucciones y Ordenanzas, no debieron tener ningún valor en la práctica.

Puede, a nuestro entender, afirmarse, que, de hecho, los Oficiales Reales sólo fueron excluidos de su oficio, temporal (suspensión) o definitivamente (pérdida), en aquellos casos en que la comisión de un delito común obligó a proceder contra ellos; no conocemos un solo caso de pérdida del oficio por incumplimiento de las obligaciones administrativas o por la violación de alguno de los preceptos prohibitivos más arriba señalados.

REGIMEN JURIDICO DE OFICIALES PROVISIONALES Y TENIENTES

Hemos ya indicado que, desde el punto de vista jurídico, hay una clara distinción entre los Oficiales provisionales o interinos (caso de vacante definitiva, generalmente por muerte del propietario) y los Tenientes, ya sean de la cabecera (casos de ausencia o enfermedad del Oficial propietario), ya estén de modo permanente al frente de Cajas subordinadas.

Al producirse una vacante permanente, la autoridad gubernativa (Virrey, Presidente-Gobernador, Gobernador) tiene facultad de nombrar un Oficial interino (130). Este es el caso normal, aunque en algún caso excepcional lo haga el Rey directamente (131), o también algún Juez de Residencia (132); la Audiencia no podía hacer estos nombramientos, y el Monarca tuvo que llamarle la aten-

ción cuando se arrogó indebidamente esta función(133).

¿En quién recae el nombramiento? Una Real Cédula del año 1535 prohibía su acumulación al de otros Oficiales: debería hacerse "en otra persona que convenga" (134); lo lógico parecía que esta persona fuera uno de los Tenientes del Oficial Real que cesare, ya que en su nombramiento se tuvo en cuenta sus aptitudes técnicas y morales (vid. más abajo); hay pruebas, sin embargo, de que, aunque esto era lo normal, siempre que su acertada gestión como Tenientes le hiciera acreedor a ello (135), los Virreyes y Gobernadores aprovechaban la ocasión para colocar parientes o amigos; lo primero -provisión en el cargo de algún deudo-, constituía una infracción de la ley, y, en algún caso, el Monarca ordenó la revocación del nombramiento (136).

Jurídicamente, la característica propia del Oficial provisional es la interinidad en el cargo. Le afectan todas las incompatibilidades y prohibiciones señaladas al hablar de los Oficiales propietarios; está sujeto a los mismos requisitos en la toma de posesión (137); tiene las mismas obligaciones, y goza de los derechos y prerrogativas de aquéllos, con la única excepción de que sólo se le abona la mitad del salario (138). Tanto los nombrados por el Rey como por los gobernantes de las Indias, son siempre precedidos por los Oficiales propietarios, aun cuando sea alguno de éstos nombrado con posterioridad, es decir, sea de mayor antigüedad (139).

Respecto a los Tenientes, hemos de distinguir los de la cabecera y los de los restantes poblados del distrito, aun cuando en la legislación no aparecen claramente diferenciados.

Los Tenientes de la cabecera reciben, por regla general, su nombramiento, del Oficial Real respectivo, sea propietario o provisional: es éste un derecho establecido de una manera permanente en los Títulos e Instrucciones de éstos (140). Sin embargo, se concede en alguna ocasión su nombramiento al Virrey o Gobernador (141). Aunque LOPEZ

DE VELASCO afirme como regla general que en el Virreinato de Nueva España corresponde a los Oficiales Reales, y en el del Perú, a los Virreyes y Gobernadores (142), en realidad son constantes las excepciones, y no conocemos ningún precepto que establezca aquéllo taxativamente. De todos modos, parece ser que en la práctica existía íntima relación entre la autoridad de gobierno y los Oficiales Reales para estos nombramientos; probablemente, eran realizados en los "Acuerdos", a los que asistían conjuntamente (143). Las condiciones requeridas son: habilidad, y que ofrezcan una garantía moral y económica ("personas de confianza y abonados"); "a ser posible, casados" se especifica en la instrucción a Nuño Beltrán de Guzmán (114). No sabemos si existe respecto a los Tenientes que estudiamos ahora, las incompatibilidades señaladas para los Oficiales Reales propietarios o provisionales (no ser mercaderes, no estar emparentados con la autoridad gubernativa, etc). Tampoco nos es posible fijar si el nombramiento se realizaba "ipso facto" en la toma de posesión del Oficial Real respectivo, o sólo cuando se presentaba un caso de necesidad (ausencia o enfermedad del Oficial, tiempo de fundiciones, etc.); en el primer caso, los Tenientes de las cabeceras tendrían cierto carácter permanente (aunque no se les pueda llamar exactamente "propietarios" por carecer de un Título real); en el segundo, tendrían carácter interino. Parece más probable el carácter permanente de su función.

Las obligaciones de estos Tenientes son idénticas a las de los Oficiales Reales en los casos en que les sustituyan en el desempeño de su oficio por causa legítima, y se limita a algunas de las tareas de aquél, en el resto del tiempo. En cuanto a las prohibiciones, no sabemos si les afectaba las de comerciar y tener indios, pero es probable que en este punto hubiera con ellos mayor libertad, ya que su salario, pagado por el Oficial Real respectivo, debía ser muy corto (145). En cuanto a sus

preeminencias, ya señalamos que les estaba expresamente prohibido el desempeñar el cargo de Regidor de los Municipios en caso de ausencia del Oficial Real (vid. más arriba, al hablar de las preeminencias de éstos); el tesorero de Cartagena solicitó en 1591. se le dieran al sustituto que dejó al tener que marchar a España, las mismas preeminencias que tenían los propietarios, y el Monarca le concedió tuviera preeminencia sobre los Regidores, pero no sobre el Contador propietario (146).

El principal fundamental que rige la actuación de los Tenientes de las cabeceras es la identificación plena con el Oficial Real enfermo o ausente: tienen las facultades de éstos, v. gr., la de rendir cuentas, pero si éstas ofrecen un saldo negativo, perjudicarán a los Oficiales Reales, no a sus Tenientes, tal y como si se realizara directamente con aquéllos, en cuyas personas y bienes serán ejecutados los alcances, aun cuando aleguen completa ignorancia sobre la actuación de sus Tenientes.

Los Tenientes de las Cajas subordinadas ofrecen mayor interés. Existe gran variedad en cuanto a su nombramiento: en un principio, era muy corriente lo realizaran los vecinos reunidos en Cabildo, desempeñando el oficio sin ningún salario, "atento a que los repartimientos y haciendas que tienen, se lo deben al Rey" (148); esto tenía el peligro de cohecho o negligencia en el cobro de los derechos reales. ^{en la Instrucción a los PP. de 1510} ~~Va una Real Cédula de 1510~~ ^{el Rey} aconsejaba se cambiara de sistema (169). El Marqués de Cañete dió títulos y señaló salario (200 a 300 pesos) a los que desempeñaban estas tareas en algunas Cajas subordinadas del Virreinato del Perú (Piura, Trujillo, Quito, Arequipa, La Paz, etc) (150), y aunque esto fué revocado, se estableció la costumbre de nombrar dichos Tenientes los Oficiales Reales, con aprobación del Virrey o Gobernador (151); en algunos casos, el Virrey podía realizarlos directamente. Estos ~~Oficial~~ Tenientes debían prestar fian-

zas (2.000 ducados los de la Caja de Quito, cuando esta Caja estaba subordinada a la de Lima), y los testimonios eran enviados a la Casa de Contratación de Sevilla (153).

Sus obligaciones eran concretadas en Instrucciones que les daban los Oficiales Reales de la cabecera (154). Se referían principalmente a la recaudación de los ingresos de administración directa, ya que, al menos en Venezuela, los procedentes de arrendamiento eran recogidos directamente por el enviado especial de los Oficiales Reales cuando visitaba la Caja (155). Si están en los puestos efectúan las operaciones de avalúo. No hemos encontrado ninguna referencia a su reunión en Junta o Acuerdo, aunque es probable tuvieran reuniones colegiales del mismo tipo que las de las Cajas principales. Han de llevar contabilidad en pliegos sueltos que suelen remitir a los Oficiales propietarios junto con el oro de la Caja. Respecto a los pagos, pueden librar para la compra del vino y aceite de las iglesias con autorización de los Oficiales propietarios, y en algún caso, debido a la larga distancia a la cabecera, los salarios de los párrocos, pero en este caso ajustándose en todo a la instrucción que los Oficiales Reales les envían (156).

Hemos visto que en los casos en que eran nombrados por los vecinos, no recibían salario; tampoco hemos encontrado ninguna referencia al mismo a éstos en el caso de nombramiento por los Oficiales Reales o el Virrey (excepto los nombrados por el Marqués de Cañete), en cambio, una Real Cédula de 1592 al Contador de Cumaná señala que los Tenientes que éste nombra en los pueblos del distrito no llevan salario; en compensación se les conceden las preeminencias de los propietarios en los Cabildos y actos públicos, prefiriendo en el sitio a los Regidores (157). ¿Eran sólo estas preeminencias las que movían a aceptar y aun apetecer estos cargos, o bien existían compensaciones económicas, tales como la concesión de repartimientos? Extremo es éste imposible de puntualizar ya que no hemos encontrado ninguna referencia en las fuentes

utilizadas. Sólo encontramos en ellas la queja de que, por ser vecinos de los pueblos, no mostraban mucho interés por el cobro de las deudas fiscales "ni se tiene esperanza lo harán" (158).

NOTAS AL CAPITULO TERCERO.

- (1). R.C. de 1º diciembre 1573 (cit. por ESCALONA, "Gazophilacium..". L.I.C.XLIV).
- (2). Al insitir en una R.C. de 27 febrero 1575 sobre la prohibición de vender los cargos de Oficiales Reales, se le dice "Como habra entendido por la que os es escribimos el año pasado de 73, os mandamos que no vendiesedes oficio ninguno de Hacienda" (cit. por ESCALONA, id., L.Imc.XLIV).- Otra R.C. de 21 junio 1595, dirigida al Virrey D. García Hurtado de Mendoza alaba que no se haya vendido las Depositarias Generales, Receptorías de penas de Cámara y gastos de justicia, Tesorero y Contador en las ciudades donde no hay estos oficios (cit. en un Acuerdo General de Hacienda que acompaña a la carta del Virrey Velasco al Monarca desde el Callao de 11 de abril 1597, en LEVILLIER "Gobs, Perú". XIV, 49).
- (3). La única excepción que conocemos es la venta del Oficio de Tesorero de Lima por 12.000 ducados, hecha por el Virrey D. García Hurtado de Mendoza. Con este precedente y viendo que ofrecían dinero por la Tesorería de Arica, el Virrey Luis Velasco ordenó la celebración de un Acuerdo General de Hacienda, en el cual vista la R.C. de 21 junio 1595 citada en nota anterior y "por parecer que no conviene dar lugar a que se vendan" se decidió no aceptar aquellas proposiciones (Carta al Rey de 11 abril 1597, cit. nota 2).
- (4). En unos "Avisos tocantes a los grandes fraudes que hay en el Reino del Perú contra la Real Hacienda", de 12 noviembre 1660, se atribuye el estado lamentable de la administración de la Hacienda, a haber sido provistos los cargos de Oficiales Reales en venta (AGI., Lima, 280; cit. por GUILLERMO CESPEDES, "La visita general de Areche al Perú en 1775").



- (5). Constituye una señaladísima excepción y muestra de la confianza del Rey Fernando V en el Tesorero de la Española Pasamonte, la facultad de que le concede en 1511 nombrar el Tesorero y el Factor de la Isla de San Juan de Puerto Rico, después de comunicarlo en R.C. de 6 de junio de 1511, que ha designado Contador y Veedor le dice: "Se os envía las provisiones de Tesorero y Factor en blanco para que vos incluisis allá los que vieredes que convieren. Luis de Sisarazo me a dicho que envió allí un Factor en su lugar, hermano de un Córdova que acá está y dice que es persona habil y de confianza; si os pareciere aquél, podreis incluir por factor" (Cedulario Cubana, 235).
- (6). Cit. por SCHAEFER, *op. cit.*, p. I, 57.- También en las Capitulaciones con los conquistadores se señala la obligación de llevar estos consigo "Los Oficiales de nuestra Hacienda que por nos están y fueren nombrados" (vid, la de Pizarro, 26 julio 1529, en "Col. docs. insds. Ult", IX, 419).
- (7). Carta de 8 de febrero 1573, (cit. por ESCALONA, "Gazophilacium...", L.I, c. XXII).
- (8). El primer tesorero de Castilla del Oro, Alonso de la Puente, era Contino y Secretario del Infante Don Fernando; el de la Española era el famoso Pasamonte. Aunque existen posteriormente ciertos pobladores de las Indias, también suelen encontrarse personajes de cierta importancia en la administración virreinal o en la administración fiscal de Castilla o de los territorios europeos; así, p.ej., el Contador de Venezuela en 1592, Simón Bolívar (antecesor del héroe venezolano), había sido secretario del Gobernador Ossorio en 1589; nombrado Procurador General de los municipios venezolanos, regresó con el título de Contador; Bernardino de Romani, Factor-Veedor de Lima, había sido Veedor General del Ejército y Contador de Cuentas en Alemania; posteriormente, había pasado a la Corte, donde recibió el título de Contino.
- (9). ESCALONA, "Gazophilacium"..., L.I, P. II, c. II.
- (10). Esta incompatibilidad fué señalada expresamente con ocasión del nombramiento de algún Oficial provisional por los Gobernantes; p.ej., Diego de los Rios, Gobernador de Castilla del Oro proveyó en 1527 en el cargo de Contador, a un sobrino suyo por muerte del titular. El Rey revocó el nombramiento porque "no se compadece que siendo vos Gobernador, vuestro sobrino sea Contador" (R.C. 16 marzo 1527 en ALVAREZ RUBIANO, "Pedrarias", Apéndices, p. 580). Merece también citarse una R.C. de enero 1562, orde-

nando que se le quite el oficio de Contador de Chile a Hernando de Herrera, porque siendo Gobernador es no conveniente que lo tenga (Cop., V,40).

- (11). R.C. 5 octubre 1511 (en "Col. docs. ineds. Ult", V,307).- Si a pesar de la prohibición, se atrevieran a ocupar oficios públicos se les condenaba a la primera vez, simplemente a la pérdida de dicho oficio; la segunda, le serían además confiscados, la mitad de sus bienes; y la tercera, la pérdida del oficio y de todos sus bienes.
- (12). ESCALONA. "Gazophilacium..", L.I, P.II, c.II.
- (13). Como ya hemos dicho en el Cap. I, a mediados del siglo XVI, quedaron reducidos los Oficiales Reales, a dos (Contador y Tesorero) o tres (Contador, Tesorero y Factor-Veedor), según la importancia de las Cajas. Aunque de hecho las funciones eran las mismas que antes, pues, se acumulaban las de los Oficiales suprimidos a las de sus Compañeros; los títulos seguían siendo dirigidos para el Contador o Tesorero exclusivamente.- Por excepción rarísima, encontramos en 4 enero 1532 el nombramiento conjunto de Tesorero y Contador en una misma persona (Cedulario Santa Marta, 409).- En la práctica se acumulaban; solía nombrarse un Oficial provisional o desempeñaba el oficio uno de los Tenientes, en caso de enfermedad o ausencia.
- (14). La fórmula utilizada en los títulos, - "de agora y de aquí adelante cuanto nuestra merced e voluntad fuere"- no implica limitación de tiempo; no por eso siempre que sea simplemente una fórmula más o menos protocolaria, ya que de hecho, en algunos casos excepcionales, estos funcionarios cesaran en sus cargos por mandato real, pero sólo a título de pena (vid, mas abajo, causas de pérdida del oficio).
- (15). Los títulos de los Oficiales Reales de la Caja de México, a partir de 1597 en AGI, México, 1971.- Títulos de empleados en los diferentes ramos de la Hacienda en Guatemala a partir de la misma fecha, en AGI., Guatemala, 685.- Entre los publicados, citaremos: de Contador, en "Col. docs. ineds. Ult", I,44 y "Episto. Nª Esp.", XIII, p. 174; "Ced. Sta. Marta", 331; de Tesorero; de Factor, "Col. Torres Mendoza, XXX, 517; de Veedor, "Col.docs, ineds. Ult" I,60 y ALVAREZ RUBIANO, "Pedrarias", Aps., 489. En uno de los Títulos, (el del Contador de Cartagena, Antonio Hermúdez, de fecha 5 septiembre 1570 se hace constar que el interesado ha hecho previamente escritura en Madrid, renunciando a favor de la Corona Real, los indios que tenía encomendados, obligandose a que su mujer dará u otorgará otros, consintiendo en dicha renuncia (AGI., Cont., 1382,nº8). No sabemos si esta renuncia era requisito indispensable para la concesión del título, ya que no se hace ninguna referencia a este punto en los restantes títulos que hemos podido examinar.

- (16). Vid. lo que dijimos en el Cap. I, p. .- Son muchas las Instrucciones particulares de Oficiales Reales que han sido publicadas. Citaremos como ejemplo, las incluidas en la "Col. docs, ineds. Ult", V, pgs. 287, 336; IX, 152, 160.
- (17). Sobre esta importante garantía personal, trataremos por extenso en el capítulo V.
- (18). En los Títulos que hemos podido examinar, no se especifica plazo de presentación. Sin embargo, parece ser que en algunos casos concretos se especificó este plazo: entre los papeles de Justicia del Consejo de Indias existe un auto fiscal con Diego Caballero, Contador de la isla de Santo Domingo, sobre que no sirva dicho empleo por haberse presentado en el tiempo que preveía la Real Cédula en su nombramiento (AGI, Papeles justicia, 987,1,r.2).
- (19). Esta lecutra era solemnísima, según anota el Escribano de Cartagena: "por sus mercedes visto y oído, le tomaron de sus manos y lo besaron y pusieron sobre sus cabezas. diciendo le obedecían y obedecieron con el acatamiento debido, como a carta provisión real de su Rey y señor natural y están prestos de lo guardar y cumplir como en él se conviene y ueclara, y conforme a él admitir al uso y ejercicio del dicho Oficio de Tesorero al dicho." (Título del Tesorero Baltasar Garrillo, fecha 1º julio 1572, en AGI., Contad., 1382, I,r.19).
- (20). En las Ordenanzas para Oficiales de un territorio dadas en 1528 a todas las Cajas de las Indias se ordenaba que se recibiera juramente a los Oficiales que estaban sirviendo los oficios (prueba de que no se solía hacer antes) y que por él se obligaban a guardar lo contenido en dichas Ordenanzas; a los que fueren proveídos en adelante se les debía de tomar antes de ser recibidos al uso y ejercicio de sus oficios (vid. la dirigida a los Oficiales de San Juan, en "Col. docs, ineds. Ult.", IX, 356).- El 18 mayo 1572, se ordenaba a la Audiencia de Nueva España que cuando se les tomase juramento se les pidiera también, el guardar secreto, "como se acostumbra a hacer en los Tribunales de estos reinos" ("Céd. Encinas", III, 282).- En cuanto al secreto, ya se decía en las Instrucciones de los Oficiales de Tierra Firme en 1513, que debían prestar juramento de que lo guardarían ("Cop.", V, 29, c. XVIII).
- (21). Para describir la ceremonia de toma de posesión, hemos utilizado los testimonios insertos en el Libro de Acuerdos de Venezuela ("Orig. Hac. Venez. 29) y dos de la Caja de Cartagena, (en AGI., Contaduría, 1382, nº 1, r.19 y nº 8).

- (22). Este inventario aparece citado en los testimonios de toma de posesión. Expresamente estaba ordenado en las Ordenanzas 1 y 33 dadas por el Virrey Toledo a los Oficiales Reales del Perú en 1571. Según ESCALONA, en el siglo XVII (R.C. 5 diciembre 1622) se acostumbraba a hacer otro inventario jurado de los bienes que poseía el nuevo Oficial Real al entrar al uso de su oficio ("Gazophilacium...", L.I.P. II, c. IV).
- (23). ESCALONA? id., L.I., P. II, c. X, n.º 15.
- (24). En el encabezamiento de las Instrucciones, suele designarse por el siguiente orden: Tesorero, Contador, Factor y Veedor, lo cual parece tener también la mayor importancia (al menos, desde el punto de vista de la confianza y la responsabilidad) del primero de dichos oficiales. Parece confirmar que no es causal este orden en la enumeración de los Oficiales Reales el hecho de que en la primera Instrucción a los Oficiales primeros de la Casa de Contratación, aparecía en primer término el Factor (Pinello), siguiendo a continuación el Doctor Matienzo, Tesorero; esta única excepción al orden generalmente establecido, fue hecha en opinión de SCHAFER, para distinguir a Pinello, probable autor del proyecto de crear la Casa ("El Real y Supremo Consejo de las Indias", I, 9nota).- En el orden de firmar los Acuerdos y autos fiscales prevalecen el principio de la antigüedad, pero si la toma de posesión había sido conjunta, también se hacía por el orden más arriba indicado (R.C. 3 mayo 1509 para la Española, en "Ced. Cubano", 141); (enero 1561 para N.º España, en "Cop.", V, 281, etc.).
- (25). Vid. p.ej. en el de Venezuela ("Orígenes de la Hacienda en Venezuela, pg.)
- (26). R.C. 9 diciembre 1525 a Oficiales de San Juan, generalizada a todas las Indias, para que se abran los despachos estando juntos ("Col. docs. inds. Ult", IX, 236). Al ordenarseles escriban juntos, para que haya conformidad en la resolución de los negocios, se les advierte que esto no obata para que si alguno cree conveniente que sus compañeros no conozcan lo que escribe, pueda hacerlo por separado & R.C. marzo 1531 a Oficiales Cuba y febrero 1537 a los Oficiales de San Juan, en "Cop.", V, 29 y 30; R.C. 22 diciembre 1529, cit. en Rec. Ind., L.VIII, T.III, l.15)

- (27). Suelen consignarse estas obligaciones de administración conjunta en las fundiciones, almonedas, etc., en todas las Ordenanzas e Instrucciones. Citaremos por su carácter general las Instrucciones de Oficiales de 1528 ("Col. docs. ineds. Ult.", IX, 259) y la 14 para Oficiales Reales de las dadas para el buen recaudo de la Hacienda el 10 mayo 1554 (publicada en ESCALONA, "Gazophilacium...", Apéndices y en "Col. Torres Mendoza", XVIII, 481); sobre las escrituras y fianzas: Instr. del Virrey Velasco de 1552, cap. VI ("Cop.", V, 197); envíos entre Cajas, R.C. 27 febrero 1575 a Virrey Toledo (cit. en "Gazophilacium...", L.I, P. c.VII).
- (28). Así lo afirma ESCALONA, buen conocedor de la práctica administrativa en materia de Hacienda indiana, basándose en la opinión de varios autores de la época (vid. "Gazophilacium...", L.I, P. II, c.VII).
- (29). También ESCALONA en sus "Notas y Avisos" a los Ordenanzas de la Caja de Lima, del año 1573 advierte que "no se practica por el embarazo y ocupaciones que lo impiden" (inserta al final de las tres primeras ediciones del "Gazophilacium regium Perubicum") (Vid. el nº 16).
- (30). R.C. 7 junio 1539 a los Oficiales Reales de Nueva España para que rija la antigüedad en el orden de votar ("Ced. Puga", I, 422).-- En los expedientes judiciales, el más antiguo es primera voz (ESCALONA, id. L.I, P. II, c.X, nº 15).-- El mismo principio regía desde 1511 (inst. 18 mayo) para la actuación de los Oficiales de la Casa de Contratación sevillana (Cedulario Puga, 250).
- (31). Figuraba ya en la primera de las Instrucciones que conocemos de Factores (octubre 1511, en "Col. docs. inds. Ult.", V, 337); R.C. 24 mayo 1597, cit. en Rec. Ind. L.VIII, T. III, l.5).
- (32). "Gazophilacium...", L.I, P. II, c.I.-- La responsabilidad solidaria esp. establecida por la Ord. 24 de la Caja de Lima del año 1573 (publ. en Apends. del "Gazophp").
- (33). Parece ser que el Contador especial Martín de Irigoyen halló algunos fraudes en la visita que hizo a la Caja de México en los años 1570-3; el Contador y el Factor declarándose inocentes, elevaron una petición al Monarca para que el alcance se cobrase únicamente al Tesorero; por R.C. 29 marzo 1574 se denegó la petición, dándose como razón que todos tenían culpa y comisión para la cobranza y la administración de la Hacienda ("Ced. Enc.", III, 302); poco después, otra R.C. de 6 de abril del mismo año (confirmada el 6 marzo 1575) disponían que

el alcance fuera pagado por tercias partes y no más el Tesorero que los otros ("Ced. Enc.", III, 303).

- (34). Vid. la R.C. dada en Monzón el 5 junio 1528 y dirigida a las autoridades de la provincia de Santa Marta (Col. docs. ins. Ult., IX, 350.)
- (35). R.C. a los Oficiales del Perú, en diciembre 1561, (Cop." V, 12).
- (36). Ord. del Virrey Toledo a los Oficiales de Lima, nº 40-8; ESCALONA, "Gazophilacium...", L.I, P.II, c.XIII y del Virrey Henríquez, nº 4 (AGI., Patronato, 190, 34).- En esta última se señalaban tres horas por la mañana y otras tantas por la tarde.- Una R.C. del año 1596, cit. por ESCALONA, en el lugar arriba citado, señala dos por la mañana y por la tarde, las que el Presidente las señale.
- (37). "... Especialmente el dicho Tesorero, a cuyo cargo ha de estar la dicha caja"; Ordenanzas para el buen recaudo de la Hacienda, 10 mayo 1554 ("Col. Torres Mendoza", XVIII, 481).- Esta caja fuerte contenía los ingresos del fisco (oro, plata, piedras preciosas) y las escrituras de arrendamientos y deudas fiscales, el Libro General, la marca del cuño real, y según ESCALONA, los expolios de los preladados que fallecían en Indias, aunque no fuera Hacienda real, para evitar la pérdida o el robo, y los depósitos particulares, donde no hubiere depositarios.- Las llaves de la caja estaban en poder de los Oficiales; en algunas ocasiones, tuvieron una el Presidente u Oidor, más antiguo de la Audiencia, e incluso el Corregidor, el Alcalde Mayor o el Alcalde ordinario, pero una R.C. de 26 agosto 1579 lo prohibió terminantemente ("Epist. Nª Esp.", XIII, 188). Los Oficiales solo podían entregarlas a sus Tenientes (Ord. 10 mayo 1544; Cap. 4, 17 y 33 (Oficiales Lima 1573)).
- (38). Una R.C. dada en agosto de 1526 a los Oficiales de la Nueva España disponía que las obligaciones de los arrendamientos de los diezmos se hagan a S.M. y al Tesorero en su nombre, sin que el Contador se entrometa a mandar hacer el arrendamiento y tomar las obligaciones y hacer cargo al dicho Tesorero ("Cop.", V, 28).- Vid. también la Instr. al primer Tesorero de Nueva España, (en "Col. docs. ins. Ult.", IX, p. 160.- Las Ordenanzas a Oficiales Reales de S. Juan, de 29 agosto 1528 señalan una responsabilidad específica del Tesorero en el cobro de las penas de cámara: "y lo que de otra manera se hiciere o dejare de cobrar sea a cargo o culpa del dicho tesorero" ("Col. docs. ins. Ult.", IX, 365)).
- (39). Cartas de Gasca al Rey de 15 noviembre 1541 (en LEVILLIER, "Gob. Perú", I, 185); vuelve a expresar la misma idea en otra de 21 septiembre 1549 (en LEVILLIER, "Gob. Perú", p. 227.- La Instrucción a Gobernadores, sin fecha, en "Cop.", V, 6).

- (40-- Instrucción al primer Contador de la Nueva España, Rodrigo de Albornoz (en "Col. docs. inds. Ult". I, p. 152). Una R.C. de fecha 2 agosto 1515 al tesorero de Castilla del Oro Alonso de la Puente, hace referencia a las disputas habidas entre aquél y el Contador sobre quien había de tener las nóminas originales de los salarios; el Rey resuelve que sea el Contador el que las lleve; ya que la función del tesorero se limita a pagar las libranzas despachadas por aquél según esas nóminas (en ALVAREZ RUBIANO, "Pedrarias", Apéndices, 433).-- También debía tener en su poder una relación de los pueblos que hubiere en la Nueva España, así encomendados al Rey, como a particulares (Instr. abril 1550 al Virrey Velasco, en "Cop." V, 177 y capítulo XII de la Instrucción dada por este Virrey en "Cop." V, 180).
- (41). Instrucción a Oficiales Reales de San Juan, de 29 agosto 1528 (en "Col. docs. ineds. Ult". IX, 367).
- (42). La instrucción a Juan de Ampués, Factor de la Española, dada en octubre de 1511, y la Instr. citada en nota anterior (model. de las Instrucciones a los Oficiales de un territorio) señalan como obligación específica de los Factores en los puertos "el recibir las mercaderías que hay allá y se enviaren de acá y por los Oficiales comarcanos para gastar y comerciar; tomar cuenta de los pasajeros que van sin licencia y si llevan cosas prohibidas, para avisar, y velar porque se guarden las instrucciones que llevarán los maestros de navios.
- (43). Como todas las operaciones importantes, las ventas de tributos en especie es un acto de administración conjunta (almonedas); pero el Factor tiene a su cargo la obligación de custodiar lo mismo que el tesorero en los ingresos metálicos y piedras preciosas, y la de Contabilidad, haciéndole el Contador los cargos correspondientes.
- (44). R.C. a Oficiales de Cartagena de junio 1557 ("Cop." V, 23).-- En los primeros tiempos las granjerías reales eran administradas directamente por los propios Oficiales Reales, y es de suponer que la actuación del Factor era mucho más intensa en este aspecto (Inst. para Gobernadores del año 1511, t R.C. septiembre 1514, en "Cop." V, 144 y 146).
- (45). Además de "tomar cuenta de los rescates y ver como se cobran para informar a S.M.", las instrucciones particulares y generales señalan como tareas propias del veedor la de estar presente en las fundiciones, cuidar de que el Gobernador mande pregonar a su tiempo las aperturas de las mismas, vigilar para que los particulares no tengan fuelles y demás aparejos para fundir, comprobar con la relación que le dé el escribano de minas quienes han dejado de acudir a la fundición y al

pago del "quinto" real; finalmente, se ordena que los Veedores vivan en la Casa de fundición, durante los días que estas se realicen (vid. la Instrucción al Veedor de Castilla del Oro Gonzalo Fernández de Oviedo, de fecha 19 junio 1519 y las Instrucciones a los Oficiales de San Juan del año 1528 ya citadas, en ALVAREZ RUBIANO, "Pedra-
rias", Apéndice, 487 y "Col. docs. ineds. Ult.", IX, 367 respectivamente).

- (46). Vid. Cap. I, pags. -- Constituye una excepción notable a las probables causas que señalamos en el texto para justificar la persistencia de un Factor-Veedor en algunas de las Cajas, la orden de extender la reducción de Oficiales a la Caja de Cartagena de las Indias, en la que por estar establecido en puerto de arribada de las flotas debía tener bastante importancia la función comercial del Factor.
- (47). Los Oficiales Reales de Venezuela, en Acuerdo de 4 febrero 1555, visto que el Rey ordena que "todos tres Oficiales reciban y cobren lo que a S.M. perteneciere y no el uno si los otros", estimando que "este es en perjuicio de la Real Hacienda porque en esta provincia no se compadece a causa de la pobreza de ella, y que hay cuatro pueblos en esta gobernación y muy lejos los unos de los otros", acordaron que se siguiera cobrando como hasta entonces (por medio de Comisarios enviados expresamente) y que en los otros tres pueblos los tres oficiales tengan sus tenientes, dando aviso de todo ello al Rey para que provea lo que más convenga (Orig. Ha. Venez.", 19).
- (48). La obligación de desempeñar sus oficios personalmente, salvo causa justa, suele fijarse en los títulos y reiterarlo en las Instrucciones particulares que se le entreguen a los Oficiales Reales en el momento de su nombramiento. En 30 diciembre 1537, vistos los grandes abusos cometidos en el empleo de Tenientes, se reiteraba a los Oficiales de Nueva España la obligación de asistir personalmente a las fundiciones "salvo estando ocupados en cosas del servicio de S.M. o cosas justas", bajo la pena de suspensión del Oficio ("Col. docs. ineds. Ult.", X, 388).
- (49). El 16 julio 1550 contestaba el Rey al Tesorero del Nuevo Reino que había solicitado permiso para ir a descubrir minas: "Entendereis en nuestro oficios, como está dicho, sin os ocupar en otra cosa alguna" (AGI., Ind. Gral. 532, f.º 40).
- (50). R.C. de junio 1540, ordenando al Gobernador del Río de la Plata no premie a los Oficiales Reales de aquella provincia a que vayan a las entradas y rancherías, para entender en sus libros ("Cop.", V, 34).
- (51). R.C. 3 agosto 1567 a los Oficiales Reales del Nuevo Reino prohibiéndoles acudir a los Comisarios que los den

los Gobernadores o Audiencias (AGI., Ind. Gara., 532, f. 159).-- Ya en agosto de 1562 se les había ordenado que se ocuparan en sus oficios y no usaran otros oficios en Comisión ("Cop.", V, 43).-- ESCALONA cita también entre las prohibiciones que afectan a los Oficiales Reales, la de ser Jueces de Comisión ("Gazophilacium...", L.I, P.o. XVII).

- (52). ESCALONA cita la prohibición de ser Tenientes de Gobernadores ("Gazophilacium...", L.I, P. II, c. XVII).-- Respecto al oficio de alcaldes, una R.C. de 13 diciembre 1527 ("Col. docs. ineds. Ult.", IX, 290) prohibía que los Oficiales de la Isla de Cubagua pudieran ser nombrados alcaldes. Otra de 19 enero 1537, dirigida a las autoridades municipales de San Juan de Puerto Rico, mantenía la prohibición ("Col. docs. ineds. Ult.", X, 364). El 6 de febrero de 1584 el Rey, enterado de que en algunas partes de las Indias se nombraba alcaldes ordinarios a los Oficiales Reales por muerte o ausencia de los elegidos para ellos, ordena a los Virreyes y Audiencias que no lo permitan, "si no fuere habiendo mucha conveniencia en ello" (AGI., Ind. Gral., 532, f. 446); poco después el 11 de mayo de 1588, cierra toda posibilidad de serlo; dado que las Ordenanzas disponen que el Regidor más antiguo sucede al Alcalde cuando muere o estuviere ausente (hasta que se cumpla el año en el primer caso o hasta que vuelva el titular en el segundo) y habiéndole sido concedido a los Oficiales Reales la facultad de ser Regidores en la ciudad donde residen con la mayor antigüedad, de hecho el nombramiento en las vacantes suele recaer fatalmente en ellos; el Rey dispuso que las ordenanzas sean interpretadas en el sentido de que el Regidor más antiguo a efectos del nombramiento del alcalde en las vacantes sea el que siga al Oficial Real (Ind. Gral., 532, f. 446; publicada también en "Col. Torres Mendoza", XVIII, 157). Finalmente, en cuanto a los Corregidores, una R.C. de mayo 1550 ordenaba que se le quitase al Factor de México el Corregimiento que por mandato de S.M. se le dió y no se le dé más otro ninguno, pues no es justo que siendo factor lo tenga ("Cop.", V, 40); otra de 9 octubre 1591, ordena al Virrey del Perú, García Hurtado de Mendoza, que no provea a ningún Oficial Real en Corregimientos (había proveído al Tesorero de Loja, Corregidor del Partido), (en "Ced. Enc.", III, 284).-- En el siglo XVII se llegó a prohibir que fueran Regidores, una vez consumidos los puestos que ocupaban ni que estos Regimientos fueran vendidos a sus hijos, parientes o criados (R.s. Cds. 26 mayo y 29 noviembre 1682, cit. por ESCALONA, "Gazophilacium", L.I, P. II, c. XVII).

- (53). R.C. diciembre 1527, citada en nota anterior, prohibiendo que los Oficiales Reales sean elegidos alcaldes en Cubagua.

- (54). La R.C. de 26 mayo 1622 que volvía a insistir en la prohibición de ser elegidos alcaldes y la ampliaba al

puesto de Regidor, señalaba como razón esta independencia del Oficial Real.- En íntima relación con este propósito, existía la prohibición, señalada más arriba, de que parientes de las autoridades gubernativas, pudieran desempeñar el cargo de Oficial Real.

- (55). R.C. febrero 1582, en "Col. Torres Mendoza", XVIII, 243 y Rec., L.VIII, T.IV, l.62.- Otra de 25 julio 1593 (Rec., id., l.63) la hizo extensiva a los que concertasen el matrimonio por pñomesa real o escrita, con esperanza de obtener real licencia.- Ya el Virrey Conde de Nieva, en 10 septiembre 1563, (en LEVILLIER, "Gobs. Perú", I, 538) escribía que estos matrimonios no servían más que para provecho de parientes y amigos, y no haciéndose justicia ni habiendo recaudo en la Hacienda; llegaba también a solicitar que se prohibiera realizarlo a los hijos e hijas de los Oficiales Reales.- SOLORZANO que trata con cierta amplitud esta cuestión (Pol. Ind., L.VI, c.XV, ns. 19-23) señala el trato privilegiado que aquellos tienen comparado con el del resto de las autoridades indianas, a las cuales les estaba prohibido de modo absoluto el casarse en los distritos por R.C. de 10 febrero 1575.
- (56). R.C. 23 mayo 1559 y 4 agosto 1596, citadas por ESCALONA ("Gazophilacium...", L.I, P.II, c.XVII).
- (57). R.C. agosto 1534 a los Oficiales del Perú aplicable a lo que descubriese Almagro ("Cop.", V, 39). Ya antes se había concedido la facultad de hacer tratos a los Oficiales de algunos territorios; en mayo de 1525, a los de Tárrota Firme ("Cop.", V, 38); en noviembre del mismo año, a los de Pánuco, en Nueva España (id., p. 39) y en noviembre 1527 al Tesorero de Cubagua (id., p. 39).
- (58). Una R.C. de 11 agosto 1522 señalaba el perjuicio, agravio y daño que se causaba a los mercaderes de Indias, si los Oficiales de la Casa de Contratación de Sevilla seguían teniendo navios, carabelas y fustas para comerciar por cuenta propia ("Col. docs. ineds. Ult.", IX, 150), y ordenaba, en consecuencia, que cesaran estos tratos.
- (59). Una R.C. de 22 octubre 1514 dirigida a los Oficiales de Castilla del Oro estableció la prohibición de comerciar con los fondos reales, bajo pena de pérdida de oficio, incapacidad para tener este oficio real y pérdida de la mitad de los bienes (en ALVAREZ RUBIANO, "Pedrarias", Apéndices, 422). La R.C. de 15 febrero 1528, de general aplicación a todos los territorios, establecía la misma penalidad ("Col. docs. ineds. Ult.", IX, 297). En cambio- y he aquí una prueba más de las contradicciones que el exceso de legislación producía a veces- en la Instrucción a los Oficiales Reales de San Juan de 19 de agosto 1528, después de formular la prohibición contra-

tar por sí ni en compañía, directa ni indirectamente en público ni en secreto: se establece una penalidad de 100.000 mrs. por cada vez ("Col. docs. ineds. Ult." IX, 361).-- No hay que insistir a la vista de los hechos en demostrar que ni unas ni otras debieron aplicarse en la realidad.

- (60). Capítulo 25 de las Ordenanzas para los Oficiales de la Caja de Lima de 3 de julio de 1573 (en ESCALONA, "Gazophilarium...", Apéndices).-- La R.C. de 24 octubre 1514, citada en nota anterior, parece demostrar que no se tuvo en cuenta el texto de las Partidas, al referirnos la penalidad a los treros con fondos reales y que no existía en Indias hasta las citadas Ordenanzas de 1573 la pena capital por el manejo de fondos reales con fines particulares.
- (61). Una R.C. al Almirante y Oficiales Reales de la Española de 15 junio 1510 ordenaba que fuera aumentado de cien a doscientos el número de indios que solía concederse a los Oficiales Reales y a los Alcaldes, dando por razón que aquella cifra no tenía para sustentarse (en "Col. docs. ineds. Ult." 227 y "Ces. Cubano" 269); en la misma fecha, una R.C. al capitán de San Juan de Puerto Rico, Ponce de León, indica que ningún vecino de la Española pueda tener indios en San Juan, excepto los Oficiales Reales y demás personas a quien el Rey les hubiese mandado dar por cédulas especiales ("Col. docs. ineds. Ult.", V, 209); la misma cifra de doscientos indios y naborías se ordena el 5 junio 1513 entregue al Gobernador de Cuba, Diego Velázquez, al Contador de la isla Amador de León, "por corresponderle por razón de oficio ("Epist. N.º Esp.", I, 28).-- En cambio, y sin duda, por una nueva contradicción legal, se ordena en febrero de 1512 al Alcalde Mayor de San Juan que señale a los Oficiales de la isla cien indios de repartimiento ("Cop.", V, 31).
- (62). Testimonio hecho el 2 de mayo de 1522 de los repartimientos hechos en Cuba por Diego Velázquez ("Epist. N.º Esp." II, 128).
- (63). En "Col. docs. ineds. Ult.", IX, 73, concretamente se refiere a la reforma de los capítulos 29 y 30 de las famosas Leyes de Burgos (publicadas por
- (64). Instrucción a Nuño Beltrán de Guzmán de 5 abril 1528 y R.C. a Audiencia de Nueva España, de 5 junio del mismo año (en "Col. Puga", I, 70 y 110).
- (65). Las Ordenanzas para el buen trato de los indios de 4 octubre 1528, en "Col. docs. ineds. Ult." IX, 439.-- La limitación del número de indios a los miembros de las Audiencias de Nueva España fue establecida por R.C. 5 octubre 1528; según el capítulo correspondiente aparece incluido en la carta a la Audiencia de 8 octubre 1529, cit. nota siguiente.

- (66). R.C. a Audiencia de Nueva España de 8 octubre 1529 ("Col. docs. ineds. Ult", IXm 444); id. a Oficiales Reales en la misma fecha, ("Col. docs. ineds. Ult." IX, 459).
- (67). Dos cartas de la segunda Audiencia de México nos dan noticias muy interesantes sobre la situación de hecho en estos primeros años de la colonización en Nueva España; el Contador Albornoz tenía título de Guazpalcheque, de un Sandoval que había fallecido; suplicó al Rey que se le diera en encomienda; la primera Audiencia se lo otorgó. La segunda Audiencia le dio por nulo y puso un Corregidor; el Contador protestó entonces alegando que ya se le había quitado dos tercios del salario conforme a lo ordenado en 1528; la nueva Audiencia compureba que en realidad solo se le bajó un tercio y ordena se le haga cargo a la Audiencia anterior. Albornoz pide al menos que se le supla con indios, pero la Audiencia manifiesta que "ya tiene otros de calidad y provecho". En tanto que el pleito continua, la Audiencia promete hacer justicia de los aprovechamientos que han tenido los Oficiales, empezando por hacer la información que no hicieron los primeros oidores por ser Valdivieso, amigo del Marqués del Valle y ser el Contador, amigo de este (Carta de 30 marzo 1531, en "Epist. N.º Esp.", II, 35).-- Según otra carta posterior, el Marqués encomendó la provincia de Tepasca al Veedor Marino; durante el viaje de aquél en Honduras, el Tesorero y el Contador prendieron a los otros dos Oficiales Reales, encomendando al primero la citada provincia" el Marqués confirmó a su vuelta el cambio de titular. La primera Audiencia atendió las quejas del Veedor y ordenó la restitución concediéndole en compensación a Texcoco la mitad de la provincia de Tlapa, pero la segunda Audiencia en cumplimiento de las órdenes reales, la puso en la Corona Real, acudiendo al Marqués con lo que cobraba, una vez pagados el Corregidor y demás administradores.-- Una anotación marginal del Rey anota; "Que hicieron bien" (vid. carta de 9 febrero 1533, en "Epist. N.º Esp.", III, 22).
- (68). Carta de 3 noviembre 1532 (en "Epist. N.º Esp.", II, 208).
- (69). Estas Leyes han sido últimamente fotocopiadas y esmeradamente trasladadas por D. ANTONIO MUÑO OREJON, según ejemplar existente en el AGI., y editadas en "An. de Ests. Amers.", II, Sevilla, 1946.-- El capítulo indicado en el texto pertenece a la primera disposición de 20 noviembre 1542 (pa. 821-2).
- (70). Según una R.C. de 31 julio 1554, dirigida a la Audiencia de Nueva España, un Oidor de la Audiencia, había visitado el pueblo de Tepetlaxtlan, encomendado al Factor Gonzalo de Salazar, suprimiendo algunos tri-

butos personales y tributos excesivos. El Factor protestó en apelación a la Audiencia y ésta modificó aquella decisión. El Rey pide se envíe relación del asunto al Consejo de Indias ("Ced. Puga", II, 239, hoja 151).

- (72). Título del Contador citado, de 5 septiembre 1570 en AGI., Contaduría, 1382, nº 8.- LEVILLIER señala en sus notas sobre el Oficial Real de Hacienda (v.p. 36), basadas en la Correspondencia de los Oficiales Reales del Plata que éstos no podían ser encomenderos, ni tampoco su mujer y los hijos menores de edad.
- (73). R.C. 24 noviembre 1525 para la Española ("Col. docs. ineds. Ult.", IX, 229).- Capítu. 13 de las Ordenanzas de Caja de Lima de 1573 ("Gazophilatium...", Apéndices).- Ordenanzas para la Audiencia de Lima de 1565 Tit. V. (BALLESTEROA; "Ords. Perú" 1-224).- Una R.C. de 27 marzo 1605 aclara que no pueden irse, aunque sea con provisión de oficios a que los enviaren los Virreyes (ESCALONA, Notas y advertencias a las Ordenanzas de Caja de Lima, de 1573", en "Gazophilatium...", Apéndices).
- (74). Vid. p. eje. una R.C. de 19 mayo 1525 para Castilla del Oro (en ALVAREZ RUBIANO, "Pedrarias", Apéndice 560). Se establecía una pena de 10.000 maravedises, aplicables al Oficial Real y 15 pesos de oro al vecino que lo acompañara.
- (75). R.C. a Oficiales Reales del Perú, en "Ced. Encinas", IIIm290 y Rec., L.VIII.T.III, l. 8.- La Audiencia lo había prohibido y los Oficiales acuden en recurso de queja al Monarca; éste confirma la decisión de aquel tribunal de justicia.
- (76). Instrucción a los Padres Jerónimos, en "Col. docs. ineds. Ult.", IX, 73.
- (77). Dada la íntima relación de este punto con las operaciones de pago de salarios en general, dejamos su estudio para el capítulo IV, cuando nos refiramos a los gastos de la Hacienda.
- (78). Falta una tabla de precios de los géneros de primera necesidad en Indias en el siglo XVI; la formación de ésta no será difícil de obtener a través de los cuadros de evaluación de mercancías, que deben existir entre los papeles del Fisco indiano, hoy en los archivos americanos. Quizá algún día próximo reunamos los datos dispersos que se hallan en la correspondencia de la época, en la que constatemente se alude a este fenómeno de la carestía de vida.- Esta carestía tenía doble origen: la depreciación de la moneda por la abundancia de metales, fenómeno económico que ha examinado y demostrado HAMILTON para la vida española en el mismo período ("American Treasures in

the price revolution in Spain") y la escasez de mantenimientos de una economía como la indiana, fundamentalmente de explotación minera.

- (78). Hacia 1530, mientras el Tesorero de la Caja de México cobra 450.000 maravedises (aparte de una ayuda de costa de 60.000 más) los de Nueva Galicia y Los Reyes, perciben 130.000; los de Santa Marta y Tierra Firme, 100.000 y el de Guatemala 300.000 ("Cop.", V, 222 y ss.; Ced. Santa Marta, 28; "Ced. Puga" I, 110).
- (79). Por ejemplo, el Contador de la Escuela recibe en 1508 la cantidad de 80.000 maravedises frente a los 100.000 señalados al Tesorero (no se olvide que éste es Miguel de Pasamonte); en cambio al nombrar los primeros Oficiales de Nueva España, se señala la misma cuantía al Tesorero y Contador (450.000 más 60.000 de ayuda de costa). El Factor, que cobra 80.000 maravedis en 1508, es decir, también 20.000 menos que el Tesorero, recibe ~~igual~~ la misma cantidad en Nueva España (450.000 en 1522) y en Nueva Galicia (200.000 en 1544). El Veedor, en cambio, cobra siempre menos: el de Nueva España, en 1522, 330.000 frente a 450.000 que cobran los otros; el de Nueva Galicia, en 1544, 100.000 frente a 200.000 y en 1545, 200.000 frente a 300.000 de los otros tres Oficiales ("Cop.", V, 222 y ss.; "Ced. Puga", I, 110 y II, 45.)
- (80). Citemos, como ejemplo, el caso de los Oficiales Reales de Nueva Galicia: Tesorero, Contador y Factor reciben 120.000 maravedises en 1531 (desconocemos la cuantía del salario del Veedor); al 11 de diciembre de 1544 se les aumenta hasta 200.000 a los tres primeros y 100.000 al Veedor; el 24 enero 1545 vuelve a elevarse hasta 300.000 y 200.000 respectivamente ("Cop.", V, 222 y ss. y "Ced. Puga", II, 45).
- (81). La máxima cifra corresponde como dijimos, a los Oficiales de la Caja de México y Lima. La mínima probablemente a las del Río de la Plata, a la cual señala LEVILLIER una cuantía de 120.000 a 350.000 en el siglo XVI ("Oficiales Reales de Hacienda", 35). Hemos intentado hacer una comparación con el salario de otros funcionarios (Gobernadores, Oidores, etc.) y hemos desistido por ofrecer el de éstos la misma variabilidad en el tiempo entre 300.000 y 900.000 maravedises, en la primera mitad del siglo XVI (en 1548 un Oidor cobra 350.000 si es de la Audiencia de la Española; 500.000 de la de Guatemala; 650.000, de la de Guadalajara; 800.000 de la del Nuevo Reino de Granada y 900.000 de la de Lima). A título de ejemplo y sin que esto deba poderse generalizar lo más mínimo, señalamos los territorios en un mismo año (1545). En Guatemala: Gobernador, 552.500; Oidor, 500.000; Fiscal, 500.000; Oficial Real, 200.000. En Nueva Galicia: Gobernador, 500.000; Oidor, 400.000; Fiscal, 400.000; Oficial Real, 200.000.

le mismo que en Guatemala; Oidor, 650.000; Fiscal, lo ignoramos, probablemente lo mismo que en Guatemala; Oficial Real, 300.000. Es decir según datos, siempre inseguros por proceder en su mayor parte de una relación de salarios, inserta en la "Cop.", V, 22 y ss., la proporción aproximada es de una mitad, con respecto al de los funcionarios citados.

- (82). Nombramiento del Tesorero de Santa Marta, de 14 enero 1530. ("Ced. Santa Marta", 28).
- (83). Vid, en el cap. IIª pg . donde hicimos especial referencia a los de Venezuela, según los datos contenidos en el Libro de Acuerdos de los Oficiales Reales de aquel territorio.- Vid. también para una Nueva España en "Epist. Nª Esp.", XIII, 197).
- (84). ESCALONA cita una R.C. de 1570, prohibiendo que se les pague salario oficial al Balanzario de las fundiciones, oficiales de libros y Escribano de la Caja, ni al que les ayude a ordenar las cuentas, por constituir estas funciones una obligación propia del Oficial Real ("Gazophilacium...", L.I, P.II, c.XVII).
- (85). Sólo en 1618 les fué admitido el aceptar obligaciones a plazos moderados (LEVILLIER, "El Oficial Real de Hacienda", "Reconstrucción del pasado colonial", 36).- El 8 de febrero de 1531 escriben los Oficiales de la Española, que viendo que existían en caja 40.000 castellanos de oro y careciendo de facultad para mandar tanto dinero en un navío, pidieron mandamiento a la autoridad gubernativa (entonces la segunda Audiencia), pero ésta no quiso concederlo por temor al riesgo; piden que en adelante se les dé facultad en este punto ("Epist. Nª Esp.", II, 23).- Para efectuar cualquier gasto extraordinario, hace falta autorización expresa y si con urgentes, debe hacerse en Acuerdo, y notificándolo al Monarca (vid. cap.IV: "Gastos de la Hacienda").
- (86). "Cop.", V, 18.- Sobre los Oficiales de México existen disposiciones contradictorias sobre si han de estar en la casa de fundición o en las Cajas Reales ("Cop.", V 15-7).- Los de San Juan de Puerto Rico viven en la casa del puerto, donde se avalían las mercaderías y en ella está la Caja Real, y se realizan las fundiciones (R.C. noviembre 1531, "Cop." V, 19).
- (87). R.C. de 6 junio 1511 (en "Ced. Cubano", 323).
- (88). También en julio de 1532 se ordena al Presidente de la Audiencia de México que no consintiera que los Oidores trataran mal de palabra a los Oficiales de la Real Hacienda, y cuando excedieren en algo, los castiguen, conforme a derecho ("Cop.", V, 34).- Vid. también en Encinas, III, 287, y 349.

- (89). El primer asiento, después de la Audiencia, en las iglesias y partes públicas donde se juntaren (LOPEZ DE VELASCO, "Descripción universal de las Indias" p.53).
- (90). Ya dijimos que en este punto se cometieron numerosos abusos; la R.C. de 19 mayo 1525 dice que los Oficiales "sequieren servir y acompañar de todos los vecinos y personas que se hallen presentes con ellos en cualquier parte donde van en el pueblo donde están y que de esto ha quedado costumbre en mucho perjuicio de los vecinos de los tales pueblos porque dejan sus oficios y haciendas por acompañar los dichos Oficiales entre los cuales sobre ello diz que hay muchas envidias y diferencias". Se ordena bajo fuertes multas que solo puedan acompañarles sus criados o personas que cobren sueldo de ellos (ALVAREZ RUBIANO, "Pedrarias", Apéndice, 560).-- Para evitar cualquier desmán de los vecinos, siempre terrible, dado lo delicado de su función, se permitió en abril 1555 que el Factor de Nueva España llevara consigo tres negros armados; en noviembre 1562 se concedió a los Oficiales Reales de quel territorio la facultad una guardia personal sin limitación de número (Cop.",V,32).
- (91). LEVILLIER "El Oficial Real de Hacienda",35.
- (92). R.C. de 4 diciembre 1529, dirigida al Factor de Santa Marta, Antonio Ponce, para presentarse en dicha ciudad a tomar posesión del Regimiento que se le ha concedido en aquel Cabildo ("Ced. Santa Marta", 21).-- Al nombrar al segundo Tesorero de Santa Marta, Téllez de Guzmán se le da el cargo de Regidor que desempeñaba el anterior Tesorero Pedro de Espinosa (id.p.30).-- Nombramiento de Regidor perpetuo de Nuestra Señora de la Antigua del Darién, a favor del Veedor, Gonzalo Fernández de Oviedo, de fecha 19 junio 1519, en ALVAREZ RUBIANO, "Pedrarias", Apéndice, 485.
- (93). En la Instrucción al Juez de Residencia Ponce de León, de 4 noviembre de 1525 se le dice que los Oficiales Reales han suplicado se les provea de oficios de regimientos y dado que hay opiniones contradictorias sobre la conveniencia de dicha concesión, se le pide se informe bien y dé su parecer ("Col.Docs. Ineds. Ult.",IX,225); lo mismo vuelve a ordenarse en la Instrucción a Nuño Beltrán de Guzman en 5 abril 1528 ("Ced. Puga",I,62).
- (94). R.C. 16 abril 1538 ("Col. docs. ineds. Ult.",IX,207 y "Ced. Puga",I,419).-- En febrero de 1537 se había concedido al Factor del Perú ("Cop.",V,31).-- La R.C. del año 1538 fué confirmada repetidas veces (1573, 1575, 1576...)-- LOPEZ DE VELASCO señala en su "Descripción universal de las Indias",p.52 que hacia 1574 era general esta práctica en todos los territorios.

- (95). R.C. 26 mayo 1561: SOLORZANO, ("Pol.Ind.", L.VI, c. XV, nº 12).- ESCALONA ("Gazophilaciur...", L.I, P.II, c.XVII) señala el año 1562.
- (96). La precedencia con respecto a los demás Regidores está señalado expresamente en todos los documentos citados en la nota 93. Una R.C. de 26 noviembre 1573 para Nueva España disponía que después del Corregidor de México ocupara su asiento el Alguacil Mayor; los Oficiales Reales se quejaron de que esto iba contra la costumbre establecida de que fueran ellos los que seguían al Corregidor, visto lo cual el Rey revocó la Cédula de 1573 y dispuso por otra de 10 Octubre 1575 en el asiento en los actos del Cabildo o ceremonias públicas que el orden de votar y formar en las reuniones, quedara establecido el siguiente orden: Corregidor, Justicia ordinaria, Oficiales Reales, Alguacil Mayor y Regidores (Cedulario de Encinas, III, 289); lo mismo se dispone para Quito, por R.C. 16 abril 1576, que según Encinas se dió con carácter general ("Ced. Encinas", III, 288).
- (97). El 12 de febrero 1557 escribía desde Lima que pendían pleitos fiscales desde hacia mucho tiempo; propone que se les conceda a él y a otro letrado facultad para verlos y si hubiese apelación fuera directamente del Consejo de Indias "de este modo se despacharan más pleitos en un año que se ha hecho en diez" (en LEVILLIER, "Gob. Perú", II, 460).- De las quejas de los Oficiales Reales, ya hablamos en el capítulo I.
- (98). Rec., L.IX, T.XVI, 1.69.- Los documentos demuestran que se llevó a la práctica al menos en algunas regiones: en una relación del Tesorero de Castilla del Oro Lapuente se especifica que los que salen, llevan cédulas del Tesorero y Factor, especificando que no deben nada al Fisco (18 enero 1516, en ALVAREZ RUBIANO, "Pedrarias", Apéndices, 440).
- (99). Rec., L.IX, T.XVI, 1, 53.
- (100). R.C. 8 noviembre 1581, en "Ced. Encinas", III, 289. Rec.cast. L.III, T.IV, 1.42.
- (101). R.C. 8 noviembre 1562, en "Ced. Encinas", III, 291.
- (102) R.C. 1570 ; los Alguaciles Mayores tienen obligación de ejecutar los mandamientos (R.C. 26 septiembre 1584 en). Según ESCALONA, en las Cajas principales, como la de Lima, el Virrey nombra alguaciles para la cobranza con salario que no sea de la Hacienda Real ("Gazophilacium...", L.I, P.II, c.VI).- Sobre los Alcaldes Mayores, R.C. 22 noviembre 1597, en "Episto. N.º Esp.", V, XIII, 180.
- (103). R.C. 18 mayo 1572, (en "Ced. Encinas", III, 294); antes de la concesión de jurisdicción autónoma a los Oficiales Reales, sólo tenían facultad de avisar a la Audiencia y ésta debía despachar Jueces que apremiaran a los Corregidores (R.C. de octubre 1527, en "Ced. Encinas", III, 294).

- (104). ("Gazophilacium..."., L.I, P.II, c.VI.- Una R.C. de 28 marzo 1620 castigaba con 6 años en Chile y perpetua privación del oficio a los Corregidores que no entregaran lo recaudado (cir.en "Gazophilacium...", id.).
- (105). Sobre la prelación de las deudas de tributos, R.C. 2 marzo 1608 (cit. en "Gazophilacium...", L.I, P.II, c.VI).
- (106). El Visitador Ulloa dió auto en 14 mayo 1596 para que las deudas del azogue repartido a los mismos tuviera prelación a todas las demás deudas fiscales, incluso a las de fecha anterior (ESCALONA; "Gazophilacium...", L.I, P.II, c.VI); una Cédula Real de fecha posterior (1633), dirigida al Conde de Chinchón ordenaba hubiera modificación según ESCALONA, por ser vasallos menesterosos y proceder de su trabajo la mayor parte del caudal que se trae a España y excusar el mayor daño de que no cese por apremio del fruto presente que insta el venidero que se previene" (id.).
- (107). ESCALONA cita dos Reales Cédulas al Principe de Esquilache en 27 septiembre 1614 y 4 julio 1620 (op.cit., id.).
- (108). R.C. citadas de 24 agosto 1563 concediendo jurisdicción a los Oficiales del Perú y 18 mayo 1572 a los de Panamá ("Ced. Encinas", III, 293).
- (109). R.C. 30 diciembre 1571 al Virrey Toledo, dit. por ESCALONA, (id., L.I, P.II, c.V). Al principio la legislación se muestra tolerante en lo referente a la prisión por deudas; en la Instrucción dada en 1516 a los PP. Jerónimos, Gobernadores de la Española, se les encarga que a los deudores del Fisco que no puedan pagar se les haga la merced de no ser encarcelados si se quisiesen pasar a Tierra Firme o a otras islas ("Colc.docs. ineds. Ult.", IX, 69).- El Virrey Toledo dió un mandamiento en 1580 para que no se aplicara en Quito la prisión por deudas al Fisco (en Patronato, 189, 39).
- (110). Pedrarias Dávila escribe desde Acla el 20 abril 1519 rogándole que ordene a los Oficiales Reales no fagüen a los vecinos para el pago de sus deudas al Fisco "al menos en tanto que la tierra está en necesidad como ahora está", y que no se lleguen a vender las haciendas de los pobladores como llega a hacerse; ruega finalmente, sea aprobada la orden que ha dado de suspender las ejecuciones "para que no se acabara de perder la tierra" (ALVAREZ RUBIANO, "Pedrarias", Apéndices, 478); más adelante, suplica también que los que a causa de su enfermedad quieren irse a las islas, siendo deudores de la Real Hacienda, puedan hacerlo (id.p. 480). También en Venezuela, solía haber indulgencia: en uno de los Acuerdos de los Oficiales Reales, después de manifestar que no se puede cobrar "por la gran necesidad y obreza de la tierra", y juzgando que si se aprieta en la cobranza se hace mucho daño a los vecinos, se acuerda dar mandamiento contra los deudores "porque es razón que las dichas deudas se cobren"

y ya que no se pueda cobrar todo por las razones dichas, se cobre lo más que se pudiere (Acuerdo de 25 febrero 1599, en "origs.Hac.Venez.",p.99).

(111).R.Cast., L.V,T.XVIII,1,19; L.IV,T.XXI,1.5 y ESCALONA, "Gazophilacium...",L.I,P.II,c.VI).

(112).El comiso es una pena legal, cierta y determinada por derecho, y que no auvierte por tanto moderación en su aplicación; frente a ella, por ejemplo tenemos las penas de C'amara, impuesta por los Tri'unales de Justicia y por esta razón generalmente arbitraria.

(113).Reales Cédulas de mayo 1535 para Tierra Firme; noviembre 1552, para San Juan; agosto 1546 y febrero 1561 para Nueva España ("Cop.",V,135,136 y137). En nov.1560, dirigida a los Oficiales de Nueva España se ordena que "brevemente hagan justicia", (id.136).

(114)Son muy frecuentes, por ejemplo, las arribadas forzosas de naves portuguesas a las costas venezolanas por recibir vientos contrarios en el viaje entre los territorios africanos y el Brasil. En el Libro de Acuerdos de los Oficiales Reales se mencionan tres casos: uno de ellos, se refiere a un navío, en viaje desde Brasil a la isla Tercera; los Oficiales dan "por bien arribado (involuntariamente) al navío" y sentencian que las partes paguen los derechos pertenecientes al Rey y que den fianza de derechos pertenecientes al Rey y que den fianza de que se presenten en la Casa de Contratación de Sevilla ante el Presidente, Jueces y Oficiales de ella, o ante el Rey en su Real Consejo; en la apelación que elvan al Gobernador, estelimita la sentencia al juramento de que harán su presentación en la Casa de Contratación de Sevilla o en el Consejo de Indias. El otro de los casos, se refiere a un navío con negros y marfil traídos del Rio Grande de Guinea con destino a Cabo Verde; dan fianza de pagar lo sentenciado, pero Gobernador ordena por su cuenta el embargo de lo obtenido con la venta de esclavos sin que los Oficiales Reales puedan cobrar lo correspondiente al fisco. El tercer caso se refiere a un navío con negros traídos de Angola. ("Org. Hac. Venez.", pgs,79-83).

(115).En 1596 se vió un pleito criminal ante los Oficiales Reales de Venezuela: de una parte, el Alguacil Mayor de la Gobernación actuaba de promotor fiscal de la Real Justicia; de otra, el maestro y piloto de un navío portugués arribado "maliciosamente" a La Guaira, en viaje de Pernambuco a Rio Janeiro. La sentencia de los Oficiales Reales es durísima: pérdida del navío con todos los aparejos y condena al maestro y al piloto del navío a seis años de galeras a cumplir en las galeras de Cartagena de Indias, al remo y sin sueldo; los pasajeros y marineros deberán ser embarcados en el primer navío que salga para España, anotando en el Registro de dicho barco que han venido derrotados; se les exige fianza de que no saldrán de Santiago de Leon hasta ser embarcados

bajo la pena de multa de 100 pesos de oro fino y si se aumentaren se irá a su costa a buscarles; a un padre que iba se le enviará a Santo Domingo para que su Prelado le castigue por haberse derrotado de su voluntad a aquellas tierras; finalmente, las costas procesales irán a cargo del piloto y maestro.- En la apelación llevada al Gobernador, éste mitiga la sentencia: en cuanto a la pérdida del navío, la sentencia fue justa y condóme a derecho; en cuanto al piloto, revoca la decisión de los Oficiales Reales y lo da por libre de la condenación hecha contra él; únicamente deberá pagar antes de salir de la cárcel la condena en costas, cuya cuantía se reserva: debiéndosele hacer la notificación de que si de nuevo vuelve a aquellas tierras le serán aplicadas las penas contenidas en las Ordenanzas Reales ("Org.Hac.Venez" p.86).

- (116). Una relación de los pleitos que están tratando los Oficiales Reales de la provincia de Cartagena a la llegada del Contador Especial Fernando de Sierralta (1578) se mencionan varios referentes a comisos (negros sin licencia; vino de la Magdalena y bizcocho; ropa y velas de Santo Domingo y cordero y ollas de Santa Marta); otro, con el Arzobispo del Nuevo Reino de Granada sobre mil pesos que se obligó a volver a la Caja Real de lo que se le dió de la sede vacante; otro finalmente, contra el arrendador del y fundición de la ciudad (AGI., Contaduría, 1382, nº 8).
- (117). R.C. de 23 enero 1570 a la Audiencia de Charcas ("Ced. Encinae", III, 294).
- (118). Hemos visto en las notas 114 y 115 varios ejemplos de apelación al Gobernador. Su sentencia es definitiva, como como expresamente se hace constar en el pleito criminal citado en la nota 115: "y en todo lo demás que contra esta mi sentencia la que pronunciamos los dichos Oficiales Reales, la debo revocar y revoco; y por esta mi sentencia definitiva, juzgando así, la pronuncio y mando".
- (119). En la relación de pleitos fiscales de la Caja de Cartagena, citada en la nota 117 se hace constar que el Gobernador ha sentenciado juicio de apelación contra lo dispuesto en las leyes (orden de que se avalíen unas mercancías entradas de contrabando, cuando debían carse por pérdidas); los Oficiales Reales, apelan al Consejo de Indias.- En AGI. se hace mención a pleitos de comisos en Indias, vistos en el Consejo (vis., p.ej., en Papeles de Justicia, 1017).
- (120). El Virrey del Perú D. Luis de Velasco, declaró el 16 agosto 1603 a petición de los Oficiales Reales de Potosí que éstos pudiesen avocar a sí los pleitos de los deudores al Fisco pendientes ante las Justicias ordinarias (SOLORZANO,

"Pol. Ind., L.VI, c.XV, nº 30). ESCALONA cita una R.C. de 3 febrero 1626 en tal sentido ("Gazophilacium...", L.I, P. II, c.VI).

- (121). En el Libro de Acuerdos y en la toma de posesión del oficio se les designa constantemente con el título de Jueces.- La R.C. 11 junio 1621, recogida en la Rec. (L.VIII, T.III, 1.1) dispuso que aun cuando siguiera designándose como tribunal la Sala de su despacho cuando concurren juntos, sólo puedan llamarse ellos en adelante "Oficiales Reales" y "Oficiales de la Real Hacienda".
- (122). Tenemos un ejemplo significativo: Antonio Bermúdez, Contador de Cartafena, ha quedado jubilado y sigue cobrando su salario; a petición suya una Real Cédula de 28 octubre 1581 ("Ced. Enc.", III, 287) le concede que en tanto viva en aquella ciudad tenga el mismo asiento en las ceremonias públicas, con la misma antigüedad y precedencia que natus.
- (123). "Cop.", V, 36.
- (124). R.C. 12 febrero 1538 y 8 noviembre 1539 recogidas en "Rec. Ind". (L.VI, T.IX, 1, 36).
- (125). "Gazophilacium...", L.I, II, c.XVII, nº 11.
- (126). Memorial acompañado de una Información de méritos, en AGI, Lima, 120. La anotación marginal indicada es de fecha 19 noviembre 1561.
- (127). Ordenanzas 1528. ("Col. docs. ineds. Ult.", IX, 299).
- (128). Ord. 1528 ("Col. docs. ineds. Ult.", IX, 355).
- (129). R.C. 1566 general, cit. en "Cop.", V, 216.

- (130). Por ejemplo: Virrey del Perú, abril 1598, en LEVILLIER: "Gobernantes del Perú", XIV, 118; Virrey de Nueva España, agosto 1552, en "Copulata", V, 8.; Gobernador de Santa Marta, mayo 1535, en "Copulata", V, 8; el de Venezuela, 1583 y 1590, en "Orígenes de la Hac. en Venezuela", 28 y 38; Gobernador-Presidente de la Audiencia de Santo Domingo, en "Orígenes de la Hac. en Venezuela", página 37.
- (131). R.C. de 27 octubre 1569, citada más abajo. El 11 marzo 1530, el Monarca nombraba un Oficial provisional en Santa Marta, por estar preso el propietario ("Cedulario de Santa Marta", 54).
- (132). Al Juez de Residencia de Santa Marta, el 3 de mayo 1535 (Cedulario Santa Marta", 403).
- (133). R.C., sin fecha, a la Audiencia de la Española, censurando y revocando el haber puesto Oficiales Reales en Cuba ("Copulata", V, 6); lo mismo a la Audiencia de Guatemala en noviembre 1562 (en "Copulata", id.). Vid. una interesante carta de la Audiencia de Charcas al Rey (La Plata, 24 diciembre 1563), en la que se refiere la cuestión surgida entre aquélla y el Virrey de Lima sobre el nombramiento de un tesorero interino en Potosí (en LEVILLIER: "Correspondencia Pres. y Oidores Audiencia Charcas", I, 103).
- (134). R.C. al Gobernador de Santa Marta, de mayo 1535 (en "Copulata", V, 8.
- (135). R.C. de febrero 1569 para que no se provea a los que habiendo servido aquellos oficios, hubieren hecho en ellos cosa que no deban ("Copulata", V, 9).
- (136). R.C. al Gobernador de Tierra Firme, de 16 marzo de 1527, para que habiendo proveído en el oficio de contador a un sobrino suyo por muerte del propietario, lo quite y dé a otro que S.M. nombra (citada en nota 10 de este capítulo).
- (137). Vid. la toma de posesión de un tesorero y un contador provisional en Venezuela en los años 1583 y 1590 ("Orígenes de la Hacienda en Venez", 28 y 38).
- (138). En este punto existe una constante reiteración en las leyes: R.C. de 4 septiembre 1570 a Oficiales Reales de Car-

tagena (AGI., Contaduría, 1382, n° 8); R.C. general para todas las provisiones hechas por Virreyes, Audiencias y Gobernadores (AGI., Indif. General, 532, f. 146 v°); R.C. 26 de mayo 1573 al Virrey Toledo (cit. en "Gazophilacium", L.I., c.XX), etc.- Una R.C. de 10 enero 1589 al Virrey Conde de Villar, ordena que los Oficiales Reales "proveidos en el entretanto" vuelvan la mitad del salario que han llevado de más, por habérseles pagado enteramente como a propietarios ("Cedulario" de Encinas, III, 283). También en la toma de posesión de dos Oficiales provisionales de Venezuela en 1588 y 1590 (Vid. nota anterior), se hace constar "se les paga la mitad del salario del propietario, como S.M. manda".

- (139). Así lo dispusieron dos Reales Cédulas de 21 enero 1561 y 27 octubre 1569, dirigidas a la Audiencia de Nueva España ("Cedulario" de Encinas, III, 292).
- (140). Además de la legislación citada al hablar de los Oficiales propietarios, son constantes las referencias en las fuentes, demostrando que se hacía así constantemente. Para los Oficiales provisionales, expressemente se hace constar en la toma de posesión que "puede nombrar tenientes de Contador y otros oficiales que rijan y administren la Hacienda" (Orígenes de la Hac. en Venez", 38).
- (141). R.C. al Gobernador de Santa Marta para que pueda poner Tenientes en ausencia de los Oficiales ("Copulata", V, 5).
- (142). "Descripción Universal de las Indias", pág. 52.
- (143). Una R.C. de enero 1535 ordena que el teniente que dejare el tesorero de Guatemala, sea aprobado por el Gobernador ("Copulata", V. 10).
- (144). "Nombraré en ausencia del tesorero, factor y veedor personas calificadas y de confianza, a ser posible casados" (Instr. 5 abril 1528, en "Cedulario" Puga" 65).
- (145). En la instrucción para tomar cuentas en la Española del año 1543, se especifica se informen si los Tenientes de Oficiales Reales han tenido tratos, de manera que por razón de ellos se haya hecho algún fraude a la Real Hacienda, y se cobre de los culpados lo que montare ("Copulata", V, 311).

- (146). R.C. 14 enero 1592 ("Cedulario" de Encinas, III, 290).
- (147). R.C. a Oficiales Reales de Nueva España, de 7 diciembre 1537 (en "Col. docs inédts. Ult.", X, 388, y "Cedulario" de Puga, I, 406, F.115).
- (148). Así ocurre en el Perú según refiere el Contador especial Portocarrero, en carta al Rey de 1^o febrero 1557 (LEVILLIER: "Gobernantes Perú", II, 466); lo mismo manifiesta ESCALONA ("Gszophilacium", L.I., P. II, c.II). Respecto a la Española en los primeros tiempos, vid. la nota siguiente.
- (149). "Col.docs. inédts. Ult", IX, 73.
- (150). Carta citada en la nota 148 del Contador especial Portocarrero.
- (151). Los Oficiales del Perú nombren Tenientes para la provincia de Quito (R.C. julio 1538, en "Copulata", V, 10); Los Oficiales que residieren en el Nuevo Reino de Granada pongan sus Tenientes en Santa Marta (R.C. julio 1540, en "Copulata", V, 11); el Gobernador y Oficiales, conjuntamente, nombren Tenientes para la villa Puerto Viejo (R.C. agosto 1540, en "Copulata", V, 11); el Gobernador de Venezuela, entretanto que informa sobre que el tesorero de la pesquería de las perlas pide que se le dé facultad para poner un Teniente en el pueblo que se poblare en las minas de Sierra Nevada, preves lo que convenga (R.C. de marzo de 1549, en "Copulata", V, 11); una R.C. de 12 junio 1540 ordenaba al Gobernador del Rio de la Plata permitiera a los Oficiales Reales poner Tenientes para el cobro de almojarifazgo (LEVILLIER: "Anteced. pol. econ. R^o Rio Plata", I, 348).
- (152). Una R.C. al Virrey Toledo de fecha 1^o diciembre 1573 le da facultad de proveer Tenientes en las Cajas subordinadas del Virreinato ("Cedulario" de Encinas, III, 295).
- (153). Así lo especificaba una R.C. de julio 1538 para los de Quito ("Copulata", V, 11), aunque no sabemos si perduró mucho esta costumbre; el importe de estas fianzas se depositaba o en los Oficiales de la Caja de la cabecera o en las autoridades de justicia o gobierno. Esta obligación de prestar fianzas se especificaba también en la R.C.

citada en nota anterior; en el Libro de Acuerdos de los Oficiales de Venezuela [Orig. Hac. en Venez", p.55); y para los pueblos del Perú, en una R.C. de 1565 ("Copulata" V, 9).

(154). Reales Cédulas de julio 1538 para Quito, y julio 1540 para Santa Marta ("Copulata", V, 10 y 11).

(155). En el Libro de Acuerdos tantas veces citado, se especifica en una ocasión que el fuere a tomar las cuentas a los Tenientes de las Cajas subordinadas, la tome también a los arrendadores de la parte de diezmos que corresponde al Rey ("Orgs. Hac. en Venez", 55).

(156). "Orgs. Hac. en Venez.", 56 y 63.

(157). R.C. de 14 septiembre 1592 ("Cedulario" de Encinas, III, 290).

(158). "Orgs. de la Hac. en Venez.", 125.

CAPITULO CUARTO

CAPITULO CUARTO

----- OPERACIONES DE LA HACIENDA INDIANA -----

Hemos estudiado ya la organización territorial, el elemento personal y el régimen jurídico de los funcionarios de la Hacienda indiana; vamos a hablar ahora de las operaciones más importantes de dicha Hacienda, que si por una parte completaría el cuadro de las funciones propias del Oficial Real, apenas esbozadas en el capítulo anterior, por otra nos mostrará un aspecto nuevo de la organización administrativa del Fisco: el elemento de fondo; su contenido.

Las operaciones en que vamos a fijar nuestra atención son las siguientes: Juntas de Hacienda, Fundiciones, Avalúos, Recaudación de ingresos, Almonedas y Gastos de la Hacienda. Con ellas tendremos un cuadro casi completo del funcionamiento de la Hacienda indiana.

JUNTAS DE HACIENDA -----

Las Juntas o "Acuerdos" de Hacienda son una consecuencia lógica del sistema colegial adoptado en la administración de rentas; todo organismo de esa índole -Casa de la Contratación de Sevilla, Consejo de Indias, Audiencias, incluso los futuros Tribunales de Cuentas, -realizaban sus tareas en reuniones colectivas. Las de Hacienda fueron realizadas en Indias desde el primer momento: en 1510 se dió orden al Almirante D.Diego Co-

lón de reunirse en Junta diariamente, durante dos horas, para tratar del aprovechamiento de la Hacienda (1); una R.C. del año siguiente señala que a esta Junta asisten los Oficiales Reales y las autoridades gubernativas de la isla (2). El Licenciado Gasta estableció en Lima hacia 1548-9 la costumbre de hacerlas con regularidad, todas las semanas, asistiendo además alguna autoridad judicial (Fiscal y algún oidor) (3). Se vio que era muy conveniente y el Consejo de Indias le hizo extensiva al Uncineto de Nueva España, encareciéndose a partir de entonces en las instrucciones a los Virreyes la continuasen "por su mucha importancia y que ponis en cuidado a los Oficiales Reales para que procedieran como debían" (4).

Se distinguen perfectamente dos clases de Juntas o Acuerdos: unas, las que se realizan para el examen de los asuntos de la administración normal del Fisco (Acuerdos de Hacienda) y otras de carácter extraordinario celebradas por disposición legal siempre que se ha de realizar algún gasto extraordinario urgente en el territorio (Acuerdos Generales de Hacienda). Sólo señalaremos aquí respecto de esta última clase de Juntas, que a éstas han de acudir los Oficiales Reales, la máxima autoridad gubernativa del territorio y el Fiscal y oidores de la Audiencia; más adelante, al hablar de los "Gastos de la Hacienda", y concretamente de la facultad de hacer libranzas, volveremos a referirnos a ella.

Las Juntas ordinarias o Acuerdos de Hacienda se realizan semanalmente, en día fijo que varió con el tiempo (miercoles o jueves); la reunión se realiza normalmente en las Casas Reales, donde por regla general viven los

Oficiales Reales (5). Asisten, en primer término, los Oficiales Reales (si falta alguno de ellos no puede asistir por causa legal justificada, asiste su Teniente); asiste también, el Virrey, Gobernador, o Presidente-Gobernador o sus Tenientes; sin la autoridad gubernativa ni su teniente puede asistir, se toma el parecer de un Alcalde Ordinario y con mayor motivo en el caso de que éste desempeñe el cargo de Gobernador interino por muerte del titular (6); en algún caso excepcional asiste el Regidor más antiguo (probablemente en función de Alcalde), el Alguacil Mayor y aun el Obispo de la diócesis (7). Por último, está presente un escribano: el "de registros y del Juzgado de Ofi.s.Reales" o el "de gobernación" (8). En donde existe Audiencia, ha de asistir el Fiscal (a), remitiendo copia anual al Consejo del resultado de las deliberaciones (10).

Los asuntos tratados en ellos son siempre de materia fiscal: salarios, envíos de Jueces Comisarios, ventas a crédito, nombramiento de Oficiales de "entradas", etc. Las decisiones son llevadas a un Libro de Acuerdos aunque en la práctica sólo se resuelve con los de mayor importancia (11). El escribano redacta el texto del Acuerdo y éste es firmado por todos los presentes al pie del mismo; si ha habido discrepancias de alguno de los Oficiales, cada uno expresa en el Libro por separado su opinión personal. Los Oficiales Reales tienen en estos Acuerdos voto decisivo (12). Una R.C. de 1621 especifica que "semejantes Acuerdos tienen fuerza de cosa juzgada" (13).

RECAUDACION DE INGRESOS

Quizá la función más importante de los Oficiales Reales sea la de recaudación de ingresos. Ya conocemos la relación de los más importantes por la Instrucción al Contador especial Martín de Irigoyen (vid nota 195 del primer capítulo). En substancia, coinciden con ella las relaciones que nos dan LOPEZ DE VELAS y el Virrey MARQUES DE MONTESCLAROS (14): "quinto" del oro y plata, tributos, alcabala, almojarifazgo, monopolios reales (azogue, salinas, estanco de naipes...), "dos novenos", penas de cámara, granjerías reales, y algún otro de menor importancia, como la venta de oficios (en el siglo XVII crece la importancia de este ramo). La Bula de Cruzada tiene, como dijimos, administración autónoma.

Al descubrirse las Indias, el sistema de recaudación vigente en Castilla era el del arrendamiento. Este sistema que, en principio, es excelente, ya que hace efectiva la cobranza de los impuestos, asegura los ingresos en las arcas del Tesoro con mayor exactitud, pone en circulación los capitales de los hombres de negocios, y liga sus utilidades a las del Tesoro, se veía desvirtuado en su aplicación por los abusos de los arrendadores. Según refieren los Cusernos de Cortes del año 1433 extractados por CANGA ARGUELLES (15), solían apremiar con bagajes a los pueblos para la conducción de los frutos recolectados, se valían de las pesquisas rigurosas para asegurar la exactitud de los pagos; en vez de hacer las cobranzas al tiempo de la cosecha, las diferían para girar la cuenta cuando fueran mayores los valores de los frutos, etc. El resultado era que los con-

tribuyentes buscaban el cohecho para librarse de estos rigores. Por otra parte, los arrendadores eximían del pago a amigos y parientes y como era de esperar, se resarcían cobrando mayor cantidad a los demás, y además con el pretexto de incumplimiento de pago por miseria de los contribuyentes, defraudaban lo más posible al Fisco. Las Cortes de 1462 pidieron el nombramiento de Jueces pesquisidores para la averiguación y castigo de estos abusos, pero las cosas siguieron durando mucho tiempo igual por los apuros financieros de la Corona que se salvaban mediante adelantos de los arrendadores. Al morir la Reina Isabel la Católica dejó encargado en su testamento que las rentas procedentes de alcabala fueran "encasbezadas", es decir, administradas por los propios municipios; salvo esta renta -a veces, también arrendada en el siglo XVI- el sistema de arrendamiento continuó vigente hasta el reinado de Fernando VI, monarca que dispuso, movido por las instancias del Marqués de la Ensenada, a colocarlas en administración directa.

Era lógico que el sistema de arrendamiento fuera transplantado con carácter general para todas las rentas a los nuevos territorios de Ultramar. En las instrucciones a los gobernantes y Oficiales Reales de la Española en los primeros tiempos se ~~exhorta~~ dan constantemente órdenes para la realización de los arrendamientos de las salinas y el almojarifazgo.(16). Sin embargo, ya en estos primeros tiempos, el principal ingreso -el tanto por ciento recaudado sobre la extracción de los metales pre-

ciosos y de los rescates con los indigenas- se recauda directamente por los Oficiales Reales. También el tributo se recauda por estos en todos los territorios; únicamente, como veremos, se acude en alguna ocasión al arrendamiento en aquellos casos en que la excesiva lejanía a una de las Cajas impide realizarlo directamente. Las penas de Cámara, y las granjerías reales se administran también directamente, y lo mismo ocurre bien pronto con el mismo almojarifazgo. Los diezmos, el azogue y el estanco de naipes son, en cambio, arrendados. En cuanto a la alcabala, es "encabezada" al igual que en Castilla.

Como se ve, en Indias existe un sistema mixto de recaudación, de administración directa para los principales ingresos, pero en todo caso centralizado en los Oficiales Reales, que son los que controlan a los arrendadores (el Virrey toma también parte en estos arrendamientos). La administración directa adolecía de todos los males de la burocracia, fundamentalmente de la negligencia en la administración. Estos males, acrecidos en Indias por la lejanía y el deficiente sistema de garantías explica que el enviado especial Ortega de Melgosa, proponga en 1560 se vuelva a arrendar el almojarifazgo(17) y que el Virrey del Perú MARQUES DE MONTESCLAROS aconseje a su sucesor que "siempre que se pudiere, es bien excusar la administración por cuenta del Rey de los géneros arrendables" (18). A pesar de estas opiniones, el sistema continuó invariable hasta el siglo XVIII al menos, tanto en España (sistema de arrendamiento), como en Indias (administración directa), fundamentalmente.

No es posible un estudio completo de la recaudación de los distintos ingresos de la Hacienda, indiana en tanto no surjan trabajos monográficos sobre cada uno de ellos. Sin embargo, creemos será de utilidad el adelantar los datos dispersos reunidos que den al menos una visión general del problema. Para ello examinaremos por separado cada uno de los principales ingresos. El "quinto" de los metales preciosos y el almojarifazgo quedan para los epígrafes siguientes, al hablar de las fundiciones y svalisciones.

El tributo de los indios puestos en la Corona Real el que pagan los que están bajo encomienda de particulares, no constituye Hacienda Real, es recaudado directamente por los Oficiales Reales o por los Corregidores y Alcaldes Mayores allí donde no hay Oficiales Reales, debiendo acudir aquellos con el importe recaudado(19); en algunos casos, por los Alguaciles y aún por algún clérigo (20); en los municipios son recaudados por los antiguos funcionarios indígenas ("golaves", "tequiltatos", etc) o por los caciques, que acuden con lo recaudado a los Corregidores o Alcaldes Mayores; en algún caso los Oficiales Reales nombran un delegado en el Municipio con esta función concreta (21). Tales son las personas que intervienen en la recaudación. Veamos ahora como se realiza esta.

Una vez tasado el importe del tributo (operación a la que asisten el Fiscal y los Oficiales Reales) (22), se forma un "Libro de Tasaciones" que queda en poder de los Oficiales Reales (23); otro ejemplar queda en la Au-

diencia y se envia una copia al Consejo de Indias; en cada pueblo se deja una relación de lo que le toca pagar que queda en poder del cacique o principal, y una copia se entrega a quien ha de cobrarle el tributo(24). Cada 4 meses, el municipio ha de entregar la cantidad correspondiente al Corregidor, que es, generalmente, el encargado de la recaudación (25). Los pueblos de indios ~~en~~ entregan a los Oficiales Reales unas "pinturas" de lo que entregaron al Corregidor respectivo (26), informes que son asentados en los Libros de Hacienda y que sirven para la toma de cuentas a los Corregidores que se realiza un día a la semana, generalmente los miércoles (27). El importe de estas relaciones es descontado del salario que ha de entregarsele. El sistema es bueno pues ofrecía las suficientes garantías, pero tenía un defecto en la práctica que señalaban los Oficiales Reales de México en 1533: los Corregidores eran proveídos por la Audiencia y era muy corriente que los Oficiales Reales solo se enteraran del cambio de aquellos, cuando iban a cobrar sus salarios; por otra parte, cuando los indios contribuían con sementeras o algunos productos manuales, era difícil determinar la cantidad entregada al Corregidor, con lo que estos entregaban la cuenta que les parecía y no se les podía apretar, ya que los Oficiales Reales no tenían facultades sobre ellos(28).

El tributo podía ser pagado en oro y plata o en especie, aunque era esto último lo más frecuente (29). En el primer caso, el oro o plata quedaba en poder del tesorero, que lo ingresaba en el erario; en el caso más fre-

ouente, de que fuera especie, quedaban los productos en poder del factor, y debían ser vendidos en almoneda pública (Vid. el epígrafe correspondiente de este capítulo). En 1536, fueron recaudados en los del Corregimiento de la Nueva España que tributaron para la Corona, 21.783 pesos en especie y 11.705 en oro de minas (30).

Este es el sistema generalmente adoptado para el tributo, pero parece ser que en algunos casos llegó a emplearse el sistema de arrendamiento, para algunas jurisdicciones muy lejanas (31). Los autos de arrendamientos debían realizarse ante los Oficiales Reales y el remate se hacía en almoneda pública (32).

Las penas de Cámara -condenaciones impuestas por los Tribunales y ministros de justicia- constituían otro ingresos de administración directa. La regulación de su cobro viene fijado en las Ordenanzas de las Audiencias. Como ya dijimos, en España existía un Receptor especial, que sólo aparecerá en Indias a principios del siglo XVII. Durante el siglo XVI constituía una de las misiones específicas del tesorero, que ha de demandar y cobrar las penas impuestas por los Oidores, tanto en lo civil como en lo criminal (33). Los escribanos de la Audiencia llevan un "Libro de condenaciones" (34) y han de dar cuenta a fin de cada mes al tesorero de lo inscrito en él (35). El alguacil mayor suele ser el encargado de ejecutar estas penas, para lo cual se le exige juramento previo. El importe de las condenaciones es colocado en el arc de las tres llaves de la Tesorería, pudiendo la Audiencia librar sobre dichos fondos para las necesidades propias. El Procurador Fiscal, tiene

la obligación de exigir el cumplimiento de dichas penas para lo cual el escribano debe notificarle cada semana por escrito, bajo pena de dos mil maravedís, las penas impuestas (36).

La alcabala fué recaudada unas veces por administración directa y otras por encabezamiento. No existía, al parecer, un criterio fijo, ya que ambas formas son usadas indistintamente en los territorios indianos. El Virrey del Perú, MARQUES DE GUADALCAZAR, escribía hacia 1628: "Suelen encabezarse al Cabildo de las ciudades; donde no se puede, se dan por arrendamiento, y si no hay quien las tome, la administran los Oficiales Reales o sus Tenientes. A falta de éstos, los Corregidores, con premio del 6% y (37); sin embargo no hemos encontrado en los documentos ninguna otra referencia a la recaudación por arrendamiento o por los Oficiales Reales personalmente, ni tampoco por los Corregidores. Quedan, pues, limitadas las formas de recaudación a las mencionadas más arriba. Es interesante señalar, el hecho de que, a pesar de que el encabezamiento fué introducido, en España como vimos, para mitigar los rigores de los arrendadores, como la forma más del gusto de los contribuyentes, varias villas del Perú (Ohuquisaca y Potosí) se negaron a encabezarse de nuevo, la razón al parecer la excesiva cantidad exigida, ya que, después de dar orden al Virrey Velasco fuera recaudada por cuenta del Rey, "Lo que si por una parte supondría mayores cifras en la recaudación, por otra implicaría gastos de costas de funcionarios, molestia

tias y vejaciones para los vecinos, y quizá, fraudes en su cobranza", ambas ciudades aceptaron de nuevo el encabezamiento, pero una cantidad menor que los años anteriores (38).

En el caso de administración por cuenta del Rey, solía nombrarse un Receptor de alcabalas (lo encontramos, por ejemplo, en México, Nueva Galicia y Venezuela), provisto del cual, procede al cumplimiento de su misión. En Venezuela no sabemos si también en otras partes se estableció en el puerto de La Guaira para recaudar la alcabala de las mercancías que allí llegaren; esto, si por una parte evitaba los fraudes, por otra causaba grandes molestias a los mercaderes, ya que se veían obligados a desempacar los fardos y volver a arregiarlos para trasladarlos a Santiago de León; para evitarlas los Oficiales Reales "acordaron" que la guarda del puerto, enviara estos fardos bien custodiados a las Casas Reales de Santiago de León donde aquellos tenían su sede, y allí se tomaría la cuenta y razón para que el Receptor pudiera cobrar la alcabala (41). Al acabar el año, el Receptor rendía cuenta a los Oficiales Reales.

Cuando se encabezaba la recaudación de la alcabala -sistema utilizado también por ambos Virreynatos (42)- solía hacerse por un plazo de varios años, (7, en uno de los ejemplos que conocemos). La cantidad fijada varió con el tiempo, en el acuerdo final entre el Virrey Velasco y las villas de Chutisaca y Potosí, se fijó en 30.000 ducados anuales.

Entre el grupo de ingresos recaudado por arrendamiento señalamos los diezmos, el estanco de naipes, las salinas del azogue. Prescindimos aquí del examen minucioso de las características de estos ingresos (regalías, concesión apostólica, monopolios) aspecto este ajeno a nuestro estudio y solo señalaremos lo relacionado con la recaudación.

Respecto al diezmo, ya sabemos que correspondía a la Corona, "dos novenos" de la mitad de todo lo recaudado en Indias. Su recaudación presenta matices interesantes, ya que ofrece mayor interés la determinación del lugar de pago y la materia con que hubiera de pagarse. En primer lugar, conviene señalar que el sistema de arrendamiento si bien fué el más frecuente, no fué sin embargo el único; así, por ejemplo, los Oficiales Reales de Venezuela en Acuerdo de 7 de febrero de 1537, dado que no se podían arrendar las rentas eclesiásticas y el diezmo por no existir fianzas de bienes raíces en dicha tierra, y si no son así no pueden tomarse por ir contra lo dispuesto en las leyes, resolvieron nombrar un fiel para la recaudación de los diezmos del Obispado; siete días más tarde otro Acuerdo explica se ha nombrado fiel a un vecino de Coro, que desempeñará su misión recaudadora por un año, y que percibirá un salario de 10.000 maraveches, más seis fanegas de maíz (42). Los arrendamientos se hacían mediante contrato, y bajo fianza. El recaudador, o dezmero muchas veces clérigo, solía exigir de los indios que

le fuera entregado entregado en el lugar que más le convenia lo cual suponía gran extorsión a los indios (43); en Nueva España, uno de los Regidores de México elevó una protesta al Monarca, pidiendo se entregue, como se hace en Castilla, en las eras o en el pueblo de los indios; pero a petición del Obispo y Cabildo de México, que alegaban se perderían, por no haber quien los llevara a México ni sería fácil los quisiera comprar nadie al tener que acudir a sitios lejanos, el Rey dió largas al asunto permitiendo por dos años más la costumbre de pagarlo en el lugar señalado por los dezmeros (44). Se originaron también cuestiones sobre el lugar de pago del diezmo del ganado, cuestión que tenía interés porque los diezmos eran adjudicados a una u otra parroquia; el Monarca decidió la aplicación en Indias de un texto de las Partidas (45). En cuanto al objeto de pago, plantease la cuestión en los primeros tiempos en La Española; al parecer, se exigía el pago en dinero, pero los vecinos protestaron y solicitaron del Rey, se les permitiera hacerlo en especie, como en España; el Monarca delegó en el Gobernador Diego Colón la decisión de la cuestión (46). Los diezmos en especie eran vendidos en almoneda pública a la que asistían representantes del Cabildo un Oidor, los Oficiales Reales y el Fiscal (47). El importe de los "dos novenos" era entregado al tesorero, que llevaba cuenta particular del mismo. Es interesante señalar que, al menos en Venezuela, los Oficiales de las Cajas subordinadas no tenían atribuciones para tomar cuentas

a los arrendadores de los diezmos de su distrito, debiendo rendirlas a los Comisarios enviados por los Oficiales de la cabecera (48). En algunos casos los arrendadores recibían facultades para entregar a los mayordomos de las iglesias la parte que les correspondía de los "dos novenos" (49).

El arrendamiento del estanco de naipes no ofrece ninguna particularidad. En 1598 fué arrendado el del Perú por 20.500 ducados (500 más que otras veces, explica el Virrey Velasco) (50); al aprobar el Rey el contrato, pide se exija a los arrendadores una relación jurada de lo que vale la renta anualmente, como se acostumbra y se suele poner en las condiciones de arrendamiento.

Las salinas eran explotadas en algunos casos por particulares (por ejemplo, las de las Costas del Mar del Sur, de la Nueva Galicia), pero en muchos casos, constituía una regalía de la Corona, que solía arrendarla (51). Algunas veces la Corona se hacía cargo de la explotación de las salinas cuando tenía un interés especial en ayudar al desenvolvimiento de la vida en algunas regiones; así vemos que la salina del Peñol Blanco, cerca de Zacatecas, es explotada por indios puestos bajo la autoridad de un Alcalde Mayor, vendiéndose la sal, según ARREGUI, casi a precio de coste (52).

El azogue de Huancavelica constituía, como es sabido, un monopolio real. A partir del Virrey Toledo se acostumbró arrendar su explotación; los mineros paga-

ban al Rey el quinto y estaban obligados a dar a los Oficiales Reales todo el azogue que se extrajera pagán^{do} desoles por cada quintal los pesos que se hubieran concertado de antemano (53). El Virrey Velasco viendo lo mal que se pagaba a los indios que trabajaban la mina, y la poca garantía que ofrecían los arrendadores, ordenó en 1592 que se administrara por cuenta del Rey. El problema estaba agravado por la mala administración, basada hasta entonces en las entregas al fiado; aquél que necesitaba dinero sacaba azogue con cualquier fianza y vendía a bajo precio (54). A pesar de que Velasco modificó el sistema y prohibió esta clase de ventas, la administración siguió siendo harto caótica; Montesclaros cuenta que los Oficiales Reales «para estentación de su trabajo» cobraban partidas a cuenta de lo atrasado y al mismo tiempo daban fiadas otras mayores (55). De todos modos, este último Virrey logró al menos que el importe de las deudas del azogue quedaran reducidas al medio millón de pesos (56).

Como nota común que interesa destacar en la recaudación de los impuestos, está la fijación minuciosa de la moneda con que hubieran de hacerse efectivos. Así encontramos disposiciones estableciendo que el «quinto» se pague siempre en plata ensayada, no de la corriente, salvo que en grandes partidas no puedan hallarse barras

7

e tejuelas iguales (57); cada peso ensayado se contará a razón de 146 maravedises (58). Lo que se deba pagar en ore ha de hacerse precisamente en el de 22 quilates y medio, siendo el peso de 556 maravedises (59). Las penas de cámara pueden abonarse en moneda corriente pero ha de ser con la condición de que en cada una de ellas quepa la marca real (60). Los tributos, cuando se paguen en especie, no puedan modificarse por los Oficiales Reales que tienen prohibición expresa de conmutarlo por plate (61). Finalmente, en algunas ocasiones el Emperador, movido por peticiones de los colonos, dispuso que el almojarifazgo y penas de cámara se pagaran en "ore de Tizpuque" a fin de retirar este ore de baja ley de la circulación (62).

FUNDICIONES

En la vida de la colonia cobra singular relieve las operaciones de fundición de los metales preciosos,

Existe un tiempo fija para su realización, generalmente dos veces por año; en Méjico había una que duraba los tres primeros meses del año y otra que empezaba a mediados de junio (63). Ocho días antes de que se abriera la Casa de Fundición, el Veedor requie-

re a la máxima autoridad de gobierno del territorio para que dé orden de que se pregone la apertura. Este anuncio tiene además otra finalidad que las fuentes señalan; "Que cada uno esté aperebido para venir a cobrar lo que le deben sus deudores" (64). Vemos aquí la íntima relación entre las operaciones de fundición y la vida económica de las Indias. Basada en buena parte la economía de aquellos territorios -especialmente en el siglo XVI- en el crédito, la apertura de la Casa de Fundición señala muchas veces el fin de los plazos para el pago de las mercaderías que la Corona o los mercaderes hubieran hecho a los vecinos del territorio.

Llegado el tiempo señalado, el Veedor o su Teniente se trasladan a vivir en la Casa de Fundición. Como medidas de seguridad, antes han inspeccionado para que ningún particular pudiera tener fuelles u otros aparejos para fundir y ha pedido al Escribano Mayor de Minas una relación de las cédulas que hubiere dado a los vecinos para la extracción del oro o plata y saber así en todo momento quiénes fraudulentamente, hubieron dejado de acudir a fundir (65). Por otra parte, está rigurosamente prohibido que nadie pueda dar, trocar o contratar con oro en polvo, pudiendo únicamente utilizarse el que estuviere fundi-

do, ensayado y quintado; el oro que se cogiere sin quintar se da por perdido y los plateros solo pueden labrar con oro en cálices y patenas (66).

Además del Veedor encontramos en la Casa de Fundición a distintos funcionarios; fundidor, quilatador, escribano de minas, etc. El Gobernador del territorio y los Oficiales Reales están obligados también a asistir en las horas de fundición (67) y en algunos casos se autoriza al Factor -si es que los Oficiales Reales no viven en la Casa de Fundición- a trasladarse a ésta en compañía del Veedor con el fin de cobrar las deudas al Fisco que estuvieren atrasadas (68).

El orden de realización de las fundiciones estaba reglamentado por minuciosas disposiciones que eran fijadas en la "Tabla de los Fueros" que se ponía en la puerta de la casa -en parte que todos las puedan ver y leer y sepan lo que cerca de esto mandamos por que ninguno pueda pretender ignorancia dello- (69). Dada la conveniencia de "que el oro que se fundiere tenga ley conocida" el oro de baja ley o "guanín" no se funde; es pesado y después de ser cobrados los derechos del Rey y del fundidor se hace el reparto correspondiente. El mismo sistema es seguido con las perlas. El oro de minas se funde siempre por separado por su alta calidad. Los otros metales

pueden ser mezclados entre sí para mejorar su ley. Operación complementaria de la fundición y quilatación es la operación de marcar con el cuño real las piezas metálicas. Se establecen excepciones a este sistema general tales como la de que las piezas de mejor calidad no se fundan o que los canutillos si se teme que se abollen no sean marcados. Las piezas no fundidas pueden serlo posteriormente a voluntad de sus dueños. Una vez quilatadas y marcadas las piezas de oro y marcadas con la divisa real, las piezas de "guanin" se pueden sacar de la tierra siempre que se registren ante el Escribano Mayor de Minas y se obliguen sus propietarios a registrarlas ante los Oficiales Reales si las llevaran a España (70).

El cuadro vivo y animado de la Casa de Fundición de Castilla del Oro lo era aún más en los primeros tiempos cuando las justicias con el Alcalde Mayor a la cabeza las utilizaban para oír y librar sus pleitos. Una Real Cédula tuvo que ordenar la prohibición de hacerlo estableciendo se les señalara lugar adecuado para sus actuaciones (71).

AVALIACIONES

Las **avaliaciones** o **evaluaciones** de **mercaderías** tenían su razón de ser en la natural necesidad de fijar las cantidades que servirían de base para la recaudación de los derechos reales del **almojarifazgo**, establecidos, como es sabido, a base de un tanto por ciento sobre el precio de las **mercaderías**.

Ya señalamos la obligación de los **Oficiales Reales** de visitar por turno los puertos existentes en el territorio para efectuar estas operaciones y cómo a la larga esta necesidad dió origen a una serie de **Cajas Reales** en estos lugares, a cargo de **Tenientes**, salvo algunas de mayor importancia (v. gr. **Cartagena de Indias**, **Panamá**). Junto a estos funcionarios fiscales interviene como vemos a vez otros funcionarios judiciales y gubernativos.

Prescindiendo de la etapa en que el **almojarifazgo** fué recaudado por arrendamiento (72), las operaciones de evaluación solían comenzar con la visita de los navíos realizada conjuntamente por los **Oficiales Reales** y las justicias del territorio para comprobar la inexistencia de mercancías prohibidas (73). Estas visitas dieron lugar a numerosas cuestiones de precdencia, generalmente resueltas a favor de las **Oficia**

los Reales (74). Es curioso observar que a tal grado llegaban los abusos en el contrabando de mercancías tanto en los viajes de ida como de vuelta, que llegó a plantearse la cuestión de si podrían ser visitados por los Oficiales Reales los galeones de la armada de la guarda de las Indias. Una Real Cédula a los Oficiales de Cartagena en este sentido de 20 de octubre de 1573 parece ser que no llegó a aplicarse ante la actitud tajante de Cristóbal de Eraso, Capitán General de la Real Armada; el testimonio que dió en esta ocasión, de 3 de marzo de 1588, es uno de los tantos ejemplos de obediencia formal a las leyes y de su in cumplimiento en la práctica (75).

En estas visitas los funcionarios del Fisco reciben de los Maestros de los navíos los Registros de mercancías que han de servir de base a las operaciones de avaluación y cobro del almojarifazgo. Una vez que termina la visita, se toman seguridades para evitar sean desembarcadas las mercancías traídas de contrabando; queda prohibido descargar toda clase de bultos sin dar noticia de ello a los Oficiales y dar éstos su consentimiento bajo pena de pérdida (76) y se establece severa vigilancia por medio de guardas (77).

Desembarcadas las mercancías, son llevadas a la Casa de Contratación, que ofrece la ventaja de una

mejor conservación de los géneros (son, generalmente, de piedra) y una mayor facilidad para su custodia (78), y se procede a las operaciones de evaluación.

Antes de 1554 no existía criterio fijo respecto a las personas ante quien debían realizarse estas operaciones; generalmente acudían los funcionarios fiscales, y miembros de la Audiencia o autoridades del Municipio (79). Las Ordenanzas de 10 de mayo de 1554 para el buen recaudo de la Hacienda dispusieron que fueran realizadas por los Oficiales propietarios o los Tenientes que se hallaran al frente de las Cajas de los puertos; cuando no existieran estos Tenientes, uno de los Oficiales propietarios acudiría por turno a la llegada de las flotas (por lo que se le asignaba una gratificación de 50.000 maravedises). Donde no hubiera Oficiales propietarios, los derechos de almojarifazgo deberían cobrarse delante del propietario de las mercancías, de los Tenientes y del Alcalde Mayor, "y no de otra manera" (80).

Por la importancia que tiene para la Real Hacienda, estas operaciones constituyen uno de los actos de administración conjunta de los Oficiales Reales, como expresamente exigen multitud de disposiciones (81). Los Oficiales han de ir a la Casa de Contratación previos de las instrucciones de sus oficios para poder

determinar por ellas los casos dudosos que puedan presentarse (82). Antes de iniciar su trabajo, deben prestar juramento (83):

La base de las evaluaciones la constituye, como dijimos, el Registro de los navíos; toda mercancía que no figure en él o sea en coniso y toda mercancía que se halle incluida en la relación, paga almojarifazgo, aún cuando luego no aparezca; sólo hay una excepción: que el Maestre del navío o el dueño de aquélla, "dé probanza entera" de que se hizo echazón (84).

La legislación señala distintos principios que han de presidir tan delicada operación. En primer lugar, el de la igualdad para todas las mercancías de la misma clase, es decir la ausencia de toda clase de favoritismos (85). Los Oficiales deben fijar además los precios de las mercancías por su valor real en las Indias (86), tomando como precio base el señalado en los Registros "que sirvió para el pago de derechos en Sevilla" aumentándolo con arreglo al nivel de vida existente en aquel momento en su territorio (para asegurar la fidelidad de este principio, y evitar toda arbitrariedad es por lo que se les exige previo juramento y asisten autoridades judiciales e gubernativas y en algunos casos los propietarios de las mercancías). Finalmente, las leyes aconsejan se procure en todo momento no lesionar los derechos de los comerciantes,

tratándoles con la mayor benevolencia posible. A este fin se encaminan diversas disposiciones, tales como las de que sólo se retengan en poder de los Oficiales mercancías por valor de «la que montares los derechos» (87); no deben desempacarse los bultos (88); las mercancías que hubieren sufrido deterioro en el viaje se avaluarán conforme a su valor real (89). En Nueva España, además, se encarga al Virrey la confección de un arancel para las avaluaciones de Veracruz con la finalidad «cuenta Mendosa a su sucesor- «de excusar grandes extorsiones» y se establece la práctica «ya a fines del siglo XVI- de enviar los Oficiales de Veracruz al Virrey un parecer sobre los precios que convendría señalar a las mercaderías y el Virrey decidir en Acuerdo General lo conveniente remitiéndoles provisión para ejecutarla sin admitir apelación a la Audiencia (90).

«En las dudas -decía una R.C. de los primeros tiempos de la colonización- debe quedar antes agraviada la Hacienda Real que los mercaderes, a los cuales hagan buen tratamiento porque huelguen de la contratación (91).

El enviado especial del Consejo de Hacienda Ortega de Melgosa nos da detalles sobre la técnica utilizada en Nombre de Dios para estas operaciones hacia 1540. Se avalúan «según él- por las cargamentos que cada uno presta, en que ponen todas las mer-

mercaderías que traen y lo que les cuesta y montan, y se les toma juramento de que es verdadera la carga que presentan. Cuando las mercaderías están vendidas -casi el más frecuente- se les tasa al principal e interés con que se venden. Cuando no lo están, se les tasa conforme al coste de aquéllas. El procedimiento es, según él imperfecto. La mayor dificultad está en averiguar el verdadero coste de las mercaderías en Sevilla, y apunta como una ventajosa solución hacer que los Oficiales de la Casa de Contratación de Sevilla anoten en los Registros de los navíos dicho coste -porque en el Registro que en aquella Casa quedan, está al pie de cada partida con juramento- (recuérdese que Melgosa era antes de marchar a Indias Tesorero de aquella Casa y conocía bien estos pormenores); a pesar de ello, y de las diligencias de los Oficiales Reales de las Indias, desconfía del sistema en general -porque aunque los Oficiales de Sevilla pusieran el coste, no se podrá impedir que pongan menos- y se inclina por el sistema de arrendamiento (92).

Las avaluaciones sirven de base a la recaudación de los derechos, ingresos muy caídos, -porque si en España les cuesta ciento -dice Melgosa- pagan aquí los derechos de ciento setenta- (93). A pesar de la benevolencia recomendada tan insistentemente, está prohibido terminantemente entre-

gar las mercaderías sin el previo pago de los derechos del Fisco (94). Las mercancías que llegan al Perú pagan una «plus valía» por la diferencia de precios existente entre los territorios de Panamá (precios que figuran en las notas de avauación realizadas al pasar las mercancías por allí) y el que comúnmente valen las cosas en el Perú (95).

En todas estas operaciones, los Oficiales obran «por lo que a la mayor parte pareciere» es decir, por régimen de mayorías. Pero si alguno, en uso de su derecho, contradice la avauación hecha, al tal se le ha de dar testimonio para que lo pueda enviar al Monarca y éste provea lo que convenga (96).

ALMONEDAS -----

«Todo lo que se vendiere de la Real Hacienda ha de ser en almoneda pública», señalan las Ordenanzas de Oficiales. Este criterio legislativo da lugar a una de las actuaciones típicas de los Oficiales Reales de las Indias.

Conforme al principio legal expuesto, eran objeto de almoneda la recaudación de tributos en especie (97), las mercancías ingresadas en el Real Erario en virtud de comisos (98), los oficios vendibles e igualmente los arrendamientos para la recaudación de tributos en algunas regiones. Es natural, pues,

que estas operaciones cobren cierto relieve tanto en lo que se refiere a los intereses del Fisco como a la vida económica de la colonia, y es lógico que encontremos una abundante legislación regulando los menores detalles de las mismas.

Las almonedas constituyen como todas las actividades de cierta importancia de los Oficiales Reales un acto de administración conjunta (99), y que además debe ser desempeñada personalmente por los Oficiales propietarios (100) y como tienen carácter público, han de realizarse ante escribano real (101).

La asistencia a las almonedas constituye también una de las obligaciones típicas de los miembros de las Audiencias. Es ésta una de las pocas disposiciones referentes a la participación de estos organismos en la Hacienda que se encuentran insertas en el cuerpo de sus Ordenanzas (las otras se refieren a la toma de cuentas, a la asistencia a los remates de los diezmos, a la autorización para ausentarse los Oficiales Reales y a los pleitos fiscales) (102). Aun cuando generalmente la situación de estos funcionarios sea meramente pasiva y se reduzca a observar el desarrollo de las operaciones, en cumplimiento de su función fiscalizadora, pueden intervenir eficazmente en las mismas, cosa que de hecho ocurre (103). El criterio legal es que asistan al Fisco y un Oidor por turno allí donde haya Audiencia, y donde no la hubiere, el Gobernador o el Justicia Mayor

de la ciudad donde se celebraren (104). El Fiscal ha de asistir «con tal precisión, que de otra forma no se pueda vender ninguna cosa» (105). Los Oidores asisten por turno, primero de un mes y luego de un año (106; la brevedad del plazo de actuación daba lugar a que cuando se iba a rematar un negocio en que había actuado uno de ellos, era sustituido por otro que desconocía totalmente el asunto; hubo que remediar este absurdo, ordenando que los remates se hicieran ante el Oidor que estuvo presente al iniciarse la postura (107).

El desarrollo de las almonedas ofrece poco interés. Se realizaban en la plaza mayor y en plaza fija cuando se trata de arrendar el cobro de tributos (108). Como es natural los Oficiales Reales no pueden tomar parte en las pujas (109). El criterio legal para la adjudicación de los remates es el previo pago al contado, sin lo cual no se puede dar recudimiento a la parte en que se rematare (110). Sin embargo en la práctica, encontramos continuas excepciones a este principio, especialmente en las regiones de mayor escasez monetaria, como la de Venezuela (111). Precisamente en este punto se produce un anacronismo en la legislación indiana, ya que al mantenerse en las Ordenanzas promulgadas por la Corona la prohibición de las ventas al fiado, se desconocen preceptos anteriores de gobernantes indios en que se levanta dicha prohibición (112).

El resultado de las almonedas se lleva a un "libro de remates" (113) en que se declara el objeto que se remata, la persona a quien se adjudicó y la cantidad obtenida en la operación; después de firmar la partida el Fiscal, el Oidor (o el justicia en su caso) y los Oficiales Reales, el libro es guardado en el arca de las tres llaves.

GASTOS DE LA HACIENDA

Dadas las características de la colonización española en América, es natural que el volumen de los gastos que pesaba sobre el Real Erario fuera muy elevado. HARING calcula que absorbían en el siglo XVI la mitad de los ingresos, cuantía que aumenta con el tiempo hasta alcanzar en el siglo XVIII una proporción del ochenta por ciento (114). La administración y gobierno de las Indias requería una nutrida red de funcionarios (Virreyes, Gobernadores, miembros de las Audiencias, Oficiales Reales de la Hacienda, etc.), todos ellos con sueldos crecidos. En virtud de la organización eclesiástica la Corona debía señalar estipendio a los Obispos y curas. Había que abonar la soldada a las tropas que constantemente había que tener en pie de guerra para garantizar la seguridad de los colonos y mandar religiosos que evangelizaran a

los indígenas. Había junto a estos gastos normales de la Hacienda una serie crecida de gastos extraordinarios que pesaban sobre los bienes reales; mercedes, ayudas económicas para la creación y mantenimiento de iglesias y hospitales. Puede comprenderse la importancia que dentro del cuadro de actividades de los Oficiales Reales tenían las operaciones de pago.

Al examinar la legislación referente a esta materia destaca el extraordinario interés de la Corona de establecer garantías que salvaguarden sus intereses de posibles abusos. El criterio mantenido como línea general de conducta es no permitir que sean realizados gastos para los cuales no exista autorización real expresa (116). Si bien este principio se quiebra en alguna ocasión, cuando el que realiza la libranza es un gobernante que merece toda la confianza de la Corona en este punto, (caso del Virrey Antonio de Mendoza), (117) la prohibición tiende a afianzarse con el tiempo e incluso se la acompaña de otras medidas que salvaguarden su aplicación y eficacia, tales como la de pedir a los Oficiales Reales una relación de las libranzas realizadas por los Gobernadores en el momento en que éstos eran residenciados (118); no tomar en cuenta, en el momento de rendirlas, las cantidades gastadas por los Oficiales Reales en la administración del Fin ce sin autorización (119); hacerles responsables si pa

garen libranzas sin existir orden expresa que lo permita, teniendo que satisfacer con sus personas y bienes, así como con los de sus fiadores (120). El Fiscal de las Audiencias tiene como una de sus misiones concretas velar porque el Virrey no haga libramientos "injustos", y cuando esto ocurra debe oponerse haciendo sus requerimientos y protestas, con la decencia y decoro debido a la persona del Virrey (121). También los Oidores y los propios Oficiales Reales deben representar a los Virreyes y Presidentes Gobernadores la imposibilidad que existe de abonar libranzas sin las condiciones requeridas (122).

Toda esta serie de garantías que establece la legislación fué impuesta con el deseo de cortar los abusos que los mismos preámbulos de las leyes señalan. Pero se alcanza claramente el entorpecimiento y la imposibilidad de su aplicación práctica, dada la distancia, en numerosas ocasiones (levantamiento de los indios, ataques de piratas, etc.). Consultar y esperar la contestación era imposible por la urgencia de remedio en esas y otras situaciones análogas. Estas necesidades obligaron a la Corona a establecer excepciones al principio más arriba expuesto, aunque no sin rodear la autorización con el mayor número posible de garantías: sólo se podrán realizar gastos sin cédula especial, cuando así se dispusiera en "Acuerdo" de Oidores

y Oficiales Reales, es decir en Acuerdo General (123). Se entiende que ha de ser gasto "inexcusable", y ha de limitarse únicamente a lo que sea "forzoso" para aquella necesidad. En ese Acuerdo además no puede cederse al Virrey, Gobernador o Capitán General un poder general para gastar lo que le pareciere, sino que ha de señalársele una cantidad fija con especificación de lo que ha de gastarse y en qué (124). De lo así "acordado" debe enviarse relación al Consejo de Indias. Únicamente, cuando por la urgencia de la necesidad no hubiera tiempo de reunir el Acuerdo, podrá disponer la autoridad gubernativa del territorio, pero se le señala la obligación de dar cuenta al "Acuerdo" de lo realizado (125). En los Acuerdos se está al régimen de mayorías, con voto decisivo de la máxima autoridad gubernativa del territorio en caso de empate, y con reserva de voto de los no conformes en todo caso (126).

Además de estas libranzas realizadas en los Acuerdos Generales y que han de ir firmadas por todos los que a ellos asisten, también tienen facultad de librar las Audiencias (limitado a los gastos de administración de justicia) y los Oficiales Reales para el pago de los salarios a los funcionarios de su jurisdicción. Desde los primeros tiempos se hizo práctica acostumbrada que las libranzas para el pago de estos últimos gastos fueran extendidas por el Contador aunque luego eran firmas.

das por todos (127).

Los pagos se realizan en día fijo (los sábados, generalmente) y han de estar presentes todos los Oficiales (128).

Una característica de los gastos de la Hacienda india es que éstos suelen realizarse con los fondos procedentes de un ingreso determinado. Así, por ejemplo, los de administración de justicia y en general los salarios de los miembros de la Audiencia, son abonados con los ingresos procedentes de penas de Cámara (129); las mercedes, se pagan de tributos (130) y lo mismo el salario de los Corregidores (131); a los misioneros se les paga con los diezmos recaudados en el territorio, y hasta que empieza a recaudarse dicho ingreso, de lo procedente de tributos (132). En general, existía el criterio de conservar para los envíos al Rey lo procedente del «quinto» de los metales preciosos y se verificaban los gastos con lo procedente de las otras fuentes de ingresos.

También encontramos disposiciones sobre la moneda a emplear en los pagos, disposiciones muy necesarias siempre en Indias por la variedad constante de la ley de los metales. Las consignaciones y pagos de

la tropa deben hacerse siempre en reales (133), y en general todas las libranzas que se hicieren sobre las Cajas; con esto se persigue que la diferencia entre el valor de la pasta en plata, con que muchas veces se hacen efectivos los pagos a la Real Hacienda, y las entregas en reales dé un buen margen de ganancia para el Fisco (134). Particularmente hay un interés muy vivo de la Corona para asegurar el envió de todo el oro que se obtuviera a la Península; queda prohibido de modo tajante el pagar en monedas de dicho metal los salarios de los distintos funcionarios, incluso de los propios Virreyes «con apercibimiento que si los Oficiales Reales no lo cumplieren, será a su cuenta y cargo la diferencia y demasía que hubiere de una moneda, género o especie a la otra. Y mandamos que se cobren de sus bienes» (135). Por otra parte, tampoco se pueden efectuar pagos en especie ni en plata sin labrar (136).

Por último recordárenos el principio de autonomía existente entre las distintas Cajas, que se refleja en materia de pagos en la imposibilidad de hacerse efectivos en unas las deudas o consignaciones impuestas sobre otras (137); tal es el caso de los «sitios» de Chile impuestos sobre la Caja de Lima y algunos otros casos concretos como la carga impuesta a la Caja de Cartagena en los casos que no hubiere para p

gar en las de Santa Marta y Río de la Hacha (138).
• el impuesto sobre la Caja de Nueva España para el
pago de los salarios y soldadas en las Islas Filipi
nas, cuando hubiere insuficiencia de fondos en la
Caja de Manila (139).

NOTAS AL CAPITULO CUARTO

- (1). R.C. mayo 1510 (en "Copulata", V.124)
- (2). R.C. a Diego Colín de 6 junio 1511 (en "Col.doces.ineds. Ult.", V,312).-
En la instrucción al factor Juan de Ampia, de octubre de 1511 (en "Col.doces.ineds. Ult.", V,337) se establece la obligación de "comunicar y platicar y tratar todas las cosas que convengan a nuestro servicio tocantes a vuestro oficio o en otra cualquiera manera con los dichos Almirante y Oficiales juntado vos con ellos por la forma y manera que yo lo tengo proveído y mandado".
- (3). SOLORZANO y algún Virrey en sus Memorias de Golvino (MONTESCLAROS, por ejemplo), indican que fué Casas quien introdujo esta costumbre de hacer Juntas, lo cual no es completamente exacto como demuestran los documentos citados en las dos notas anteriores y las Acusas de los Oficiales de Venezuela, también de fecha anterior a Casas. Este, sin embargo, tuvo un papel decisivo en su regulación.
- (4). Vid.Instrucc. a D.Andrés Hurtado de Mendoza Marqués de Cefete de 10 marzo 1555 (LEVILLIER: "Gobernador del Perú", II, 443); R.C. al Licenciado Castro, de 17 marzo 1557 y el Virrey Toledo, el 18 diciembre 1568 (ambas citadas por SOLORZANO: "Politica indiana", L.VI, C. XV, n° 3).
- (5). "En las casas del Cabildo" (1590); "en las Casas Reales, donde reside Su merced el dicho gobernador"(1602); en las Casas Reales de su juzgado" (1590); en "Orjennae. en veur", pags. 42;45, 117,120 y 127.
- (6). En el libro de Acuerdos de Venezuela, aparece la firma del Gobernador de un modo estable a partir de 1570; antes sólo la encontramos en dos Acuerdos de 1541 y 1548.-

- (7). Origs. de la N^a en Venez", 114, 133 y 174. El Obispo asiste a la discusión de un problema de salarios de curas y firma en el Libro de Acuerdos.
- (8). En una ocasión asisten tres escribanos (el de Registros, el Cabildo y el de Gobernación, que hace el acta): se trata de fijar el volumen del tanto por ciento a pagar por derechos de almojarilargo ("Origs. de la Nac. en Venez", 116).
- (9). Ordenanza 65 de la Audiencia de Lima (en BALLESTEROS: "ords. del Perú", 1-114).
- (10). Rs. Cs. de 28 agosto 1596 y 27 febrero 1620, citadas por ESCALONA ("Garophiliacium", L.II, P.II, C. XXXV).
- (11). En el de los Oficiales Reales de Venezuela, el único que hemos podido utilizar, solo se recogen tres o cuatro "Acuerdos" por año. En un lugar se hace notar de pasada que se ha platicado sobre un asunto "otras muchas veces" (Vid: "Orígenes de la Nac. en Venez", p.12)- Según ESPEJO DE HINOJOSA, no existían esta clase de libros en la Contaduría Mayor de Castilla ("Creación del Consejo de Hacienda en el Perú, art.citado, p.112).
- (12). R.C. de 17 enero 1593 (Rec., L.VIII, T.3, 1.12)
- (13). R.C. a la Audiencia de Lima, de 28 mayo 1621, citada en "Garophiliacium", L.I, c 14)
- (14). LOPEZ DE VELASCO: "Descripción Unid de las Indias", p 50; M DE MONTESOLAROS: "Memorias de Colvino" (en BELTRAN Y ROZPIDE: "Memorias Virreyes Perú" T.p.185.
- (15). "Diccionario de Haciendas", Madrid, 1833-4, Voz "Arrendamiento".
- (16). En las instrucciones de 15 junio 1510 y 6 junio 1511 al Almirante, Gobernador y Oficiales Reales de la Española se les dice que se arrienden las rentas y que se encomienden a los arrendados los más indios que pudiere ser "Cedulario Cubano", 269 y 309 y en la instrucción al factor, en 1511, se vuelve a decir que el Gobernador y Oficiales arrienden las rentas reales y tomen las fianzas y recaudos necesarios ("Col.doc. ineds. Ult.", V 336).
- (17). Carta desde Nombre de Dios, de 18 de mayo de 1560 (LE-VILLIER: "Gobernantes del Perú", II, 510)
- (18). Memoria de Gobierno (en BELTRAN Y ROZPIDE: "Memorias Virreyes Perú", I, 189)
- (19). R.C. de 8 noviembre 1562 (Recop., L.VIII, T.IX, 1.X)
- (20). Así consta en una Relación del contador de Nueva España de lo recaudado de tributos, de fecha 17 marzo 1536

(inserta en la obra de PEREZ BUSTAMANTE : "D. Antonio de Mendoza", Santiago de Compostela, 1928, Apéndice XXXI, tomada de la Col. Nuñez).

- (21). Así p.ej. los Oficiales de Cartagena tienen un delegado en (A 61, Contaduría, 1382, n.º 1, v.N) - Respecto a los funcionarios indígenas y esclavos ya hablamos en el capítulo II (Pag.); parece ser que cometían numerosos abusos y son frecuentes las quejas sobre su conducta; vid. una R.C. de 19 enero 1560 ("Cedulario" de Puga, II, 337, f.208) encarga a la Audiencia de Nueva España, se entere si es cierto que obligan a los indios a pagar más tributos de los que pueden pagar, y en tal caso moderen el importe.
- (22). Las operaciones de tasación de tributos tenían una importancia extraordinaria. La tasación era realizada al mismo tiempo para el tributo de los indios de las encomiendas particulares y para autoridades gubernativas y judiciales. El 9 de octubre 1556, se ordenó a la Audiencia de Nueva España que el Fiscal y Oficiales Reales nombren quien asista a estas operaciones de tasas y retasas ("Cedulario" de Puga, II, 277, f.197), la Audiencia solicitó que cuando asistieren Tenientes de Oficiales Reales, se salieran de la sala antes de la votación, pero el Rey no lo permitió (R.C. a dicha Audiencia de 10 mayo 1558, en "Cedulario" de Puga, II, 304, f. 198 v.º). - El Fiscal debía firmar las retasas ("Gerophilseium", L.II, P.11, C. XXX). El ordenar la realización de estas retasas era propio de la "administración por mayor" y correspondió al Virrey (Memoria de Gobierno del Principe de Esquilache, en BELTRAN Y ROZPIDE: "Memorias Virreyes Perú" I.278); eran muy frecuentes, si no en los números de los contribuyentes que en el siglo XVI varió constantemente, por una parte disminuyendo por la gran mortandad de indios producidos al contacto de las dos razas, y por otra, aumentando, por la política constante de los Monarcas de incorporar los indios de las encomiendas a la Corona (Memoria del Marqués de Montesclaros, en BELTRAN Y ROZPIDE: "Memorias Virreyes Perú", I, 160; vid las retasas hechas en México de los años 1530-1569, en A61, contaduría, 670.
- (23). R.C. de 21 julio 1570 (Recop., L. VIII, TIX. 1-3)
- (24). R.C. a Audiencia Nueva España de 8 junio 1551 ("Cedulario" de Puga, II, 108, f.127).
- (25). El pleito de cuatro meses en nota 23. - Al hablar del corregidor en el capítulo II, señalábamos como los numerosos abusos cometidos por estos funcionarios llevó a prohibir en 1550 la percepción de los tributos. Sin embargo, no hubo más remedio que confiárselo de nuevo, por ser los más indicados para hacerlos. Ya en la instrucción sobre materias de Hacienda del Virrey Velasco ("Copulats" V, 94). dada en 1552 se regula la forma de

hacer las recaudaciones de tributos estos ministros; en octubre de 1535 el Rey aprobó que, medias fianzas, pudiera cometerse a los Corregidores el cobro de los tributos en las jurisdicciones alejadas de la red de alguna de las Cajas; pero se estableció la garantía de que aquéllos no pudieran ser proveídos para un nuevo cargo por la Audiencia si no presentaban un testimonio de los Oficiales Reales de no quedar siendo deudores del Fisco (R.C. a Oidores y Alcaldes Mayores de la Audiencia de Nueva Galicia de fecha 8 noviembre 1562, confirmatoria de la de 1536, en "Gedulario" de Encinas, III, 271); todavía a mediados del siglo XVII, según refiere el Príncipe de Esquilache en su Memoria de Gobierno, "los tributos los cobran los Corregidores de naturales que los deben remitir a los Oficiales Reales de su Partido, a pesar de que los abusos continúan (BELTRAN Y ROZPIDE: "Memorias Virreyes Perú", I. 277).

- (26). Tenemos noticia de estas "pinturas" por una carta de los Oficiales Reales de México a la Emperatriz, de fecha 1^o mayo 1533; en ella se quejan de que como en la mayor parte de los pueblos hay dos y aun tres Oficiales, las "pinturas" que se lleven al Contador para descontarles del salario de los Corregidores o Alguaciles, son duplicadas y aun tripladas, con lo que el número de ellas en poder de los Oficiales Reales es abundantísimo; ruegan que, puesto que son asentadas aquéllas en los libros fiscales, estas inscripciones tengan plena fuerza legal y puedan devolverse las "pinturas" a los indios que las trajeron ("Epistolario Nueva España", III, 45)
- (27). Instrucción del Virrey Velasco de 1552, cap. II, confirmada en este punto por la R.C. de 8 noviembre 1562 a Aud. Nueva Galicia citada en la nota 25.- Las Ordenanzas de los Tribunales de Cuentas creados en Indias en 1605 respetaron esta facultad de los Oficiales Reales de tomar cuentas a los Corregidores y cobrarles los salarios; ESCALONA afirma que también pueden hacerlo a los esciques que cobren el tributo ("Gazophilacium", L. I, P. II, Caps II y VI). Como detalle mencionado de la administración señalaremos la insistencia en las leyes de que todas las cuentas, de tributos se lleven en pliegos .
- (28). Carta de 1^o agosto 1533 (en "Epist. Nueva España", III, 100)
- (29). Existía el criterio de que los indios pagaran con los productos típicos de la región (con lo que los productos entregados son variadísimos: esmeraldas, mantas, maíz, algodón, tablerín, adobe y aun madera y col, etc) o bien en oro o plata. Ambos criterios son comprobados por algunos Virreyes; ANTONIO DE MENDOZA opta por el primero, porque los tributos de ropa se van quitando a los de tierra fría, ya que los indios si bien no cogen algodón para hacerlo, siendo la gente más rica para tejerlo y donde se coge la mayor cantidad y en cambio se carga el trabajo de sembrar algodón.

algodón y hacer la ropa a la gente más débil, que era la de las tierras calientes ("Memorias...Virreyes Nueva España", 230); el PRINCIPE DE ESQUILACHE estima que la presentación de pago en metales preciosos permitida por las leyes conduce a que los indios se hagan unos haraganes pues solo buscan liberarse de la obligación de trabajar (BELTRAN Y ROZPIDE: "Memorias Virreyes Perú", I, 241.)

- (30). Relación del Contador de Nueva España, de fecha 17 marzo 1536, citada en la nota 20 de este capítulo. De los 21789 pesos se descontaron 12.041 para el pago de salarios a Corregidores y Alguaciles, con lo que quedaron 9.742 para la Corona (6.285 pesos de mines); de los 11.705 pesos de mines rescaudados en oro, hubo que descontar 6.744 para salarios con lo que quedaron 4.961 para la Corona.
- (31). En una Relación de los pueblos que han de quedar para la Corona desde el 11 de mayo de 1529 en adelante se incluyen los conceitos y arrendamientos de tributos (AGI, Contaduría, 657); una R.C. de mayo 1536 el Virrey Mendoza se le encarga provea lo que convenga sobre arrendar algunos tributos de indios ("Copulata", V. 95); la mayor parte de instrucciones para estos arrendamientos que conocemos son de los años 1538 - 1539; en 1552, el Virrey Velasco permite el arrendamiento para regiones lejanas ("Copulata", V.162); sin embargo, en junio de 1557 se le dice que es preferible se vendan en almoneda ("Copulata", V, 159). El Principe de Esquilache cuenta en su Memoria de Gobierno que vistos los abusos de los Corregidores ha empezado a arrendar el cobro de tributos "y éste sería el más eficaz remedio si los Corregidores no lo desayudasen" (BELTRAN Y ROZPIDE: "Mem. Virreyes Perú", I, 277).
- (32). R.C. de febrero 1538 y mayo 1539, Instrucción del Virrey Velasco en 1552 ("Copulata", V, 158, 159 y 162).
- (33). Ordenanzas de la Audiencia de Nueva España, de fecha 20 abril 1528 ("Cedulario" de Puga, I, 99-101). Lo mismo ocurre con las penas impuestas en los juicios de residencia (asi al menos se especifica en la orden de residencias (Nuño Beltrán de Guzmán, de fecha 12 julio 1530: en "Cedulario" de Puga, I, 188)
- (34). RUIZ QUIRANU describe en uno de los Apéndices a su obra "La Magistratura indiana" uno de estos libros conteniendo las penas impuestas en el año 1565 por la Audiencia de Charcas que se halla en el Archivo Nacional de Suero.
- (35). R.C. de 16 junio 1537 para los escribanos de Nueva España ("Col.doc. ineds. Wit", X, 376).
- (36). Ordenanzas de la Audiencia de Nueva España, citadas en la nota 33.

(37). "Relaciones de los Virreyes y Audiencias que han gobernado el Perú", Madrid, 1871, t.II, p.52.

(38). Carta del Virrey D.Luis de Velasco, Callao 16 abril 1598 (LEVILLIER: "Gobernantes Perú", XIV, 103).

(39). Vid. testimonio de estas fianzas, agosto 1596 en "Epistol. Nueva España", XII, 198.

(40). Vid el nombramiento de Gordian Gasasano, sin fecha en "Epistol. N.España", XII, 147; vid.también pag. 102.

(41). Acuerdo de 9 agosto 1594 ("Origs. Hae. enVenez", 60)

(42) "Origs de la Hae. en Venez", 9.

(43). Son constantes las quejas sobre los abusos de los recaudadores del diezmo. El Rey recomendaba el 20 diciembre 1533 al Virrey y Audiencia de la Nueva España que buscasen la manera de remediar "los ilícitos extorsiones y cohechos en la manera de cobrarlos" ("Cedulario" de Puga, II, 229, f.140 v^a). El Virrey del Perú D.Luis de Velasco (el 2^o de este nombre) escribe en sus memorias de Gobierno que "una de las cosas en que los indios del Perú son más vejados es en la paga de los diezmos, porque se cobra de ellos con gran rigor y crueldad, llevándoles por fuerza los diezmos más de lo que deben, especialmente si son eclesiásticos, que los tratan peor. (BELLTRAN Y ROZPIDER: "Memorias Virreyes Perú", I, 125)

(44). Rs.Ceds. de 20 julio 1538 y 14 agosto 1540 ("Cedulario" de Puga, I, 433, f. 199 v^a.).

(45). R.C. al Virrey Mendoza, de 20 nov. 1539 (en "Cedulario" de Puga, I, 425, f.119 v^a).

(46). R.G. a Diego Colón de 14 nov. 1509 ("Cedulario cubano" 197)

(47). Ordenanzas de la Audiencia de Lima (BALLESTEROS: "Ordenanzas del Perú", 1-124). Puede verse el importe de estas ventas de los diezmos de algunas ciudades de Venezuela en "Origenes de la Hae. en Venez", pgs 71 y 73.

(48). "Origs. de la Hae en Venez", p.70

(49). En 1593 los Oficiales de Venezuela dieron el arrendador de diezmos libramientos por valor de 25.823 y 9.254 maravedises para abonar directamente a las iglesias de Coro y San Sebastián, respectivamente ("Origs. de la Hae. en Venez.", 70)

(50). Carta ya citada, El Callao, 16 abril 1598 (LEVILLIER: "Gobernantes Perú", XIV, 103).

- (51).-- Se hace mención de estos arrendamientos aparte de la R.C. 3 mayo 1509 a Diego Colón ("Cedulario Cubano", 141), en muchos otros documentos, v.gr., R.C. 13 mayo 1533 a Audiencia N. España ("Cedulario" de Puga, II, 219, f. 142); R.C. abril 1554 a las autoridades de la Española ("Cepulata", V, 150).
- (52).-- "Describe. de la Nueva Galicia hacia 1621", publicada por F. CHEVALIER (Public. de la Escuela de Est. Hisp. Am.), Sevilla, 1946, p. 124.
- (53).-- Memorial de Toledo al Rey (BELTRAN Y ROZPIDE; "Memorias Virreyes Perú", I, 102). El Virrey VELASCO cuenta también que se beneficiaba por factores mediante el pago de derechos fiscales al Monarca y de un tanto por ciento a los indios por quintal de mineral (Id. p. 113).
- (54).-- BELTRAN Y ROZPIDE; "Memorias Virreyes Perú", I, 114 y 115.
- (55).-- BELTRAN Y ROZPIDE; "Memorias Virreyes Perú", I, 189.
- (56).-- Carta de Juan de Carvajal y Sando al Virrey Chinchón, inserta en Escalona; "Gazophilacium", L. I, L. XLV).
- (57).-- Instrucción del V. Toledo a Oficiales Reales del Cuzco (LEVILLIER, XIV, 1-5).
- (58).-- Instr. 1538, cap. 24, en Encinas, III, 280).
- (59).-- ESCALONA; "Gazophilacium", L. 1, p. II, C. VII.
- (60).-- Instrucción del Virrey Toledo a Oficiales Reales del Cuzco (LEVILLIER, XIV, 1-5).
- (61).-- R. C. de 23 mayo 1621 citada en "Gazophilacium", L.1, p. II, C. VII).
- (62).-- HARING; "La producción americana de oro y plata en primera mitad s. XVI", p. 58.
- (63).-- Carta de Oficiales Reales México al Rey, de 13 mayo 1533 ("Epistolarie Nueva España", III, 45).
- (64).-- Instrucciones al Vecdor de Castilla del Oro, Fernández de Oviedo, (en 19 junio 1519) (ALVAREZ RUBIANO; "Pedrarias Dávila", Apéndices, 1, 87).

- (65).-- Id. ms. 6 y 8.-- La Instrucción en materia de Hacienda dada por el Virrey Velasco en agosto de 1552 establece minuciosamente el control de las planchas de plata que hubieren de llevarse a fundir (vid. texto en "Copulata", V, 182).
- (66).-- Instrucción al Virrey Velasco de abril 1550 (en "Copulata", V, 178).
- (67).-- Instrucción al Veedor Fernández de Oviedo, n.º 9) Estas horas eran cuatro por la mañana y dos por la tarde en Castilla del Oro (id. n.º 9); en la instrucción al Virrey de Nueva España, D. Luis de Velasco, en 1550 se señalan tres horas por la mañana lunes y jueves ("Copulata" V, 180).
- (68).-- R. C. 17 junio 1519, en ALVAREZ RUBIANO: "Pedrarias Dávila", Apéndices, 485).
- (69).-- R. C. de 14 septiembre 1519 sobre el orden que se ha de seguir en las fundiciones de Castilla del Oro (ALVAREZ RUBIANO: "Pedrarias Dávila", Apéndices, 511).
- (70).-- R. C. citada en la nota anterior.-- Los documentos destacan la importancia de estos marcos o cuños. Su forma aparece minuciosamente descrita en la legislación (v.gr., 5 julio 1519, en ALVAREZ RUBIANO: "Pedrarias Dávila", Apéndices, 495); al principio era distinta en las islas y Tierra Firme, para distinguir el oro de ambas regiones (Instr. a Oviedo, citada en nota 64).
- (71).-- Instrucc. al Veedor Fernández de Oviedo citada en nota 64.
- (72).-- Hay bastantes referencias a este primitivo sistema. Aparte de las ya citadas en la nota del capítulo, podemos citar la interesante cédula de 6 junio 1511 a Diego Colón ("Col. docs. ineds. Ult...." V, 315) y el testimonio de la postura y condiciones del arrendamiento del almojarifazgo de la isla Fernandina remitido por el Gobernador Diego Velázquez (citado en "Col. docs. ineds. Ult....", I, 70). A pesar de que en una Instrucción de 1545 para tener cuentas en Nueva España pregunta que se informe de lo que ha arrendado el almojarifazgo cuatro años atrás y si conviene arrendarlo para adelante ("Copulata", V, 209 y Dic. Ayala, I, 297), y que la Instrucción a los Oficiales Reales de San Juan de 1528 establece que esta renta sea pregonada y puesta en

arriendo, de hecho triunfó la práctica anterior señalada y reglamentada en el mismo documento; la recaudación por los Oficiales Reales ("Col. docs. inédos. Ult.", IX, 362).

- (73).-- Aunque en las Ordenanzas de 1528 se dice que los Oficiales Reales se juntan con la justicia y reciben el Registro ("Col. docs. inédos. Ult.", IX, 362), parece ser que los funcionarios judiciales no tienen jurisdicción fiscal en estas visitas y sólo interviene en ellas en funciones de policía y seguridad. Concretamente, una R.C. de septiembre de 1563 dirigida al Fiscal de la Española dice que "no debe entrometerse con los Oficiales en las cosas que resultaren de las visitas a los navíos" ("Copulata", V, 123). En la práctica, las intromisiones fueron constantes (vid. carta de Oficiales Reales México de 1º agosto 1535 en "Epist. N. España", III, 100) lo que motivó medidas legislativas como la prohibición señalada en el texto.
- (74).-- R. C. octubre 1570 a Oficiales Cartagena, en "Copulata", V, 122.- R. C. de 28 septiembre 1534, reiterada numerosas veces y finalmente en enero 1599, para Veracruz ("Epistolaria Nueva España", III, 202, 248, 271).
- (75).-- Vid. en Contaduría, 1583, n.º 1, r. 20. Las razones que alega Eraso son que no existe costumbre de estas visitas; que siendo el Capitán General de la Armada ya tiene cuidado en que no se contravengan las leyes prohibitivas, y, finalmente, que tiene ya la flota sus funcionarios fiscales (Contador, Tesorero, Veedor, Proveedor Fiscal y Escribano Mayor) ante quienes se visitada la armada a las salidas y entradas de los puertos españoles y americanos y que actúan eficazmente contra los infractores. A pesar de que no conviene que los dichos Oficiales visiten la Armada, si su Majestad le ordena -acaba el informe- se llevará a efecto.
- (76).-- Ordenanzas a los Oficiales Reales de S. Juan del año 1528 ("Col. docs. inédos. Ult.", IX, 362).
- (77).-- Varias disposiciones regulan el nombramiento y funciones de estos guardas, que eran, generalmente, dos, uno para el puerto y otro para la Casa de Contratación (Ord. 1528 cit. n.º anterior). Parece ser que había cierta competencia entre Oficiales y Oficiales Reales respecto a su designación;

el Rey dió siempre la primacía, como cosa propia de su oficio, a los Oficiales Reales, ordenando a los Oidores no se entremetieran en ello (R.C. junio 1529 para la Española, en "Copulata", V, 118). Son preferidos los casados (R.C. de diciembre de 1529 para Cuba) y los que tienen algunos bienes, ya que esto ofrece una mayor garantía de probidad (R. C. al Corregidor de Tierra Firme de julio 1546 para que provea sobre que los Oficiales pesen para guardas a personas pobres en la Casa de Contratación, a cuya causa la Hacienda es defraudada (en "Copulata", V, 119). Para mayor seguridad, han de prestar juramento (Ordens citadas en nota anterior). En 1532 recibían una retribución de 50 pesos (carta de los Oidores Salmerón y Ceynos de la Aud. de la Nueva España a la Emperatriz de 12 noviembre de ese año, en "Epistol. N. España", II, 201) y además, la cuarta parte del importe de las mercancías pasadas de contrabando que descubrieran (Ord. de 1528 citadas).

(78).--En 1533, escribe el Contador de la Nueva España, Rodrigo de Albornoz, que "en todas las islas, las casas mejor aderezadas son las de la contratación y fundición" y se queja de que en esa fecha la de Veracruz tenga a un el techo de paja con el consiguiente riesgo de incendio; pronto se erigió otra de piedra (Carta de 12 marzo 1533, en "Epist. Nueva España", III, 38). La legislación reitera constantemente la orden de que se lleven las mercancías a estas casas (Reales Cédulas de mayo 1538 para Nombre de Dios; Ords. 1534 para el buen recaudo de la Hacienda, etc.) Cuando las mercancías no cabían en la Casa de Contratación (cosa corriente en los puertos terminales de las flotas), se tomaba otra casa para estos menesteres, pero nunca se dejaba que los propietarios las llevaran a sus casas.

(79).--Asista cada semana a ellas un Juez de apelación" dispónia una R.C. de febrero de 1512 ("Opulata", V, 109); un Oidor, los Oficiales Reales y un Regidor y ante escribano en las de Santo Domingo según una R.C. de febrero de 1526 ("Copulata", V, 110); un alcalde con dos regidores y ante el escribano del Consejo en Cuba, según R.C. de agosto 1525 ("Copulata", V, 111). Para Veracruz se dispuso en 1533 y después en 1536 que acudiera el alcalde ordinario en compañía de los Oficiales, facultando a los Oficiales Reales para designar vecinos que entendieran en las evaluaciones (rs. Cs. de abril y mayo de 1533 y julio 1536, en "Copulata", V, 111 y 112).

(80).--Vid. los capítulos IX y X de dichas Ordenanzas (en "Col. Torres Mendoza, o Encinas, III, 470).

(81).--Ordenanzas a Oficiales Reales de San Juan de 29 agosto

de 1528 citadas repetidas veces, R. C. de 13 mayo 1538 para Tierra Firme y 21 diciembre 1539 para el Perú (Encinas, III, 475) ; Ordenanzas de 1554, etc.

- (82).- Las leyes establecen la pena de 100.000 mrs. si fuere incumplida esta obligación (R.C. de mayo 1538 para Tierra Firme, en "Copulata", V, 113).
- (83).- Ordenanzas de Oficiales Reales del año 1528 citadas repetidas veces. (Col. docs. inéd. Ult., IX, 362).
- (84).- Orde. cit. nota anterior.
- (85).- "que no haya para los mercaderes que fueren en un navío más depara los que se fueren en otro sino que sea generalmente para todos... (Ord. de mayo 1554 citadas).
- (86).- R. C. 28 diciembre 1568 (Rec. N, L.VIII, T. XVI, ley 9).
- (87).- Orde. citadas de mayo de 1554.
- (88).- Instr. de 28 dic. 1568 ("Encinas", III, 45).
- (89).- R.C. octubre 1589 para Tierra Firme ("Copulata", V, 100) y (Ord. citadas de 1554).
- (90).- "Inst. que dejaron los Virreyes N. España", 232, y R.C. 17 enero 1593 a Virrey N. España ("Encinas", III, 470 y "Rec.", L.VIII, t. XVI, ley 6). Las Ordenanzas de 1528 para los Oficiales Reales de San Juan resumen muy bien los dos últimos principios citados en el texto; "La evaluación debe hacerse guardando veridad y justa y moderadamente, según que comúnmente valieren las tales cosas en aquella sazón en la dicha isla, sin hacer agravio a los dueños de las mercaderías ni perjuicio ni fraude a nuestras rentas" ("Col. docs. inéd. Ult.", IX, 366).
- (91).- R. C. a la Española de febrero de 1512 ("Copulata", V, 109).
- (92).- Carta del Comisario Ortega de Melgesa a S.M. de Nombre de Dios, de fecha 13-mayo de 1560 (LE-VIII, 307; "Gob. Perú", II, 307).
- (93).- Carta cit. nota anterior.

- (94).- Instr. al Virrey de la Nueva España de abril de 1550; Ordenanzas de mayo 1554, etc. Sólo puede darse espera, si hay unánime acuerdo de los Oficiales.
- (95).- Instr. 28 diciembre 1568 (Encinas, III, 45) y Ordenanzas de 1573 para la Caja de Lima. Otras disposiciones aclaran la forma de fijar esta plusvalía; se tomará como base el precio mediano escogido entre los precios mayor, mediano y menor alcanzados dentro de los treinta días desde que la flota llegó al puerto (rs. Cs. de 22 diciembre 1579 y 24 enero 1580 recogidas en otra de 22 de febrero de este último año (Encinas, III, 468) y que se recoge en Recop. (L. VIII, T. XVI, l. 8) Vid. también "Gazophilacium", "Notas y advertencias a las Ords. Lima" 1573, n.º 26.
- (96).- Tal es lo que se dispone en una R.C. dirigida a los Oficiales Reales de Cartagena y cuyo extracto sin fecha figura en "Copulata", V, 115.
- (97).- Abundan en el A.G.I. los testimonios de esta clase de almonedas (Vid. en Contaduría, leg. 833, 860 y 861 pliegos de remates de almonedas de tributos en Compostela, Zacatecas y Guadalajara).
- (98).- Vid. lo que dijimos acerca de esta materia al hablar de la "Jurisdicción" de los Oficiales Reales en el capítulo anterior. En 1519 el Rey ordena al Veedor de Castilla del Oro, Fernández de Oviedo, proceda a la venta en pública almoneda de los bienes de Balboa y sus compañeros sentenciados a muerte por Pedrarias; en dicha orden, el Monarca declara dichos bienes "sanos e de paz" a cualquier persona que los compren. (R.C. 16 agosto 1519, en ALVAREZ HUBIANO; "Pedrarias Dávila", Apéndices, 504).
- (99).- Cap. VII de las Ordenanzas de Oficiales del año 1528 citadas.
- (100).- R.C. 1 marzo 1570 (Re. Ind., L. VIII, T. XXV, l. 4)
- (101).- Suele asistir el Escribano de minas (Rs. Cédulas de 29 julio 1522, confirmada en marzo de 1561 para Nueva España, en "Copulata", V. 161). Una R.C. del año 1530 dirigida al Virrey de N. España, Don Luis de Velasco (Puga, p. 166, f. 165), dice que este escribano de minas "ha de asistir personalmente y si hay causa necesaria para no hacerlo,

su Teniente, que ha de ser escribano real para que dé entera fe en los libros".

- (102).-- Vid. por ejemplo cap. V de las Ordenanzas de 17 de agosto 1555 para Audiencia de Lima (BALLESTEROS: "Ordenanzas Perú", 1-124).
- (103).-- Una R.C. de febrero de 1559 refiere la actuación de un Oidor que no quiso admitir la postura que hizo uno de los que asistían a una almoneda, por su condición de casado en España, ordenándole como a las leyes que regrese a la Península. El Memorial critica esta actitud perjudicial para la Hacienda, "por cuanto después de admitida la postura le podían enviar" ("Copulata", V, 164).
- (104).-- Diversas Cédulas de las cuales la más antigua es de 11 agosto 1552, que son recogidas en la Rec. Ind., L. VIII, T. XV.
- (105).-- R.C. de 31 de julio de 1556 ("Col. docs. inédas. Ult.", I, 340) y Ords. de Audiencias del año 1553, recogidas en este punto en la Rec. Ind. (L. VIII, T. XV, ley 3). En las almonedas, el Fiscal tenía precedencia en los asientos respecto a los Oficiales Reales. A pesar de las quejas de éstos, el Rey confirmó la precedencia. (R.C. 12 septiembre de 1556 para N. España, en Puga, 272, fol.190)
- (106).-- Rs. Cédas. marzo 1559 y junio 1555 ("Copulata", V, 161).
- (107).-- R.C. del año 1550 al Virrey de Nueva España, D. Luis Velasco (Puga, 166, f. 165).
- (108).-- "Precisamente se haga en la plaza pública" se dice en la Rec. Ind. L. VIII, T. XV, ley 2. Según se disponía en las Instrucciones referentes a la Hacienda dadas por el Virrey Velasco en 1552 (cap. XV) el arrendamiento del cobro de los tributos debía hacerse en la primera almoneda después de año nuevo; antes de terminarse el año anterior, se pregonarían los tres días de almoneda; el remate sólo podría hacerse después de "haberse traído" los seis días que las leyes disponían.
- (109).-- Ord. 45 del año 1579 (Rec. Ind., L. VIII, T. XV, ley 3).
- (110).-- R.C. 17 abril 1550 (Encinas, III, 350) y Rs.Cds. 11 agosto 1552 y 25 de enero 1605 recogidas en Rec. Ind. libro y título citado, ley 7).

- (111).-- En 28 de marzo de 1558, los Oficiales Reales de Venezuela, alegando la falta de oro en aquella tierra, acuerdan dar al fiado los esclaves pertenecientes a la Corona que se venden en las almonedas, con la sole promesa de pagar en Santo Domingo, siempre que den seguridad bastante (-Orgs. Hacienda en Venen.-, p. 15).
- (112).-- Comentando ESCALONA el capítulo IX de las Ordenanzas para la Caja de Lima del año 1573 que mantienen esa prohibición, señala que "está derogada por contrario uso y costumbres y por ley de necesidad" y por la existencia de un auto del Virrey de Nueva España don Luis de Velasco, confirmando por el Rey el 11 de agosto de 1552 y el capit. LXX de las Ordenanzas dadas por el Virrey Toledo para la misma Caja en 1571 en que permite se rematen "al contado o en especie, como mejor se pueda" (-Ganophilacium-, "Notas y advertts. a las Ords. de 1573" n.º 6).
- (113).-- Está prohibido terminantemente llevar pliegos sueltos (R.C. 20 julio 1552, recogida en Rec.Ind. L. VIII, T. XXV, ley 55). En la R.C. cit. en nota 107 se ordena al Virrey Velasco les ponga las penas que le pareciere si se contraviniera esta disposición.
- (114).-- Vid. el interesante artículo sobre "Los Libros Mayores de los Tesoreros Reales de Hispanoamérica en la primera mitad del siglo XVI", Buena parte de dicho trabajo (págs. 16-24) está dedicada a esta interesante cuestión de los gastos de la Real Hacienda Indiana.
- (115).-- No existe aún un estudio minucioso sobre estos gastos de la Hacienda, trabajo de extraordinario interés para el conocimiento de la sociedad colonial. El citado trabajo de HARING, constituye un apreciable punto de partida.
- (116).-- La mayor parte de las leyes recogidas en el Título XXVIII del Libro VIII de la Recopilación se refieren a esta prohibición a los gobernantes indios de librar cantidades sobre la Hacienda Real. La fórmula empleada es tajante: "Ordenamos y mandamos a nuestros Virreyes, Presidentes, Oidores y Ministros, sin excepción de dignidad o grado, que no libren, paguen, ni permitan librar ninguna cantidad de nuestra Real Hacienda, sin orden especial, firmada de nuestra mano" (vid ley 1 del Libro y Título citado). "La superintenden-

cia de la Real Hacienda que poseían los Virreyes significaba la administración superior de los fondos públicos, aunque no la disposición de ellos sin real licencia (BRAVO UGARTE, "Historia de México", II, 105).

- (117).-- R.C. 29 septiembre 1550 a Oficiales Reales de Lima para que las cosas que el Virrey D. Antonio de Mendoza provea se gasten de la Real Hacienda, "las cumplais vosotros como si ya lo mandase, porque él, con su prudencia no proveerá ni mandará gastar sino lo que fuere necesario y conveniente" (cit. en "Gazophilacium", L. I, C. V, l. 21). Aun así y todo, debería mandarse a España una relación de lo gastado para tenerlo en cuenta.
- (118).-- R.C. 7 agosto de 1565 a Oficiales Reales de Cartagena (A.G.I. Contaduría, 1382, n.º 1, r. 12).
- (119).-- Vid. por ejemplo Instruc. al que ha de tomar cuentas a los Oficiales Reales de Castilla del Oro, de fecha 12 octubre de 1518 (ALVAREZ HUBIANO, "Pedrarias Dávila", Apéndices, 449), y la queja que hace el Contador de Nueva España, Rodrigo de Albornoz, al Rey de "los contadores de cuentas" que no han querido tomar en cuenta lo que pagaron a los guardas puestos en Veracruz "a pesar de haver acuerdo de justicia y Oficiales", por alegar no existía cédula especial que lo permitiera (Epistolario N. España-, III, 38).
- (120).-- Vid. Libro VIII, T. XXVIII, ley 1 in fine. En el siglo XVII, se llegó en este punto a la máxima rigidez; si los Oficiales pagaren contra lo prohibido, aunque los que libraren dieran fianza de confirmación real, perderían el oficio y pagarían el doble de lo gastado (Vid. ley 2 del mismo Libro y Título de la Recopilación).
- (121).-- Recop. Ind., L. VIII, T. XXVIII, ley 5.
- (122).-- Vid. distintas cédulas recogidas en Recop. Libro y Título citados leyes 3 y 4.-

- (123).-- La exigencia de este acuerdo se mantiene con carácter general en todos los documentos legislativos. Así, en el despacho que suele dárseles a los Gobernantes de las Indias para que puedan gastar de la Real Hacienda en caso de guerra (vid. por ejemplo el que se despachó para Nueva el 15 de diciembre de 1558, A.G.I., Lima, 508, I, 127 vº, e el dado al Gobernador Castro el 16 agosto 1563, extractado en "Gazophilacium", L. I, C. V); también en las Ordenanzas de las Audiencias, y disposiciones sueltas (vid. R.C. 19 oct. 1598 para tomar medidas defensivas por el peligro de corsarios en las costas de Venezuela, en "Orígenes de la Nación en Venezuela", 118, etc.
- (124).-- R.C. 30 agosto 1627 cit. en "Gazophilacium", L. I, C. V).
- (125).-- R.C. cit. nota anterior.
- (126).-- R.C. 16 agosto 1563 cit. en "Gazophilacium", L. I, C. V) y otras posteriores recogidas en Rec. Ind., L. VIII, T. XXVIII, ley 12.
- (127).-- Esta obligación del Contador viene consignada normalmente en la Instrucción que se le da al efectuarse su provisión para el cargo (vid. la del Contador de Nueva España Rodrigo de Albornoz del año 1522 en "Col. docs. inéd. Ult.", IX, 152), y también se recoge en las Ordenanzas de Oficiales (V.gr. la dada a la Caja de Lima en 1573, cap. VIII). La del año 1588 para San Juan de Puerto Rico, explica que han de ir firmadas por todos los Oficiales "para que sea más cierto lo que se librare y no haya después duda en la aceptación y pago de ella"; sin este requisito, el tesorero no debe abonar su importe.
- (128).-- R.C. de 5 junio 1522 (Encinas, III, 302) y Ordenanzas de Oficiales de 1522.
- (129).-- R.C. enero 1555 para Española y octubre 1562 para N. Reino Granada ("Cepulata", V, 224 y 208, respectivamente).
- (130).-- Rs. Cs. 26 febrero 1563 y 1º agosto 1572 (Rec. Ind. L. VIII, T. XXVII, ley 10).
- (131).-- R.C. mayo 1559 para Guatemala ("Cepulata", V, 226).
- (132).-- R. C. nota anterior.-

- (133).-- R.C. de 16 noviembre 1604 (Rec. Ind. L. VIII, T. XXVII, ley 15).
- (134).-- De ahí que si no hubiera reales en las arcasy hubiera de pagarse en pasta, deberá hacerse "no conforme al valor con que se recibiere, si no al verdadero y común" (R.C. 24 agosto 1596, recogida en Recop. Ind., L. VIII, T. XXVIII, ley 17). Concretamente, el Contador especial Portocarrero señala una diferencia de un 12% de interés entre cobrar en ore o en plata (Carta desde Lima de 1^o febrero 1557) (LEVILLIER, "Gob. Perú", II, 466).
- (135).-- La causa que motiva esta disposición es muy clara. El oro "por valer más" conviene se envíe a España (Instr. a Licenciado Castro, extractada en este punto en "Copulata", V, 227). Existen numerosas Cédulas insistiendo sobre esta prohibición, que se recogen en Rec. Ind. L. VIII, T. XXVI, ley 16.
- (136).-- R.C. de noviembre de 1566 para Nueva España, en "Copulata", V, 209 y R.C. 17 junio 1557 a Oficiales Reales de N. España ("Col. docs. inédas. Ult." X, 378).
- (137).-- Vid lo que dijimos en el capítulo II al hablar de este principio.
- (138).-- R.C. de 22 julio 1596, en Rec. Ind. Libro VIII, T. XXVI, ley 11). Poco después se daba una disposición análoga para que se pagaran de la Caja del Río de la Hacha los salarios de Oficiales Reales de Santa Marta, cuando no hubieran fondos suficientes en ésta para hacerlo (R.C. de 4 julio 1602, en Rec., Libro y Tit. cit., ley 12).
- (139).-- Rs. Cs. de 17 enero 1593, 13 enero 1596 y 17 agosto 1598, recogidas en Rec. Ind., L. VIII, T. XXVI, ley 15.- En 1608 se dio una disposición análoga para que pagara la Caja de Panamá cuando no pudiera hacerlo la de la isla Española (Rs. Cs. 23 junio 1608 - Rec. Ind., Libro VIII, T. XXVI, ley 13).--

CAPITULO QUINTO

CAPITULO QUINTO

DESVIACIONES DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO EN LA APLICACION DEL DERECHO

Hemos dejado ya expuesto en las páginas anteriores la formación histórica de los problemas fundamentales que ofrece el sistema administrativo de la Real Hacienda indiana en el siglo XVI. Sin embargo, no creemos aún completa nuestra labor. Hace falta todavía inquirir hasta qué punto ese sistema tuvo vigencia práctica. Esta investigación nos ofrecerá de paso la oportunidad de exponer algunos aspectos interesantes de las actividades de los Oficiales Reales, tales como su participación en la tareas de gobierno, cuyo desconocimiento mutilaría en una de sus facetas más interesantes la visión del papel que tuvieron estos funcionarios en la vida colonial del siglo XVI.

Sería tarea ardua e innecesaria el tratar de averiguar en sus más mínimos detalles el grado de aplicación de las disposiciones legales expuestas en los capítulos anteriores. Basta a nuestro intento el des

tacar las principales desviaciones que registra la historia de la Real Hacienda durante el siglo XVI, más bien con la idea de dar a conocer los rasgos característicos que la de ofrecer un exhaustivo catálogo de estas desviaciones.

La legislación indiana es extremadamente casuística y su aparición responde casi siempre a la necesidad de dar solución a las necesidades concretas que se van presentando. Esto nos facilita ya, muchas veces con una simple revisión de la exposición de motivos que las preceden, el conocimiento de un estado permanente de hecho opuesto a la ley. También la correspondencia de los Virreyes y de las Audiencias nos ofrecen constantes quejas en la aplicación del sistema legal. Finalmente, los informes de los Contadores de Cuentas y de los Visitadores nos ofrecen ayuda eficaz para conocer esta realidad. Pero conviene antes de seguir adelante, hacer una salvedad: La exposición conjunta de una serie de hechos reales en que la ley es incumplida pudiera ser ocasión de que se formara una opinión exagerada de este incumplimiento. Téngase en cuenta que el conocimiento de gran parte de estos abusos llega a nosotros a través de los informes de lo que pudiéramos llamar «policía del Estado», y que los ejemplos que ofrecemos son tomados de una extensa etapa cronoló-

gias que abarca más de los cien años. No debemos formarse un criterio cuantitativo, que sería sin da da erróneo, de esta discrepancia entre lo ordenado por la ley y su realización práctica, discrepancia que ha sido exagerada sin duda muchas veces en lo que se refiere a las Indias.

En primer lugar, nos interesa examinar el pro blema preciso del conocimiento del Derecho y después, en epígrafes separados, expondremos las negligencias, los fraudes y los abusos más característicos de los Oficiales Reales, las intromisiones de las autoridades gubernativas y judiciales y la participación de los Oficiales Reales en el gobierno de las Indias, para acabar nuestro trabajo con unas breves notas críticas sobre el sistema administrativo de la Real Hacienda indiana.

EL CONOCIMIENTO DEL DERECHO

Cuando se acaba de examinar el ingente número de cédulas reales, instrucciones, ordenanzas, etc. referentes a la Hacienda indiana, surge enseguida la pregunta de si puede conocerse en su totalidad es te Derecho en regiones separadas de la Metrópoli por obstáculos difícilísimos de salvar muchas veces y en una etapa caótica de conquista y pacificación del territorio.

Aquí, como en otras cuestiones, la legislación indiana acudió a resolver el problema con su minuciosidad característica. Ya hablamos de los títulos e instrucciones que todo Oficial Real -como cualquier funcionario de nombramiento real- recibe al ir a desempeñar su función. Esas "Instrucciones para el desempeño de su oficio" contenían un cuadro amplio de las tareas que se le encomendaban. Por otra parte, las numerosas cuestiones que el desarrollo de la administración iba planteando, exigía continuamente la promulgación de nuevas disposiciones. Esta legislación, como es sabido, iba dirigida a aquella persona que debía aplicarla y aun en los casos de validez general, era necesario que la disposición fuera enviada directamente a cada uno de los organismos administrativos indianos que debían cuidar de su aplicación. Esto facilitaba ya mucho el conocimiento del Derecho a aplicar ya que los Oficiales Reales -y de un modo semejante los Virreyes, Gobernadores, Audiencias, etc.- sólo debían preocuparse de conocer el Derecho especialmente válido para el territorio de su jurisdicción existente en su poder. Para asegurar este conocimiento, se ordenó que las disposiciones referentes a la Hacienda, una vez leídas por los Oficiales Reales conjuntamente, fueran recogidas en un libro por orden cronológico,

en el cual deberían asentarse igualmente las respuestas de los Oficiales Reales; cada vez que se incumpliere esta obligación, se les aplicaría una pena de 15.000 maravedises. El Contador velaría de modo especial por el cumplimiento de este trámite (1).

Es difícil averiguar hasta qué punto se cumplió la orden real por encontrarse los papeles de las Cajas Reales en los archivos de los territorios americanos, pero nada hace pensar en su incumplimiento. No hemos encontrado quejas acerca de este punto y en el único Libro de Acuerdos que conocemos se demuestra que existía ese Libro de Cédulas en la Gobernación de Venezuela desde los primeros tiempos (2). Sin embargo, no es difícil prever que en muchas ocasiones los desórdenes y alborotos por una parte y las negligencias y descuidos por otra imposibilitaba a los Oficiales Reales el conocimiento de disposiciones antiguas. Concretamente, el Virrey Toledo se quejaba al Monarca de que «en ninguno de los oficios visitados hallé instrucción ni orden para obligar a los Oficiales Reales a dar buena cuenta» (3); los de Huamanga sólo conservaban dos instrucciones que les dió el contador especial Pedro de Melgosa, y los del Cuzco también carecían de instrucciones adecuadas para alguno de los aspectos

de la administración (4). El Marqués de Montesclaros escribe en su Memoria de Gobierno, que al no encontrarse las instrucciones dadas por sus antecesores para el gobierno de las Cajas Reales del Perú, ha tenido que trabajar y hacerlas de nuevo como si fuera primer inventor (5) y el Marqués de Chinchón indica que en su tiempo los Oficiales Reales de Manuco no tenían instrucciones para el desempeño de sus oficios (6). Esto dió lugar a que en siglo XVII, ya después de la etapa objeto de nuestro estudio, se diera orden de que los libros y papeles de la Hacienda fueran archivados cuidadosamente y no se permitiera sacarlos de allí bajo ningún concepto (7).

A pesar de estos y otros casos de extravío de las disposiciones anteriores (extravío que de hecho quedaba subsanado con la repetición constante de los aspectos fundamentales de las disposiciones antiguas en las nuevas Ordenanzas que se iban promulgando) lo anteriormente expuesto nos lleva a creer que el problema del conocimiento del Derecho legislado en materia de Hacienda, no existía, al menos en lo esencial. Lo que constituía un complejo problema en la Metrópoli que hacía penosísimo todo intento recopilador de la legislación indiana en el Consejo de Indias por la ingente masa de Re-

gistros allí existentes, quedaba subsanado en la práctica administrativa de los Oficiales Reales con el examen de las Instrucciones recibidas al iniciar sus tareas y de los Libros de Cédulas que se encontraban en la Caja Real respectiva. No cabe duda que en muchos casos el desconocimiento que en el Consejo se tenía de la legislación indiana dió lugar a algunas contradicciones y anacronismos legales, alguno de los cuales hemos tenido ya ocasión de señalar y que estas contradicciones introducían un elemento de confusión en la aplicación del Derecho por los funcionarios del Fisco. Aun en este caso, la deficiencia era de hecho salvada mediante una consulta a los órganos de administración central, que resolvían aquel caso concreto que se le planteaba mediante una nueva disposición real. De este modo, y con las deficiencias innegables de este sistema de formación y promulgación de las leyes, la práctica jurídica podía desarrollarse con cierta seguridad.

No fué, pues, el desconocimiento del Derecho la causa originaria de las desviaciones del sistema legal establecido por la Corona para la administración de su Hacienda, ni la pugna entre el idealismo del legislador y la realidad viva que se afecta a los problemas puramente administrativos que nos ocupan. Fueron, como vamos a ver, la negligencia unas

Veces y la mala fe, otras, de los funcionarios fiscales; el desmedido celo por mantener y aún aumentar sus prerrogativas las distintas autoridades indianas, y, finalmente, la situación de hecho que llevó en algunas ocasiones a los Oficiales Reales a desempeñar funciones al margen de las tareas puramente hacendísticas.

NEGLIGENCIAS

Entrando ya a examinar el aspecto de la aplicación del Derecho, encontramos testimonios desconsoladores. "Se puede mal entender desde tan lejos como desde aquí a España -escribe desde el Perú el Conde de Nieva en 1560- que no se guarda ordenanza ni las leyes del Reino ni la Iglesia es tan respetada y acatada como sería monester" (8). El Virrey de Nueva España D. Antonio de Mendoza escribe a su sucesor que ponga mucho cuidado en la aplicación del Derecho "porque aunque está bien ordenado, ejercítase muy mal" (9). Por su parte el P. Remesal cuenta que a los principios de la población, como muchos mandatos del Rey no eran a gusto para obedecerlos, ponían los gobernadores inconvenientes voluntarios, "que su Majestad había sido informado sin estruendo, y con esto besando sus Cédulas y poniéndolas mil veces sobre su cabeza, como de su

Veces y la mala fe, otras, de los funcionarios fiscales; el desmedido celo por mantener y aún aumentar sus prerrogativas las distintas autoridades indianas, y, finalmente, la situación de hecho que llevó en algunas ocasiones a los Oficiales Reales a desempeñar funciones al margen de las tareas puramente hacendísticas.

NEGLIGENCIAS

Entrando ya a examinar el aspecto de la aplicación del Derecho, encontramos testimonios desconsoladores. "Se puede mal entender desde tan lejos como desde aquí a España -escribe desde el Perú el Conde de Nieva en 1560- que no se guarda ordenanza ni las leyes del Reino ni la Iglesia es tan respetada y acatada como sería monester" (8). El Virrey de Nueva España D. Antonio de Mendoza escribe a su sucesor que ponga mucho cuidado en la aplicación del Derecho "porque aunque está bien ordenado, ejerceítase muy mal" (9). Por su parte el P. Remesal cuenta que a los principios de la población, como muchos mandatos del Rey no eran a gusto para obedecerlos, ponían los gobernadores inconvenientes voluntarios, "que su Majestad había sido informado aliaiestramente, y con esto besando sus Cédulas y poniéndolas mil veces sobre su cabeza, como de su

Rey y señor natural, ninguna era obedecida, ni servían de nada, porque cuando venía la sobrecarta, ya se había acabado la ocasión» (10). El Fiscal de la Audiencia de Charcas, también se queja de incumplimiento de las Ordenanzas (11).

Una buena parte de este incumplimiento de las leyes, tenía por causa muchas veces, en materia de Hacienda, la negligencia de los Oficiales Reales. Así vemos que abundan en el siglo XVI las quejas de retraso en la recaudación de los impuestos, porque «como viven los Oficiales Reales con los deudores, nunca les faltan prendas de todo género y embarases que se opongan a esta obligación. Solo en suante a los quintos no es necesaria esta diligencia respecto de que las partes tienen cuidado por lo que les toca» (12). También abundan en este sentido las quejas de retrasos en el envío del oro y plata a los puertos donde han de ser embarcados con destino a España, especialmente en las Cajas del Virreinato del Perú y también de que no se cumple la obligación de enviar periódicamente un tanteo de los ingresos habidos en cada Caja al Consejo de Indias (13).

Otro de los aspectos muy descuidados por los Oficiales Reales era la obligación señalada por las leyes de asistir ellos personalmente a las operaciones mas importantes del Fisco. En lugar de ésto, en-

ciaban, sin causa justificada, a sus Tenientes. Tal ocurre de modo principal en las almonedas (14) y en las fundiciones (15).

Tampoco parece que las avaluaciones se desarrollaban con perfección. Una Cédula de 1535 señala que en la isla de Cuba estas operaciones se efectúan muchas veces de pié y aprisa, con lo que las mercancías son evaluadas en menos de lo que valen (16). También el Virrey de Nueva España Martínez Enríques dice en 1580 que halló tan mala orden en lo que se refiere en las avaluaciones en Veracruz, que tuvo él mismo que ponerlas en el orden que convenía (17); muestra de este desorden era el que las mercancías quedaban mucho tiempo sin evaluar aún después de haberse ido los navíos (18).

El orden en la contabilidad y en la dación de cuentas, también dejaba mucho que desear. En acuerdo de los Oficiales Reales de Venezuela del año 1564 señala : "hasta ahora en los Oficiales nuestros antecesores ha habido en los libros que han tenido gran ceguedad por haber hecho los cargos en diversos libros y partes" (19). En San Juan de Puerto Rico los Tercereros no asentaban las pagas que les hacía en la forma debida y así muchas veces volvían a pedir el pago de deudas ya cobradas (20). En cuanto a la dación de cuentas, y aún después de las famosas Orde-

nanzas de Mayo de 1554, las cosas dejaban mucho que desear. Ya hablamos de las quejas de distintos Virreyes y que condujeren en el siglo XVII a la creación de los Tribunales de Cuentas de las Indias. Es bastante significativo que, según cuenta SUAREZ DE FIGUEROA, al llegar en 1588 al cuarto Marqués de Cañete como Virrey del Perú, encontró que en aquellos territorios no se les había tomado cuenta a los Oficiales Reales hacía muchísimos años, ni se tenía mas cargo y data que las que ellos se hacían, "de manera que cobraban de quien les parecía y a quien les daba gusto pedían aguardar" (21).

Ya indicamos también la costumbre de acumular los oficios de Veeder, Fundidor, y Escribano de Minas. También era muy corriente el que los propietarios de estos oficios los desempeñaran por medio de tercero, aún cuando los sustitutos fueran muchas veces inhábiles. El resultado era el que reflejan las preguntas de la pesquisa secreta entablada por el Jefe de Residencia Salmerón en Castilla del Oro en el año 1526: "ha habido grandísimo desorden, porque muchos de los dichos Oficiales que han servido en dicho oficio (se refiere a la Escribanía de Minas) no eran escribanos de S.M. y eran incapaces e inhábiles para los ejercer y usar y han llevado muchas

derechos demasiados (fraude muy corriente cuando se cobra por arancel) y han puesto muy mal recaude en los Registros porque algunos de ellos queriéndose ir, han quemado y querido quemar y otros le han dejado por ahí perdidos en poder de quienes se los anteja, de donde se ha seguido que muchas personas particulares han guardado los dichos Registros los que tocan a su preposito y a sus pasiones y enemistades que tienen con personas en la tierra y otros no parecen ni se pueden haber razón de ellos, así en lo del oficio de Minas que toca a la Hacienda de S.M., como de otros negocios tocantes a particulares" (22).

Otras negligencias de los Oficiales Reales dejan de ser puramente tal ya que constituían el medio de sustraer cantidades pertenecientes al Real Erario: tales son, por ejemplo, el dejar de remitir a España la relación del oro que se metía a fundir y del que salía fundido (23) o de la costumbre - consagrada repetidamente en los preámbulos de las leyes - de tener dinero fuera del Arca de las Tres Llaves (24).

FRAUDES Y EXCESOS COMETIDOS POR LOS OFICIALES REALES.

El Virrey de Nueva España, Martín Henríquez, escribía al Conde de La Ceruña, su sucesor, que tuviera todo este asunto de la Real Hacienda muy debajo de la mano y lo mirara con mucho ojo, especial-

mente cuando los funcionarios estuvieran apartados, sin permitir nunca remisión en el envío anual de cuentas "porque - escribe - como traen toda aquella máquina entre sus manos y en las de cien escribidores que allí tienen, podrían hacer muchos males si no se vive con ellos sobre aviso (25). Rasón tenía el prudente Virrey, como los hechos vinieron a demostrar.

La abundante existencia de fraudes cometidos por los Oficiales Reales, se debían muchas veces a la insuficiencia del Salario, problema que se agudizaba en aquellas regiones en que el índice de vida era muy elevado. Ya hablamos del Factor de Lima Bernardino de Romani y los valiosos servicios prestados a la Corona; el Memorial que eleva a la Corte no puede ser mas desconsolador en ese punto (26). El Tesorero de Castilla del Oro escribe en 1515 que ha cobrado 20.000 maravedises cuando en realidad necesitaba para poder subsistir 10.000 mas (27). En 1561 escribe el nuevo Factor de Chile que el Contador ha dejado su oficio por no poderse sustentar con el salario (28). Especialmente abundan las quejas de estos funcionarios a partir de la aplicación de las leyes nuevas de 1542-43, que ordenaban les fueran quitados los indios que estuvieran bajo su encomienda. No parece muy exagerada la frase del Contador de

Lima, Juan de Cáceres, cuando se quejaba en 1549 de que "el salario del oficio no hace nada" (29). Tenemos el testimonio del enviado especial Puertecarretero que escribía en 1557 que con los 30.000 ducados de sueldo que tenía "es tan imposible vivir como con ciento en España" (30).

Los Oficiales Reales acudieron desde el primer momento a procurarse el dinero que necesitaban para su subsistencia, mediante la realización de trates comerciales. Existe en este punto una queja constante de la Corona y de los órganos fiscalizadores a todo lo largo del siglo XVI, y ya vimos cómo hubo que llegar a imponerse la pena capital - al menos en el papel - para cortar esta fuente constante de abusos. Si para estos trates no tenían suficiente dinero, acudían a los fondos reales, y para no quedar en descubierta, retrasaban lo mas posible los envíos de oro a la Península. La actividad en este sentido no se limitaba a tener navíos propios entre los distintos puertos americanos (31), sino también a granjerías tales como haciendas de ganado, minas, etc. (32).

Las Instrucciones para tomar cuentas a los Oficiales Reales y el formulario de las pesquisas secretas nos ofrecen abundante catálogo de fraudes en materias de Hacienda, por ejemplo : librar antes de tiempo los salarios y retrasar el envío de ese dine-

re a España; pagar con oro de menes ley del que han recibido de la Fundición; exigir de los mercaderes que devolvieran los préstamos concedidos por el Fisco en mercaderías y a muy bajo precio, con lo que ellos ganaban una buena suma de maravedises; alterar algunas veces a su antojo las avaluaciones de mercaderías, según conviniera a sus tratos comerciales; comprar mercancías reales cuando había abundancia, vendiéndolas en los tiempos de mejor precio y cobrando su importe en las Fundiciones; en algunos casos mercancías prohibidas, que habían de quedar legalmente en comiso, eran avaluadas y se les cobraba únicamente el derecho de almojarifazgo como si vinieran en Registro; en otros, se dejaba salir mercancías de Indias sin pagar ese derecho, etc. etc. Especialmente las alteraciones del valor de los metales les facilitaba la realización de operaciones fraudulentas de las cuales existen numerosos testimonios. En algunos casos concretos hubo fraudes notables como: En 1537 el Fiscal Villalobos se querrela contra Pizarro, Almagre, y los Oficiales Reales, acusándoles entre otros muchos fraudes y cohechos, haberse repartido tres millones, y los Oficiales Reales han callado por la parte de ganancias que les tocaban (33), y en 1542 escribía Vaca de Castro que en su visita a Cuzco encontró en las arcas barras de estaño en lugar de plata (34).

El papel preponderante y las numerosas atribuciones concedidas a los Oficiales Reales facilitó también la comisión de numerosas actos despóticos de estos funcionarios. Herrera escribe en sus Décadas que "los Oficiales de la Real Hacienda fueron siempre impertunes y molestos a los súbditos de aquellos reinos de las Indias y los que mayor necesidad han tenido de ser corregidos" (35). "El juicio es quizá un poco duro, pero no cabe dudar que es verídico en parte. Una Real Cédula de 1572 se queja de que los Oficiales abusan de la jurisdicción concedida, enviando fuera de las cinco leguas alrededor de Méjico a ejecutores con varas de justicia que hacen vejación y molestia a los naturales (36). SOLÓRZANO (37) cuenta que los de Lima empezaron a crear Alguacil propio, alegando que los de las Audiencias retrasaban la ejecución por no cobrar derechos, dándole título el 7 de junio de 1531; también nombraron Portero con salario, lo que originó una reprensión por Cédula de 23 de Septiembre de 1565, y en la Sala de Fundación pusieron des el con las Armas Reales levantado sobre unas gradas, se oler de que los Virreyes Presidentes de las Audiencias solían ir algunas veces por allí. El juicio que el insigne jurista hace de estos funcionarios es aún quizás más duro que el que encontramos en Herrera (38).

Otro aspecto de estos abusos era el cohecho con las personas que careciendo de facultades para ir en las expediciones militares, tenían verdadero empeño en ir en ellas con afán de lucro, cosa que se obtenía con bastante facilidad, prometiéndole a estos funcionarios a cambio de su ayuda para obtener el permiso la mitad de lo que ganaban en las entradas (39). Aprovechaban las fundiciones para cobrar a sus deudores se celer de deudas reales; si el deudor no tenía bastante dinero cobraban por entero lo suyo y lo del Rey quedaba en deuda (40). También en muchos casos utilizaban en beneficio propio los indios puestos en la Corona Real, aprovechándose de ellos como si fueran propios (41). En algunos casos llegó incluso a realizarse informaciones oficiales para castigar la conducta escandalosa de los Oficiales Reales (42).

INTROMISIONES DE LOS ORGANOS DE JUSTICIA Y DE GOBIERNO

Ya estudiamos en su lugar correspondiente la participación legalmente autorizada de los órganos de justicia en materia de Hacienda que en su conjunto se dirigía a establecer una garantía de los intereses del Rey y de los particulares frente a posibles desmanes del Fisco. Sin embargo, en la realidad se tomaron muchas veces atribuciones que no les correspondía. Este ocurrió de modo principal en lo que

se refiere a los pleitos fiscales, cuya vista y resolución fué concedida, como dijimos, con carácter autónomo a los Oficiales Reales. Era muy lógico en una época en que todos cuidaban celosamente de sus privilegios y prerrogativas, los miembros de la Audiencia miraran con malos ojos esta merma de sus atribuciones. Una Real Cédula de 12 de enero de 1576 se queja a la Audiencia de los Reyes de que no prestan ayuda a los Oficiales Reales en las causas del Fisco, saltándole los preses y revocando cuanto prevén en la visita a los navíos, llegando en algunas ocasiones a mandarles prender con mucha nota por cosas de poca importancia sin atención a que son Ministros del Rey; se le ordena que no se entremetan en cosas de la Hacienda y den a los Oficiales Reales todo favor y ayuda (43). En términos parecidos vuelve a ser reiterada la orden al año siguiente (44).

Encontramos también con bastante frecuencia quejas de cohecho por parte de los órganos de justicia con los mercaderes, a los que protegen la evasión fiscal. Esto era especialmente notable en la etapa anterior a la concesión de jurisdicción a los Oficiales Reales y precisamente una larga serie de abusos de esta índole registrados por los Oficiales Reales en su correspondencia con la Metrópoli, la

que llevé esta concesión (43). Aún después que se le quitó la jurisdicción, me centraron quejas de cohecho. El 30 de agosto de 1560 escribía el Virrey Conde de Nieva que se habían saltado de acuerdo con los Oficiales Reales, a muchos mercaderes extranjeros precia fianza "porque supimos que los Ministros de Justicia de este reino cohechaban cada día a estos extranjeros muchas sumas de oro y plata porque disimularan con ellos" (46).

Ya habíamos en otro lugar de las fricciones en las visitas a los navíos, por cuestión de preeminencia. También se produjeron intromisiones en el nombramiento de los Oficiales menores del Fisco (47). No faltaron tampoco, como ocurría en todas las esferas de la administración indiana, excesos de atribuciones; recuérdese la queja del Monarca cuando la Audiencia de Nueva España disminuyó por propia voluntad, sin consultar, la tasa de los tributos que pagaban los indios puestos en la Córdena Real (48).

En cuanto a los órganos de gobierno, las principales extralimitaciones que se registran, se refieren a la materia de libranzas. Como decía, no sin motivo, el Conde Nieva "ser Virrey sin poder librar, mejor oficio es el de un Corregidor" (49). El rígido criterio legal de exigir autorización expresa para cualquier libranza que se hiciera sobre la Hacienda

era ocasión de continuas infracciones por parte de los gobernantes, imbuídos de un alto concepto de su cargo. En algunos casos, como el del primer Marqués de Cañete, el exceso de atribuciones en materia de Hacienda fué máximo (libranzas injustificadas, concesión de nuevos salarios, remisión de deudas, concesión de toda clase de mercedes, retención de pleitos, etc.). Puede decirse que en materia de libranzas los abusos fueron generales, alcanzando incluso al Virrey Toledo (50). En realidad, las garantías que existían para salvaguardar el cumplimiento de la ley en esta materia, carecían de eficacia muchas veces. Según decía una Cédula dirigida a los Oficiales Reales de Cartagena en 1565, muchas veces se dejaba transcurrir largo plazo después de la residencia de algún gobernante y luego era ya imposible hacerle cargo de las libranzas injustas (51). Y en cuanto a los asuerdos de Hacienda, trámite obligado para los gastos extraordinarios, es bastante significativo lo que escribe el Marqués de Guadalupe en su relación de Gobierno en pleno siglo XVII: "hasta ahora, el modo mas ordinario de la resolución de ellos ha sido remitirle a la disposición del que gobierna por ser dificultoso el acertar en cosas tan graves, corriendo por muchas manos, y queriéndolas reducir a particularidades impracticables, cuando aprieta la necesidad y el peligro" (52).

Por último señalaremos algún otro abuso registrado en las fuentes, como por ejemplo el intervenir el Gobernador Pedrarias en las pujas de las almonedas, con lo que coartaba la liberación de los que asistían a ellas (53); el nombrar algún dende suyo para los cargos del Alisco (54); el tomar para sí o dar a otro los derechos de monedaje (55) y posiblemente, hacer algún repartimiento de indios de la Corona Real (56).

PARTICIPACION DE LOS OFICIALES REALES EN EL GOBIERNO DE LAS INDIAS.

Al hablar de las obligaciones de los Oficiales Reales, señalábamos como una de las más características la de dedicación plena al desempeño de sus oficios. Esta obligación positiva era salvaguardada mediante la prohibición absoluta de dedicarse a cualquier otra actividad, bien fuera comercial, bien se refiera a las funciones de gobierno. En este último punto señalábamos como única excepción su nombramiento para el cargo de Regidor en el lugar de residencia.

Sin embargo, las fuentes nos muestran una actividad del Oficial Real en el gobierno de las Indias, de modo preponderante en la primera mitad del siglo XVI. Es éste un aspecto interesante, al que

pensamos dedicar en fecha próxima un trabajo aparte pero del cual convenirá aquí, dar una visión general.

Prescindiendo de la participación indirecta que las funciones administrativas del Fisco suponen (v. gr.: rescates, repartimientos, gastos públicos, etc.) encontramos varias funciones políticas, unas veladas, otras de mayor importancia; parte debidas a la iniciativa real, parte fruto de las circunstancias o del exceso de atribuciones del Oficial Real.

En primer lugar, en las leyes se señala a los Oficiales Reales una misión informativa dirigida de modo especial al problema del buen tratamiento de los indios (57). Otra de las misiones veladas del Oficial Real es servir de freno a los excesos de los conquistadores, los cuales tienen obligación de llevarlos consigo (58). En algún caso los Oficiales Reales reciben facultades políticas muy importantes. El caso mas destacado es el de los Oficiales de Castilla del Oro, que reciben con su nombramiento la facultad de decidir junto con el Gobernador en todos los asuntos de gobierno del territorio (59). Este caso excepcional tuvo que cesar a los pocos años ante los numerosos abusos cometidos (60).

Otros casos de función política fueron debidos a las condiciones personales de algunos de los Ofi-

ciales Reales o a las circunstancias de hecho. Respecto al primero, cabe señalar la misión del Tesorero de La Española, Pasamonte, frente al Virrey Diego Colón y el Adelantado de Puerto Rico Ponce de León. En cuanto a las circunstancias de hecho, señalaremos la intervención de los Oficiales Reales en los conflictos jurisdiccionales planteados en América Central entre los distintos caudillos (61), el Gobierno de los Oficiales Real de la Nueva España y numerosas actuaciones aisladas, como la del Tesorero del Cusco, Manuel del Espinar, en las guerras civiles del Perú (62) o la de los Oficiales de Cabo de la Vela frente al Adelantado Luis de Lugo ya indicada (63), o la actuación como corregidor, con facultad para tomar residencia a las justicias ordinarias, desempeñada por el Factor de Lima Bernardino de Romání, por nombramiento de la Audiencia de los Reyes (64).

CONCLUSIONES

Llegados al fin de nuestra tarea resumiremos nuestro trabajo en las siguientes conclusiones:

1ª.- La buena administración de la Hacienda fué una de las primeras y constantes preocupaciones de la Corona.

2ª.- El sistema administrativo implantado en Indias fué tomado del existente para el régimen económico de las Armadas de Castilla, y se diferenciaba profundamente del sistema territorial castellano. El sistema vigente en las Armadas tomó especiales características en Indias al hacerse un sistema fijo y territorial.

3ª.- Las características esenciales del sistema administrativo de la Hacienda indiana son las siguientes :

a).- Unidad del objeto (confusión entre bienes privados del Monarca y Hacienda Real; existencia de una sola esfera administrativa, faltando en absoluto una administración fiscal autónoma para cada demarcación territorial de cierta importancia, sea provincia, gobernación o virreinato). Única excepción, la Hacienda municipal.

b).- Centralización respecto a los órganos superiores de la Administración Central (Consejo de In-

días, Casa de Contratación durante un cierto tiempo) pero autonomía completa entre las distintas Cajas o Distritos fiscales.

c)- La actuación colegiada de los órganos de la Administración (consejo de Indias, Casa de la Contratación, Oficiales Reales). La actuación de estos últimos se basa en los principios de administración conjunta y responsabilidad solidaria.

d)- Homogeneidad del sistema facilitada por la centralización, el uso de formularismos y la inexistencia de instituciones locales con suficiente personalidad en los derechos indígenas.

e)- Establecimiento de un minucioso sistema de garantías en gran parte asignado a las Audiencias, para controlar la actuación de los Oficiales Reales.

4ª.- Desde el punto de vista de su eficacia, el sistema pudo acoplarse desde el primer momento a la marcha de la conquista y colonización de los territorios, gracias a la autonomía de las Cajas. El éxito indudable del sistema en este punto contribuyó al respeto profundo que existía hacia la Institución Real.

5ª.- Los fallos mas notables del sistema fueron los referentes a las medidas de garantía respecto a las cuales no hubo criterio fijo, hasta media-

dos del siglo XVI. y que funcionó energicamente, en especial en lo referente a la rendición de cuentas, y que dió origen a abundantes fraudes. En realidad este problema perduró durante siglos, aún cuando se crearan en 1605 los Tribunales de cuentas de Lima, México y Santa Fé.

6ª.- Los Oficiales Reales constituyeron un elemento de orden en la etapa siempre caótica de la conquista y fueron los mas celosos defensores de los derechos de Rey.

7ª.- El sistema fué conocido y aplicado casi con plena eficacia y las desviaciones recogidas en nuestro trabajo no constituyen una desvirtuación de esta última conclusión.

NOTAS AL CAPITULO QUINTO

- (1).-- Suele consignarse esta obligación en las Ordenanzas de Oficiales Reales. En la Rec. Ind. (L. VIII, T. VII, ley 30) se recoge el texto de la Ordenanza 15 de 1579. ESPINO DE HINOJOSA, al comentar las Ordenanzas promulgadas por el Marqués de Cañete estableciendo el Consejo de Hacienda del Perú, en las que aparece señalada esta obligación de tener un "Libro de Cédulas", señala que no existía tal costumbre en la Contaduría Mayor de Castilla "teniendo que buscar en más de una ocasión en otros organismos las órdenes correspondientes al suyo", ("Creación del Consejo de Hacienda del Perú...", 112). El Marqués de Cañete lo debió tomar de las Ordenanzas de Oficiales Reales.
- (2).-- En un Acuerdo de 23 marzo 1838, se habla de que "dicha cédula se asentó en los libros de S.M." ("Orgs. de la Hac. en Venezuela", 10).
- (3).-- Vid. el extracto de la contestación del Monarca, de fecha 1 diciembre 1573, inserta en "Gazophilium", L.I, C. XXX).
- (4).-- Ordenanzas del Virrey Toledo a los Oficiales Reales del Camco de fecha 28 junio 1572 (LEVILLIER; "Gob. Perú", VIII, 1-13).
- (5).-- BELTRAN Y ROZPIDE; "Memorias Virreyes Perú", I, 185 y 211.
- (6).-- "Relación Virreyes Perú...", 98.
- (7).-- Rs. Cd. 27 febrero 1620, 16 octubre 1624 y 16 enero 1628, recogidas en Rec. Ind., L.VIII, T. VII, leyes 31 y 32.
- (8).-- Carta de 22 mayo 1660 (LEVILLIER; "Gob. Perú", I, 358).
- (9).-- "Memorias... Virreyes N. España", 232.

- (10).-- "Historia de Chiapa", l. 3, c. 21, m. 7, cit. en este punto en "Gazophilacium", L. I, C. XIX).
- (11).-- LEVILLIER; And. de Charcos. Corresp. de Presidentes y Oidores", L. I. Ex 25.
- (12).-- JUAN LANT; "In Novo Orbe", L. VIII, C. 22, cit. en "Gazophilacium", L. I, C. XXV.
- (13).-- Vid. R.C. 9 nov. 1528 general para las Indias, en "Col. docs. inéd. Ult." IX, 280 y Cedula de Puga, p. 23.
- (14).-- Vid. la significación Ósula dirigida a los Oficiales Reales de Nueva España, en Cedula de Puga, 228.
- (15).-- En R.C. de 19 junio 1519, el Rey se quejaba a Pedrarias Dávila de que el Tesorero y Contador de Castilla del Oro enviaban sus Tenientes a las fundiciones. Como éstos no tenían suficiencia para hacer el reparte del oro y demás operaciones de la fundición, tenía que hacerlo el Veedor, aunque ello no fuera cosa que le atañera. El Rey ordena a Pedrarias remediar la situación. (ALVAREZ RUBIANO; "Pedrarias Dávila", Apéndices, 491). Tampoco el escribano de minas era muy asiduo en asistir a las almonedas y fundiciones. (R.C. de 29 de junio de 1552 a Virrey de Nueva España, en Puga, 166, f. 125).
- (16).-- R.C. a Oficiales Reales de Cuba de 27 mayo 1535 ("Col. docs. inéd. Ult.", I, 271.)
- (17).-- "Memorias que dejaron los Virreyes de N. España", 247.
- (18).-- R.C. 16 abril 1550 al Virrey de Nueva España. (Cedula de Puga, 69, f. 176 v.).
- (19).-- "Orígenes de la Hacienda en Venezuela", p. 23.
- (20).-- R.C. de 16 mayo 1527 a Oficiales Reales de San Juan, remediando este desorden ("Col. docs. inéd. Ult.", IX, 280).
- (21).-- "Hechos de D. García Hurtado de Mendoza, 4.º Marqués de Cañete", p. 144.
- (22).-- Vid. preguntas XLV y XLVI, en ALVAREZ RUBIANO; "Pedrarias Dávila", Apéndices, 596.

- (23).-- Pregunta XXXIX de la pesquisa secreta del Juez de Residencia de Castilla del Oro, Salmerón. (ALVAREZ HUBIANO: "Pedrarias Dávila", Apéndices, 595).
- (24).-- Vid. R.C. 7 julio 1536 a Oficiales Reales de Nueva España. (Cedulario de Puga, 335).
- (25).-- "Instrucciones que dejaron... los Virreyes de Nueva España", 347.
- (26).-- Memorial e información de la Audiencia que le acompaña del año 1561, en A.G.I., Lima, 120. Los 90.000 maravedises no bastaban más que para medio año. Debía doce mil pesos.
- (27).-- Carta al Rey de 23 de septiembre de 1515 (ALVAREZ HUBIANO: "Pedrarias Dávila". Apéndices, 436).
- (28).-- Carta de 10 de octubre 1561 (A.G.I., Lima, 120).
- (29).-- Vid. carta de La Gasca, 21 septiembre 1549, en LEVILLIER: "Gobernantes del Perú", I, 229.
- (30).-- LEVILLIER: "Gobernantes del Perú", II, 459.
- (31).-- Relación del Tesorero de Castilla del Oro de 18 de enero de 1516 (ALVAREZ HUBIANO: "Pedrarias Dávila", 44), quejándose de los tratos realizados por el Factor.
- (32).-- R.C. 21 febrero 1591 al Virrey del Perú, D. García Hurtado de Mendoza, quejándose de los Oficiales Reales de Potosí, encargándole castigue especialmente al tesorero Diego de Robles (Inscrita en SUAREZ DE FIGUEROA: "Hechos de D. García...", 322). En carta de 16 abril 1593 escribe el Virrey del Perú D. Luis de Velasco ha mandado pregonar que los Oficiales Reales no labren minas, conforme lo disponían reales cédulas (LEVILLIER: "Gobernantes del Perú", XIV, 109).
- (33).-- LEVILLIER: "Gobernantes del Perú", II, 84.
- (34).-- Carta desde Cuzco de 24 noviembre 1542 (LEVILLIER: "Gobernantes del Perú", I, 70.)
- (35).-- Déc. 8', L. 7, n.º 18.
- (36).-- R.C. a Oficiales Reales de México de 18 mayo 1572 (Cedulario de Encinas, III, 294)

(37).--"Política Indiana", L. VI, C. XV.

(38).--"Es propio de hombres de semejante conpaciencia ser siempre soberbios y de mala condición y dura serviz y afectar honores, preeminencias y precedencias de lugares altos y superiores, mucho más que el cumplimiento y fiel puntual observación de sus officios y obligaciones (-Pol. Ind. L. VI, C. XV.)

(39).--Pasquisa secreta del Juez de Residencia Salmerón, pregunta XIII (ALVAREZ HUBIANO: "Pedrarias Davila", Apéndices, 589)

(40).--Instrucciones a Gil Dávila para tomar cuentas a los Oficiales de Castilla del Oro, de 15 enero 1519 y Relación del Tesorero Lapuente de 15 enero 1516 (en ALVAREZ HUBIANO: "Pedrarias Dávila", Apéndices, pgs. 461 y 441.). Esta arbitrariedad era fácil, segun Lapuente porque se cobraba por los concecimientos que daban las partes y no por las copias del Contador. Los mercederos no podían cobrar sus deudas hasta que el Factor había cobrado las suyas y las del Rey y el resultado era un gran descontento en la colonia.

(41).--Escribe La Gasca el 2 de mayo de 1549 que el Factor de Nueva Toledo está en Arequipa pretendiendo le sirvan los indios de Chucuito, que pertenecen al Rey. El entonces gobernante escribe: "No se ha de consentir la sultura que hasta aqui se ha tenido en usar los Oficiales Reales y aprovecharse de los indios de S.M. más que si fueran propios dellos mismos" (LEVILLIER: "Gobernantes del Perú" 184-85)

(42).--Sobre pretendida falta de religiosidad e insultos cometidos contra un Obispo, en 1541 del Contador de la Isla de Cuba (A. G. I. Papeles de Justicia, leg. 1008 n.º 8, r.º. Otra referente al factor de dicha isla por perturbador de la paz entre los vecinos de Santiago en el mismo año (id. r.º 3)

(43).--R.C. 12 enero 1576 (Cedulario de Encinas, III, 288)

(44).--R. C. 28 junio 1577 (Cedulario de Encinas, III, 287); Ya en 3 de febrero de 1570 y luego en 4 de julio de dicho año (Cedulario de Encinas, III, 294) se le ordenaba al Virrey hiciera cumplir en este punto las Ordenanzas Reales.

(45).--Carta de los Oficiales Reales de Mexico, de 1.º agosto 1553 (-Epistolario Nueva España-, III, 180). R.C. a Oficiales Reales Nombre de Dios de 6 agosto 1571 (Cedulario de Encinas, III, 302)/ Carta del tesorero del Río de la Plata, Montalvo, al Rey, en 1551 (LEVILLIER: "Correspondencia oficiales Reales Río Plata").

- (46) .-LEVILLIER: "Gobernantes Perú", I, 365.
- (47) .-El Rey escribe en 1571 a los Oficiales Reales de Cartagena, informándoles de que ha despachado una Cédula a la Audiencia del Nuevo Reino para que no se entrometan a nombrar administradores de los tributos de los indios de la Real Audiencia en Mompox, quitando como han hecho, injustamente, los tenientes nombrados por los Oficiales Reales (AGI, leg. 1382, n° 1, r. 11)
- (48) .-R.C. de 3 octubre 1559 (Cedulario de Basinas Puga, 335, f. 211, v°)
- (49) .- Carta desde Lima de fecha 10 septiembre 1563 (LEVILLIER: "Gobernantes Perú", I, 340).
- (50) .- Vid la comisión que se dió al Licenciado Zamora y a su muerte al Licenciado Lupidana de Zapata para cobrar de los bienes de don Francisco de Toledo una crecida cantidad, que cobró de más de su sueldo (AGI, Contaduría, leg. 4)
- (51) .- R.C. 7 agosto 1565 (AGI, Contaduría, 1382, n° 1, r. 12)
- (52) .- "Relaciones que dejaron los Virreyes Perú", p. , cit. en "Gazophilacium", L. I, C. V, n° 23)
- (53) .-Cargo 21 de la Residencia de Salmerón, el año 1526 (ALVAREZ RUBIANO: "Pedrarias Dávila", Apéndice, 603)
- (54) .-Cargo 23 contra el Gobernador Pedrarias. Vid. nota anterior.
- (55) .-R.C. septiembre 1565 ("Copulata", V, 226)
- (56) .-En las Ordenanzas que dió el Virrey Toledo a los Oficiales Reales del Cuzco en 1571 les ordenaba averiguaran si algún Gobernador había hecho repartimientos de esta clase y si fuera cierto, dieran aviso al Fiscal de la Audiencia.
- (57) .-Susle constituir uno de los acostumbrados capítulos de las Instrucciones que se dan a los Oficiales Reales: "Avisé de lo que conviniera al bien de la tierra y población suya y si se cumple lo proveído (en otras se dice "cuide se cumpla lo proveído") sobre el buen tratamiento de los indios y su conversión y las cosas del servicio de Nuestro Señor y culto divino" (Inst. del primer tesorero de N. España, Estrada, octubre 1522, en "Col. docs. ineds. Ult.", IX, 160)
- (58) Vid Capitulación de Pizarro de 26 julio 1529 ("Col. docs. ineds. Ult.", IX, 229) .

- (59) Apéndice VIII.
- (60) Apéndice IX.
- (61) Relación del tesorero de Honduras, Rodrigo de Castillo,
(ALVAREZ RUBIANO: "Pedrarias Dávila", Apéndices, 661-5)
- (62) Carta de Casco al Consejo de Indias de 8 noviembre 1549
(LEVILLIER: "Gobernantes Perú", I, 239.
- (63) Vid página .
- (64) Provisión de 23 enero 1553 y 6 mayo 1553 (AGI, Lima, 120)

BIBLIOGRAFIA

BIBLIOGRAFIA

I) Sobre Hacienda indiana.

AITON, A. S.: "La Hacienda en Nueva España bajo el primer Virrey".- "The Hispanic America Historical Review" vol. VI, nº 4, Nov. 1926.

BOLET MONAGAS, Julio.- "Reseña histórica de la Real Hacienda en Venezuela".- "Bol. Cámara Comercio Caracas", nº 213 y ss.

ESCALONA AGUIERO, Gaspar.- "Geophilacium regium perubicum".- 3ª ed. Madrid, 1775.

ESPEJO DE HINOJOSA, Cristóbal; "La creación del Consejo de Hacienda en el Perú y la intervención de la Contaduría Mayor en los asuntos de Indias".- "Bol. Sociedad Castellana Excursiones", tom. III, 1907-1908, págs. 101-3.

FONSECA, Fabián de, -y URRUTIA, Carlos de; "Historia General de la Real Hacienda".- México, 1848-53.- 6 vols.

GARCIA CHUECOS; "Hacienda colonial venezolana".- "El Universal" 30 marzo, 31 abril, 11 mayo, 1º de junio 1939.

GARCIA GUIOT, Silvano; "Rodrigo de Albornoz Contador Real de la Nueva España".- México, 1943.

MARINE, C. H.- "Los libros Mayores de los Tesoreros Reales de Hispano-América en el siglo XVI".- Bol. de la Cámara de Comercio, 2ª época, IX, 729-55, Caracas, Mayo 1939.-

- HARING, C.H.:** "Early Spanish Colonial Exchequer".- En "American Historical Review", 23 XXIII, julio 1918, 779-796, publicado en el "Boletín de la Cámara de Comercio de Caracas", 2ª época, IX, 1920, págs. 708-710 con el título "La Real Hacienda en el Régimen Colonial de España".
- LEVILLIER, Roberto:** "El Oficial Real de Hacienda del siglo XVI"- Estudio preliminar al primer volumen de la "Correspondencia de los Oficiales Reales de Hacienda del Río de la Plata", Madrid, 1915 y publicado posteriormente en "La Reconstrucción del pasado colonial", Buenos Aires, 1935.
- MANIAU TORQUEMADA, Joaquín:** "Compendio de la Historia de la Real Hacienda de Nueva España, escrita en el año de 1794", México 1914. Notas y Comentarios de Alberto María Carreño.
- OTS CAPDEQUI, José María:** "El tributo y la mita en la época colonial".- "Revista Indias", 1940, agosto, págs. 96-117.
- PENA CAMARA, José de la:** "El tributo: sus orígenes, su implantación en Nueva España".- Sevilla, 1934.
- ROMERO, Emilio:** "Historia económica y financiera del Perú (Alto Perú y Virreinato)"- Tomo I, Lima, 1937.
- SOLORZANO PEREIRA, Juan de:** "Política indiana". Madrid, 1934.
- UGARTE, César A.:** "La Hacienda pública colonial".- "Mercurio Peruano", Tomo XV, 1925.
- WYLLIE, Robert Crichton:** "México. Noticias sobre su Hacienda pública bajo el gobierno español y después de su independencia".- México, 1945.

II) Sobre Hacienda española.

- ALBA, Duque de:** "La Hacienda Real de España en el siglo XVI".- "Bol. de la Real Academia de la Historia" XXI, 1923, págs. 146-84.
- BONNAL DE GANQUE, E.:** "Los impuestos y la Hacienda en España desde Felipe III a Carlos II".- "La España Moderna", 1897, n.º 89, febrero, págs. 113-134.
- CARANDE, Ramón:** "Las llevaderas alcabalas".- En "Mon. y Crédito", n.º 13.- Madrid, 1945.

- CASAN, J.: "La Hacienda en los tiempos de Isabel I y Carlos I" "Rev. Contemporánea", CXXXIV, 1907.
- CEDILLO, Conde de: "Contribuciones e impuestos en León y Castilla durante la Edad Media".- Madrid, 1896.
- COS GAYON, Fernando: "Historia jurídica del patrimonio real".- Madrid, 1881.
- ESPEJO DE HINOJOSA, Cristóbal: "Antecedentes de la Contaduría Mayor de Cuentas hasta las Ordenanzas de 1478".- En "Bol. Sdad. Castellana Excursiones", Valladolid, 1910.- Vid. también Tome V, 1911-1912.
- ESPEJO DE HINOJOSA, Cristóbal: "Sobre organización de la Hacienda española en el siglo XVI".- En "Cultura Española".- Madrid, 1907, págs. 403-28 y 687-704.
- ESPEJO DE HINOJOSA, Cristóbal: "Enumeración y atribuciones de algunas Juntas de la Administración española desde el siglo XVI hasta 1800".- "Rev. de Bibliotecas, Arch. y Museos", VIII, Madrid, 1931, págs. 325-362.
- ESPEJO DE HINOJOSA, Cristóbal: "El Consejo de Hacienda durante la presidencia del Marqués de Pozas".- En "Asociación Española Progreso Ciencias", Granada-Madrid, 1924.
- ESPEJO DE HINOJOSA, Cristóbal: "Antonio de Fonseca y de Ayala, Señor de Casa y Alaejos, Contador Mayor de Hacienda".- "Rev. Bibl. Arch. y Museos", 1931, pag. 285-302.
- GALLARDO FERNANDEZ, F.: "Origen, progreso y estado de las Rentas de la Corona de España, su Gobierno y Administración".- Madrid, 1805 y ss. 7 vols.
- GOUNON-LOUBENS, M. J.: "Essai sur l'Administration de la Castille au XVI^e siècle".- Paris, 1860.
- LAIGLESIA, Francisco de: "Organización de la Hacienda en la primera mitad del siglo XVI".- En "Estudios Históricos".- Madrid, 1906.
- MEMOIRES et considerations sur le commerce et les finances d'Espagne.- Amsterdam, 1751.- 2 vols.
- PACHECO Y LEYVA, E.: "Relaciones Vaticanas de la Hacienda Española del siglo XVI".- Trabajos de la Escuela española de Arqueología e Historia de Roma. IV, 1918.
- RIFIA, Juan de la: "Práctica de la Administración y cobranza de las rentas Reales".- Madrid, 1678; La edición manejada por nosotros en 6 vols. Madrid, 1775.

III) Fuentes legislativas impresas.

- ALTOLAQUIRRE Y BUVALE, Angel;** - "Manuscrito de la Gobernación espiritual de las Indias", en "Col. de Docs. Inéd. de Ult.", T. XX-XXV. El último de ellos contiene la legislación de Hacienda anterior al año 1870.
- ALVAREZ RUBIANO, Angel;** "Pedrarias Dávila". Madrid, 1944. Los Apéndices muy numerosos de esta obra, contienen la legislación de Castilla del Oro, en el primer de cenio.
- CHACON CALVO, José María;** "Cedulario cubano" en "Col. de Docs. inéd. ~~de Ult.~~ para la Historia de Iberoamérica". Madrid, 1920.
- ENCINAS, Diego ;** "Cedulario Indiano". Madrid, 1897. Hemos manejado el ejemplar existente en la Biblioteca Nacional, pero actualmente está en curso la publicación de una nueva edición en 5 volúmenes bajo la dirección de ALFONSO GARCIA GALLO.
- FABIE, A. M. ;** "Ensayo histórico de la legislación es. añole en sus Estados de Ultramar", Madrid 1896. Este ensayo va al frente del volumen VI de la "Col. de Docs. inéd. de Ult." I de los puramente legislativos recogidos en esta colección y que abarca el tomo citado y los que figuran en noveno y décimo lugar.
- HERNAIZ ;** "Colección de Bulas, Breves y otros documentos relativos a la Iglesia de América y Filipinas" 8 vols. Bruselas 1879.
- LEVENE, Ricardo;** "Cedulario de Buenos Aires" La Plata, 1929.
- LEVILLIER, Ricardo;** "Ordenanzas del Virrey D. Francisco de Toledo", Madrid, 1929.

- MALDONADO DE TORRES**; "Cedulario de Charcas" en "Col. Torres Mendoza", tomo XVIII.
- MURO OREJON, Antonio**.- "Las leyes nuevas" (1542-1543). Reproducción de los ejemplares existentes en la Sección de Patronato del Archivo General de Indias, en "Anuario de Estudios Americanos", II, Sevilla, 1945, págs 811-835. Hay e tirada aparte.
- NAVARRETE, Martín Fernández de**; "Colección de los viajes y descubrimientos que hicieron por mar los españoles desde fines del siglo XV" Madrid, 1825, 5 tomos.
- PEREZ Y LOPEZ, Antonio Javier**; "Teatro de la legislación universal de España en Indias", Madrid, 1791-1794, 10 vols.
- PUGA, Vasco de** : "Provisiones, Cédulas e Instrucciones de su magestad... desde el año 1525 hasta este presente de 1543". Madrid, 1946. Consejo de la Hispanidad. Esta última edición se ha hecho tomando como base el original existente en la Biblioteca Nacional de la primera edición, en la que, como se sabe, no existe un orden cronológico. La edición anterior México, 1878, alteró el orden primitivo al agruparlas cronológicamente. En el texto damos la cita de ambas ediciones.
- "Recopilación de leyes de los reinos de Indias". Última edición realizada por el Consejo de la Hispanidad, Madrid, 1945.
- SERRANO SANZ** : "Cedulario de las provincias de Santa Marta y Cartagena de Indias". Tomo I en "Colección de libros y documentos referentes a la Historia de América", tomo XIV. Madrid, 1904-29.
- SERRANO SANZ** : "Preliminares del gobierno de Pedrarias Dávila en Castilla del Oro", en "Orígenes de la dominación española en América". Estudios históricos", I. Nueva Biblioteca de Autores Españoles, tomo XXV. Contiene un apéndice documental muy rico.
- TOMAS DE BALLESTEROS**; "Ordenanzas del Perú", Tomo I. Recogidas por D. Melchor de Navarro. Lima, 1752.
- ZAMORA Y CORONADO, J.M.**; "Biblioteca de legislación ultramarina" 6 vols. Madrid, 1844-46.

IV) Otras fuentes documentales impresas

- CARTAS de Indias**, publicadas por el Ministerio de Fomento. Madrid, 1877.
- COLECCION de documentos para la historia de San Luis de Potosí**, publicada por el licenciado Primo Feliciano Velázquez.
- COLECCION de documentos inéditos para la Historia de España**. 112 volúmenes. Madrid.
- COLECCION de documentos inéditos para la historia de las posesiones españolas de Ultramar**. 2.ª serie, publicada por la Real Academia de la Historia. 25 vols. Madrid.
- COLECCION general de documentos relativos a las islas Filipinas existentes en el Archivo de Indias de Sevilla**, publicada por la Compañía General de Tabacos de Filipinas. T. I, 1493-1518). Barcelona, 1918.
- COLECCION de las Memorias o relaciones que escribieron los Virreyes del Perú acerca del estado en que dejaban las cosas generales del Reyno**. Publicada por Beltrán y Róspide. Tomo I. Madrid, 1921.
- CUERVAS, MARIANO, S.J.**; "Cartas y otros documentos de Hernán Cortés recientemente descubiertos en el A.G.I." Sevilla, 1915.
- DOCUMENTOS inéditos para la historia de Tampico**. Siglos XVI y XVII. Rec. y prólogo de Joaquín Meade. México, 1935.
- DOCUMENTOS históricos del Perú en las épocas del coloniaje después de la conquista y de la independencia hasta el presente**. Coleccionados por M. de Gárcizola. 10 vols. Lima, 1863-67.
- LEVILLIER, ROBERTO**; "Papeles de Gobernadores de Tucumán en el siglo XVI". 2 vols. Madrid, 1920.
- LEVILLIER, ROBERTO**; "Papeles de los Gobernantes del Perú". 14 vols. Madrid, 1921 y ss.
- LEVILLIER, ROBERTO**; "Correspondencia de los Oficiales Reales del Río de la Plata del siglo XVI". Madrid, 1912.
- LEVILLIER, ROBERTO**; "Audiençia de Charcas. Correspondencia de Presidentes y oidores. El tomo I abarca los años 1561-1579. Madrid, 1921.
- LEVILLIER, ROBERTO**; "Antecedentes de política económica en el Río de

la Plata. Documentos originales de los siglos XVI al XIX, seleccionados en el Archivo de Indias de Sevilla.- Libro I. Regimen fiscal. Madrid, 1915, dos volúmenes.

MEMORIAS de los Virreyes que han gobernado el Perú durante el tiempo del coloniaje español. Lima, 1859. 6 vols

MONTOTO, SANTIAGO: "Documentos de Nueva España (1550-59)". En "Col. docs. inéd. para historia Ibero-América". Madrid.

"ORIGENES de la Hacienda en Venezuela" (primer libro de Acuerdos de los Oficiales Reales de aquella Gobernación, publicada por el Ministerio de Relaciones Exteriores). Caracas, 1942.

"RELACIONES de los Virreyes y Audiencias que han gobernado el Perú". Lima-Madrid, 1867-72.

REVISTA de Archivos y Bibliotecas Nacionales-. Lima, 1899. Contienen una abundante y rica documentación del siglo XVI.

TRONCOSO, JOSE DE PASO Y : "Epistolarie de la Nueva España". Mexico, 1943. 16 vols.

V) Bibliografía indirecta o secundaria

ALTAMIRA, RAFAEL: "La aprobación y confirmación de las leyes dadas por las autoridades coloniales españolas (siglos XVI y XVII). Homenaje al Doctor Ravignani. Buenos Aires, 1941.

ALTAMIRA, RAFAEL: "Los Cedularios como fuente histórica de la legislación indiana" en "Revista de Historia de América", XIX. México, junio, 1945.

ALVAREZ RUBIANO: "Pedrarias Dávila. Contribución al estudio de la figura del Gran Justador". Con numerosos apéndices. Madrid, 1944.

ANTUNEZ Y ACEVEDO, RAFAEL: "Memorias históricas sobre la legislación y gobierno del comercio de los españoles con sus colonias en las Indias Occidentales". Madrid, 1798.

- AVELLA VIVES, JOAQUIN: "Los Cabildos coloniales". "Revista de Ciencias Jurídicas y Sociales", t. XIV, XV, XVI y XVI. (1931-1932). Tesis doctoral.
- AYALA, MANUEL JOSE DE: "Diccionario de gobierno y legislación de Indias". Edición de Laudelino Moreno. Vol. VIII de la "Col. de docs. ineds. para la historia de Ibero-América".
- BRAVO UGARTE, JOSE: "Historia de México". Vol. II: "La Nueva España". México, 1941.
- CHEVALIER, FRANÇOIS: "Les municipalités indiennes en N. Espagne".
- ESQUIVEL ORRISON, TOMÁS: "Apuntes para la Historia del Derecho en México". México, 1937-39. 3 vols.
- FERNANDEZ DE OVIEDO, G.: "Historia general y natural de las Indias".
- GARRETÓN, T.: "Municipalidad colonial. Buenos Aires desde su fundación hasta el Gobierno de Lariz". Buenos Aires, 1938.
- GARCIA GALLO, ALFONSO: "Orígenes de la administración territorial en Indias". A. H. D. E., XV, 1944.
- GUTIERREZ ALVIZ, VAUSTINO: "Los bienes de difuntos en el Derecho indiano". Anales de la Universidad Hispalense. 1941-1942.
- HAMILTON, EARL H.: "American treasure and the price revolution in Spain, 1501-1560. Harvard. Economic Studies, XLIII, Cambridge, Massachusetts, 1934.
- HARING, CLARENCE HENRY: "Comercio y navegación entre España e Indias en tiempos de los Hapsburgos". Edición española. México, 1944.
- HARING, CLARENCE HENRY: "La producción americana de oro y plata en la primera mitad del siglo XVI". Boletín de la Cámara de Comercio de Caracas, segunda época, IX, 1920, pgs-745-78. Contiene un interesante cuadro de los valores monetarios de la América española durante la primera mitad del siglo XVI.
- HARING, CLARENCE HENRY: "El origen del Gobierno Real en las Indias españolas". Tir. aparte del "Boletín del Instituto de Investigaciones Históricas" de la Universidad de B. Aires. Año 1925.
- HERRERA, ANTONIO DE: "Historia general de los hechos de los castellanos". Ed. de Amberes, 1778.
- LAS CASA, FRAY BARTOLOME: "Historia de las Indias". Madrid, 1928. 3 vols.

- LEON PINELLO, ANTONIO DE:** "Tratado de Confirmaciones Reales". Bibl. Argentina de libros raros americanos". T. III. Fac. F. y Letras. Buenos Aires, 1922.
- LEVENE, RICARDO:** "Introducción a la Historia del Derecho Indiano". Buenos Aires, 1924.
- LEVILLIER, ROBERTO:** "Don Francisco de Toledo, supremo organizador del Perú". 2 vols (el segundo, de documentos). Madrid, 1935.
- MATIENZO, JUAN DE:** "Gobierno del Perú". Edit. en B. Aires, 1910.
- MANZANO Y MANZANO, JUAN:** "Notas de Jose Manuel de Ayala a la Recopilación de Indias". Instituto de Cultura Hispánica. Vol. I, Madrid, 1946.
- OTS Y CAPDEQUI (José María):** "El Estado español en las Indias". México, 1941.
- OTS Y CAPDEQUI:** "Manual de Historia del Derecho español en las Indias y del Derecho propiamente indiano". Buenos Aires, 1943. 2 vols.
- OTS CAPDEQUI, JOSE MARIA:** "Apuntes para la Historia del Municipio hispano-americano del periodo colonial A H D E, I, 1924.
- PENA Y CAMARA, JOSE DE LA:** "La Copulata de Leyes de Indias y las Ordenanzas ovandinas", II, m.º 6, Madrid, 1941.
- PENA Y CAMARA, JOSE DE LA:** "La Copulata de Leyes de Indias y su verdadero lugar en la historia de la Recopilación". Revista de Historia de América. México, 1941.
- PEREYRA, CARLOS:** "Historia de la América Española". 8 vols. Madrid, 1920-26.
- POLO DE ONDEGARDO:** "Informaciones acerca de la religión y gobierno de los Incas" "Col. de libros y docs. para Historia Perú", III. Lima, 1916.
- RUIZ GUINAZU:** "La Magistratura indiana". Buenos Aires, 1916
- SANCHEZ ALBORNOZ, CLAUDIO:** "La Edad Media y la empresa de América". La Plata. Universidad Nacional, 1933
- SCHAFER, ERNST:** "El Real y Supremo Consejo de las Indias. Su historia, organización y labor administrativa

hasta la terminación de la Casa de Austria. Vol. I, Sevilla, 1923. Vol. II, public de la Escuela de Est. Hispano-Americanas, Sevilla, 1947.

SUAREZ DE FIGUEROA, CRISTOBAL; -Hechos de don García Hurtado de Mendoza, cuarto Marqués de Cañete-. Madrid 1613.

VARGAS UGARTE, J. ; -Historia del Virreynato del Perú.- Vol. I, s. XVI. Lima, 1943.

VELASCO, JUAN LOPEDE; -Geografía y descripción universal de las Indias-. Ed. de Justo Zaragoza. Madrid, 1894

VEITIA LINAJE, JOSE DE; -Arte de Contratación de las Indias Occidentales-. Sevilla, 1927.

ZAVALA, SILVIO; -La encomienda indiana-. Madrid, 1933.